



# GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXX - Nº 626

Bogotá, D. C., jueves, 10 de junio de 2021

EDICIÓN DE 71 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

## CÁMARA DE REPRESENTANTES

### PONENCIAS

#### INFORME DE PONENCIA DE PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA NÚMERO 486 DE 2020 CÁMARA

*por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos.*

Bogotá, junio de 2021

Señor

**ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA**

Presidente

**COMISIÓN PRIMERA**

**CÁMARA DE REPRESENTANTES**

Ciudad

**Asunto:** Informe de ponencia de primer debate al Proyecto de Ley Orgánica No. 486 de 2020 Cámara "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos".

En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y de conformidad con lo establecido en el Artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, procedemos a rendir informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley Orgánica No. 486 de 2020 Cámara "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos". El Informe de Ponencia se rinde en los siguientes términos:

- I. Antecedentes del proyecto.
- II. Objetivo de la Iniciativa.
- III. Audiencias públicas.
- IV. Antecedentes del régimen departamental.
- V. Fundamento Constitucional.
- VI. Fundamento jurisprudencial.
- VII. Justificación del proyecto de ley.
- VIII. Ejes del articulado propuesto.
- IX. Marco normativo proceso de construcción iniciativa
- X. Impacto fiscal.
- XI. Concepto sobre la no necesidad de consulta previa.

XII. Pliego de modificaciones.

XIII. Proposición.

XIV. Texto propuesto para primer debate.

#### **I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.**

El Proyecto de Ley Orgánica No. 486 de 2020 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos", es de iniciativa gubernamental y se radicó ante la Cámara de Representantes del Congreso de la República, el 14 de diciembre de 2020 por la ministra del Interior, Doctora Alicia Arango Ramos.

La iniciativa legislativa fue publicada en la Gaceta del Congreso N° 1526 de 2020.

El 12 de marzo de 2021, la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, designó como ponentes a los Honorables Representantes: Buenaventura León León - C, Jorge Enrique Burgos Lugo -C, Álvaro Hernán Prada Artunduaga - C, Jaime Rodríguez Contreras - C, Julián Peinado Ramírez, Juanita María Goebertus Estrada, Luis Alberto Alban Urbano, Carlos German Navas Talero y Angela María Robledo Gómez.

El 18 de marzo de 2021, se radicó ante la Mesa Directiva de la Comisión Primera, proposición de audiencia pública.

#### **II. OBJETIVO DE LA INICIATIVA.**

La presente iniciativa tiene como objetivo, entre otros, establecer el régimen político y administrativo que rige a los departamentos, como entidades territoriales autónomas y descentralizadas. Para lo cual, unifica las disposiciones normativas vigentes, las actualiza y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

#### **III. AUDIENCIAS PÚBLICAS.**

En virtud de proposición aprobada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se llevaron a cabo 2 audiencias públicas, la primera se realizó de forma remota por la plataforma Meet el viernes 30 de abril de 2021 y la segunda el 20 de mayo de 2021, igualmente de forma remota por la plataforma Meet.

<p>➤ Intervenciones audiencia pública del 30 de abril de 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Directora Silvia Corzo - DDT Del Ministerio del Interior</b></li> </ul> <p>El ministro del interior, Doctor Daniel Palacios se excusa por su inasistencia, que es motivada por compromisos de orden de público.</p> <p>Una de las principales apuestas de la Constitución Política de 1991, fue precisamente la consolidación de la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales, esta descentralización exige un nuevo modelo de integración y organización política administrativa del Estado, por eso es que en nuestro Plan de desarrollo, se establece el pacto por la descentralización, conectando territorios gobiernos y poblaciones, es decir este componente lo que señala es la hoja de ruta y las estrategias para el fortalecimiento de los gobiernos territoriales, más especialmente de los departamentos. Este nuevo modelo fortalece las competencias de las entidades territoriales al otorgar funciones más claras y de mayor alcance en los diferentes sectores.</p> <p>El ministerio del interior consciente de las necesidades y de las realidades institucionales que hoy viven los mandatarios departamentales, inicio la estructuración del proyecto de ley, que busca modernizar la organización y el funcionamiento de estos entes territoriales. Esta iniciativa conto con la participación y acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos, Entidad que nos permitió conocer de primera mano, los vacíos jurídicos que presenta el actual régimen, así las cosas, el texto del proyecto establece por ejemplo las regulaciones de competencias especiales para los departamentos en materias tales como infraestructura vial, desarrollo rural y agropecuario, turismo, deporte, educación, salud, orden público, sostenibilidad ambiental, prevención de emergencias y desastres, ordenamiento territorial y gestión pública.</p> <p>Importante decir que este ha sido un proyecto que fue construido con los actores directos que son los gobernadores y hemos venido trabajando de manera conjunta desde finales de 2019 con los gobernadores anteriores y los actuales. Es un proyecto consensuado.</p> <p>Incluimos a las asambleas departamentales y estuvimos trabajando con ellas. La última vez que se socializo el proyecto, fue en diciembre del año pasado en la cumbre de presidentes de las asambleas departamentales en Barranquilla. Así las cosas, el régimen también determina y unifica todo</p>	<p>lo relacionado con la elección y posesión de los diputados, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y la elección de los secretarios de estas corporaciones. Así mismo, también regula lo relacionado con los Gobernadores, la naturaleza jurídica de dicha investidura, su elección, régimen de faltas y elementos laborales relacionados con el desarrollo del cargo en mención y por último incorpora prerrogativas relacionadas a la estructura administrativa y organizacional del gobierno departamental.</p> <p>Este texto permite un avance significativo en la modernización de todo el Estado Colombiano y el fortalecimiento de las instituciones territoriales, ya que el régimen actual es obsoleto. Con este proyecto los departamentos podrán contar con mayores herramientas para atender las necesidades de las comunidades, especialmente en la Colombia profunda a la que el presidente de la Republica, Doctor Iván Duque tiene el objetivo de acercar las instituciones del Estado.</p> <p>Es por esto que es necesario actualizar la norma relacionada con el funcionamiento de los departamentos, que contribuye a generar una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones como entidades territoriales.</p> <p>Este es un texto que, a pesar de ser de autoría del Gobierno Nacional, ha sido un texto en el que nosotros nos hemos preocupado por construirlo mancomunadamente con los gobernadores y diputados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Doctor Nicolas García - Gobernador de Cundinamarca y presidente de la Federación Nacional de Departamentos.</b></li> </ul> <p>Si bien hemos tenido participación desde la Federación Nacional de Departamentos, aún hay aspectos muy importantes que deben ser incluidos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se requiere mayor claridad respecto de la tipología de departamentos y cuáles son sus consecuencias, y que, se tenga en cuenta a la FND en la reglamentación.</li> <li>2. Reiterar frente a las competencias que le están asignando a los departamentos, que se establezca el acompañamiento financiero para amparar esas nuevas facultades.</li> <li>3. Mas que crear un nuevo Consejo Departamental de planeación, lo que se debe hacer es reforzar la normatividad que ya existe. Por ejemplo,</li> </ol>
<p>tener ordenamientos territoriales articulados entre provincias y entre algunas regiones al interior del departamento, es un tema que ya contempla el ordenamiento jurídico, pero falta establecer la obligatoriedad y la reglamentación.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Incluir la regulación de situaciones administrativas de los gobernadores, licencias, faltas, permisos, posesión y demás, son asuntos importantes.</li> </ol> <p>Recordar que la FDN, ha hecho sugerencias y observaciones a 50 artículos, con la intención de mejorar el proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Doctor Alexander Mejía Román - Asesor de la Gobernación de Antioquia.</b></li> </ul> <p>Desde la Gobernación en cabeza del subsecretario Jurídico, Doctor Héctor Fabio Vergara, se hizo una revisión del Proyecto de Ley.</p> <p>Se podría hacer un trabajo más articulado desde la FND, para tener en cuenta las recomendaciones que han hecho las diferentes gobernaciones.</p> <p>Estamos siempre prestos y atentos a hacer cualquier tipo de sugerencias y claridades, es importante que se pueda actualizar el régimen departamental.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Doctor Héctor Olimpo - Gobernador de Sucre.</b></li> </ul> <p>Es una gran oportunidad para modificar temas estructurales de las entidades territoriales, en este caso de las Gobernaciones, nosotros tenemos la posibilidad de mejorar las relaciones entre las asambleas departamentales y las gobernaciones, en cuanto los temas de control político y facultades en temas de contratación.</p> <p>Respecto de la destitución de gobernadores, se debe adoptar la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Costa Rica, que establece que solamente con sentencia judicial en firme, se pueda separar a los funcionarios de elección popular de los cargos.</p> <p>Hay una posibilidad muy importante de hacer mucho más expeditos los procesos limítrofes entre los departamentos, pues casi todas las gobernaciones tienen problemas limítrofes y la resolución a estos problemas, ha estado sometida a procedimientos poco eficientes.</p> <p>Es una ley orgánica que permite hacer modificaciones en las estructuras de las entidades territoriales, se debe diferenciar entre responsabilidades</p>	<p>administrativas y políticas, de tal manera que se puedan aclarar las delegaciones y sus impactos.</p> <p>Es importante que se establezca en el proyecto de ley, que para su reglamentación se tendrá en cuenta la vocería de la federación de departamentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Doctora Lorena Velasco - delegada Gobernación Valle del Cauca</b></li> </ul> <p>Gracias a la federación de departamentos por permitimos participar, pues hemos tenido la oportunidad de hacer aportes que se han acogido en el proyecto.</p> <p>Que sea este un proyecto, para que se les otorguen herramientas a los departamentos, y aún más, para revisar el tema de recursos.</p> <p>Las funciones, destituciones o retiro del cargo de los gobernadores, debe ser un tema que quede muy claro en esta nueva reglamentación.</p> <p>Agradecemos la actualización de este código.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Doctor José Ricardo Orozco. Gobernador del Tolima.</b></li> </ul> <p>Se insiste en la reglamentación de las autorizaciones pro tempore en términos de materia presupuestal, que se deben tramitar ante las asambleas departamentales.</p> <p>Hoy cualquier autorización, traslado y adición presupuestal, debe ir a la asamblea del departamento, situación que anteriormente se hacía mediante un decreto, a través de las autorizaciones pro tempore que otorgaba la asamblea.</p> <p>Esto hace que el aparato estatal, toda la inversión y los resultados que las personas esperan, se demoren, teniendo en cuenta las anualidades y las vigencias futuras. Esta es una oportunidad muy importante para armonizar esa relación con la asamblea del departamento, pues es importante que en el artículo 48 se incluya de manera expresa que la iniciativa es del gobierno departamental para todo lo que tiene que ver con asuntos presupuestales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Doctora Liliana Hernández - delegada de la Gobernación del Vaupés.</b></li> </ul> <p>Modernizar los departamentos es muy importante. Administrativamente se presentan muchos vacíos frente a las áreas no municipalizadas.</p>

<p>Esta oportunidad es importante para las comunidades indígenas, para revisar esa normatividad dentro de los departamentos. El departamento Vaupés presenta muchas afectaciones en las necesidades de las comunidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Doctor Óscar Rene - Delegado Gobernación de Santander.</b> Estamos prestos al desarrollo y modernización de los departamentos.</li> <li>• <b>Doctor Johan Ordoñez - delegado de la Gobernación de Norte de Santander.</b> Aportaran los comentarios al correo electrónico.</li> <li>• <b>Doctor Felipe Velásquez - Delegado Gobernador del Guainía.</b> Apoyan la modernización del código. Comparten la situación del departamento del Vaupés respecto a las áreas no municipalizadas y normatividades que deben ser actualizadas.</li> <li>• <b>Doctora Rosario Ricardo - delegada de la Gobernación de Bolívar.</b> Es una oportunidad para los departamentos y las asambleas. Acogemos el llamado del gobernador de Cundinamarca en cuanto a que deben quedar las competencias, pero también los recursos para asumirlas y la participación de la FND en la reglamentación del proyecto.</li> <li>• <b>Doctor Bladimir Torres – Delegado Gobernación del Magdalena.</b> Estamos prestos a apoyar esta iniciativa la cual es importante para el departamento del Magdalena y más por las dificultades que hemos tenido en cuanto a nuestra gobernanza por ser un gobierno progresista. Cómo no pertenecemos a la línea política de la asamblea todas nuestras iniciativas son archivadas ni siquiera son estudiadas. El departamento del Magdalena es el cuarto más pobre del país. Nos debemos a una ciudadanía libre por eso es importante que este proyecto sea aprobado.</li> <li>• <b>Doctor Juan Fernando Ortega - delegado Gobernación del Cauca.</b> Modernizar el régimen departamental es algo que ha venido pidiendo la ciudadanía y las gobernaciones. Aspectos importantes: 1. La compilación del cuerpo normativo es esencial. 2. La definición de límites entre departamentos es absolutamente necesario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Aplaudimos que se puedan actualizar los planes de inversión. Asignar y delegar competencias en distintos ámbitos.</li> <li>4. No existe en esta propuesta cambios tendientes a que se puedan aumentar los recursos de los departamentos, creemos que es ahí donde se debe ahondar. Proponen cambios buenos y provechosos, pero encontramos una ausencia para aumentar los recursos de nuestros departamentos.</li> </ul> <p>➤ Intervenciones audiencia pública del 20 de mayo de 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diputado Gersel Pérez - Asamblea Atlántico y presidente de CONFADICOL.</b> - Se debe reformar el régimen departamental el cual es obsoleto, sin embargo, es importante tener en cuenta a los diputados de Colombia. - Solicitamos revisar algunos articulados y concertar la modificación de estos artículos.</li> <li>• <b>Diputado Henry Fernando Ladino González- Asamblea Meta y vicepresidente de CONFADICOL.</b> - Artículo 68: Debate control político, considera que el hecho que sea presentado por la totalidad de la bancada, vulnera la autonomía política de cada uno de los diputados. - Artículo 69: Respecto de la moción de censura, el requisito de la "la mitad más 1" se considera que modificaría la constitución. - Este tema sería un artículo nuevo, los departamentos necesitan más recursos, el impuesto del timbre de las cámaras de comercio, la renovación para el fortalecimiento de la reactivación económica, así como existe una plusvalía en los municipios con recursos del Estado por donde pasan vías importantes, enriquecemos empresas y no hay retorno. El que invierta pueda recaudar.</li> <li>• <b>Diputado Alex Velásquez - Asamblea Magdalena y secretario de CONFADICOL.</b></li> </ul>
<p>Lo que se busca es el fortalecimiento institucional de los departamentos y las corporaciones que ejercemos el control político, acá hay una cantidad de falencias y artículos inconstitucionales, hago referencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artículos que contemplan los mensajes de urgencia, posibilita a los gobernadores a posicionar el mensaje de urgencia, solicitamos al Ministerio del Interior analizarlos con mucho detenimiento y excluirlas.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Doctor Luis Hernando Quevedo Jara:</b> La Base de liquidación de la prima de vacaciones es inaceptable porque perjudica a las asambleas y diputados del país.</li> <li>• <b>Diputado José Wilmar Leal Abril - Asamblea de Boyacá.</b> Hemos entendido que este Proyecto de Ley puede ser necesario en la renovación del régimen departamental. Observaciones: - Art. 112, la base para liquidar es inherente a su naturaleza y estará a cargo del presupuesto de las asambleas, se debe de entender que los presupuestos son muy mínimos para las asambleas. Hoy en día estos pagos los realiza en sector central, ese concepto lo firmó la doctora Ana Lucia Villa, creemos debe seguir así. - Art. 114, parágrafo primero, los gastos de las prestaciones sociales se afectarán porque no alcanzarían los recursos. - Art. 117, sugerimos que se hable sobre los derechos de los diputados a las primas y vacaciones, los gastos de viaje tal cual como esta en la Ley. - Art. 122, esto ya fue discutido, acordándose el reconocimiento como si se hubiese sesionado todo el año.</li> <li>• <b>Diputada Blanca Lilia Vargas – presidente asamblea departamental de Casanare.</b> - Art. 60. refiere a la creación de una comisión especializada, a parte de las que ya existen como las accidentales, nosotros consideramos que la creación de nuevas comisiones, complica el desarrollo de la labor administrativa y funcional, genera mayor complejidad y no brinda alguna situación nueva o relevante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art 62. diferimos del tema del secretario general, atenta contra la autonomía de las asambleas departamentales, es un a cargo de confianza.</li> <li>- La elección del contralor departamental debería ser en el mes de octubre o noviembre para que inicie en el mes de enero. Sugerimos se cambie el art. 63.</li> <li>• <b>Diputado José Manuel Sandoval – Diputado del Meta.</b> - Artículo 54, consideramos debe retirarse. - Artículo 22, ya está contemplado en la Ley, no podemos controvertir la misma norma. - Artículo 55, consideramos se limita por los medios que ya están en desuso, como lo es el fax, se debe dejar abierto, en el caso de las sesiones se habla del quórum decisorio, también pueden ser de liberatorio. - Seguimos comprometidos con la discusión, quizás se podrá generar otra discusión para analizar los cambios y las claridades de lo que hoy se está manifestado.</li> <li>• <b>Diputado Julio Vallejo – Asamblea de Nariño.</b> - El proyecto es oportuno y conveniente, haremos llegar las observaciones al contenido del artículo.</li> <li>• <b>Diputado Oscar Alonso Vargas – Asamblea de Caldas.</b> - Las remuneraciones son injustas, se debe revisar el tema prestacional. - Sesionemos casi 8 meses y los 4 meses quedamos sin hacer nada. - Otro tema son los familiares, que nos puedan destituir por ello. - Acá debemos tomar alternativas y ejercer un control político autónomo para los debates con las corporaciones.</li> </ul> <p><b>IV. ANTECEDENTES DEL RÉGIMEN DEPARTAMENTAL.</b></p>

<p>El actual régimen departamental corresponde al Decreto 1222 de 1986, en el cual se define al departamento como entidad territorial; así mismo, se establece la estructura, funciones; condiciones para su creación, deslinde y amojonamiento; planeación departamental y coordinación de funciones nacionales; asambleas; gobernadores y sus funciones; bienes y rentas departamentales; contratos; personal; control fiscal; entidades descentralizadas; convenios interdepartamentales y disposiciones varias.</p> <p>La Constitución Política de 1991, en su parte dogmática, describe que Colombia es un Estado organizado de forma unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Es decir, la Constitución apostó por un Estado descentralizado y de autonomías regionales. Con la descentralización, se incorporó un nuevo modelo de integración y organización político-administrativa necesaria para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, por la cual, se les concede a las entidades territoriales la autonomía para desarrollar sus competencias constitucionales.</p> <p>Particularmente, el artículo 298 Superior, señala, entre otros aspectos, que los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social; ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios.</p> <p>Sin embargo, hasta ahora, el proceso de descentralización ha sido eminentemente municipalista. Ello ha creado una cierta polaridad municipio/gobierno central que ha dejado por fuera del proceso a los gobiernos departamentales, único nivel intermedio existente hasta ahora. Un proceso armónico de descentralización exige mayor organicidad de las relaciones entre las distintas entidades territoriales y por ello la descentralización debe mirar con mayor atención el papel y protagonismo de los departamentos como intermediadores entre los planes nacionales y los problemas de las regiones y los municipios. Por lo anterior, la consolidación de la descentralización está, sin duda, en el fortalecimiento del departamento como entidad territorial intermedia de Gobierno.</p> <p>En ese contexto, el Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, inició desde el año 2019, la estructuración de un nuevo régimen departamental, con el fin de modernizar la organización y el funcionamiento de estas entidades territoriales, así como llenar vacíos normativos sobre la función del papel del departamento, de los gobernadores y los diputados, con las aspiraciones de autonomía y flexibilidad exigida por los departamentos.</p>	<p>En el proceso de estructuración de la presente iniciativa, la Federación Nacional de Departamento – FND tuvo un papel preponderante, como institución que agremia y representa a los departamentos en los asuntos de interés común ante las diferentes instancias del Estado. Así mismo, fue socializado, en diferentes espacios nacionales, con la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia – CONFADICOL.</p> <p><b>V. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES.</b></p> <p>➤ <b>Artículo 1.</b> Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.</p> <p>➤ <b>Artículo 286.</b> Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.</p> <p>➤ <b>Artículo 288.</b> La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.</p> <p>Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.</p> <p>➤ <b>Artículo 297.</b> El Congreso Nacional puede decretar la formación de nuevos Departamentos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial y una vez verificados los procedimientos, estudios y consulta popular dispuestos por esta Constitución.</p> <p>➤ <b>Artículo 298.</b> Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución.</p> <p>Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.</p> <p>La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga.</p>
<p>➤ <b>Artículo 302.</b> La ley podrá establecer para uno o varios Departamentos diversas capacidades y competencias de gestión administrativa y fiscal distintas a las señaladas para ellos en la Constitución, en atención a la necesidad de mejorar la administración o la prestación de los servicios públicos de acuerdo con su población, recursos económicos y naturales y circunstancias sociales, culturales y ecológicas.</p> <p>En desarrollo de lo anterior, la ley podrá delegar, a uno o varios Departamentos, atribuciones propias de los organismos o entidades públicas nacionales.</p> <p><b>VI. FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES.</b></p> <p>La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C – 1051 de 2001, respecto del significado de república unitaria, descentralización y autonomía, ha precisado que:</p> <p><i>“República unitaria implica que existe un solo legislador; descentralización consiste en la facultad que se otorga a entidades diferentes del Estado para gobernarse por sí mismas, a través de la radicación de ciertas funciones en sus manos y autonomía significa la capacidad de gestión independiente de los asuntos propios. Etimológicamente, autonomía significa autonomarse, y de ella se derivan las siguientes consecuencias: a. Capacidad de dictar normas; b. Capacidad de la comunidad de designar sus órganos de gobierno; c. Poder de gestión de sus propios intereses y d. Suficiencia financiera para el desempeño de sus competencias”.</i></p> <p>En el mismo sentido, la alta Corte, en la citada sentencia precisa que <i>“existen varios tipos de descentralización, a saber: territorial, funcional o por servicios, por colaboración y, finalmente, por estatuto personal. La descentralización territorial se entiende como el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a las entidades territoriales regionales o locales, las cuales se ejecutan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad”.</i></p> <p>Respecto de la autonomía de las entidades territoriales se argumenta que <i>“el carácter de entidad territorial implica pues, el derecho a gobernarse por autoridades propias, a ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y, por último, participar en las rentas nacionales. De esta forma, tal reconocimiento se traduce en autonomía política, esto es, la capacidad de elegir a sus gobernantes (alcalde, concejales, ediles, personero y contralor), autonomía administrativa, es decir, la facultad de manejar los asuntos de su</i></p>	<p><i>jurisdicción, tales como la organización de los servicios públicos, la administración de sus bienes y la solución de todos los problemas que surjan en desarrollo de sus actividades y, finalmente, autonomía fiscal, que implica la potestad para fijar tributos, participar en las rentas nacionales y administrar sus recursos”.</i></p> <p><i>Finalmente “existe una correlación entre autonomía y descentralización, de manera que todo órgano autónomo es también descentralizado, empero no todo órgano descentralizado es autónomo. La autonomía de las entidades territoriales hace referencia entonces a la libertad que les es otorgada para ejercer las funciones que les son asignadas en virtud de la descentralización, de modo que tienen un alto grado de independencia en la administración y manejo de sus intereses”.</i></p> <p><b>VII. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY.</b></p> <p>Las nuevas realidades territoriales demandan instrumentos jurídicos acordes a las exigencias regionales. La importancia de la gestión pública, hace necesario adoptar un modelo de gobierno a los retos derivados de un mayor flujo de comunicación en las sociedades y a los requerimientos de los ciudadanos, a través de flexibilizar el ordenamiento territorial y los desarrollos de procesos de descentralización.</p> <p>Esta iniciativa otorga un sentido diferente a la modernización: ya no se trata primordialmente de la función social de la propiedad, ni de la intervención del Estado en la economía, ni tampoco de la planificación tecnocrática o de la concentración del poder en el Ejecutivo. Incluso, podría decirse que tampoco es cuestión de responder a una coyuntura de conflicto social y político o de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. No obstante, la modernización parece significar algo diferente en la actualidad, a saber, estructurar un Estado ágil, menos interventor y más regulador, menos centralizado, más comprometido con las nuevas tendencias de la economía mundial, más dispuesto a enfrentar los problemas del desarrollo desde los entes periféricos y en interacción con el sector privado y más abierto a la iniciativa y a la participación de la sociedad en la gestión social.</p> <p>Colombia se sumó a la dinámica descentralista en la década del 80, por lo cual, debe seguir afianzando el desarrollo regional. Además, la Constitución apostó por un Estado descentralizado y de autonomías regionales y ese es el norte que debe guiar la reforma política.</p> <p>Pero, sin duda, el futuro de la descentralización en Colombia seguirá</p>

<p>dependiendo en buena parte de que los distintos actores nacionales y locales involucrados en el proceso, es menester llegar a acuerdos fundamentales para fortalecer el papel de los entes subnacionales y para democratizar la gestión.</p> <p>Uno de los mayores desafíos institucionales, es promover los arreglos necesarios para asegurar condiciones de gobernabilidad en un escenario pluralista y multinivel como el que se reconoce en la Constitución Política. Si bien Colombia ha avanzado en afianzar y fortalecer la descentralización administrativa, se evidencian obstáculos para el desarrollo efectivo de las capacidades institucionales.</p> <p>Precisamente, el Plan Nacional de Desarrollo: "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" traza el curso de acciones que apuestan por el desarrollo del País. Particularmente, el capítulo "Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones", establece la hoja de ruta general para lograr el fortalecimiento de los gobiernos territoriales y su autonomía, la planeación estratégica y la modernización para la descentralización efectiva y responsable.</p> <p>Para poder transformar las condiciones que hagan posible acelerar el crecimiento económico y la equidad de oportunidades en las regiones, el Plan Nacional de Desarrollo plasma, entre otros aspectos, los ejes estratégicos que se deben desarrollar para lograr el desarrollo regional. Estos ejes comprenden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un arreglo institucional para la articulación y gobernanza multinivel;</li> <li>2. Políticas públicas que asistan el adecuado ordenamiento territorial y su alineación con el desarrollo; y</li> <li>3. Políticas definidas que fortalezcan los esquemas asociativos de planificación, incluyendo su creación, incentivos y sostenibilidad.</li> </ol> <p>Es decir, es necesario adecuar el funcionamiento y organización de los departamentos a las nuevas condiciones del país, lo que hace necesario integrar las normas del régimen político y administrativo departamental, y fortalecer las competencias de estas entidades territoriales, al otorgarles funciones más claras y de mayor alcance en los diferentes sectores.</p> <p>El presente proyecto, moderniza la organización y funcionamiento del régimen departamental, al dotar a los departamentos de un régimen político y administrativo que garantice el cumplimiento de las competencias y atribuciones que les asigna la Constitución y la ley.</p> <p>A partir de esta iniciativa legislativa, se fortalece la facultad de los gobernadores de poder actuar como nivel intermedio de Gobierno entre la Nación y los</p>	<p>municipios, en el ejercicio de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. Esta iniciativa contempla la especificación de las competencias básicas del departamento, la clarificación de las relaciones con los demás niveles de gobierno y con el nivel nacional.</p> <p>Este es un proyecto normativo que consolida la competitividad e integración del nivel territorial, para la gerencia regional, control político y planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial. Asimismo, esta propuesta normativa busca llenar vacíos en el diseño institucional, adoptar herramientas efectivas de gobernanza multinivel, establecer definiciones en materia de desarrollo y ordenamiento territorial y otorgar herramientas que les permitan al departamento, asumir y cumplir su rol en el sistema político y en la dinámica socioeconómica del país de manera más eficiente. Retoma la naturaleza jurídica y principios que rigen a los departamentos de lo cual se destaca el principio de enfoque diferencial, regionalización, y la participación en el ejercicio de las funciones y competencia de estos entes territoriales.</p> <p>Como se puede concluir, con la propuesta normativa se pretende modernizar la organización y funcionamiento de los departamentos como unidad territorial de primer nivel, ajustando a las nuevas condiciones y realidades del país y las exigencias de las regiones; integrar las normas del régimen político y administrativo departamental y fortalecer las competencias de estas entidades territoriales, al otorgarles funciones más claras y de mayor alcance en los diferentes sectores.</p> <p><b>VIII. MARCO NORMATIVO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN INICIATIVA</b></p> <p>Como marco normativo que sirvió de base para la estructuración de este proyecto, relacionamos las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Constitución Política de 1991.</li> <li>• El Decreto 1222 de 1986 "Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental".</li> <li>• La ley 617 de 2000 "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional".</li> <li>• la Ley 1454 de 2011 "Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial".</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La ley 1871 de 2017 "Por medio de la cual se dictan el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las asambleas departamentales y se dictan otras disposiciones".</li> <li>• La ley 1962 de 2019 "Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa de planificación, se establecen las condiciones para su conversión en región entidad territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la C.P".</li> <li>• La ley 1955 de 2019 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".</li> <li>• La ley 1981 de 2019 "Por medio del cual se modifica la ley 136 de 1994, el Decreto ley 1421 de 1993 y el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se dictan normas para crear la Comisión para la Equidad de la Mujer en los Concejos y Asambleas y se dictan otras disposiciones".</li> <li>• El decreto 900 de 2020 "Por el cual se adiciona el Capítulo 5, al Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, para reglamentar parcialmente la Ley 1962 de 2019 en lo relativo a las Regiones Administrativas y de Planificación – RAP".</li> </ul> <p><b>IX. IMPACTO FISCAL</b></p> <p>De acuerdo con lo señalado en la Directiva Presidencial 06 del 27 de agosto de 2018, reiterada mediante la Circular de la Secretaría Jurídica 04 del 21 de septiembre de 2020, la presente iniciativa legislativa no tiene impacto fiscal, asimismo, no ordena gasto u otorga beneficios tributarios, de conformidad con establecido en la Ley 819 de 2003.</p> <p><b>X. CONCEPTO SOBRE LA NO NECESIDAD DE CONSULTA PREVIA</b></p> <p>Mediante MEM2020-14799-DCP-2500 de 17 de junio de 2020, el Subdirector Técnico de la Autoridad Nacional de Consulta Previa determinó que "(...) En consecuencia, desarrollado el análisis jurisprudencial y factivo del proyecto de Ley del asunto, esta Autoridad Administrativa concluye que el mismo no es una medida administrativa sujeta al desarrollo de consulta previa (...)" (Se anexa concepto técnico-jurídico en 9 hojas).</p> <p><b>XI. CONFLICTO DE INTERESES.</b></p> <p>En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, que modifica el artículo 291 de la Ley 5 de 1992,</p>	<p>disposición por medio de la cual se le imparte a los autores y ponentes la obligación de presentar en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, me permito argumentar que:</p> <p>Para que se configure el conflicto de interés es necesario que exista un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista. Sobre este punto, la Ley 2003 de 2019, determina:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Beneficio particular: Aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.</li> <li>b) Beneficio actual: Aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.</li> <li>c) Beneficio directo: Aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.</li> </ol> <p>Ese interés, con tales características, ha de ser particular, pues si se tratara del interés general, común a todos, resultaría que los congresistas, todos ellos, en todos los casos, se encontrarían en situación de conflicto. La situación de conflicto resulta, pues, del asunto o materia de que se trate, de las particulares circunstancias del congresista o su cónyuge o compañero o compañera permanente, sus parientes o sus socios, y de su conducta, en cada caso.</p> <p>"...si el interés se confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría actuando en interés de la colectividad y no en el suyo propio".</p> <p>En la misma línea, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C -1056/12, ha argumentado en lo que atañe específicamente a la situación de los miembros del Congreso, que de conformidad con el numeral 1º del artículo 183 de la Constitución, para que se hagan acreedores a la pérdida de</p>

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre de 2009, radicado No. FI. 01180-00 (Concejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia).

investidura, se ha requerido la presencia de cuatro elementos, unos objetivos y otros subjetivos, a saber:

"(...)1) La participación efectiva del parlamentario en el procedimiento legislativo o en los mecanismos de control; 2) la existencia cierta y demostrable, que de la aprobación de una determinada ley se derivan beneficios morales o económicos para el congresista, sus familiares o sus socios; 3) **que el beneficio que persiga o se obtenga con la ley no puede ser catalogado como general, sino de carácter particular**, y 4) que el congresista tenga la intención de beneficiar a sus familiares, a sus socios o a sí mismo"(...); (SUBRAYADO FUERA DE TEXTO).

Así mismo, "...Para que se configure la causal de pérdida de investidura es necesario haber conformedo el quórum o haber participado el congresista en el debate o votación del asunto". SI EL CONGRESISTA SE RETIRA Y NO VOTA, NO SE CONFIGURA LA CAUSAL

XII. PUEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO RADICADO EN EL PROYECTO DE LEY.	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE	COMENTARIOS
"Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Departamentos"	Sin modificaciones.	Sin modificaciones.
<b>TÍTULO I</b> Del objeto, definición, principios rectores de la administración departamental y creación de departamentos <b>CAPÍTULO I</b> Objeto, definición y principios	<b>TÍTULO I</b> Del objeto, definición, principios rectores de la administración departamental y creación de departamentos <b>CAPÍTULO I</b> Objeto, definición y principios	En el primer título se elimina lo concerniente a la creación de departamentos, por estar consagrado en otras disposiciones normativas que son mucho más claras y precisas.
<b>Artículo 1. Objeto de la Ley.</b> La presente ley tiene por objeto establecer el régimen político y administrativo que rige a los departamentos como entidades territoriales autónomas y descentralizadas parte de la República unitaria.	<b>Artículo 1. Objeto de la Ley.</b> La presente ley tiene por objeto establecer el régimen político y administrativo que rige a los departamentos como entidades territoriales, autónomas y descentralizadas parte de la República unitaria.	Se elimina la expresión, "parte de la República unitaria", a fin de mejorar la redacción.
<b>Artículo 2. Definición.</b> Los departamentos forman parte de la organización territorial del Estado y como entidad territorial actúan como organismos promotores y coordinadores del desarrollo económico, ambiental y social en los asuntos seccionales. <del>Los departamentos administran los recursos propios, sino la demanda de determine la acción municipal y de enlace de las actividades y servicios seccionales e instrumento de complementariedad</del>	<b>Artículo 2. Definición.</b> Los departamentos forman parte de la organización territorial del Estado y como entidad territorial actúan como organismos promotores y coordinadores del desarrollo económico, ambiental y social en los asuntos seccionales. <del>Los departamentos administran los recursos propios, sino la demanda de determine la acción municipal y de enlace de las actividades y servicios seccionales e instrumento de complementariedad</del>	Se hacen ajustes de redacción y se especifica que los departamentos no solo administran los recursos propios, sino la demanda de determine la acción municipal y de enlace de las actividades y servicios seccionales e instrumento de complementariedad

de la acción municipal y de enlace de las actividades y servicios que prestan los municipios y la Nación. En su naturaleza los departamentos son personas jurídicas de derecho público, actúan bajo el principio de autonomía, administran recursos propios y los otros fuentes de recursos propios, ejercen las competencias que les correspondan y establecen los tributos necesarios conforme a la ley para el cumplimiento de sus funciones y participan en las rentas nacionales.	que prestan los municipios y la Nación. <del>En su naturaleza</del> Los departamentos son personas jurídicas de derecho público, actúan bajo el principio de autonomía, administran recursos propios y los otros fuentes de recursos propios, ejercen las competencias que les correspondan y establecen los tributos necesarios conforme a la ley, para el cumplimiento de sus funciones, y participan en las rentas nacionales.	
<b>Artículo 3. Principios:</b> Además de los principios previstos en la Constitución Política, la Ley 1454 de 2011 y la Ley 1962 de 2019, los departamentos se regirán, entre otros, por los siguientes principios: <b>Descentralización.</b> Los departamentos ejercen sus competencias y la administración de sus recursos en forma descentralizada, en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad, pero con coherencia y armonía funcional con el nivel central y con los entes territoriales distritales y municipales conforme a la distribución de competencias establecidas por la Constitución y la Ley en cada nivel de la organización territorial del Estado. <b>Coordinación.</b> Exige a los departamentos que sus actuaciones se efectúen mediante una ordenación sistemática, coherente, eficiente.	<del>Artículo 3. Principios.</del> Además de los principios previstos en la Constitución Política, la Ley 1454 de 2011 y la Ley 1962 de 2019, los departamentos se regirán, entre otros, por los siguientes principios: <b>Descentralización.</b> Consiste en el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a los departamentos, las cuales se ejecutan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. <b>Coordinación.</b> Exige a los departamentos que sus actuaciones se efectúen mediante una ordenación sistemática, coherente, eficiente, armónica, complementaria y conducente, con las competencias concurrentes de otras autoridades del nivel nacional, entidades territoriales de igual o menor nivel y los esquemas asociados territoriales, para el cumplimiento de los fines de la acción estatal y el cumplimiento de los fines del Estado social de derecho.	-Se hacen ajustes de redacción. -teniendo en cuenta que esta ley unifica el régimen departamental, es pertinente ajustar el enunciado del artículo, para no hacer referencia a otros leyes que pueden generar la duplicidad normativa. -Se modifica el principio de descentralización, conforme a lo establecido en la Sentencia C-1051 de 2001. - Se propone incorporar conjuntamente con el principio de "Enfoque diferencial" el principio de reconocimiento de la diversidad; ya que habiar

armónica, complementaria y conducente con las competencias concurrentes de otras autoridades tanto del nivel nacional, así como las entidades territoriales de igual o menor nivel, con el fin de garantizar los objetivos propios de la acción estatal y el cumplimiento de los fines del Estado social de derecho.	<b>Concurrencia.</b> Exige a los departamentos que en materias determinadas por la Constitución y la ley converjan y participen en conjunto con autoridades del nivel nacional o territorial, según corresponda. <b>Autonomía.</b> Es la capacidad de dirección y gestión de sus propios intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. La autonomía constituye un derecho inherente al departamento, que se manifiesta a través de la independencia política para gobernarse por autoridades propias; autonomía administrativa para ejercer las competencias que le correspondan; autonomía fiscal para administrar los recursos y establecer los tributos necesarios en el marco de la Constitución y la ley, para el cumplimiento de sus funciones y participar de las rentas nacionales y autonomía normativa como capacidad para auto-regularse en materias de interés exclusivamente local o regional.	desde el reconocimiento de la diversidad dentro la mirada en las particularidades y singularidades del sujeto y su contexto (pertinencia étnica, social, cultural, sus condiciones, capacidades, particularidades, afectaciones o estados de vulnerabilidad) y no solo en términos de condiciones socio económica. Del mismo modo, el reconocimiento de la diversidad está más en consonancia con las comprensiones sobre el desarrollo integral de los sujetos. - Se propone eliminar el último principio, teniendo en cuenta que no es un principio propiamente dicho.
<b>Autonomía.</b> Es la capacidad de dirección y gestión de sus propios intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. La autonomía constituye un derecho inherente al departamento que se manifiesta a través de la independencia política para gobernarse por autoridades propias; autonomía administrativa para ejercer las competencias que le correspondan; autonomía fiscal para administrar los recursos y establecer los tributos necesarios en el marco de la Constitución y la ley, para el cumplimiento de sus funciones y participar de las rentas nacionales y autonomía normativa como capacidad para auto-regularse en materias de interés exclusivamente local o regional.	<b>Subsidiaridad.</b> Exige a los departamentos asumir o apoyar, según el caso, de manera íntegra y eficaz, las competencias y funciones de distritos y municipios de su jurisdicción cuando bajo criterios de indicadores objetivos carecen de capacidad administrativa, institucional o presupuestal para ejercerlas adecuadamente, respetando el principio de autonomía en materias cuyo competencia sea exclusiva de dichos entes territoriales. <b>Sostenibilidad fiscal territorial.</b> En desarrollo del artículo 334 de la Constitución Política, los departamentos, distritos y municipios que integran su jurisdicción se regirán por el marco de sostenibilidad fiscal que fije el Gobierno Nacional.	

<p><b>Subsidiaridad.</b> Exige a los departamentos asumir o apoyar, según el caso, de manera idónea y eficaz, las competencias y funciones de los demás niveles de menor categoría, cuando bajo criterios de indicadores objetivos carezcan de capacidad administrativa, institucional o presupuestal para ejercerlas adecuadamente, respetando el principio de autonomía en materia cuya competencia sea exclusiva de dichos entes territoriales.</p> <p><b>Sostenibilidad fiscal territorial.</b> En desarrollo del artículo 334 de la Constitución Política, los departamentos, distritos y municipios que integran su jurisdicción se regirán por el marco de sostenibilidad fiscal que fije el Gobierno Nacional, teniendo como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la distribución equitativa de oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano y sostenible.</p> <p>En el marco de sostenibilidad fiscal territorial no se podrán establecer competencias o funciones a los departamentos sin que se asignen los correspondientes recursos en suficiencia para su cumplimiento.</p> <p><b>Desarrollo sostenible.</b> Exige a los departamentos formular políticas públicas sostenibles con responsabilidad intergeneracional en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de mejorar el bienestar de sus habitantes, generar oportunidades y capacidades en su población, la eficaz y eficiente prestación de servicios públicos, buscando su universalidad y la satisfacción progresiva de las necesidades básicas insatisfechas.</p> <p><b>Cohesión territorial.</b> Exige a los departamentos que sus actuaciones públicas busquen dentro de su territorio:</p> <p>(i) la articulación física y de infraestructura, a fin de que todos los entes territoriales tengan accesibilidad de manera armónica y equilibrada;</p> <p>(ii) la equidad territorial, a fin de que todos los entes territoriales tengan igualdad de oportunidades para alcanzar el desarrollo, y el acceso a los servicios públicos y al equipamiento de infraestructuras que permitan acceder a capacidades productivas, económicas y de garantía de los derechos;</p>	<p>teniendo como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la distribución equitativa de oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano y sostenible.</p> <p>En el marco de sostenibilidad fiscal territorial no se podrán establecer competencias o funciones a los departamentos sin que se asignen los correspondientes recursos en suficiencia para su cumplimiento.</p> <p><b>Desarrollo sostenible.</b> Exige a los departamentos formular políticas públicas sostenibles con responsabilidad intergeneracional en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de mejorar el bienestar de sus habitantes, generar oportunidades y capacidades en su población, la eficaz y eficiente prestación de servicios públicos, buscando su universalidad y la satisfacción progresiva de las necesidades básicas insatisfechas.</p> <p><b>Cohesión territorial.</b> Exige a los departamentos que sus actuaciones públicas busquen dentro de su territorio:</p> <p>(i) la articulación física y de infraestructura, a fin de que todos los entes territoriales tengan accesibilidad de manera armónica y equilibrada;</p> <p>(ii) la equidad territorial, a fin de que todos los entes territoriales tengan igualdad de oportunidades para alcanzar el desarrollo, y el acceso a los servicios públicos y al equipamiento de infraestructuras que permitan acceder a capacidades productivas, económicas y de garantía de los derechos;</p>	<p>capacidades productivas, económicas y de garantía de los derechos;</p> <p>(iii) la implementación de forma progresiva y sin regresividad de respuestas a las necesidades básicas insatisfechas de la población;</p> <p>(iv) la identidad territorial a fin de que el ejercicio de la actuación pública y la configuración de políticas públicas generen dentro del respeto al pluralismo y la diversidad, <b>alcancen la identidad</b> entre sus habitantes, con una proyección planificadora integral a mediano y largo plazo, que permita cumplir objetivos comunes en los diferentes esquemas de dignidad humana de forma incluyente y equitativa.</p> <p><b>Planeación y prospectiva territorial.</b> Exige a los departamentos que la gestión pública y la asignación de recursos de inversión respondan a un contexto planificado de resultados, que permita tener una visión de las metas a cumplir y las estrategias a realizar para su logro, una prospectiva territorial que implique la visión de sostenibilidad futura de los resultados, así como la inclusión de las generaciones futuras.</p> <p>En los enfoques de planeación debe generarse la inclusión de los esquemas o comunidades vulnerables, el enfoque de construcciones colectivas y del interés general, así como el goce efectivo del bienestar social en la satisfacción de las</p>
<p>respeto al pluralismo y la diversidad, identidad entre sus habitantes con una proyección planificadora integral a mediano y largo plazo que permita cumplir objetivos comunes en los diferentes esquemas de dignidad humana de forma incluyente y equitativa.</p> <p><b>Planeación y prospectiva territorial.</b> Exige a los departamentos que la gestión pública y la asignación de recursos de inversión respondan a un contexto planificado de resultados, que permita tener una visión de las metas a cumplir y las estrategias a realizar para su logro, una prospectiva territorial que implique la visión de sostenibilidad futura de los resultados, así como la inclusión de las generaciones futuras.</p> <p>En los enfoques de planeación debe generarse la inclusión de los esquemas o comunidades vulnerables, el enfoque de construcciones colectivas y del interés general, así como el goce efectivo del bienestar social en la satisfacción de las necesidades de la población.</p> <p><b>Enfoque diferencial.</b> Exige a los departamentos que de forma transversal a todas las actuaciones, planes, programas y políticas públicas se adopten acciones que permitan superar las inequidades respecto al género, víctimas del conflicto armado, minorías y grupos étnicos; el respeto a su identidad, su actuar colectivo, con el fin de superar las desventajas y generar mecanismos de inclusión, el fortalecimiento de sus fortalezas y la generación de capacidades y de acceso a las mismas oportunidades.</p> <p><b>Enfoque diferencial.</b> Exige a los departamentos que de forma transversal a todas las actuaciones, planes, programas y políticas públicas se adopten acciones que permitan superar las inequidades respecto al género, víctimas del conflicto armado, minorías y grupos étnicos; el respeto a su identidad, su actuar colectivo, con el fin de superar las</p>	<p>necesidades de la población.</p> <p><b>Reconocimiento de la diversidad.</b> Exige a los departamentos que <b>todas las actuaciones, planes, programas y políticas públicas se definan y ejecuten considerando la diversidad de configuraciones de los sujetos en razón de su contexto, pertenencia étnica, social, cultural, sus condiciones, capacidades, particularidades, afectaciones o estados de vulnerabilidad, con el fin de avanzar hacia la garantía de los derechos, superar las desventajas, generar mecanismos de equidad, el fortalecimiento del desarrollo y sus capacidades, y el acceso a las mismas oportunidades.</b></p> <p><b>Enfoque diferencial.</b> Exige a los departamentos que de forma transversal a todas las actuaciones, planes, programas y políticas públicas se adopten acciones que permitan superar las inequidades respecto al género, víctimas del conflicto armado, minorías y grupos étnicos; el respeto a su identidad, su actuar colectivo, con el fin de superar las desventajas y generar mecanismos de inclusión, el fortalecimiento de sus fortalezas y la generación de capacidades y de acceso a las mismas oportunidades.</p> <p><b>Solidaridad y equidad territorial.</b> Exige a los departamentos un enfoque planificador y de establecimiento de políticas públicas de forma solidaria, con el fin de garantizar el acceso equitativo a los oportunidades, <b>asegurar el desarrollo, la equidad y el acceso a las mismas oportunidades, con mayor capacidad política, económica y fiscal, deberán apoyar a aquellas entidades de menor desarrollo.</b></p>	<p>desventajas y generar mecanismos de inclusión, el fortalecimiento de sus fortalezas y la generación de capacidades y de acceso a las mismas oportunidades.</p> <p><b>Solidaridad y equidad territorial.</b> Exige a los departamentos un enfoque planificador y de establecimiento de políticas públicas, de forma solidaria y con el fin de garantizar el acceso equitativo a las oportunidades y beneficios del desarrollo, los entes territoriales, ubicados dentro de su jurisdicción, con mayor capacidad política, económica y fiscal, apoyen a aquellas entidades de menor desarrollo, promoviendo el desarrollo de sus capacidades institucionales. Para lo cual podrán propiciar esquemas asociativos entre las entidades municipales y provinciales que permitan el mismo aprovechamiento de capacidades para el desarrollo.</p> <p><b>Regionalización.</b> Permite que los departamentos, teniendo como marco la relación geográfica, económica, social, ambiental, cultural y funcional, entre otros, promuevan el desarrollo y el cumplimiento de objetivos comunes, bajo los esquemas asociativos que establecen las leyes.</p> <p><b>Participación.</b> Exige a los departamentos promover y garantizar la máxima participación de los ciudadanos como parte activa en las decisiones que los involucran y afectan, bajo el respeto de la diferencia y la equidad en condiciones de vida, desarrollos y oportunidades.</p> <p><b>Principios rectores de ordenamiento territorial.</b> Los departamentos, en el ejercicio de sus funciones, competencias, atribuciones y gestión de sus asuntos tendrán como base de sus acciones los principios rectores del ordenamiento territorial establecidos en el artículo 3 de la Ley 1454 de 2011 y la Ley 1947 de 2019 o los normas que los modifique o sustituyan.</p>

<p>diferencia y la equidad en condiciones de vida, desarrollo y oportunidades.</p> <p><b>Principios rectores de ordenamiento territorial.</b> Los departamentos en el ejercicio de sus funciones, competencias, atribuciones y gestión de sus asuntos tendrá como bases de su actuar los principios rectores del ordenamiento territorial establecidos en el artículo 3 de la Ley 1454 de 2011 y la ley 1962 de 2019 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.</p> <p><b>CAPÍTULO II</b> <b>Regulación y competencias</b></p> <p><b>Artículo 4. Regulación de los departamentos en materias especiales.</b> Los departamentos están regulados en determinadas materias, conforme al régimen normativo específico, así:</p> <p>1. La distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales departamentales, se ejercerán con arreglo a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiaridad y sostenibilidad fiscal territorial, conforme a la ley orgánica de ordenamiento territorial.</p> <p>2. La elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento</p>	<p><b>Sin modificaciones.</b></p> <p><b>Artículo 4. Regulación de los departamentos en materias especiales.</b> Los departamentos están regulados en determinadas materias, conforme al régimen normativo específico, así:</p> <p>1. La distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales departamentales, se ejercerán con arreglo a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiaridad y sostenibilidad fiscal territorial, conforme a la ley orgánica de ordenamiento territorial.</p> <p>2. La elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento</p>	<p>Se elimina el artículo en el entendido que se limita hacer referencias normativas en las que se debe fundamentar el departamento para ejercer algunas competencias.</p>	<p>territorial de las entidades territoriales departamentales se someterán en todo a la Ley orgánica expedida para tal fin y el programa de gobierno aprobado por el voto programático de los ciudadanos en la elección del gobernador. También deberá cumplir con los mecanismos de armonización y sujeción a los presupuestos oficiales y planes de inversión. En su debate y discusión debe garantizarse y hacerse efectiva la amplia participación ciudadana.</p> <p>3. En materia de programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de los entes territoriales departamentales, en lo pertinente se someterán a la ley orgánica de desarrollo, cuya programación deberá tener coordinación con el plan departamental de desarrollo.</p> <p>4. En relación con el sistema general de participaciones constituido por los recursos que la Nación transfiere a los departamentos por mandato constitucional para la financiación de los servicios cuya competencia les es asignada y en específico para la prestación de los servicios públicos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico por la ley vigente o la que la complete, modifique o sustituya.</p>	<p><b>En la Ley orgánica expedida para tal fin y el programa de gobierno aprobado por el voto programático de los ciudadanos en la elección del gobernador. También deberá cumplir con los mecanismos de armonización y sujeción a los presupuestos oficiales y planes de inversión. En su debate y discusión debe garantizarse y hacerse efectiva la amplia participación ciudadana.</b></p> <p><b>3. En materia de programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de los entes territoriales departamentales, en lo pertinente se someterán a la ley orgánica de desarrollo, cuya programación deberá tener coordinación con el plan departamental de desarrollo.</b></p> <p><b>4. En relación con el sistema general de participaciones constituido por los recursos que la Nación transfiere a los departamentos por mandato constitucional para la financiación de los servicios cuya competencia les es asignada y en específico para la prestación de los servicios públicos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico por la ley vigente o la que la complete, modifique o sustituya.</b></p> <p><b>5. En lo relativo a su endeudamiento interno y externo, con sujeción a su capacidad de pago de conformidad con la ley y de acuerdo con el literal a) del numeral 19 del artículo 150 y el artículo 364 de la Constitución Política.</b></p>
<p>5. En lo relativo a su endeudamiento interno y externo, con sujeción a su capacidad de pago, de conformidad con la ley y de acuerdo con el literal a) del numeral 19 del artículo 150 y el artículo 364 de la Constitución Política.</p> <p>6. En la creación y modificación de tributos del orden departamental, por la ley de su creación, sin perjuicio de la competencia de las asambleas departamentales para administrar los recursos y establecer dentro de su departamento los tributos de carácter departamental establecidos en la ley anterior.</p> <p>7. En materia de contratación estatal, las entidades territoriales departamentales y sus entidades descentralizadas se regirán para todos los efectos por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.</p> <p>8. En lo concerniente a los regímenes salariales y prestaciones de sus empleados públicos, por las normas generales que dicte el Congreso de la República y las disposiciones que en desarrollo de ellas expida el Gobierno. Los trabajadores oficiales por las normas vigentes de contratación laboral y las mínimas del régimen de prestaciones sociales que dicte el Congreso de la República de conformidad con lo dispuesto en los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992.</p> <p>9. El ejercicio de la función pública en los órganos y entidades del orden departamental, se ejercerá en los términos que fija la Constitución y la Ley. Los empleados públicos del orden departamental en cualquiera de sus formas de vinculación se regulo por la ley y corresponden a los empleos de carrera administrativa que son la regla general, o los empleos de libre nombramiento y remoción con vinculación legal y reglamentaria y los trabajadores oficiales cuya vinculación es mediante contrato de trabajo.</p> <p>10. Los servidores públicos del orden departamental tienen responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal en los términos de la ley vigente.</p> <p>11. La elección de cargos de elección popular se regulo conforme al código electoral y demás normas pertinentes.</p> <p>12. El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se regulo por el régimen especial que determina la ley.</p> <p>13. En relación con las instituciones y mecanismos de participación ciudadana a nivel departamental, por lo dispuesto en la respectiva</p>	<p><b>6. En la creación y modificación de tributos del orden departamental, por la ley de su creación, sin perjuicio de la competencia de las asambleas departamentales para administrar los recursos y establecer dentro de su departamento los tributos de carácter departamental establecidos en la ley anterior.</b></p> <p><b>7. En materia de contratación estatal, las entidades territoriales departamentales y sus entidades descentralizadas se regirán para todos los efectos por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.</b></p> <p><b>8. En lo concerniente a los regímenes salariales y prestaciones de sus empleados públicos, por las normas generales que dicte el Congreso de la República y las disposiciones que en desarrollo de ellas expida el Gobierno. Los trabajadores oficiales por las normas vigentes de contratación laboral y las mínimas del régimen de prestaciones sociales que dicte el Congreso de la República de conformidad con lo dispuesto en los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992.</b></p> <p><b>9. El ejercicio de la función pública en los órganos y entidades del orden departamental, se ejercerá en los términos que fija la Constitución y la Ley. Los empleados públicos del orden departamental en cualquiera de sus formas de vinculación se regulo por la ley y corresponden a los empleos de carrera administrativa que son la regla</b></p>	<p>del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992.</p> <p>9. El ejercicio de la función pública en los órganos y entidades del orden departamental, se ejercerá en los términos que fija la Constitución y la Ley. Los empleados públicos del orden departamental en cualquiera de sus formas de vinculación se regulo por la ley y corresponden a los empleos de carrera administrativa que son la regla general, o los empleos de libre nombramiento y remoción con vinculación legal y reglamentaria y los trabajadores oficiales cuya vinculación es mediante contrato de trabajo.</p> <p>10. Los servidores públicos del orden departamental tienen responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal en los términos de la ley vigente.</p> <p>11. La elección de cargos de elección popular se regulo conforme al código electoral y demás normas pertinentes.</p> <p>12. El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se regulo por el régimen especial que determina la ley.</p> <p>13. En relación con las instituciones y mecanismos de participación ciudadana a nivel departamental, por lo dispuesto en la respectiva</p>	<p><b>general a los empleos de libre nombramiento y remoción con vinculación legal y reglamentaria y los trabajadores oficiales cuya vinculación es mediante contrato de trabajo.</b></p> <p><b>10. Los servidores públicos del orden departamental tienen responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal en los términos de la ley vigente.</b></p> <p><b>11. La elección de cargos de elección popular se regulo conforme al código electoral y demás normas pertinentes.</b></p> <p><b>12. El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se regulo por el régimen especial que determina la ley.</b></p> <p><b>13. En relación con las instituciones y mecanismos de participación ciudadana a nivel departamental, por lo dispuesto en la respectiva ley, artículo 364 de la Constitución Política.</b></p> <p><b>14. Las competencias serán asignadas a los departamentos de conformidad con el principio de descentralización con suficiencia fiscal consagrado en el artículo 364 de la Constitución Política, garantizando que los recursos serán asignados con los recursos necesarios para su ejecución.</b></p>	



<p>ley estatutaria, de acuerdo con lo previsto en los artículos 103, 105, 152 y 270 de la Constitución Política.</p> <p>14. Las competencias serán asignadas a los departamentos de conformidad con el principio de descentralización fiscal con suficiencia presupuestal contemplado en el artículo 334 de la Constitución Política, garantizando que las competencias serán asignadas con los recursos necesarios para su ejecución.</p> <p><b>Artículo 5. Competencias.</b> Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución Política y demás disposiciones legales vigentes, corresponde a los departamentos ejercer las siguientes competencias:</p> <p><b>1. Bajo esquemas de autonomía y descentralización territorial en:</b></p> <p>a. Los asuntos cuya incidencia no supere la órbita de su jurisdicción, que le son inherentes en materia de desarrollo y satisfacción de las necesidades, aquellas que requieren un enfoque planificador que permita generar de forma progresiva y con sostenibilidad el mayor bienestar posible a sus habitantes, así como el goce de los</p>	<p><b>Artículo 4. Competencias.</b> Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución Política y demás disposiciones legales vigentes, corresponde a los departamentos ejercer las siguientes competencias:</p> <p><b>1. Bajo esquemas de autonomía y descentralización territorial en:</b></p> <p>1.1. <b>Los asuntos cuya incidencia no supere la órbita de su jurisdicción que le son inherentes en materia de desarrollo y satisfacción de las necesidades, aquellas que requieren un enfoque planificador que permita generar de forma progresiva y con sostenibilidad el mayor bienestar posible a sus habitantes, así como el goce de los derechos reconocidos en la Constitución Política y los valores que los desarrollan.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se quita la numeración y la redacción</li> <li>- Se elimina el numeral 1.1, porque no se predica claridad del mismo.</li> <li>- Se ajusta el numeral 1.11, teniendo en cuenta que en el marco de la Ley 1098 de 2006, el país incorporó los postulados de la Convención de los Derechos del Niño. De esta manera, el artículo 29 de esta norma señala que "desde la primera infancia los niños y las</li> </ul>	<p>derechos reconocidos en la Constitución Política y las leyes que los desarrollan.</p> <p>b. En materia de infraestructura vial les corresponde la construcción, intervención, mantenimiento y recuperación de la red vial departamental de su competencia, y propender por la generación de vías terciarias asociadas a esquemas productivos o que comporten afectación de derechos fundamentales especialmente a grupos vulnerables.</p> <p>c. Propender por el fortalecimiento, creación de nuevos líderes y empoderamiento de las organizaciones comunales y sociales; la generación de espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones, implementando sistemas articulados de participación; hacer efectivo el control social y el ejercicio de veedurías ciudadanas.</p> <p>d. Impulsar, estimular y promover la competitividad, desarrollos productivos y fomentar el emprendimiento y crecimiento económico en lo de su competencia, así como políticas de generación de empleo en sus territorios.</p>	<p>1.2. En Materia de infraestructura vial les corresponde la construcción, intervención, mantenimiento y recuperación de la red vial departamental de su competencia, y propender por la generación de vías terciarias asociadas a esquemas productivos o que comporten afectación de derechos fundamentales especialmente a grupos vulnerables.</p> <p>1.3. Propender por el fortalecimiento, creación de nuevos líderes y empoderamiento de las organizaciones comunales y sociales; la generación de espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones, implementando sistemas articulados de participación; hacer efectivo el control social y el ejercicio de veedurías ciudadanas.</p> <p>1.4. Impulsar, estimular y promover la competitividad, desarrollos productivos y fomentar el emprendimiento y crecimiento económico, <del>en lo de su competencia,</del> así como políticas de generación de empleo en sus territorios.</p> <p>1.5. Propender por la generación de valor agregado para apoyar el desarrollo agropecuario dentro de su territorio y el fortalecimiento de la economía sostenible <del>en actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, así como su</del> tecnificación con proyección exportadora.</p>	<p>niños son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código", asimismo indica, "Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el numeral 1, se adiciona una competencia relacionada con ciencia, tecnología e innovación.</li> <li>- En el numeral 2.3, se modifica la expresión "tranquilidad", por cuanto la palabra convivencia enmarca de manera más amplia la responsabilidad que le</li> </ul>
<p>e. Propender por la generación de valor agregado para apoyar el desarrollo agropecuario dentro de su territorio y el fortalecimiento de la economía sostenible en agricultura, pesca y ganadería y su tecnificación con proyección exportadora.</p> <p>f. Promover, como renglón económico, el turismo ecológico y sostenible dentro de su territorio.</p> <p>g. Efectuar el manejo eficiente y su distribución bajo conceptos de distribución priorizada e incluyente de los ingresos endógenos del departamento.</p> <p>h. Concertar en su discrecionalidad esquemas de asociatividad territorial, como lo son las regiones administrativas y de planificación -RAP-, las regiones de planeación y gestión, RAP-E, las asociaciones de departamentos o acudir a figuras como los esquemas asociativos territoriales o pactos territoriales, en los términos que determina la ley de ordenamiento territorial o la norma que haga sus veces.</p> <p>i. Liderar la formulación y ejecución de políticas en materia cultural que promuevan las identidades y valores colectivos del</p>	<p><b>Propiciar espacios de participación territorial de competencias y competencias desde enfoques de derechos humanos, diferenciales y territoriales, étnicos y sociales, los valores tradicionales, culturales, económicos, sociales y ambientales, mediante una producción agropecuaria sostenible, resiliente e incluyente.</b></p> <p>1.6. Promover, como renglón económico, el turismo ecológico y sostenible dentro de su territorio.</p> <p>1.7. Efectuar el manejo eficiente y su distribución bajo conceptos de distribución priorizada e incluyente, de los ingresos endógenos del departamento.</p> <p>1.8. Concertar en su discrecionalidad esquemas de asociatividad territorial, como lo son las regiones administrativas y de planificación -RAP-, las regiones de planeación y gestión, RAP-E, las asociaciones de departamentos o acudir a figuras como los esquemas asociativos territoriales o pactos territoriales, en los términos que determina la Constitución y la Ley.</p> <p>1.9. Liderar la formulación y ejecución de políticas en materia cultural que promuevan las identidades y valores colectivos del territorio y sus tradiciones, promoviendo la conservación y divulgación del patrimonio tangible e intangible y las expresiones</p>	<p>asiste a los departamentos, como lo define la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el numeral 2.8., se hace necesario adicionar a las viviendas de interés prioritario, toda vez que De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, entre otras disposiciones normativas, el Gobierno Nacional ha dotado al país de herramientas que atienden el déficit habitacional del sector de la población que por su condición de pobreza no tiene posibilidades de acceder a una vivienda digna, decretando la Política Pública de Hábitat y Vivienda como una política de Estado, por lo tanto ha trazado estrategias que integran y definen parámetros para</li> </ul>	<p>territorio y sus tradiciones, promoviendo la conservación y divulgación del patrimonio tangible e intangible y las expresiones culturales y artísticas de sus habitantes, bajo el respeto al pluralismo y la etno-identidad.</p> <p>j. Adaptar políticas que propendan por la práctica del deporte, con especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes, en sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas y generar programas que incentiven el deporte como forma de aprovechamiento del tiempo libre, la preservación de la salud y la construcción de potencialidades en deportistas de alto rendimiento.</p> <p>k. Implementar y hacer seguimiento a las políticas para la promoción del desarrollo integral de la primera infancia y la adolescencia con enfoque de género, que promuevan el reconocimiento, la protección y la garantía de sus derechos con lo puesto en marcha de la Ruta Integral de Atenciones como herramienta de gestión intersectorial.</p> <p>l. Las demás inherentes al ejercicio de su autonomía territorial en el marco del Estado social de derecho.</p>	<p>culturales y artísticas de sus habitantes, bajo el respeto al pluralismo y la etno-identidad.</p> <p>1.10. Adaptar políticas que propendan por la práctica del deporte, con especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes, en sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, <del>así como</del> generar programas que incentiven el deporte como forma de aprovechamiento del tiempo libre, la preservación de la salud y la construcción de potencialidades en deportistas de alto rendimiento.</p> <p>1.11. Implementar y hacer seguimiento a las políticas para la promoción del desarrollo integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia con enfoque de <del>gestión integral que promoviendo el</del> reconocimiento, <del>la</del> protección y <del>la</del> garantía de <del>los</del> derechos, siendo <del>impostergable la atención en salud y nutrición, el</del> <b>esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial.</b></p> <p><b>Realizar</b> de la Ruta Integral de Atenciones como herramienta de gestión intersectorial.</p> <p>1.12. Las demás inherentes al ejercicio de su autonomía territorial en el marco del Estado social de derecho.</p> <p>1.13. <b>Liderar la formulación y ejecución de políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación, que</b></p>	<p>la construcción de viviendas dignas en donde clasifica las Vivienda de Interés Pluri-familiar y Social (VIP y VES), estableciendo ciertas características entre unas y otras.</p>

<p><b>2. Bajo esquemas de concurrencia y complementariedad en:</b></p> <p>a. Gestionar, en coordinación con entidades del orden nacional, proyectos de cooperación o ayuda internacional.</p> <p>b. Promover e impulsar el desarrollo rural, con políticas incluyentes a la población rural y el acceso a oportunidades y garantía al goce de derechos, con perspectiva de desarrollo sostenible, equitativo e igualitario que permita la superación de esquemas de pobreza y exclusión.</p> <p>c. En materia de orden público, los departamentos en cabeza de sus gobernadores como agentes del presidente de la República para el mantenimiento del orden público y primera autoridad de policía, deben preservar la tranquilidad, la seguridad y la paz en el área de su jurisdicción y responder por las relaciones y mecanismos de coordinación entre las distintas instancias encargadas del manejo del orden público, procurando una labor unificada y eficaz.</p>	<p><b>2. Bajo esquemas de concurrencia y complementariedad en:</b></p> <p>2.1. Gestionar, en coordinación con entidades del orden nacional, proyectos de cooperación o ayuda internacional.</p> <p>2.2. Promover e impulsar el desarrollo rural, con políticas incluyentes, <del>en la población rural y el</del> acceso a oportunidades y garantía, al goce de derechos, con perspectiva de desarrollo sostenible, equitativo e igualitario que permita la superación de esquemas de pobreza y exclusión.</p> <p>2.3. En materia de orden público, los departamentos en cabeza de sus gobernadores como agentes del presidente de la República <del>para el mantenimiento del orden público y primera autoridad de policía,</del> deben preservar la seguridad y la <del>convivencia,</del> <del>se debe</del> en el área de su jurisdicción y responder por las relaciones y mecanismos de coordinación entre las distintas instancias encargadas del manejo del orden público, procurando una labor unificada y eficaz.</p>	<p>A través del Consejo de Seguridad, elaborar las políticas y los planes específicos de seguridad para afrontar, conforme sus particularidades y especificidades, los conflictos y factores de perturbación del orden público y tranquilidad, adoptando las medidas pertinentes con respeto a los derechos humanos. Cumplir con las instrucciones que el Gobierno nacional imparta en materia del uso de la fuerza pública, ejecución de políticas de seguridad que se adopten y de medidas para la tranquilidad pública.</p> <p><b>Los Consejos de Seguridad departamentales</b> elaborarán las políticas y los planes específicos de seguridad, para afrontar conforme sus particularidades y especificidades, los conflictos y factores de perturbación del orden público y <b>convivencia</b> adoptando las medidas pertinentes con respeto a los derechos humanos. <b>Además,</b> cumplirán con las instrucciones que el Gobierno nacional imparta en materia del uso de la fuerza pública, ejecución de políticas de seguridad que se adopten y de medidas para la tranquilidad pública.</p> <p>2.4. En materia de ordenamiento territorial, <del>debe</del> <del>adaptar</del> las directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad del territorio o de porciones del mismo, <del>para</del> <del>que</del> conforme con esquemas ambientales sostenibles y de las potencialidades y limitantes geofísicos, económicos y culturales, <del>se permita</del> <del>generar</del> un orden adecuado, <del>potencialidades de desarrollo y de</del> <del>desarrollar</del> <del>en</del> <del>el</del> <del>área</del> <del>de</del> <del>su</del> <del>jurisdicción</del> <del>de</del> <del>modo</del> <del>que</del> <del>se</del> <del>generen</del> <del>ventajas</del> <del>competitivas</del> <del>que</del> <del>beneficien</del> <del>a</del> <del>la</del> <del>población</del> <del>de</del> <del>los</del> <del>habitantes.</del></p> <p>2.5. <b>En concertación con los municipios</b> <del>determinan</del> en ejercicio del derecho al desarrollo sostenible, la ubicación de infraestructuras de alto impacto, <del>se</del> <del>debe</del> <del>seguir</del> <del>los</del> <del>esquemas</del> <del>de</del> <del>ordenamiento</del> <del>territorial</del> <del>de</del> <del>los</del> <del>municipios</del> <del>de</del> <del>su</del> <del>jurisdicción.</del></p> <p>e. Determinar en ejercicio del derecho al desarrollo sostenible en concertación con</p>
<p>los municipios la ubicación de infraestructuras de alto impacto, ya sea bajo esquemas propios de planificación, o regionales y de requerimiento de la escuela nacional.</p> <p>f. Promover la sostenibilidad ambiental y responsabilidad intergeneracional en el departamento, en cumplimiento de lo establecido en la ley 99 de 1993 o la norma que la modifique, añada o sustituya.</p> <p>g. A través de políticas públicas, la garantía del derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y la protección del patrimonio natural. Los departamentos garantizan que los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la jurisdicción no se degrade por acción legal sobre éste, se recepcionarán las alertas tempranas de los municipios de la jurisdicción y será llevado al consejo de seguridad para las acciones pertinentes.</p> <p>h. Concurrir con la Nación y los municipios al desarrollo de proyectos de vivienda de</p>	<p>2.6. Promover la sostenibilidad ambiental y responsabilidad intergeneracional en el departamento, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique, añada o sustituya.</p> <p>2.7. A través de <del>proyectos, programas y</del> políticas públicas, <b>garantizar</b> el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, <b>promoviendo</b> la protección del patrimonio natural.</p> <p>Los departamentos garantizarán que los recursos naturales renovables y el medio ambiente, <del>de</del> <del>la</del> <del>jurisdicción,</del> no se degraden por acción <del>de</del> <del>los</del> <del>legales</del> <del>de</del> <del>esta</del> <del>jurisdicción.</del> <del>Se</del> <del>recepcionarán</del> <del>las</del> <del>alertas</del> <del>tempranas</del> <del>de</del> <del>los</del> <del>municipios</del> <del>de</del> <del>la</del> <del>jurisdicción</del> <del>y</del> <del>será</del> <del>llevado</del> <del>al</del> <del>consejo</del> <del>de</del> <del>seguridad</del> <del>para</del> <del>adoptar</del> <del>las</del> <del>acciones</del> <del>pertinentes.</del></p> <p>Se debe generar una política de prevención, estudio del riesgo y capacidad de respuesta ante incendios forestales.</p> <p>2.8. Concurrir con la Nación y los municipios al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social <b>y de vivienda de interés popular,</b> con especial énfasis en <del>las</del> <del>áreas</del> <del>urbanas</del> <del>y</del> <del>rurales.</del> <b>Generar</b> políticas de subsidio, <b>en dinero o en especie que no podrán ser concurrenciales,</b> para <del>la</del> <del>adquisición</del> <del>del</del> <del>bien</del> <del>de</del> <del>interés</del> <del>social</del> <del>o</del> <del>de</del> <del>interés</del> <del>popular.</del> <b>mejoramiento.</b></p>	<p>interés social, con especial énfasis en generar vivienda digna a grupos vulnerables y las áreas rurales de inclusión de campesinos y población en extrema pobreza; generar políticas de subsidio o asignación de terrenos para vivienda de interés social y procesos de formalización de la propiedad. Toda política de vivienda que se establezca debe ser integral, generando condiciones de acceso a los servicios públicos y calidades de hábitat adecuadas, conforme los lineamientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.</p> <p>2.9. Concurrir con la Nación y los municipios en forma coordinada para la elaboración, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Departamental para la Atención y Prevención de Desastres; <b>generar</b> condiciones de capacidad de respuesta inmediata ante el accedimiento de desastres naturales o por acción humana, orientados a tratar de salvaguardar la vida y generar condiciones mínimas e integrales. <b>Adoptar</b> un programa de simulacros que permita a la población tener capacidad de autopespuesta y salvaguarda ante desastres.</p> <p>2.10. Bajo la coordinación operativa de la Dirección Nacional de Bomberos, o la entidad que haga sus veces, <b>apoyar</b> la creación y dotación de las instituciones o cuerpos de bomberos que funcionen dentro de su jurisdicción, para la prestación del servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendio, operativas y procesos ejecutables para operaciones de rescate, y la atención de incidentes con materiales peligrosos, <b>expediencia</b></p>

<p>j. Bajo la coordinación operativa de la Dirección Nacional de Bomberos, o la entidad que haga sus veces, apoyar la creación y dotación de las instituciones o cuerpos de bomberos que funcionen dentro de su jurisdicción, para la prestación del servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendio, los operativos y procesos ejecutables para operaciones de rescate, y la atención de incidentes con materiales peligrosos, propendiendo por que el servicio se preste en toda la jurisdicción, mejorando la capacidad de respuesta a través de la regionalización interior de la jurisdicción.</p> <p>k. En materia de tránsito y movilidad, los departamentos, a través de su entidad responsable, hacen parte del Sistema Nacional de Transporte, correspondiéndoles participar en la construcción de las políticas generales en materia de tránsito y transporte y velar por su aplicación y ejecución en su jurisdicción, así como el cumplimiento de las regulaciones del orden nacional sobre la materia.</p> <p>Formular y gestionar la política de movilidad, regulación y control del tránsito y de transporte público en el departamento.</p>	<p>2.11. En materia de tránsito y movilidad, los departamentos, a través de su entidad responsable, hacen parte del Sistema Nacional de Transporte, <del>los</del> <b>corresponden</b> participar en la construcción de las políticas generales en materia de tránsito y transporte y velar por su aplicación y ejecución en su jurisdicción <del>y</del> el cumplimiento de las regulaciones del orden nacional sobre la materia.</p> <p>Formular y gestionar la política de movilidad, regulación y control del tránsito y <del>de</del> <b>del</b> transporte público en el departamento; <del>ejerciendo</del> <b>ejerciendo</b> como autoridad de tránsito <del>en</del> la competencia asignada; <del>la</del> <b>velando</b> por la inspección, control y vigilancia, <del>velando</del> por la seguridad vial en las carreteras dentro de su área de influencia.</p> <p>2.12. En materia de <del>la</del> <b>la</b> garantía, protección y restablecimiento de derechos, <del>los departamentos</del> <b>deben fundamentarse en los lineamientos del orden nacional y velando en cuenta los recursos que están a disposición de la entidad, deben diseñar e implementar</b> políticas públicas y proyectos de inversión en beneficio de la población vulnerable por situación de pobreza, exclusión y discriminación, desplazamiento forzado, población víctima en cualquiera de las modalidades de violencia <del>contra</del></p>	<p>ejercer como autoridad de tránsito en la competencia asignada, la inspección, control, vigilancia, y velar por la seguridad vial en las carreteras dentro de su área de influencia.</p> <p>1. En materia de la garantía, protección y restablecimiento de derechos, los departamentos, con fundamento a los lineamientos del orden nacional, y teniendo en cuenta los recursos que en la materia, según la capacidad de la entidad, deben generar políticas públicas y proyectos de inversión en beneficio de la población vulnerable por situación de pobreza, exclusión y discriminación, desplazamiento forzado, población víctima en cualquiera de las modalidades de violencia contra sus derechos, y situaciones análogas de segregación y marginación para integrarlas a la sociedad y generar capacidades que permitan superar su situación.</p> <p>3. Bajo esquemas de concurrencia y/o subsidiaridad:</p> <p>a. En materia de servicios públicos le corresponde a los departamentos, conforme al régimen jurídico que fije la ley</p>	<p><del>en</del> <b>en</b> derechos, y situaciones análogas de segregación, y marginación <del>para integrarlas a la sociedad y generar capacidades que permitan superar su situación.</del></p> <p>3. <b>Bajo esquemas de concurrencia y/o subsidiaridad:</b></p> <p>3.1. En materia de servicios públicos, le corresponde a los departamentos conforme al régimen jurídico que fije la ley <del>debe</del> <b>debe</b> asegurar su cobertura y prestación eficiente en cumplimiento de los fines del Estado <del>y como deber social</del> <b>debe</b> garantizar su calidad y universalidad:</p> <p>3.1.1. <b>En materia de Educación.</b> <del>Ejecutar las competencias para la prestación del servicio educativo en los municipios de su jurisdicción que no están certificados en educación según los criterios que establezca la ley, aplicando los recursos y competencias de que dispongan, pueden concurrir con la acción y el ejercicio de las funciones propias de los entes o municipios certificados en educación que se encuentren dentro de su territorio.</del></p> <p>3.1.2. <b>En materia del Servicio de salud.</b> Formular los planes, programas y proyectos tendientes a la prestación oportuna, eficiente y con calidad del servicio de salud, en consonancia con aquellos establecidos</p>
<p>que los regule, asegurar su cobertura y prestación eficiente en cumplimiento de los fines del Estado y como deber social que garantice su calidad y universalidad, así:</p> <p>l. <b>En materia de educación,</b> es competencia de los departamentos prestar asistencia técnica, financiera y administrativa a los municipios, cuando a ello haya lugar; administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la formación educativa departamental; apoyar técnica y administrativamente a los municipios para que se certifiquen en los términos previstos en la ley, apoyando el fortalecimiento de las capacidades requeridas para su dirección y administración autónoma y directa; certificar a los municipios para asumir la prestación del servicio público educativo.</p> <p>Actuar subsidiariamente para garantizar la educación frente a los municipios que bajo los criterios que establezca la ley, no adquieran la certificación, para lo cual deben dirigir, planificar y garantizar la prestación del servicio asumiendo las responsabilidades que determine la ley.</p>	<p>para el orden nacional. Es su deber asistir y asesorar a los municipios para que se garantice la cobertura de aquel, al tiempo que supervisar y controlar tanto el recaudo y ejecución de los recursos propios como de los entregados por concepto del sistema general de participaciones con destinación específica y el aseguramiento de la población en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los regímenes de excepción definidos en el ordenamiento jurídico.</p> <p>Ejercer el liderazgo y gobernanza del sistema de salud en la jurisdicción en procura de calidad, acceso y oportunidad de un sistema para toda la población. Articular la acción institucional, planificar el tema de salud para el territorio, desplegando las capacidades institucionales necesarias para liderar políticas, planes, programas y proyectos; articular la acción de los actores del sistema de salud territorial, entre la Nación y los municipios, crear un sistema que permita superar los problemas, fortalecer los sistemas de información que le permita a los departamentos y municipios conocer la población dentro de su jurisdicción, para generar políticas públicas de prevención, asistencia, georreferenciación, para la localización de especialistas y organización del sistema, crear plataformas que permitan recepcionar información para una mejor inspección, vigilancia y control. Desarrollar programas de salud pública; proveer tecnologías en salud; fortalecer, a través de la coordinación y articulación con los municipios con el plan de beneficios individuales en salud PIS del</p>	<p>en condiciones de equidad, eficiencia y calidad con criterio de progresividad en su cumplimiento.</p> <p>ii. <b>En materia del servicio de salud,</b> Formular los planes, programas y proyectos tendientes a la prestación oportuna, eficiente y con calidad del servicio de salud, en consonancia con aquellos establecidos para el orden nacional. Es su deber asistir y asesorar a los municipios para que se garantice la cobertura de aquel, al tiempo que supervisar y controlar tanto el recaudo y ejecución de los recursos propios como de los entregados por concepto del sistema general de participaciones con destinación específica y el aseguramiento de la población en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los regímenes de excepción definidos en el ordenamiento jurídico.</p> <p>Ejercer el liderazgo y gobernanza del sistema de salud en la jurisdicción en procura de calidad, acceso y oportunidad de un sistema para toda la población. Articular la acción institucional; planificar el tema de salud para el territorio, desplegando las capacidades institucionales necesarias</p>	<p>nivel local; el departamento vigilará la seguridad social en el territorio, régimen de aseguramiento y regímenes especiales, en coordinación con las autoridades nacionales, impulsar, adaptar y velar por la aplicación de políticas de talento humano en la salud a partir de los profesionales del departamento; participar en la gestión de financiamiento del subsidio a la oferta de hospitales públicos en el territorio y en la atención de la población no afiliada a la seguridad social; liderar el gobierno corporativo de los hospitales públicos y velar por su buen desempeño y la transparencia en la gestión.</p> <p>3.1.3. <b>En materia de Servicios públicos domiciliarios.</b> Administrar, coordinar y complementar la acción de los municipios y servir como intermediario entre éstos y la Nación, para garantizar la continua y adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que la ley y la Constitución Política establezcan.</p> <p>3.1.4. <b>En materia de Agua potable y saneamiento básico.</b> Promover, estructurar, cofinanciar e implementar esquemas regionales, <del>que atiendan al municipio que le impone el ordenamiento jurídico de para concurrir a la eficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.</del></p> <p><del>le corresponde</del> <b>Administrar los recursos destinados provenientes del sistema general de participaciones</b> para la atención de este servicio esencial y apoyar a las autoridades competentes en el ejercicio de</p>

<p>para liderar políticas, planes, programas y proyectos; articular la acción de los actores del sistema de salud territorial; entre la Nación y los municipios; crear un sistema que permita superar los problemas; fortalecer los sistemas de información que le permita a los departamentos y municipios conocer la población dentro de su jurisdicción; para generar políticas públicas de prevención, asistencia, georreferenciación, para la localización de especialistas y organización del sistema; crear plataformas que permitan recepcionar información para una mejor inspección, vigilancia y control. Desarrollar programas de salud pública; proveer tecnologías en salud; fortalecer, a través de la coordinación y articulación con los municipios con el plan de beneficios individuales en salud PBS del nivel local; el departamento vigilará la seguridad social en el territorio, régimen de aseguramiento y regímenes especiales, en coordinación con las autoridades nacionales. Impulsar, adaptar y velar por la aplicación de políticas de talento humano en la salud a partir de los profesionales del departamento; participar en la gestión de financiamiento del subsidio a la oferta</p>	<p>medidas correctivas y preventivas que propendan por la continua y adecuada prestación del servicio.</p> <p>4. Cumplir las demás funciones administrativas y prestar los servicios que les señalen la Constitución y las Leyes.</p>		<p>de hospitales públicos en el territorio y en la atención de la población no afiliada a la seguridad social; liderar el gobierno corporativo de los hospitales públicos y velar por su buen desempeño y la transparencia en la gestión.</p> <p>iii. <b>En materia de servicios públicos domiciliarios:</b> Administrar, coordinar y complementar la acción de los municipios y servir como intermediario entre éstos y la Nación para garantizar la continua y adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que la ley y la Constitución Política establezcan.</p> <p>iv. <b>En materia de agua potable y saneamiento básico:</b> Promover, estructurar, cofinanciar e implementar esquemas regionales que atiendan el mandato que le impone el ordenamiento jurídico de concurrir a la eficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.</p> <p>Le corresponde administrar los recursos asignados para la atención de este servicio esencial que provengan del sistema general de participaciones y apoyar a las autoridades competentes en el ejercicio de medidas correctivas y</p>		
<p>preventivas que propendan por la continua y adecuada prestación del servicio.</p> <p>4. Cumplir las demás funciones administrativas y prestar los servicios que les señalen la Constitución y las leyes.</p> <p><b>Nuevo.</b></p>	<p><b>Artículo 5. Áreas No Municipalizadas.</b> El Gobernador elevará la administración sobre las áreas no municipalizadas, hasta tanto se surta el proceso de municipalización de conformidad con la normatividad vigente. En los departamentos en los que haya presencia de comunidades étnicas, se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 632 de 2018 y las disposiciones complementarias.</p>	<p>De acuerdo con las recomendaciones realizadas por los departamentos de Guanía y Vaupés en audiencia pública se incorpora un artículo nuevo respecto de la competencia de los Gobernadores en las áreas no municipalizadas, para preservar la competencia de la administración departamental en las decisiones administrativas que correspondan mientras se surte la respectiva municipalización.</p>	<p>los desequilibrios regionales, en especial del territorio rural.</p> <p><b>Artículo 2.</b> El departamento adoptará y ejecutará las políticas, planes, programas y proyectos regionales que respondan a la capacidad de crear riqueza, con el fin de promover la prosperidad y bienestar económico y social de sus habitantes, estimulando y garantizando la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio e industria de forma legal asimismo, velará por brindar oportunidades de superación a los sectores que sufren desigualdad desde la organización, el orden y la seguridad.</p> <p><b>Artículo 8.</b> El departamento promoverá el desarrollo empresarial de los pequeños y medianos productores organizados en comunidades campesinas y nativas.</p> <p><b>Artículo 9.</b> El departamento promoverá la asociatividad que permita generar sinergias para cubrir mercados que de manera independiente no se puedan abastecer, conformando redes empresariales que impulsen el desarrollo de clúster que se conviertan en motores de desarrollo regional.</p> <p>Así mismo, contribuirá en la formulación, ejecución y coordinación de políticas y programas de promoción de las MIPYMES.</p> <p><b>Artículo 10.</b> El departamento, a través de los principios de coordinación y coherencia, impulsará con la Nación, la inversión privada responsable y sostenible para el desarrollo territorial, que atienda el fortalecimiento de las capacidades</p>	<p>Se sube artículo que estaba en el capítulo siguiente.</p> <p>Se sube artículo que estaba en el capítulo siguiente.</p> <p>Se sube artículo que estaba en el capítulo siguiente.</p> <p>Se sube artículo que estaba en el capítulo siguiente.</p>	<p>Se sube artículo que estaba en el capítulo siguiente.</p>

<p>y fortalezas reconocidas.</p> <p><b>Artículo 11.</b> Los departamentos a través de los esquemas asociativos territoriales, podrán fortalecer los sistemas administrativos, de planeación y de prestación de servicios públicos, consolidando esquemas de desarrollo económico y social que impulsen las potencialidades.</p> <p><b>CAPÍTULO III</b> <b>Tipología de departamentos</b></p> <p><b>CAPÍTULO-III</b> <b>Tipología de departamentos</b></p> <p><b>Artículo 4. Tipología de departamentos.</b> Son un criterio que reconoce la diversidad territorial y las disparidades regionales, que permite fortalecer la entidad territorial de los departamentos, con el propósito de generar un cambio social, para mejorar la calidad de vida, superando las inequidades regionales en servicios públicos y oportunidades. El departamento está llamado a dinamizar el crecimiento económico y la equidad</p>	<p>Se sube artículo que estaba en el capítulo siguiente.</p> <p>Se elimina el capítulo de tipología de departamentos teniendo en cuenta que las tipologías de departamentos no se pueden desarrollar en su totalidad en el presente proyecto de ley, porque requieren un estudio técnico que aún no se ha adelantado. Dicha eliminación pretende evitar inseguridades o intranquilidad en los departamentos.</p> <p>Se elimina.</p> <p><b>Artículo 4. Tipología de departamentos.</b> Son un criterio que reconoce la diversidad territorial y las disparidades regionales, que permite fortalecer la entidad territorial de los departamentos, con el propósito de generar un cambio social, para mejorar la calidad de vida, superando las inequidades regionales en servicios públicos y oportunidades. El departamento está llamado a dinamizar el crecimiento económico y la equidad de beneficios. Asigna el nivel de competencias y funciones diferenciadas a las</p>	<p>de beneficios. Asignar el nivel de competencias y funciones diferenciadas a las entidades territoriales según su tipología, que permita decisiones en materia de delegación y potestades descentralización, flexibilización de la estructura política-administrativa, de acceso a los recursos del presupuesto nacional. Establecimiento de oferta de asistencia técnica al nivel departamental.</p> <p><b>Artículo 7. Criterios para la tipología.</b> Los criterios que integralmente constituyen la tipología son:</p> <p>a) Nivel de desarrollo económico b) Nivel de desarrollo social c) Número de municipios certificados d) Capacidad de desarrollo sobre las potencialidades territoriales e) Capacidad fiscal f) Características demográficas que sostengan o amplíen la población g) Calidad de vida de los habitantes h) Sostenibilidad ambiental i) Empleo j) Desarrollo de infraestructura vial departamental k) Capacidad de planificación l) Estructura administrativa y asistencia técnica a los municipios m) Nivel de gobernabilidad y gobernanza. n) Coberturas en educación, salud, servicios públicos. o) Ubicación geográfica favorable.</p> <p><b>Artículo 7. Criterios para la tipología.</b> Los criterios que integralmente constituyen la tipología son:</p> <p>a) Nivel de desarrollo económico b) Nivel de desarrollo social c) Número de municipios certificados d) Capacidad de desarrollo sobre las potencialidades territoriales e) Capacidad fiscal f) Características demográficas que sostengan o amplíen la población g) Calidad de vida de los habitantes h) Sostenibilidad ambiental i) Empleo j) Desarrollo de infraestructura vial departamental k) Capacidad de planificación l) Estructura administrativa y asistencia técnica a los municipios m) Nivel de gobernabilidad y gobernanza. n) Coberturas en educación, salud, servicios públicos. o) Ubicación geográfica favorable.</p>	<p>entidades territoriales según su tipología que permita decisiones en materia de delegación y potestades descentralización, flexibilización de la estructura política-administrativa, de acceso a los recursos del presupuesto nacional. Establecimiento de oferta de asistencia técnica al nivel departamental.</p> <p>Se elimina.</p>
<p><b>Parágrafo 1.</b> La tipología de los departamentos se constituirá sobre los datos estadísticos e información del DANE, Ministerio, DNP y la Federación Nacional de Departamentos, entre otras entidades; se procederá por el Observatorio de Ordenamiento Territorial, generando un documento técnico por cada uno de los departamentos, el cual recomendará la profundización de la descentralización, así como la adopción de estrategias en los casos negativos, para fortalecer la equidad territorial.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, presentará al Congreso de la República, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley que reglamente lo relativo al desarrollo de las tipologías de las entidades territoriales.</p> <p><b>CAPÍTULO IV</b> <b>Fases de la descentralización</b></p> <p><b>Artículo 8.</b> El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, presentará al Congreso de la República, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley que reglamente lo relativo al desarrollo</p>	<p><b>Parágrafo 1.</b> La tipología de los departamentos se constituirá sobre los datos estadísticos e información del DANE, Ministerio, DNP y la Federación Nacional de Departamentos, entre otras entidades; se procederá por el Observatorio de Ordenamiento Territorial, generando un documento técnico por cada uno de los departamentos, el cual recomendará la profundización de la descentralización, así como la adopción de estrategias en los casos negativos, para fortalecer la equidad territorial.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, presentará al Congreso de la República, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley que reglamente lo relativo al desarrollo de las tipologías de las entidades territoriales.</p> <p><b>CAPÍTULO-IV</b> <b>Fases de la descentralización</b></p> <p><b>Artículo 8.</b> El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, presentará al Congreso de la República, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley que reglamente lo relativo al desarrollo</p>	<p>que reglamente lo relativo al desarrollo de las fases de profundización de descentralización a las entidades territoriales; definirá los mínimos y máximos en transferencias y competencias con base en la tipología y que recogerá en lo pertinente, los resultados del estudio de Misión de Descentralización, a la que hace referencia el artículo 10 parágrafo 4 de la Ley 1947 de 2019.</p> <p><b>CAPÍTULO V</b> <b>Condiciones para su creación, delimitación y amojonamiento</b></p> <p><b>Artículo 9. Creación de nuevos departamentos.</b> Corresponde al Congreso de la República, fijar o modificar el límite de regiones territoriales del orden departamental y del distrito capital de Bogotá, en armonía con los preceptos, la ley podrá decretar la formación de nuevos departamentos, el deslinde de las entidades existentes.</p> <p>El Congreso de la República definirá los límites dudosos y solucionará los conflictos límites, previo estudio normativo y técnico. Estos estudios</p>	<p>las fases de profundización de descentralización a las entidades territoriales; definirá los mínimos y máximos en transferencias y competencias con base en la tipología y que recogerá en lo pertinente, los resultados del estudio de Misión de Descentralización, a la que hace referencia el artículo 10 parágrafo 4 de la Ley 1947 de 2019.</p> <p><b>CAPÍTULO III</b> <b>Creación de nuevos departamentos y definición de límites dudosos.</b></p> <p><b>Artículo 12. Creación de nuevos departamentos y definición de límites dudosos.</b> Corresponde al Congreso de la República, fijar o modificar el límite de regiones territoriales del orden departamental y del distrito capital de Bogotá, de conformidad con la Ley 1447 de 2011 o las normas que la sustituyen, adicionan o modifican. En armonía con los preceptos, la ley podrá decretar la formación de nuevos departamentos y el deslinde de las entidades existentes.</p> <p>Se reemplaza todo el título por un artículo, en aras de no generar una duplicidad normativa, en el entendido que la creación de nuevos departamentos y el examen de límites de las entidades territoriales, ya está previsto en la Ley 1447 de 2011.</p> <p>Se ajusta numeración y redacción.</p>

<p>serán elaborados conjuntamente por las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes con el apoyo del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi".</p> <p>En lo que corresponde a límites dudosos en que esté implicado alguna región, territorio, departamento, distrito, o municipio integrante de una área metropolitana, deberá sujetarse a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 9 de la Ley 1447 de 2011.</p>	<p>El Congreso de la República definirá los límites dudosos y solucionará los conflictos limítrofes, previo estudio normativo y técnico. Estos estudios serán elaborados conjuntamente por las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes con el apoyo del Ministerio del Interior y el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi".</p> <p><b>Parágrafo.</b> El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial será la entidad del nivel Nacional encargada de promover y liderar los procesos de articulación y coordinación con las demás entidades del nivel central y territorial dentro del proceso de exámenes de límites, definición de límites dudosos y conflictos limítrofes. El Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" remitirá copia de la iniciación de los procesos al Congreso de la República y al Ministerio del Interior.</p>	
<p><b>Artículo 10. Requisitos de la solicitud de examen de límites.</b> La solicitud de examen de límites deberá dirigirse al Director General del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" y como mínimo debe contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La identificación de la entidad o entidades territoriales que solicitan el examen del límite, los nombres y apellidos, documento</li> </ol>	<p><b>Artículo 10. Requisitos de la solicitud de examen de límites.</b> La solicitud de examen de límites deberá dirigirse al Director General del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" y como mínimo debe contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La identificación de la entidad o entidades territoriales que solicitan el examen del límite, los nombres y apellidos, documento de identidad y dirección de su representante legal.</li> </ol>	<p>Se elimina.</p>
<p><b>Parágrafo 1.</b> Cuando la petición de examen del límite provenga de las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes, la solicitud debe ser firmada por el Presidente de la Comisión o quien haga sus veces y cumplir con los requisitos previstos en los numerales 2 y 3 de este artículo. Para cumplir con lo dispuesto en el numeral 4 de este artículo, el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" solicitará a las entidades territoriales involucradas que alleguen lo necesario.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Cuando de oficio el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" determine que hará el examen de un límite, en la resolución que así lo disponga, expondrá los elementos previstos en los numerales 2 y 3 de este artículo, y para cumplir con lo dispuesto en el numeral 4 de este artículo, solicitará a las entidades territoriales involucradas que alleguen lo necesario.</p> <p><b>Parágrafo 3.</b> Para la revisión o examen periódico de un límite, deben haber transcurrido al menos veinte (20) años contados desde la fecha de finalización del último destino realzado y sobre el cual hubo acuerdo de las partes.</p> <p>El plazo de veinte (20) años no aplica cuando se trata de la revisión o examen periódico de un límite por la causal prevista en el literal d) del artículo 2º de la Ley 1447 del 2011 o la norma que modifique, adicione o sustituya.</p> <p><b>Parágrafo 4.</b> El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial será la entidad del nivel Nacional que brindará el acompañamiento en todo el proceso de articulación y coordinación con las demás entidades del nivel central y territorial dentro del proceso de exámenes de límites, definición de límites dudosos y conflictos limítrofes. Por lo cual, el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" remitirá copia de la iniciación del proceso.</p>	<p>identidad y dirección de su representante legal.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Cuando la petición de examen del límite provenga de una, varias o de todas las entidades territoriales interesadas en el examen de límites, el examen de límites, se debe realizar en el momento de la expedición de la resolución de la entidad o entidades territoriales solicitantes. Cuando se manifieste que se trata de un límite tradicional, la cual debe ser expedida por el representante legal de la entidad o entidades territoriales solicitantes. Cuando se manifieste que se trata de un límite tradicional, se deben allegar los elementos de juicio y las pruebas relacionadas en el artículo 6º de la Ley 1447 del 2011 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Cuando la petición de examen del límite provenga de una, varias o de todas las entidades territoriales interesadas en el examen de límites, el examen de límites, se debe realizar en el momento de la expedición de la resolución de la entidad o entidades territoriales solicitantes.</p>	<p>Se elimina.</p>
<p><b>Parágrafo 1.</b> Cuando la petición de examen del límite provenga de una, varias o de todas las entidades territoriales interesadas en el examen de límites, el examen de límites, se debe realizar en el momento de la expedición de la resolución de la entidad o entidades territoriales solicitantes. Cuando se manifieste que se trata de un límite tradicional, la cual debe ser expedida por el representante legal de la entidad o entidades territoriales solicitantes. Cuando se manifieste que se trata de un límite tradicional, se deben allegar los elementos de juicio y las pruebas relacionadas en el artículo 6º de la Ley 1447 del 2011 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Cuando la petición de examen del límite provenga de una, varias o de todas las entidades territoriales interesadas en el examen de límites, el examen de límites, se debe realizar en el momento de la expedición de la resolución de la entidad o entidades territoriales solicitantes.</p>	<p><b>Artículo 11. Iniciación del destino.</b> El Director General del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" decidirá por medio de resolución motivada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. la petición o peticiones que cumplan los requisitos previstos en el artículo anterior o, en las razones que tenga el IGAC para adelantarlo el destino, si se trata de actuación oficiosa y,</li> <li>II. en el listado de pruebas presentadas por el solicitante o solicitantes, dispónalo:</li> </ol>	<p>Se elimina.</p>

<p>1. La apertura del procedimiento de deslinde, la cual tendrá como fecha la de la resolución.</p> <p>2. Ordenar la realización de la diligencia de deslinde.</p> <p>3. La designación del funcionario del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", que presidirá la Comisión de Deslinde y quien debe desempeñar un cargo de profesional en la planta de personal de esta entidad y tener título universitario en las profesiones de Geografía o en alguna de las siguientes ingenierías: Catastral y Geodésica, Geográfica, Topográfica, Civil, Forestal o afines.</p> <p>4. Cuáles entidades territoriales tienen interés en el deslinde. Esta determinación implica su reconocimiento para intervenir en el deslinde. Otras entidades territoriales pueden pedir su intervención en la diligencia de deslinde, mediante solicitud que cumpla los requisitos previstos en el artículo 10° de este régimen y previo reconocimiento del IGAC para intervenir, mediante resolución del Director General de esta entidad.</p> <p>5. La convocatoria con fecha, hora y lugar claramente identificada, para dar inicio a la diligencia de deslinde.</p>	<p>1. La apertura del procedimiento de deslinde, la cual tendrá como fecha la de la resolución.</p> <p>2. Ordenar la realización de la diligencia de deslinde.</p> <p>3. La designación del funcionario del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", que presidirá la Comisión de Deslinde y quien debe desempeñar un cargo de profesional en la planta de personal de esta entidad y tener título universitario en las profesiones de Geografía o en alguna de las siguientes ingenierías: Catastral y Geodésica, Geográfica, Topográfica, Civil, Forestal o afines.</p> <p>4. Cuáles entidades territoriales tienen interés en el deslinde. Esta determinación implica su reconocimiento para intervenir en el deslinde. Otras entidades territoriales pueden pedir su intervención en la diligencia de deslinde, mediante solicitud que cumpla los requisitos previstos en el artículo 10° de este régimen y previo reconocimiento del IGAC para intervenir, mediante resolución del Director General de esta entidad.</p> <p>5. La convocatoria con fecha, hora y lugar claramente identificada, para dar inicio a la diligencia de deslinde.</p> <p>6. La advertencia a los representantes legales de las entidades territoriales reconocidas en el deslinde que pueden intervenir directamente en la actuación o pueden delegar. Para este efecto, deberán entregar al Director General del IGAC o al Presidente de la Comisión de Deslinde, un escrito</p>	<p>4. La advertencia a los representantes legales de las entidades territoriales con interés en el deslinde que pueden intervenir directamente en la actuación o pueden delegar. Para este efecto, deberán entregar al Director General del IGAC o al Presidente de la Comisión de Deslinde, un escrito firmado, donde se señale e identifique un solo delegado para la actuación.</p> <p>7. Copia de la constancia de la notificación de los representantes legales de las entidades territoriales, que conforme al numeral 4 de este artículo, se consideren con algún interés en el deslinde.</p> <p>8. Copia de la comunicación de la iniciación del procedimiento de deslinde, mediante envío de copia de la resolución a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, a la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior y a la Procuraduría General de la Nación.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La Resolución a que se refiere este artículo, constituye un acto administrativo de trámite y contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.</p> <p><b>Artículo 12. Competencia de las entidades territoriales.</b> Es obligación de las entidades territoriales comparecer por intermedio de los</p>	<p>1. Copia de la constancia de la notificación de los representantes legales de las entidades territoriales que conforme al numeral 4 de este artículo, se consideren con algún interés en el deslinde.</p> <p>2. Copia de la comunicación de la iniciación del procedimiento de deslinde, mediante envío de copia de la resolución a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, a la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior y a la Procuraduría General de la Nación.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La Resolución a que se refiere este artículo, constituye un acto administrativo de trámite y contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.</p> <p><b>Artículo 12. Competencia de las entidades territoriales.</b> Es obligación de las entidades territoriales comparecer por intermedio de los representantes legales o de sus delegados.</p>
<p>representantes legales o de sus delegados, en la fecha, hora y lugar, en los cuales fueron convocados por el IGAC, mediante resolución que haya sido notificada, para dar inicio a la diligencia de deslinde.</p> <p>Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado por el representante legal o de su delegado, la no comparecencia de alguna, varias o todas las entidades territoriales reconocidas para intervenir y convocadas, no impedirá ni invalidará la realización de la sesión o de la diligencia de deslinde en general, que se adelantará con los intervinientes que comparezcan o solamente por el funcionario del IGAC designado para el deslinde.</p> <p>El representante legal o su delegado de la entidad territorial que alegue fuerza mayor o caso fortuito para no asistir a la diligencia de deslinde, deberá sustentar tales circunstancias ante el IGAC, para lo cual tendrá un término de 15 días contados a partir del día siguiente a la fecha fijada para la realización de la diligencia.</p> <p>Si se comprueba fuerza mayor o caso fortuito de alguno de los representantes legales o de sus delegados de la entidad territorial, designados y comunicados previamente al IGAC, se convocará para nueva fecha, hora y lugar, según lo que se estime pertinente en consideración a la causa que impidió iniciar la diligencia de deslinde. Esta nueva</p>	<p>en la fecha, hora y lugar en los cuales fueron convocados para dar inicio a la diligencia de deslinde.</p> <p>Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado por el representante legal o de su delegado, la no comparecencia de alguna, varias o todas las entidades territoriales reconocidas para intervenir y convocadas, no impedirá ni invalidará la realización de la sesión o de la diligencia de deslinde en general, que se adelantará con los intervinientes que comparezcan o solamente por el funcionario del IGAC designado para el deslinde.</p> <p>El representante legal o su delegado de la entidad territorial que alegue fuerza mayor o caso fortuito para no asistir a la diligencia de deslinde, deberá sustentar tales circunstancias ante el IGAC, para lo cual tendrá un término de 15 días contados a partir del día siguiente a la fecha fijada para la realización de la diligencia.</p> <p>Si se comprueba fuerza mayor o caso fortuito de alguno de los representantes legales o de sus delegados de la entidad territorial, designados y comunicados previamente al IGAC, se convocará para nueva fecha, hora y lugar, según lo que se estime pertinente en consideración a la causa que impidió iniciar la diligencia de deslinde. Esta nueva convocatoria se hará por resolución motivada expedida por el Director General del IGAC que será notificada a los representantes legales o sus delegados.</p>	<p>convocatoria se hará por resolución motivada expedida por el Director General del IGAC, que será notificada a los representantes legales o sus delegados.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Después de iniciada la diligencia de deslinde, si se requiere suspenderla para que en otra sesión de la misma diligencia se continúe con la actuación, el funcionario del IGAC que preside la Comisión de Deslinde, antes del receso, señalará los asuntos a tramitar y fijará para esa fin la fecha, hora y lugar exacto de reunión, a los cuales quedan convocados notificados o citados todos los entes territoriales reconocidos para intervenir, sin necesidad de providencia o acto administrativo expreso que así lo disponga. La comparecencia en no asistir a la sesión se comunicará según lo dispuesto en el presente artículo.</p> <p><b>Artículo 13. Intervenientes o participantes en la diligencia de deslinde.</b> Las entidades territoriales reconocidas conforme al numeral 4 del artículo 11 de esta ley, podrán intervenir o acudir de sus representantes legales o de sus delegados debidamente acreditados. En todo caso, solamente podrá intervenir una persona por entidad territorial. No se podrá aceptar la intervención simultánea en una misma sesión de más de una persona en representación de cada entidad territorial interviniente en el deslinde.</p>	<p>convocatoria se hará por resolución motivada expedida por el Director General del IGAC, que será notificada a los representantes legales o sus delegados.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Después de iniciada la diligencia de deslinde, si se requiere suspenderla para que en otra sesión de la misma diligencia se continúe con la actuación, el funcionario del IGAC que preside la Comisión de Deslinde, antes del receso, señalará los asuntos a tramitar y fijará para esa fin la fecha, hora y lugar exacto de reunión, a los cuales quedan convocados notificados o citados todos los entes territoriales reconocidos para intervenir, sin necesidad de providencia o acto administrativo expreso que así lo disponga. La comparecencia en no asistir a la sesión se comunicará según lo dispuesto en el presente artículo.</p> <p><b>Artículo 13. Intervenientes o participantes en la diligencia de deslinde.</b> Las entidades territoriales reconocidas conforme al numeral 4 del artículo 11 de esta ley, podrán intervenir o acudir de sus representantes legales o de sus delegados debidamente acreditados. En todo caso, solamente podrá intervenir una persona por entidad territorial. No se podrá aceptar la intervención simultánea en una misma sesión de más de una persona en representación de cada entidad territorial interviniente en el deslinde.</p> <p>Los personas que intervengan por cada entidad territorial reconocida y el funcionario del IGAC conforme la</p>

<p>Las personas que intervengan por cada entidad territorial reconocida y el funcionario del IGAC, conforman la Comisión de Deslinde, que será presidida por este último.</p> <p>Los representantes legales de las entidades territoriales o sus delegados debidamente acreditados, podrán asesorarse de estos asesores en la diligencia de deslinde será considerada únicamente como informativa. No se considerarán como prueba los conceptos, opiniones, informes o dictámenes de los asesores de las entidades territoriales.</p> <p>En la diligencia de deslinde, se podrán allegar las pruebas que aporten las entidades territoriales por intermedio de sus representantes legales o sus delegados y solicitar la práctica de pruebas, que se realizarán siempre y cuando sean previamente decretadas por el Presidente de la Comisión de Deslinde. De otra parte, el IGAC podrá solicitar pruebas técnicas especializadas a otras entidades.</p> <p>Las personas que necesariamente deben participar para la práctica de las pruebas, tendrán limitada su actuación únicamente a la realización de la prueba. No hay lugar a la designación de apoderados para la práctica de pruebas en la diligencia de deslinde y, toda comunicación, notificación y controversia de las pruebas que se</p>	<p><b>Comisión de Deslinde, que será presidida por este último.</b></p> <p>Los representantes legales de las entidades territoriales o sus delegados debidamente acreditados, podrán asesorarse de las personas que consideren conveniente. La participación de estos asesores en la diligencia de deslinde será considerada únicamente como informativa. No se considerarán como prueba los conceptos, opiniones, informes o dictámenes de los asesores de las entidades territoriales.</p> <p>En la diligencia de deslinde, se podrán allegar las pruebas que aporten las entidades territoriales por intermedio de sus representantes legales o sus delegados y solicitar la práctica de pruebas, que se realizarán siempre y cuando sean previamente decretadas por el Presidente de la Comisión de Deslinde. De otra parte, el IGAC podrá solicitar pruebas técnicas especializadas a otras entidades.</p> <p>Las personas que necesariamente deben participar para la práctica de las pruebas, tendrán limitada su actuación únicamente a la realización de la prueba. No hay lugar a la designación de apoderados para la práctica de pruebas en la diligencia de deslinde y, toda comunicación, notificación y controversia de las pruebas que se practiquen allí se atenderá, puesta en la misma sesión de la diligencia de deslinde.</p> <p><b>Parágrafo.</b> De toda sesión en la diligencia de deslinde se elaborará un acta, el cual se firmará por el Presidente de la Comisión de Deslinde.</p>	<p>practiquen allí, se entenderá surtida en la misma sesión de la diligencia de deslinde.</p> <p><b>Parágrafo.</b> De toda sesión en la diligencia de deslinde se elaborará un acta, al finalizar la reunión.</p> <p>Los actos se numerarán consecutivamente, tendrán la fecha de realización de la sesión o reunión, contendrán un resumen sucinto de lo actuado y, si los hubiere, la relación de los anexos que harán parte de la misma, debidamente identificados.</p> <p>Cada acta debe ser firmada por los miembros de la Comisión de Deslinde que comparezcan. Cuando haya lugar a la práctica de pruebas, las personas que los realicen también deberán firmar el acta correspondiente.</p> <p>Los miembros de la Comisión de Deslinde podrán dejar por escrito, las salvedades, aclaraciones y constancias que consideren pertinentes sobre el contenido del acta o sobre el resultado de cada una de ellas. Cuando haya lugar a la práctica de pruebas, las personas que los realicen también deberán firmar el acta correspondiente.</p> <p>Los miembros de la Comisión de Deslinde podrán dejar por escrito, las salvedades, aclaraciones y constancias que consideren pertinentes sobre el contenido del acta o sobre el resultado de cada una de ellas. Cuando haya lugar a la práctica de pruebas, las personas que los realicen también deberán firmar el acta correspondiente.</p> <p>Los miembros de la Comisión de Deslinde podrán dejar por escrito, las salvedades, aclaraciones y constancias que consideren pertinentes sobre el contenido del acta o sobre el resultado de cada una de ellas. Cuando haya lugar a la práctica de pruebas, las personas que los realicen también deberán firmar el acta correspondiente.</p> <p>Los miembros de la Comisión de Deslinde podrán dejar por escrito, las salvedades, aclaraciones y constancias que consideren pertinentes sobre el contenido del acta o sobre el resultado de cada una de ellas. Cuando haya lugar a la práctica de pruebas, las personas que los realicen también deberán firmar el acta correspondiente.</p> <p>Los miembros de la Comisión de Deslinde podrán dejar por escrito, las salvedades, aclaraciones y constancias que consideren pertinentes sobre el contenido del acta o sobre el resultado de cada una de ellas. Cuando haya lugar a la práctica de pruebas, las personas que los realicen también deberán firmar el acta correspondiente.</p>
<p>efectos.</p> <p><b>Artículo 14. Trámite de la diligencia de deslinde.</b> Iniciada la diligencia de deslinde se procederá así:</p> <p>1. Al comenzar la primera reunión, las entidades territoriales, a través de sus representantes, presentarán y entregarán al Presidente de la Comisión de Deslinde, todos los elementos de juicio y argumentos que tengan en ese momento, para sustentar sus respectivas posiciones en el deslinde.</p> <p>2. Los intervinientes analizarán los elementos normativos y probatorios, frente a su representación en la cartografía oficial del IGAC existente y si todos están de acuerdo, no se recorrerá ni visitará el terreno. Se elaborará y firmará el Acta de Deslinde, con base en la cual se llevará a cabo el amojonamiento georeferenciado, para luego consignar el resultado en el mapa oficial.</p> <p>3. Si no hay el acuerdo al que se refiere el numeral anterior, se examina el límite en terreno y si se encuentra que el límite corresponde fielmente al contenido de la normatividad o, si no, se procederá a la modificación territorial, se elaborará y firmará el Acta de Deslinde, dejando constancia de la circunstancia habiente.</p> <p>Este Acta de Deslinde se tendrá como certificación del límite, no requiere ratificación posterior del competente para fijar el límite y, con base en él se elaborará el respectivo mapa.</p>	<p>Se elimina.</p> <p>1. Al comenzar la primera reunión, las entidades territoriales, a través de sus representantes, presentarán y entregarán al Presidente de la Comisión de Deslinde, todos los elementos de juicio y argumentos que tengan en ese momento, para sustentar sus respectivas posiciones en el deslinde.</p> <p>2. Los intervinientes analizarán los elementos normativos y probatorios, frente a su representación en la cartografía oficial del IGAC existente y si todos están de acuerdo, no se recorrerá ni visitará el terreno. Se elaborará y firmará el Acta de Deslinde, con base en la cual se llevará a cabo el amojonamiento georeferenciado, para luego consignar el resultado en el mapa oficial.</p> <p>3. Si no hay el acuerdo al que se refiere el numeral anterior, se examina el límite en terreno y si se encuentra que el límite corresponde fielmente al contenido de la normatividad o, si no, se procederá a la modificación territorial, se elaborará y firmará el Acta de Deslinde, dejando constancia de la circunstancia habiente.</p> <p>Este Acta de Deslinde se tendrá como certificación del límite, no requiere ratificación posterior del competente para fijar el límite y, con base en él se elaborará el respectivo mapa.</p>	<p>Esta Acta de Deslinde se tendrá como certificación del límite, no requiere ratificación posterior del competente para fijar el límite y, con base en él se elaborará el respectivo mapa.</p> <p>4. Para examinar el límite mediante recorrido del terreno, se convendrá con las entidades territoriales un cronograma y el apoyo logístico necesario.</p> <p>Los objetivos del recorrido en terreno son:</p> <p>(i) identificar, clasificar y georeferenciar los elementos naturales y artificiales del límite, señalándolos en la cartografía oficial del IGAC;</p> <p>(ii) resolver las dudas y ambigüedades que en materia geográfica y cartográfica contenga la normatividad existente;</p> <p>(iii) conocer la posición de las entidades territoriales sobre la toponimia y clasificación de los elementos geográficos encontrados en el recorrido y confrontarlos con los de la cartografía oficial elaborada por el IGAC existente y disponible para la diligencia.</p> <p>Los objetivos del recorrido en terreno son:</p> <p>(i) identificar, clasificar y georeferenciar los elementos naturales y artificiales del límite, señalándolos en la cartografía oficial del IGAC;</p> <p>(ii) resolver las dudas y ambigüedades que en materia geográfica y cartográfica contenga la normatividad existente;</p> <p>(iii) conocer la posición de las entidades territoriales sobre la toponimia y clasificación de los elementos geográficos encontrados en el recorrido y confrontarlos con los de la cartografía oficial elaborada por el IGAC existente y disponible para la diligencia.</p>



<p>(iv) verificar con los residentes de mayor permanencia en el área la toponimia, la administración del territorio, el pago de los tributos, la prestación de servicios estatales y todo otro elemento que sirva al análisis para el deslinde;</p> <p>(v) trazar o representar sobre la cartografía oficial elaborada por el IGAC la línea o líneas resultantes de las pretensiones de cada entidad territorial;</p> <p>(vi) señalar y describir los sitios que posteriormente puedan ser objeto de amojonamiento.</p> <p>5. El deslinde en terreno se debe realizar con base en la interpretación de los textos normativos vigentes. Sin embargo, cuando a las normas les falta claridad y además no estén conformes con la realidad geográfica, el deslinde se realiza de acuerdo con el inciso segundo del artículo 4º de la Ley 1447 del 2011 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.</p> <p>6. Cuando se presenten dudas durante la diligencia de deslinde, y no se obtuviere acuerdo sobre la identificación del límite en</p>	<p><del>6) trazar o representar sobre la cartografía oficial elaborada por el IGAC la línea o líneas resultantes de las pretensiones de cada entidad territorial;</del></p> <p><del>(vi) señalar y describir los sitios que posteriormente puedan ser objeto de amojonamiento.</del></p> <p><del>7. El deslinde en terreno se debe realizar con base en la interpretación de los textos normativos vigentes. Sin embargo, cuando a las normas les falta claridad y además no estén conformes con la realidad geográfica, el deslinde se realiza de acuerdo con el inciso segundo del artículo 4º de la Ley 1447 del 2011 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.</del></p> <p><del>8. Cuando se presenten dudas durante la diligencia de deslinde, y no se obtuviere acuerdo sobre la identificación del límite en terreno, se dejará la respectiva constancia en el Acta de Deslinde, y se consignará la línea límite pretendida por cada colindante. El funcionario del IGAC que preside la diligencia de deslinde deberá trazar sobre la cartografía oficial elaborada por el IGAC las líneas est</del></p> <p><del>Los representantes legales de cada una de las entidades territoriales colindantes, harán o sus delegados allegarán al Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", todas las pruebas y argumentos que respalden su posición y que no se encuentren en el expediente.</del></p>	<p>terreno, se dejará la respectiva constancia en el Acta de Deslinde, y se consignará la línea límite pretendida por cada colindante. El funcionario del IGAC que preside la diligencia de deslinde, deberá trazar sobre la cartografía oficial elaborada por el IGAC las líneas así descritas.</p> <p>Los representantes legales de cada una de las entidades territoriales colindantes, harán o sus delegados allegarán al Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", todas las pruebas y argumentos que respalden su posición y que no se encuentren en el expediente.</p> <p>Para este efecto, tendrán un término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Deslinde, que será donde consten los dudas y la falta de acuerdo sobre la identificación del límite en terreno.</p> <p>Dentro del plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término previsto en el inciso anterior, el funcionario del IGAC que preside la diligencia de deslinde, evaluará las pruebas y argumentos planteados por las entidades territoriales intervinientes, así como los demás elementos que obren en el expediente, complementará con sus</p>	<p><del>respalden su posición y que no se encuentren en el expediente.</del></p> <p><del>Para este efecto, tendrán un término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Deslinde, que será donde consten las dudas y la falta de acuerdo sobre la identificación del límite en terreno.</del></p> <p><del>Dentro del plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término previsto en el inciso anterior, el funcionario del IGAC que preside la diligencia de deslinde, evaluará las pruebas y argumentos planteados por las entidades territoriales intervinientes, así como los demás elementos que obren en el expediente, complementará con sus propias investigaciones y lo observado en terreno; con base en el acuerdo alcanzado y presentará un informe que contenga los fundamentos de su propuesta de un trazado del límite que a su juicio se ajuste más a los hechos normativos y en subsidio a la realidad.</del></p> <p><del>Parágrafo 1. Las dudas o desacuerdos sobre el significado de conceptos o términos técnicos de tipo geográfico, cartográfico o topográfico, los resolverá el funcionario del IGAC que preside la Comisión de Deslinde, aludidos al presente, en un plazo que este instituto establezca previamente.</del></p>
<p>propias investigaciones y lo observado en terreno y, con base en ese acervo, elaborará y presentará un informe que contenga los fundamentos de su propuesta de un trazado del límite que a su juicio se ajuste más a los textos normativos y en subsidio a la tradición.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Las dudas o desacuerdos sobre el significado de conceptos o términos técnicos de tipo geográfico, cartográfico o topográfico, los resolverá el funcionario del IGAC que preside la Comisión de Deslinde, ajustándose al marco conceptual que este instituto establezca previamente.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Terminadas todas las sesiones de la diligencia de deslinde, se considerará terminada ésta y el resultado se hará constar en la denominada "Acta de Deslinde", que se elaborará por el funcionario del IGAC que preside la diligencia y deben firmar todos los miembros de la Comisión de Deslinde, con excepción de los acuerdos totales o parciales.</p> <p>Copia del Acta de Deslinde se enviará a los Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y al Ministerio del Interior, lo que constituye informe del resultado del deslinde.</p>	<p><del><b>Parágrafo 2.</b> Terminadas todas las sesiones de la diligencia de deslinde, se considerará terminada ésta y el resultado se hará constar en la denominada "Acta de Deslinde", que se elaborará por el funcionario del IGAC que preside la diligencia y deben firmar todos los miembros de la Comisión de Deslinde, con excepción de los acuerdos totales o parciales.</del></p> <p><del>Copia del Acta de Deslinde se enviará a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y al Ministerio del Interior, lo que constituye informe del resultado del deslinde.</del></p>	<p><b>Artículo 15. Contenido y naturaleza de Acta de Deslinde.</b> El Acta de Deslinde debe contener la descripción de una línea, si hay acuerdo en el deslinde, o de tantas líneas como propuestas o posiciones haya. En todo caso, cada línea debe ser secuencial e indicar colindancias, orientación, clase y nombre de los accidentes naturales o artificiales y las coordenadas geográficas o planas de los puntos característicos del límite, en el sistema Magna Sirgas.</p> <p>Con excepción del acto que constituye certificación del límite, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 1447 del 2011 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, el Acta de Deslinde, así como los otros actos de sesiones, que se elaboren y firmen durante la diligencia de deslinde, constituyen documentos de trámite, con el caso de que en ellos conste el acuerdo de las entidades territoriales involucradas.</p> <p>Cuando el Acta de Deslinde no constituya certificación del límite, sino que debe ser sometida a ratificación o corroboración por la autoridad competente para fijar el límite, podrá ser aclarada, modificada o sustituida por la Comisión de Deslinde, siempre y cuando se haga por consenso.</p>	<p><del><b>Artículo 15. Contenido y naturaleza de Acta de Deslinde.</b> El Acta de Deslinde debe contener la descripción de una línea, si hay acuerdo en el deslinde, o de tantas líneas como propuestas o posiciones haya. En todo caso, cada línea debe ser secuencial e indicar colindancias, orientación, clase y nombre de los accidentes naturales o artificiales y las coordenadas geográficas o planas de los puntos característicos del límite en el sistema Magna Sirgas.</del></p> <p><del>Con excepción del acto que constituye certificación del límite de conformidad con el inciso 5º de la Ley 1447 del 2011 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, el Acta de Deslinde, así como los otros actos de sesiones, que se elaboren y firmen durante la diligencia de deslinde, constituyen documentos de trámite, con el caso de que en ellos conste el acuerdo de las entidades territoriales involucradas.</del></p> <p><del>Cuando el Acta de Deslinde no constituya certificación del límite, sino que debe ser sometida a ratificación o corroboración por la autoridad competente para fijar el límite, podrá ser aclarada, modificada o sustituida por la Comisión de Deslinde, siempre y cuando se haga por consenso.</del></p> <p>Se elimina.</p>

<p><b>Artículo 16. Limitaciones de la diligencia de deslinde.</b> Cuando la normalidad sea clara e identificable en terreno, las entidades territoriales no podrán de común acuerdo o independientemente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer soluciones limítrofes diferentes o contrarias a lo previsto normativamente.</li> <li>2. Pedir o señalar trazados diferentes porque alguna de ellas ejerce jurisdicción en la zona o en parte de ella o con fundamento en algún otro argumento o razonamiento.</li> </ol> <p>El Presidente de la Comisión de Deslinde dejará constancia en acta de la situación presentada.</p>	<p><b>Artículo 16. Limitaciones de la diligencia de deslinde.</b> Cuando la normalidad sea clara e identificable en terreno, las entidades territoriales no podrán de común acuerdo o independientemente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer soluciones limítrofes diferentes o contrarias a lo previsto normativamente.</li> <li>2. Pedir o señalar trazados diferentes porque alguna de ellas ejerce jurisdicción en la zona o en parte de ella o con fundamento en algún otro argumento o razonamiento.</li> </ol> <p>El Presidente de la Comisión de Deslinde dejará constancia en acta de la situación presentada.</p>	<p>se elimina</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Cuando un límite siga una divisoria de aguas y que atraviese una meseta o planicie, donde la divisoria se haga imperceptible, el deslinde se trazará utilizando las metodologías y los procedimientos técnicos que garanticen la precisión requerida para determinar el límite.</li> <li>3. Cuando la línea limítrofe siga el curso de los accidentes naturales o artificiales del terreno, se deben observar las siguientes reglas:       <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Cuando un curso de aguas separe dos entidades territoriales, el deslinde se formará por el eje del mismo y seguirá las modificaciones naturales del cauce.</li> <li>3.2. Cuando un corriente de agua sea el límite, sin que se haya precisado su lugar de nacimiento o la cabecera que se debe tomar como límite, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prevalencia: (i) el afluyente que conserva el nombre del río principal, lo cual se establecerá por medio de los mapas oficiales y en su defecto por escrituras públicas; (ii) el cauce de mayor longitud que cuente con aguas permanentes; (iii) el brazo que conserve la dirección general de la corriente de agua principal.</li> <li>3.3. Cuando la norma que fija el límite no defina la entidad territorial a la cual pertenezca una isla, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prevalencia: (i) la entidad territorial colindante, especialmente en los casos de islas; (ii) el brazo que conserve la dirección general de la corriente de agua principal.</li> </ol> </li> <li>3.4. Cuando una vía de comunicación terrestre sea de límite</li> </ol>	<p>imperceptible, el deslinde se trazará utilizando las metodologías y los procedimientos técnicos que garanticen la precisión requerida para determinar el límite.</p> <p>3. Cuando la línea limítrofe siga el curso de los accidentes naturales o artificiales del terreno, se deben observar las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Cuando un curso de aguas separe dos entidades territoriales, el deslinde se formará por el eje del mismo y seguirá las modificaciones naturales del cauce.</li> <li>3.2. Cuando un corriente de agua sea el límite, sin que se haya precisado su lugar de nacimiento o la cabecera que se debe tomar como límite, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prevalencia: (i) el afluyente que conserva el nombre del río principal, lo cual se establecerá por medio de los mapas oficiales y en su defecto por escrituras públicas; (ii) el cauce de mayor longitud que cuente con aguas permanentes; (iii) el brazo que conserve la dirección general de la corriente de agua principal.</li> <li>3.3. Cuando la norma que fija el límite no defina la entidad territorial a la cual pertenezca una isla, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prevalencia: (i) la entidad territorial colindante, especialmente en los casos de islas; (ii) el brazo que conserve la dirección general de la corriente de agua principal.</li> <li>3.4. Cuando una vía de comunicación terrestre sea de límite</li> </ol>
<p><b>Artículo 17. Expresiones y situaciones usuales en la fijación de límites y su aplicación en los deslindes.</b> Para la realización de los deslindes, se entenderán y aplicarán las siguientes expresiones y situaciones, en la forma que se enuncia a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando la línea limítrofe intercepte un cuerpo de agua, el deslinde se deberá trazar por las aguas medias de dicho cuerpo de agua, la línea equidistante entre las orillas de los cuerpos de agua.</li> </ol>	<p><b>Artículo 17. Expresiones y situaciones usuales en la fijación de límites y su aplicación en los deslindes.</b> Para la realización de los deslindes, se entenderán y aplicarán las siguientes expresiones y situaciones, en la forma que se enuncia a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando la línea limítrofe intercepte un cuerpo de agua, el deslinde se deberá trazar por las aguas medias de dicho cuerpo de agua, la línea equidistante entre las orillas de los cuerpos de agua.</li> <li>2. Cuando un límite siga una divisoria de aguas y que atraviese una meseta o planicie, donde la divisoria se haga</li> </ol>	<p>Se elimina.</p>	<p>terreno por la Comisión de Deslinde, tanto en su identificación como en el reconocimiento de mismo, así se hará constar en el Acta de Deslinde. En este evento, el IGAC deberá:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enviar a título de información una copia de este Acta de Deslinde a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y al Ministerio del Interior.</li> <li>2. Elaborar y presentar un proyecto de norma que adopte el límite tradicional sobre el que hubo consenso, describiendo técnicamente el límite por sus coordenadas geográficas o planas en el sistema Magna Sigs, para su representación en la cartografía oficial del IGAC, además de indicar coincidencias, orientación, clase y nombre de los accidentes naturales o artificiales, coherentes con la cartografía oficial del IGAC.</li> </ol> <p>Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del Acta de Deslinde de que trata este artículo, el IGAC radicará ante el Presidente del Congreso, el Presidente de la Asamblea y el Ministro del Interior, según sea el competente, para que el límite tradicional se adopte como límite definitivo sobre el que hubo consenso. Si no se forma la decisión sobre el que hubo consenso, si no se forma la decisión del Acta siguiente a la fecha de radicación del proyecto de deslinde, el límite establecido en el Acta de Deslinde sobre el límite tradicional en acuerdo, se considerará como límite definitivo y será de aplicación permanente.</p>	<p>terreno por la Comisión de Deslinde, tanto en su identificación como en el reconocimiento de mismo, así se hará constar en el Acta de Deslinde. En este evento, el IGAC deberá:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enviar a título de información una copia de este Acta de Deslinde a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y al Ministerio del Interior.</li> <li>2. Elaborar y presentar un proyecto de norma que adopte el límite tradicional sobre el que hubo consenso, describiendo técnicamente el límite por sus coordenadas geográficas o planas en el sistema Magna Sigs, para su representación en la cartografía oficial del IGAC, además de indicar coincidencias, orientación, clase y nombre de los accidentes naturales o artificiales, coherentes con la cartografía oficial del IGAC.</li> </ol> <p>Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del Acta de Deslinde de que trata este artículo, el IGAC radicará ante el Presidente del Congreso, el Presidente de la Asamblea y el Ministro del Interior, según sea el competente, para que el límite tradicional se adopte como límite definitivo sobre el que hubo consenso. Si no se forma la decisión sobre el que hubo consenso, si no se forma la decisión del Acta siguiente a la fecha de radicación del proyecto de deslinde, el límite establecido en el Acta de Deslinde sobre el límite tradicional en acuerdo, se considerará como límite definitivo y será de aplicación permanente.</p>
<p>contalada, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prevalencia: (i) la tradición en la inscripción catastral o registral; (ii) la cercanía a uno de los riberos; (iii) los acuerdos entre las entidades territoriales colindantes, especialmente en los ríos tenzados.</p> <p>3.4. Cuando una vía de comunicación terrestre sirva de límite entre dos entidades territoriales, el deslinde seguirá uno de sus bordes.</p> <p>4. Cuando el límite esté constituido total o parcialmente por líneas rectas, sus extremos deberán georeferenciarse.</p> <p>5. Cuando el límite de una entidad territorial coincida con límites prediales, se deberán identificar los puntos de georeferenciación.</p>	<p>antes de las entidades territoriales, el deslinde seguirá uno de los bordes.</p> <p>4. Cuando el límite esté constituido total o parcialmente por líneas rectas, sus extremos deberán georeferenciarse.</p> <p>5. Cuando el límite de una entidad territorial coincida con límites prediales, se deberán identificar los puntos de georeferenciación.</p>	<p>Se elimina.</p>	<p>Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del Acta de Deslinde de que trata este artículo, el IGAC radicará ante el Presidente del Congreso, el Presidente de la Asamblea y el Ministro del Interior, según sea el competente, para que el límite tradicional se adopte como límite definitivo sobre el que hubo consenso. Si no se forma la decisión sobre el que hubo consenso, si no se forma la decisión del Acta siguiente a la fecha de radicación del proyecto de deslinde, el límite establecido en el Acta de Deslinde sobre el límite tradicional en acuerdo, se considerará como límite definitivo y será de aplicación permanente.</p>	<p>Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del Acta de Deslinde de que trata este artículo, el IGAC radicará ante el Presidente del Congreso, el Presidente de la Asamblea y el Ministro del Interior, según sea el competente, para que el límite tradicional se adopte como límite definitivo sobre el que hubo consenso. Si no se forma la decisión sobre el que hubo consenso, si no se forma la decisión del Acta siguiente a la fecha de radicación del proyecto de deslinde, el límite establecido en el Acta de Deslinde sobre el límite tradicional en acuerdo, se considerará como límite definitivo y será de aplicación permanente.</p>
<p><b>Artículo 18. Entrega de información.</b> Toda persona, entidad u organismo que produzca, tenga, maneje o conserve información, elementos de juicio, pruebas u otro elemento que sea útil para conocer o interpretar las normas que fijan los límites o la tradición sobre éstos, tiene la obligación de suministrarlos al IGAC, en original e copia.</p>	<p><b>Artículo 18. Entrega de información.</b> Toda persona, entidad u organismo que produzca, tenga, maneje o conserve información, elementos de juicio, pruebas u otro elemento que sea útil para conocer o interpretar las normas que fijan los límites o la tradición sobre éstos, tiene la obligación de suministrarlos al IGAC, en original e copia.</p>	<p>Se elimina.</p>	<p>Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del Acta de Deslinde de que trata este artículo, el IGAC radicará ante el Presidente del Congreso, el Presidente de la Asamblea y el Ministro del Interior, según sea el competente, para que el límite tradicional se adopte como límite definitivo sobre el que hubo consenso. Si no se forma la decisión sobre el que hubo consenso, si no se forma la decisión del Acta siguiente a la fecha de radicación del proyecto de deslinde, el límite establecido en el Acta de Deslinde sobre el límite tradicional en acuerdo, se considerará como límite definitivo y será de aplicación permanente.</p>	<p>Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del Acta de Deslinde de que trata este artículo, el IGAC radicará ante el Presidente del Congreso, el Presidente de la Asamblea y el Ministro del Interior, según sea el competente, para que el límite tradicional se adopte como límite definitivo sobre el que hubo consenso. Si no se forma la decisión sobre el que hubo consenso, si no se forma la decisión del Acta siguiente a la fecha de radicación del proyecto de deslinde, el límite establecido en el Acta de Deslinde sobre el límite tradicional en acuerdo, se considerará como límite definitivo y será de aplicación permanente.</p>
<p><b>Artículo 19. Consentio en el límite tradicional.</b> Cuando hay consenso de las entidades territoriales sobre el límite tradicional común, examinado en</p>	<p><b>Artículo 19. Consentio en el límite tradicional.</b> Cuando hay consenso de las entidades territoriales sobre el límite tradicional común, examinado en</p>	<p>Se elimina.</p>	<p>Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del Acta de Deslinde de que trata este artículo, el IGAC radicará ante el Presidente del Congreso, el Presidente de la Asamblea y el Ministro del Interior, según sea el competente, para que el límite tradicional se adopte como límite definitivo sobre el que hubo consenso. Si no se forma la decisión sobre el que hubo consenso, si no se forma la decisión del Acta siguiente a la fecha de radicación del proyecto de deslinde, el límite establecido en el Acta de Deslinde sobre el límite tradicional en acuerdo, se considerará como límite definitivo y será de aplicación permanente.</p>	<p>Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del Acta de Deslinde de que trata este artículo, el IGAC radicará ante el Presidente del Congreso, el Presidente de la Asamblea y el Ministro del Interior, según sea el competente, para que el límite tradicional se adopte como límite definitivo sobre el que hubo consenso. Si no se forma la decisión sobre el que hubo consenso, si no se forma la decisión del Acta siguiente a la fecha de radicación del proyecto de deslinde, el límite establecido en el Acta de Deslinde sobre el límite tradicional en acuerdo, se considerará como límite definitivo y será de aplicación permanente.</p>

<p>decisión dentro del año siguiente a la fecha de radicación del proyecto de decisión, el límite contenido en el Acta de Deslinde, se considerará como límite provisional y surtirá todos los efectos legales hasta cuando se expida la respectiva decisión.</p>	<p>expida la respectiva decisión.</p> <p><b>Artículo 20. Expediente y trámite del límite dudoso o en controversia.</b> Con todos los documentos y pruebas allegados por las entidades territoriales al IGAC, desde la solicitud inicial de deslinde o desde la orden oficioso de adelantar el deslinde, así como de todos los elementos, investigaciones y pruebas recolectados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y presentados por el actor en soporte en el Acta de Deslinde, donde consta el resultado de la diligencia de deslinde, se conformará un expediente sobre el mismo dudoso o en controversia debidamente ordenado y foliado.</p> <p>Al citado expediente se agrega un proyecto de norma (Ley, Ordenanza, Acuerdo o Decreto) contenido de la decisión sobre el límite dudoso o controvertido, donde se indiquen coherencias, orientación, clase y nombre de los accidentes naturales o artificiales y concordantemente con estos elementos se describe técnicamente el límite por sus coordenadas geográficas o planas y por su representación en la cartografía oficial del IGAC.</p> <p>Previo revisión del Director General del IGAC, el expediente y el proyecto de norma, mencionado en el inciso anterior, se remitirá así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si están implicados departamentos, regiones territoriales, el Distrito Capital, distritos de diferentes departamentos, o municipios integrantes de un área metropolitana, se enviarán a los presidentes o quienes hagan sus veces, en las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.</li> <li>2. Si están implicados distritos o municipios de un mismo departamento, que no sean integrantes de un área metropolitana, o provincial, se enviarán al presidente de la asamblea departamental y al gobernador.</li> <li>3. Si está implicada alguna entidad territorial indígena, se enviará al Ministro del Interior.</li> </ol> <p>Cuando estén implicadas una o varias entidades territoriales indígenas u otras entidades territoriales de las previstas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, el expediente se enviará a los presidentes o quienes hagan sus veces en las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes o al presidente de la asamblea departamental y al gobernador, según corresponda la competencia, evento en el cual el Ministro del Interior intervendrá en el respectivo proceso.</p>	<p>Se elimina.</p>
<p>Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, o al presidente de la asamblea departamental y al gobernador, según corresponda la competencia, evento en el cual, el Ministro del Interior intervendrá en el respectivo proceso.</p> <p>Dentro del mes siguiente a la recepción del expediente relacionado con municipios, distritos o departamentos, el servidor público a quien se dirigió el expediente, debe solicitar al IGAC una delimitación provisional de la zona en disputa, la cual hará con base en los documentos históricos y catastrales que posea u obtenga el IGAC. Este Instituto deberá elaborar y presentar al solicitante, por escrito sustentado, la delimitación provisional de la zona en disputa, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de recepción de la petición.</p> <p>Tratándose de conflictos entre municipios de un mismo departamento, por una zona en disputa delimitada provisionalmente por el IGAC, conforme al inciso anterior, que presenta problemas de identidad natural, social, cultural o económica que impliquen agregación y segregación de áreas territoriales, la Oficina o Secretaría de Planeación Departamental realizará una investigación histórica y técnica con el objeto de verificar y certificar mediante estudio</p>	<p>Dentro del mes siguiente a la recepción del expediente relacionado con municipios, distritos o departamentos, el servidor público a quien se dirigió el expediente, debe solicitar al IGAC una delimitación provisional de la zona en disputa, la cual hará con base en los documentos históricos y catastrales que posea u obtenga el IGAC. Este Instituto deberá elaborar y presentar al solicitante, por escrito sustentado, la delimitación provisional de la zona en disputa, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de recepción de la petición.</p> <p>Tratándose de conflictos entre municipios de un mismo departamento, por una zona en disputa delimitada provisionalmente por el IGAC, conforme al inciso anterior, que presenta problemas de identidad natural, social, cultural o económica que impliquen agregación y segregación de áreas territoriales, la Oficina o Secretaría de Planeación Departamental realizará una investigación histórica y técnica con el objeto de verificar y certificar mediante estudio documentado y escrito, que definitivamente en el territorio en conflicto se presenten los precitados problemas e indicará si es aconsejable el anexo o la segregación de áreas territoriales.</p> <p>El citado estudio debe entregarse al presidente de la asamblea departamental dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que el IGAC presente la delimitación provisional de la zona en disputa.</p>	<p>Se elimina.</p>
<p>documentado y escrito, que definitivamente en el territorio en conflicto se presenten los precitados problemas e indicará si es aconsejable el anexo o la segregación de áreas territoriales.</p> <p>El citado estudio debe entregarse al presidente de la asamblea departamental dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que el IGAC presente la delimitación provisional de la zona en disputa.</p>	<p>documentado y escrito, que definitivamente en el territorio en conflicto se presenten los precitados problemas e indicará si es aconsejable el anexo o la segregación de áreas territoriales.</p> <p>El citado estudio debe entregarse al presidente de la asamblea departamental dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que el IGAC presente la delimitación provisional de la zona en disputa.</p>	<p>Se elimina.</p>

<p>y legales, desde ese momento se aplicarán estas competencias de acuerdo con el límite provisional.</p> <p><b>Artículo 22. Procedencia del amojonamiento y la georeferenciación.</b> Se entiende definido el límite en los casos previstos en los numerados 2 y 3 del artículo 14° y en el artículo 19 de esta ley, cuando sea aplicable el límite provisional a que se refiere el artículo 21 de esta ley y cuando la autoridad competente decide sobre el límite dudoso o en controversia.</p> <p>En estos eventos procede el amojonamiento y la georeferenciación previstos en el artículo 12 de la Ley 1447 del 2011 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para estos efectos, se conformará una Comisión de Amojonamiento presidida por el funcionario que designe el ICAJ, quien debe desempeñar un cargo de profesional en la planta de personal de esta entidad y tener título universitario en las profesiones de Geografía o en alguna de las siguientes ingenierías: Catastral y Geodésica, Geográfica, Topográfica, Civil, Forestal o afines.</p> <p>A la Comisión de Amojonamiento y el trámite de este, se aplican las normas de esta ley sobre Comisión de Deslinde, en cuanto sean compatibles con esta operación administrativa.</p> <p>Cuando las coordenadas geográficas resultantes</p>	<p><del>estas competencias de acuerdo con el límite provisional.</del></p> <p><del><b>Artículo 22. Procedencia del amojonamiento y la georeferenciación.</b> Se entiende definido el límite en los casos previstos en los numerados 2 y 3 del artículo 14° y en el artículo 19 de esta ley, cuando sea aplicable el límite provisional a que se refiere el artículo 21 de esta ley y cuando la autoridad competente decide sobre el límite dudoso o en controversia.</del></p> <p><del>En estos eventos procede el amojonamiento y la georeferenciación previstos en el artículo 12 de la Ley 1447 del 2011 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para estos efectos, se conformará una Comisión de Amojonamiento presidida por el funcionario que designe el ICAJ, quien debe desempeñar un cargo de profesional en la planta de personal de esta entidad y tener título universitario en las profesiones de Geografía o en alguna de las siguientes ingenierías: Catastral y Geodésica, Geográfica, Topográfica, Civil, Forestal o afines.</del></p> <p><del>A la Comisión de Amojonamiento y el trámite de este se aplican las normas de esta ley sobre Comisión de Deslinde, en cuanto sean compatibles con esta operación administrativa.</del></p> <p><del>Cuando las coordenadas geográficas resultantes</del></p>	<p>del amojonamiento presenten diferencias con las consignadas en las normas que se apliquen, por efecto de la precisión de los instrumentos y procedimientos utilizados, se dejará constancia de tal hecho en el Acta de Amojonamiento.</p> <p><b>Artículo 23. Aspectos técnicos.</b> Dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, el Director General del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" deberá expedir y publicar en el Diario Oficial una resolución que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El significado de conceptos y términos técnicos de tipo geográfico, cartográfico o topográfico, que sirva de marco conceptual para resolver dudas o desacuerdos.</li> <li>2. Las especificaciones técnicas de: (i) los mojones con los cuales se materializan los límites en sus puntos característicos; (ii) la georeferenciación, mediante coordenadas geográficas o planas en el sistema de referencia oficial Magna-Sírgas y en los registros del amojonamiento.</li> <li>3. La determinación del contenido, presentación, escala y periodicidad con que se elaborará, actualizará y publicará el mapa oficial de la República y el de las entidades territoriales, en versiones análoga y especialmente digital que permita su consulta y descarga para uso oficial.</li> </ol>
<p>permite su consulta y descarga para uso oficial.</p> <p><b>Artículo 24. Colaboración ciudadana.</b> Los propietarios, poseedores, ocupantes y tenedores de predios, están en la obligación de permitir el acceso a los predios, facilitar las investigaciones, dar las informaciones, suministrar copias de documentos y participar en las pruebas que los requieran las Comisiones de Deslinde y Amojonamiento de entidades territoriales.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Todas las entidades del nivel nacional y territorial, están en la obligación de brindar pronta colaboración al Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" en los procesos de exámenes de límites, definición de límites dudosos y conflictos limítrofes.</p> <p><b>CAPÍTULO VI</b> <b>De la planeación departamental y coordinación de funciones nacionales, distritales y municipales</b></p> <p><b>Artículo 25.</b> El Sistema Nacional de Planificación tiene el propósito de unificar adecuadamente la planeación de la Nación y las entidades territoriales, superando los procesos coyunturales y</p>	<p><del>Artículo 24. Colaboración ciudadana. Los propietarios, poseedores, ocupantes y tenedores de predios están en la obligación de permitir el acceso a los predios, facilitar las investigaciones, dar las informaciones, suministrar copias de documentos y participar en las pruebas que los requieran las Comisiones de Deslinde y Amojonamiento de entidades territoriales.</del></p> <p><del><b>Parágrafo.</b> Todas las entidades del nivel nacional y territorial, están en la obligación de brindar pronta colaboración al Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" en los procesos de exámenes de límites, definición de límites dudosos y conflictos limítrofes.</del></p> <p><del><b>CAPÍTULO IV</b></del> <del><b>De la planeación departamental y coordinación de funciones nacionales, distritales y municipales</b></del></p> <p><del>Se reemplaza por un artículo en el que se hace la remisión normativa, en el entendido que se considera innecesario crear un nuevo sistema nacional de planeación, propiamente que, por el contrario, se fortalecen los actuales consejos de seguridad departamentales.</del></p> <p><del><b>Artículo 25.</b> El Sistema Nacional de Planificación tiene el propósito de unificar adecuadamente la planeación de la Nación y las entidades territoriales, superando los procesos coyunturales y el desvío de los objetivos fundamentales del</del></p>	<p>el desvío de los objetivos fundamentales del Estado. El Sistema asumirá la facultad estatal y territorial de planificar el desarrollo territorial, económico y social del país y las entidades territoriales, considerando la vocación planificadora de mediano plazo y la visión de largo plazo.</p> <p><b>Artículo 13.</b> Los departamentos tienen autonomía en materia de planeación, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades atribuidas en la Constitución Política y en la Ley 152 de 1994 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.</p> <p>Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin perjuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración los planes, programas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo vigente, garantizando la coherencia.</p> <p><b>Artículo 26.</b> La armonización y articulación entre la planeación nacional y la planeación regional, departamental, distal, metropolitana o municipal utilizará, entre otros, las siguientes instancias e instrumentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Departamento Nacional de Planeación.</li> </ol>

<p>2) Política de Desarrollo Productivo Nacional.</p> <p>3) Observatorio de Ordenamiento Territorial.</p> <p>4) Políticas, planes, programas, proyectos de las Corporaciones Autónomas Regionales, autoridades ambientales distritales y autoridades ambientales de áreas metropolitanas que han adquirido esta responsabilidad de acuerdo a la ley.</p> <p>5) Consejos Departamentales de Planeación.</p> <p>6) Secretarías departamentales, municipales, distritales o metropolitanas de planeación.</p> <p>7) Esquema asociativo territorial departamental.</p> <p>8) Comisión departamental de ordenamiento territorial.</p> <p>9) Comisión municipal de ordenamiento territorial.</p> <p>10) Esquema asociativo territorial municipal.</p> <p><b>Parágrafo:</b> Las instancias de planeación en su labor articuladora, deberán tener en cuenta el carácter</p>	<p><b>2) Política de Desarrollo Productivo Nacional.</b></p> <p><b>3) Observatorio de Ordenamiento Territorial.</b></p> <p><b>4) Políticas, planes, programas, proyectos de las Corporaciones Autónomas Regionales, autoridades ambientales distritales y autoridades ambientales de áreas metropolitanas que han adquirido esta responsabilidad de acuerdo a la ley.</b></p> <p><b>5) Consejos Departamentales de Planeación.</b></p> <p><b>6) Secretarías departamentales, municipales, distritales o metropolitanas de planeación.</b></p> <p><b>7) Esquema asociativo territorial departamental.</b></p> <p><b>8) Comisión departamental de ordenamiento territorial.</b></p> <p><b>9) Comisión municipal de ordenamiento territorial.</b></p> <p><b>10) Esquema asociativo territorial municipal.</b></p> <p><b>Parágrafo:</b> Las instancias de planeación en su labor articuladora, deberán tener en cuenta el carácter</p>	
<p>estratégicos y objetivos específicos de mediano y corto plazo de la jurisdicción, así como el conjunto de programas, proyectos, programas de ejecuciones y sistema de indicadores, seguimiento y evaluación. En síntesis, este contiene un mapa de riqueza y propone como zarzavochitos para generar progreso, desarrollo, crecimiento y bienestar. Se ordenan por regiones y está basado en una lógica de mercado. El plan deberá promover actividades productivas sostenibles y rentables en términos económicos y sociales y ambientales.</p> <p><b>Artículo 30.</b> El departamento consolidará los políticas, planes, programas y proyectos regionales que respondan a la capacidad para crear riqueza con el fin de promover la prosperidad y bienestar económico y social de sus habitantes. Estimulando y garantizando la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio e industria de forma legal, asimismo, velará por brindar oportunidades de superación a los sectores que sufren desigualdad desde la organización, el orden y la seguridad.</p> <p><b>Artículo 31.</b> El departamento promoverá el desarrollo empresarial de los pequeños y medianos productores organizados en comunidades campesinas y nativas.</p>	<p><b>corto plazo de la jurisdicción, así como el conjunto de programas, proyectos, programas de ejecuciones y sistema de indicadores, seguimiento y evaluación. En síntesis, este contiene un mapa de riqueza y propone como zarzavochitos para generar progreso, desarrollo, crecimiento y bienestar. Se ordenan por regiones y está basado en una lógica de mercado. El plan deberá promover actividades productivas sostenibles y rentables en términos económicos y sociales y ambientales.</b></p> <p><b>Artículo 30.</b> El departamento consolidará las políticas, planes, programas y proyectos regionales que respondan a la capacidad para crear riqueza con el fin de promover la prosperidad y bienestar económico y social de sus habitantes. Estimulando y garantizando la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio e industria de forma legal, asimismo, velará por brindar oportunidades de superación a los sectores que sufren desigualdad desde la organización, el orden y la seguridad.</p> <p><b>Artículo 31.</b> El departamento promoverá el desarrollo empresarial de los pequeños y medianos productores organizados en comunidades campesinas y nativas.</p>	<p>Se elimina, para a ser el 7 porque se incluye en el capítulo de competencias.</p> <p>- Se quita la numeración, pasa a ser el 8 porque se incluye en el capítulo de competencias.</p>

<p>vinculante del programa de gobierno vigente para cada caso.</p> <p><b>Artículo 27.</b> El departamento impulsará el desarrollo productivo y del capital humano a partir de la visión de largo plazo del desarrollo económico y social, a través de nuevas formas de organización territorial supradepartamental, que, como instrumentos de planeación y administración del territorio, permitan superar los desequilibrios regionales y en especial del territorio rural.</p> <p><b>Artículo 28.</b> Las entidades territoriales en el avance de la planeación, consolidarán el Sistema Nacional de Planeación a través de la unificación nacional de indicadores que permitan hacer seguimiento y evaluación de la administración, la planeación, el desarrollo, la gobernabilidad y gobernanza, así como desde el nivel de sus competencias y funciones se fijará la sistematización del largo plazo, garantizando el desarrollo y progreso económico y social de los territorios.</p> <p><b>Artículo 29.</b> El plan de desarrollo económico y social con sujeción a las Leyes 152 de 1994 y 1454 de 2011 y sus desarrollos normativos, profundizará y desarrollará el eje de la promoción económica. En tanto instrumento de planeación contendrá la visión de largo plazo, diagnóstico, objetivos</p>	<p><b>Artículo 27.</b> El departamento impulsará el desarrollo productivo y del capital humano a partir de la visión de largo plazo del desarrollo económico y social, a través de nuevas formas de organización territorial supradepartamental, que como instrumentos de planeación y administración del territorio, permitan superar los desequilibrios regionales y en especial del territorio rural.</p> <p><b>Artículo 28.</b> Las entidades territoriales en el avance de la planeación, consolidarán el Sistema Nacional de Planeación a través de la unificación nacional de indicadores que permitan hacer seguimiento y evaluación de la administración, la planeación, el desarrollo, la gobernabilidad y gobernanza, así como desde el nivel de sus competencias y funciones se fijará la sistematización del largo plazo, garantizando el desarrollo y progreso económico y social de los territorios.</p> <p><b>Artículo 29.</b> El plan de desarrollo económico y social con sujeción a las Leyes 152 de 1994 y 1454 de 2011 y sus desarrollos normativos, profundizará y desarrollará el eje de la promoción económica. En tanto instrumento de planeación contendrá la visión de largo plazo, diagnóstico, objetivos</p>	<p>- Se elimina, para a ser el artículo 27o porque se incluye en el capítulo de competencias.</p> <p>Se elimina, el entendido que trata del sistema nacional de planeación y como ya se indicó no se considera necesario crear un sistema nacional de planeación, máxime cuando no se diferencia del papel que desempeñan los consejos departamentales de planeación.</p> <p>Se elimina.</p>
<p><b>Artículo 32.</b> El departamento promoverá la asociatividad de las empresas que permitan generar sinergias para crear mercados que de manera independiente no se pueden alcanzar. La conformación de redes empresariales que permitan el desarrollo de clusters que se conviertan en motores de desarrollo regional.</p> <p><b>Artículo 33.</b> El departamento, a través de los principios de coordinación y coherencia, impulsará con la Nación, la inversión privada responsable y sostenible para el desarrollo territorial, que otorgue el fortalecimiento de las capacidades y fortalezas reconocidas.</p> <p><b>Artículo 34.</b> El departamento formulará y promoverá proyectos de ámbito departamental para la participación de la inversión privada.</p> <p>La inversión pública será de calidad, y estará orientada al mejoramiento del capital humano, para que tenga como resultado un impacto en el mejoramiento de los niveles de vida, contribuyendo a elevar el desarrollo económico de mediano plazo y elevando las capacidades y competencias de las personas, y la productividad en el trabajo.</p> <p><b>Artículo 35.</b> Generará la visión de largo plazo del departamento. Deberá aprobar y ejecutar el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de manera</p>	<p><b>Artículo 32.</b> El departamento promoverá la asociatividad de las empresas que permitan generar sinergias para crear mercados que de manera independiente no se pueden alcanzar. La conformación de redes empresariales que permitan el desarrollo de clusters que se conviertan en motores de desarrollo regional.</p> <p><b>Artículo 33.</b> El departamento, a través de los principios de coordinación y coherencia, impulsará con la Nación la inversión privada responsable y sostenible para el desarrollo territorial, que otorgue el fortalecimiento de las capacidades y fortalezas reconocidas.</p> <p><b>Artículo 34.</b> El departamento formulará y promoverá proyectos de ámbito departamental para la participación de la inversión privada.</p> <p>La inversión pública será de calidad, y estará orientada al mejoramiento del capital humano, para que tenga como resultado un impacto en el mejoramiento de los niveles de vida, contribuyendo a elevar el desarrollo económico de mediano plazo y elevando las capacidades y competencias de las personas, y la productividad en el trabajo.</p> <p><b>Artículo 35.</b> Generará la visión de largo plazo del departamento. Deberá aprobar y ejecutar el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de manera</p>	<p>- Se quita la numeración, para a ser el 9 porque se incluye en el capítulo de competencias.</p> <p>Se quita la numeración, para a ser el 10 porque se incluye en el capítulo de competencias.</p> <p>Se elimina por estar consagrado en los artículos precedentes.</p> <p>Se elimina por estar consagrado en los artículos precedentes y confunde el plan</p>

<p>Social de manera concertada y participativa a través de planificación de mediano plazo donde se den las fortalezas, vocaciones productivas que respondan en lo rural, a criterios, lineamientos e instrumentos para la toma de decisiones relacionado con la planificación agropecuaria y el desarrollo rural integral con medio ambiente sostenible y acciones concretas para mitigar el cambio climático, un sistema de prevención y riesgos que responda de forma coordinada toda la jurisdicción, así como lo pertinente a las políticas públicas de la Nación.</p> <p><b>Artículo 36. Consejo Departamental de Planeación.</b> El Consejo Departamental de Planeación será convocado por el gobierno departamental una vez el gobernador haya tomado posesión de su cargo.</p> <p><b>Artículo 37.</b> El Consejo Departamental de Planeación estará integrado por:</p> <p>A) El gobernador del departamento quien lo presida;</p> <p>B) El alcalde de la ciudad capital, alcaldes distritales y del área metropolitana;</p> <p>C) El (los) director(es) de la Corporación Autónoma Regional que ejerza(n) actividades en el departamento;</p>	<p><del>concertada y participativa a través de planificación de mediano plazo donde se den las fortalezas, vocaciones productivas que respondan en lo rural, a criterios, lineamientos e instrumentos para la toma de decisiones relacionado con la planificación agropecuaria y el desarrollo rural integral con medio ambiente sostenible y acciones concretas para mitigar el cambio climático, un sistema de prevención y riesgos que responda de forma coordinada toda la jurisdicción, así como lo pertinente a las políticas públicas de la Nación.</del></p> <p><del><b>Artículo 36—Consejo Departamental de Planeación—</b> El Consejo Departamental de Planeación será convocado por el gobierno departamental una vez el gobernador haya tomado posesión de su cargo.</del></p> <p><del><b>Artículo 37—El Consejo Departamental de Planeación estará integrado por:</b></del></p> <p><del>1. El gobernador del departamento quien lo presida;</del></p> <p><del>2. El alcalde de la ciudad capital, alcaldes distritales y del área metropolitana;</del></p> <p><del>3. El (los) director(es) de la Corporación Autónoma Regional que ejerza(n) actividades en el departamento;</del></p>	<p>departamental de desarrollo con el "Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social"</p> <p><b>Se elimina.</b></p>	<p>D) Los directores o gerentes de las dependencias regionales de las entidades nacionales;</p> <p>E) Mínimo dos representantes de las más altas capacidades de cada una de las fuerzas económicas y sociales del departamento, designados por el gobernador de temas que solicite a las agremiaciones de mayor importancia con significación regional que representen los intereses generales del departamento.</p> <p>F) Mínimo dos representantes de las Universidades localizadas en el territorio departamental.</p> <p>G) Mínimo dos representantes de las Comunidades étnicas con presencia en el departamento, escogidos de temas que presenten las organizaciones nacionales jurídicamente reconocidas que los agrupen.</p> <p>La integración del Consejo Departamental de Planeación tendrá en cuenta los principios de equidad y acceso de la población minoritaria.</p>	<p><del>4. Los directores o gerentes de las dependencias regionales de las entidades nacionales;</del></p> <p><del>5. Mínimo dos representantes de las más altas capacidades de cada una de las fuerzas económicas y sociales del departamento, designados por el gobernador de temas que solicite a las agremiaciones de mayor importancia con significación regional que representen los intereses generales del departamento;</del></p> <p><del>6. Mínimo dos representantes de las Universidades localizadas en el territorio departamental;</del></p> <p><del>7. Mínimo dos representantes de las Comunidades étnicas con presencia en el departamento, escogidos de temas que presenten las organizaciones nacionales jurídicamente reconocidas que los agrupen;</del></p> <p><del>La integración del Consejo Departamental de Planeación tendrá en cuenta los principios de equidad y acceso de la población minoritaria.</del></p> <p><del><b>Parágrafo 1.</b> La oficina de planeación del respectivo departamento actuará como secretaria técnica del Consejo;</del></p>	<p>D) Los directores o gerentes de las dependencias regionales de las entidades nacionales;</p> <p>E) Mínimo dos representantes de las más altas capacidades de cada una de las fuerzas económicas y sociales del departamento, designados por el gobernador de temas que solicite a las agremiaciones de mayor importancia con significación regional que representen los intereses generales del departamento.</p> <p>F) Mínimo dos representantes de las Universidades localizadas en el territorio departamental.</p> <p>G) Mínimo dos representantes de las Comunidades étnicas con presencia en el departamento, escogidos de temas que presenten las organizaciones nacionales jurídicamente reconocidas que los agrupen.</p> <p>La integración del Consejo Departamental de Planeación tendrá en cuenta los principios de equidad y acceso de la población minoritaria.</p>
<p><b>Parágrafo 1.</b> La oficina de planeación del respectivo departamento actuará como secretaria técnica del Consejo.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> El Gobernador podrá invitar a los funcionarios del orden departamental o municipal que estime conveniente.</p> <p><b>Parágrafo 3.</b> Los Gobernadores podrán promover y coordinar la ejecución de los planes y programas que hayan de cumplirse en los Departamentos, con las entidades del nivel nacional.</p> <p><b>Parágrafo 4.</b> Cuando no exista entidad educativa dentro del territorio departamental conforme a lo solicitado en el numeral 4 del presente artículo, se solicitará representación de cualquiera de las universidades ubicadas en los departamentos vecinos o más cercanos geográficamente.</p> <p><b>Artículo 38. Calidades y periodo.</b> Para efectos de la designación de los integrantes del Consejo Departamental de Planeación, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:</p> <p>El estar vinculado a las actividades del respectivo sector o territorio y poseer conocimientos técnicos o experiencia en los asuntos del sector o región que se trate.</p> <p>Los integrantes del Consejo Departamental de Planeación serán designados para un periodo de</p>	<p><del><b>Parágrafo 2.</b> El Gobernador podrá invitar a los funcionarios del orden departamental o municipal que estime conveniente.</del></p> <p><del><b>Parágrafo 3.</b> Los Gobernadores podrán promover y coordinar la ejecución de los planes y programas que hayan de cumplirse en los Departamentos, con las entidades del nivel nacional.</del></p> <p><del><b>Parágrafo 4.</b> Cuando no exista entidad educativa dentro del territorio departamental conforme a lo solicitado en el numeral 4 del presente artículo, se solicitará representación de cualquiera de las universidades ubicadas en los departamentos vecinos o más cercanos geográficamente.</del></p> <p><del><b>Artículo 38. Calidades y periodo.</b> Para efectos de la designación de los integrantes del Consejo Departamental de Planeación, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:</del></p> <p><del>El estar vinculado a las actividades del respectivo sector o territorio y poseer conocimientos técnicos o experiencia en los asuntos del sector o región que se trate.</del></p> <p><del>Los integrantes del Consejo Departamental de Planeación serán designados para un periodo de 12 años y el mitad de sus miembros será renovada cada cuatro años. En caso que</del></p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>12 años y el mitad de sus miembros será renovada cada cuatro años. En caso que el número de integrantes del Consejo sea impar, el número equivalente será el que resulte de aproximar el cociente al número entero siguiente.</p> <p><b>Artículo 39.</b> El Consejo Departamental de Planeación generará una visión objetiva del desarrollo del departamento de largo plazo, que servirá de fundamento para el proceso de definición del plan de desarrollo económico y social departamental.</p> <p><b>Artículo 40.</b> El Consejo Departamental de Planeación cumplirá en la elaboración y adopción del Plan de Desarrollo Económico y Social. Deberá tener en cuenta los siguientes determinantes, que constituyen norma de superior jerarquía, dentro de su competencia y de acuerdo a la Constitución y la ley:</p> <p>a. Componente general del plan, el cual estará constituido por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo, donde se establece el desarrollo y concreción de las políticas públicas en materia de desarrollo económico y social.</p> <p>b. Componente de mediano y corto plazo, estará en armonía con el modelo estructural de largo plazo, así como la consolidación de</p>	<p><del>el número de integrantes del Consejo sea impar, el número equivalente será el que resulte de aproximar el cociente al número entero siguiente.</del></p> <p><del><b>Artículo 39.</b> El Consejo Departamental de Planeación generará una visión objetiva del desarrollo del departamento de largo plazo, que servirá de fundamento para el proceso de definición del plan de desarrollo económico y social departamental.</del></p> <p><del><b>Artículo 40.</b> El Consejo Departamental de Planeación cumplirá en la elaboración y adopción del Plan de Desarrollo Económico y Social. Deberá tener en cuenta los siguientes determinantes, que constituyen norma de superior jerarquía, dentro de su competencia y de acuerdo a la Constitución y la ley:</del></p> <p><del>1. Componente general del plan, el cual estará constituido por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo, donde se establece el desarrollo y concreción de las políticas públicas en materia de desarrollo económico y social;</del></p> <p><del>2. Componente de mediano y corto plazo, estará en armonía con el modelo estructural de largo plazo, así como la consolidación de las transformaciones necesarias para lograr los objetivos;</del></p>	<p>Se elimina.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se cambian las literales por numerales.</p>

<p>las transformaciones necesarias para lograr los objetivos.</p> <p>c. El programa de ejecución definirá con carácter imperativo y vinculante, llevar a cabo las inversiones en los proyectos planeados, su vigencia se ajustará a los periodos de la administración departamental.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Los contenidos estructurales de largo plazo que corresponden a la prospectiva departamental, tendrán una vigencia de mínimo tres (3) periodos constitucionales de la administración departamental.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Los contenidos de mediano plazo que corresponden a la prospectiva departamental, tendrán una vigencia de mínimo dos (2) periodos constitucionales de la administración departamental.</p> <p><b>Parágrafo 3.</b> Los contenidos de corto plazo que corresponden a la prospectiva departamental, tendrán una vigencia de mínimo un (1) periodo constitucional de la administración departamental.</p> <p><b>Parágrafo 4.</b> Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para la aprobación y deberá sustentarse sobre los indicadores de</p>	<p>3. El programa de ejecución definirá con carácter imperativo y vinculante, llevar a cabo las inversiones en los proyectos planeados, su vigencia se ajustará a los periodos de la administración departamental.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Los contenidos estructurales de largo plazo que corresponden a la prospectiva departamental, tendrán una vigencia de mínimo tres (3) periodos constitucionales de la administración departamental.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Los contenidos de mediano plazo que corresponden a la prospectiva departamental, tendrán una vigencia de mínimo dos (2) periodos constitucionales de la administración departamental.</p> <p><b>Parágrafo 3.</b> Los contenidos de corto plazo que corresponden a la prospectiva departamental, tendrán una vigencia de mínimo un (1) periodo constitucional de la administración departamental.</p> <p><b>Parágrafo 4.</b> Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para la aprobación y deberá sustentarse sobre los indicadores de seguimiento y evaluación propuestos en el componente estructural para el plan integralmente.</p>	<p>seguimiento y evaluación propuestos en el componente estructural para el plan integralmente.</p> <p><b>Artículo 41. Funciones del Consejo Departamental de Planeación.</b> Son funciones del Consejo Departamental de Planeación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analizar y discutir el proyecto del Plan Departamental de Desarrollo.</li> <li>2. Organizar y coordinar una amplia discusión departamental sobre el proyecto del Plan Departamental de Desarrollo, mediante reuniones regionales con los Consejos Territoriales de Planeación en las cuales intervengan los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitario, culturales, con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución Política.</li> <li>3. Absolver las consultas que, sobre el Plan Departamental de Desarrollo, formule el gobierno departamental o las demás autoridades de planeación durante la discusión del proyecto del plan.</li> <li>4. Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación sobre el contenido y la forma del Plan.</li> </ol>	<p><b>Artículo 41. Funciones del Consejo Departamental de Planeación.</b> Son funciones del Consejo Departamental de Planeación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Analizar y discutir el proyecto del Plan Departamental de Desarrollo.</li> <li>10. Organizar y coordinar una amplia discusión departamental sobre el proyecto del Plan Departamental de Desarrollo, mediante reuniones regionales con los Consejos Territoriales de Planeación en las cuales intervengan los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitario, culturales, con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución Política.</li> <li>11. Absolver las consultas que sobre el Plan Departamental de Desarrollo, formule el gobierno departamental o las demás autoridades de planeación durante la discusión del proyecto del plan.</li> <li>12. Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación sobre el contenido y la forma del Plan.</li> </ol> <p>Se ajusta la numeración.</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Enviar información periódica al Departamento Nacional de Planeación y a la Comisión Permanente del Plan sobre la ejecución del Plan Nacional en el área respectiva y hacerles conocer programas y opiniones que consideren útiles, inclusive, aquellos que faciliten y aceleren la descentralización.</li> <li>6. Velar por que la planificación de largo plazo se cumpla en el proyecto de Plan de desarrollo y éste sea sostenible a lo largo del tiempo.</li> <li>7. Conceptuar de fondo sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por el gobierno departamental.</li> <li>8. las demás que les asigne la Constitución o la Ley.</li> </ol> <p><b>Parágrafo</b> La dependencia departamental de planeación prestará al Consejo el apoyo administrativo y logístico que sea necesario para su funcionamiento.</p>	<p>43. Enviar información periódica al Departamento Nacional de Planeación y a la Comisión Permanente del Plan sobre la ejecución del Plan Nacional en el área respectiva y hacerles conocer programas y opiniones que consideren útiles, inclusive, aquellos que faciliten y aceleren la descentralización.</p> <p>14. Velar por que la planificación de largo plazo se cumpla en el proyecto de Plan de desarrollo y éste sea sostenible a lo largo del tiempo.</p> <p>15. Conceptuar de fondo sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por el gobierno departamental.</p> <p>16. las demás que les asigne la Constitución o la Ley.</p> <p><b>Parágrafo</b> La dependencia departamental de planeación prestará al Consejo el apoyo administrativo y logístico que sea necesario para su funcionamiento.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V</b> Plan de Ordenamiento Departamental</p>	<p><b>Artículo nuevo.</b></p>	<p><b>Artículo 14.</b> Planes de Ordenamiento Departamental. En desarrollo del artículo 29 numeral 2 de la Ley 1454 de 2011 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, los departamentos expedirán planes de ordenamiento departamental a través de los cuales se definirá la visión a largo plazo del departamento, el modelo de ordenamiento territorial, las directrices políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de impacto territorial que surten la función pública administrativa municipal, definiendo los instrumentos que articulen y armonicen el marco del plan de ordenamiento departamental.</p> <p>Así mismo, a través de estos instrumentos se determinarán los sistemas de uso y ocupación del territorio, de acuerdo con el potencial óptimo del ambiente en función de las estrategias de desarrollo, potencialidades y limitantes físicas, económicas y culturales. Dentro del modelo de ordenamiento territorial se realizará la suscripción de los principales sistemas de espacio urbano rural que coadyuven y estructuran el territorio departamental, tales como el sistema de asentamientos poblacionales urbanos y rurales, la estructura espacial, las corredores de conectividad funcional, los ejes de infraestructura y equipamiento, de servicios públicos y las áreas e infraestructura productiva, lo cual se realizará en coordinación con los entes territoriales, los planes étnicos y demás actores del proceso reconociendo la participación territorial y regional.</p> <p>Se considera necesario establecer lo referente a los planes de ordenamiento departamental.</p>

	<p>el como la articulación con los niveles nacional y supradepartamentales.</p> <p>Los Planes de Ordenamiento Departamental se desarrollarán en el marco de las competencias constitucionales delegadas en los artículos 1, 284, 287, 288, 297 y siguientes.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En el término de un año contado a partir de la expedición de la presente ley, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior y de los demás entes de gobierno competentes en la materia, reglamentarán los aspectos sustantivos, procedimentales y organizativos que definen la materialidad para la correcta formulación, implementación y ejecución de los Planes de Ordenamiento Departamental (POD). En el reglamento se definirán entre otros los contenidos mínimos, procedimiento de formulación, especificación, vigencia y entidades competentes.</p>	
<p><b>Artículo 42.</b> Los departamentos a través de los esquemas asociativos territoriales correspondientes a su entidad, podrán fortalecer los sistemas administrativos y de planeación, así como la prestación de servicios públicos, de igual forma consolidar esquemas de desarrollo económico y social que impulsen las potencialidades.</p>	<p><b>Artículo 42.</b> Los departamentos a través de los esquemas asociativos territoriales correspondientes a su entidad, podrán fortalecer los sistemas administrativos y de planeación, así como la prestación de servicios públicos, de igual forma consolidar esquemas de desarrollo económico y social que impulsen las potencialidades.</p>	<p>Se elimina porque se incluye en el capítulo de competencias, ahora pasa a ser el artículo 11.</p>
<p><b>TÍTULO II</b> <b>De las asambleas departamentales</b> <b>CAPÍTULO I</b></p>	<p><b>Sin modificaciones.</b></p>	
<p>gozará de autonomía administrativa y presupuestada propia y podrá ejercer control político sobre la administración departamental y estará integrada por no menos de once (11) miembros ni más de treinta y uno (31), que se denominarán diputados y tendrán la calidad de servidores públicos, sujetos al régimen que para estos efectos, fija la Constitución y la ley.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Las asambleas departamentales actuarán bajo el régimen de bancadas previsto en las leyes 974 de 2005 y 1909 de 2018 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, y deberán ajustar sus reglamentos en la conformidad con tales disposiciones, en los términos que regulan el mismo principio, dentro de los ses (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.</p>	<p>administrativa y presupuestada propia y podrá ejercer control político sobre la administración departamental y estará integrada por no menos de once (11) miembros ni más de treinta y uno (31), que se denominarán diputados y tendrán la calidad de servidores públicos, sujetos al régimen que para estos efectos, fija la Constitución y la ley.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Las asambleas departamentales actuarán bajo el régimen de bancadas previsto en las leyes 974 de 2005 y 1909 de 2018 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, y deberán ajustar sus reglamentos en la conformidad con tales disposiciones, en los términos que regulan el mismo principio, dentro de los ses (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.</p>	<p>ya este contenido en el artículo 109, de forma más específica.</p>
<p><b>Artículo 45.</b> Régimen de Bancadas y Derecho de Oposición. Las asambleas departamentales actuarán en las sesiones, de conformidad al régimen de bancadas y el estatuto de oposición, deberán ajustar sus reglamentos en la establecido en tales disposiciones, para garantizar su eficaz funcionamiento.</p>	<p><b>Artículo 45.</b> Régimen de Bancadas y Derecho de Oposición. Las asambleas departamentales actuarán en las sesiones, de conformidad al régimen de bancadas y el estatuto de oposición, deberán ajustar sus reglamentos en la establecido en tales disposiciones, para garantizar su eficaz funcionamiento.</p>	<p>Se elimina el artículo por estar contenido en el artículo 109 del proyecto de ley.</p>
<p><b>Artículo 46.</b> Organización de las asambleas. La determinación de la estructura administrativa de las asambleas departamentales, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de</p>	<p><b>Artículo 46.</b> Organización de las asambleas. La determinación de la estructura administrativa de las asambleas departamentales, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>

<p><b>De su organización y funcionamiento.</b></p> <p><b>Artículo 43.</b> En desarrollo del artículo 29 numeral 2 de la Ley 1454 de 2011 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, los departamentos podrán articular sus políticas, directrices y estrategias del ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio a través de los planes de ordenamiento departamental donde se articulan con los municipios, municipios con visión regional, abordando dinámicas territoriales y en contextos que superen la división político - administrativa municipal y con incidencia territorial, en temas como funcionalidad y competitividad, gestión ambiental, gestión del riesgo de desastres, eficiencia en la prestación de servicios, infraestructura y optimización de la inversión pública. Todo ello reconociendo las particularidades territoriales y regionales, así como la articulación con los niveles supradepartamentales y nacional.</p> <p>Los Planes de Ordenamiento Departamental se desarrollarán en el marco de las competencias constitucionales delegadas en los artículos 1, 284, 287, 288, 297 y siguientes.</p>	<p><b>Artículo 43.</b> En desarrollo del artículo 29 numeral 2 de la Ley 1454 de 2011 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, los departamentos podrán articular sus políticas, directrices y estrategias del ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio a través de los planes de ordenamiento departamental donde se articulan con los municipios, municipios con visión regional, abordando dinámicas territoriales y en contextos que superen la división político - administrativa municipal y con incidencia territorial, en temas como funcionalidad y competitividad, gestión ambiental, gestión del riesgo de desastres, eficiencia en la prestación de servicios, infraestructura y optimización de la inversión pública. Todo ello reconociendo las particularidades territoriales y regionales, así como la articulación con los niveles supradepartamentales y nacional.</p> <p>Los Planes de Ordenamiento Departamental se desarrollarán en el marco de las competencias constitucionales delegadas en los artículos 1, 284, 287, 288, 297 y siguientes.</p>	<p>Se elimina porque resulta repetitivo con un artículo propuesto anteriormente.</p>
<p><b>Artículo 44.</b> Asambleas departamentales. En cada departamento habrá una corporación política - administrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual</p>	<p><b>Artículo 15.</b> Asambleas departamentales. En cada departamento habrá una corporación política - administrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual gozará de autonomía</p>	<p>Se ajusta la numeración. Se propone eliminar el parágrafo, en el entendido que</p>
<p>entreeles corresponden a la misma corporación consultando las metas de ingresos y gastos, de acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo, a la Ley 817 de 2000, o a las leyes que la modifiquen o sustituyan y las normas nacionales vigentes en materia salarial y prestacional.</p> <p><b>Artículo 47.</b> Sede. La asamblea departamental tendrá su sede en la capital del departamento, recinto oficial señalado para el efecto. Sin embargo, por motivos de seguridad, grave perturbación del orden público o por decisión de la plenaria, podrá sesionar en otro lugar, por decisión motivada de más de las dos terceras partes de la corporación o a criterio del gobernador, mientras subsistan las causas de la perturbación.</p> <p>Si por cualquier causa justificada no pudieren hacerlo, se reunirá tan pronto como fuere posible, dentro del año correspondiente.</p>	<p>corresponden a la misma corporación, consultando las metas de ingresos y gastos, de acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo, a la Ley 817 de 2000, o a las leyes que la modifiquen o sustituyan y las normas nacionales vigentes en materia salarial y prestacional.</p> <p><b>Artículo 17.</b> Sede. La asamblea departamental tendrá su sede en la capital del departamento, recinto oficial señalado para el efecto. Sin embargo, por motivos de seguridad, grave perturbación del orden público o por decisión motivada de más de las dos terceras partes de la corporación, podrá sesionar en otro lugar, por decisión motivada de más de las dos terceras partes de la corporación o a criterio del gobernador, mientras subsistan las causas de la perturbación.</p> <p>Si por cualquier causa justificada no pudieren hacerlo, se reunirá tan pronto como fuere posible, dentro del año correspondiente.</p>	<p>Se ajusta la numeración. Se ajusta la redacción, a fin de precisar que la asamblea podrá sesionar en otro lugar a su sede, cuando 1. Medios motivos de seguridad. 2. Exista perturbación al orden público. 3. Medios motivos de las dos terceras partes de la corporación. Se elimina la facultad que se le otorga al gobernador, en el entendido que las asambleas son órganos administrativos independientes. Se elimina el segundo inciso, en el entendido que ya está incluido en el parágrafo 1 del artículo 33.</p>



<p><b>Artículo 48. Atribuciones.</b> Son funciones de las asambleas departamentales, además de las establecidas en el artículo 300 de la Constitución Política y la normatividad vigente, las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desde una visión departamental, las asambleas desarrollarán sus funciones con una visión regional del desarrollo económico y social. Procurando que el gobierno departamental fortalezca la institucionalidad con propósitos de largo plazo que permitan el progreso departamental.</li> <li>Expedir, interpretar, reformar y derogar las ordenanzas en los asuntos de su competencia.</li> <li>Reconocer la nueva cabecera municipal, en los casos en que los municipios en ejercicio de su autonomía dispongan el traslado de la misma; para lo cual solicitará que se convoque una consulta popular para que sea la ciudadanía del municipio quien tome la decisión que luego oficiará la respectiva asamblea.</li> <li>Determinar la estructura de la administración central del departamento mediante la creación de las dependencias que la conforman y la asignación de sus</li> </ol>	<p><b>Artículo 18. Atribuciones.</b> Son funciones de las asambleas departamentales:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Desarrollar sus funciones con una visión regional del desarrollo económico y social</b>, procurando que el gobierno departamental fortalezca la institucionalidad, con propósitos de <b>corto, mediano y largo plazo</b> que permitan el progreso departamental.</li> <li>Expedir, interpretar, reformar y derogar las ordenanzas en los asuntos de su competencia.</li> <li>Determinar la estructura de la administración <b>departamental</b> mediante la creación de las dependencias que la conforman y la asignación de sus funciones principales, las escalas de remuneración correspondiente a sus distintas categorías de empleos; <del>crear los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del departamento; autorizar a las universidades autónomas de economía mixta y a los institutos autónomos que integran sus funciones básicas, a iniciativa del Gobernador.</del></li> <li>Dictar normas de Policía en aquellas materias que no hayan sido reguladas por las autoridades nacionales y sean necesarias, en cuanto fuere necesario.</li> <li>Autorizar al Gobernador de manera pro tempore de <del>precisas facultades</del> para incorporar, adicionar</li> </ol>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>-Se modifica el enunciado del artículo, pues se están unificando las funciones de las asambleas y no es técnico hacer referencia a otras normas que se derogan con la presente ley.</p> <p>-Se modifica el numeral 1, a fin de redactarlo como una función y precisando que el desarrollo del departamento no solo depende de los propósitos a largo plazo, sino también a corto y mediano plazo.</p> <p>-Se elimina parcialmente el numeral 4, en el entendido que está incluido en el numeral 22.</p> <p>-Se elimina el numeral 6, toda vez, que no se considera necesario que para la incorporación de recursos mediante decreto, la asamblea deba autorizar al Gobernador.</p> <p>-Se complementa el parágrafo 2, para mayor comprensión.</p>	<p>funciones principales, las escalas de remuneración correspondiente a sus distintas categorías de empleos; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta y entes, universidades autónomas y dignificar sus funciones básicas, a iniciativa del Gobernador.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Elegir su Mesa Directiva.</li> <li>8. Posesionar al gobernador del departamento.</li> <li>9. Elegir, mediante convocatoria pública, al secretario de la asamblea para el período previsto en la presente ley.</li> <li>10. Elegir, <b>mediante convocatoria pública</b> al contralor departamental, de acuerdo a lo previsto en la <b>Constitución y la Ley</b>, aceptar la renuncia, conceder licencias y permisos, <del>igualar</del> hacer efectivos las sanciones disciplinarias y penales, decretadas por las</li> </ol>	<p>modificar, efectuar traslados presupuestales y crear rubros presupuestales en las diferentes secciones del Presupuesto General del Departamento, servicio de la deuda pública e inversión, en ejecución de sus políticas, programas subprogramas y proyectos, establecidas en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia.</p> <p><del>4. Autorizar al Gobernador para incorporar los recursos provenientes del Tesoro Nacional o de Cooperación nacional o internacional que tengan por objeto cofinanciar proyectos, una vez se incorpore al Presupuesto mediante decreto del Gobernador a la Asamblea Departamental dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición del acto administrativo.</del></p>	<p>El numeral 11 se modifica de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 300 de la Constitución Política.</p> <p>-Se ajusta la redacción del numeral 13, para clarificar la competencia de la asamblea sobre el traslado de la cabecera municipal.</p> <p>- Se ajusta el parágrafo 3, de conformidad a lo establecido en el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución y se adiciona como un numeral, no como parágrafo.</p> <p>-Se elimina el parágrafo 4, por considerarse innecesario y repetitivo.</p>
<p>de Cooperación nacional o internacional que tengan por objeto cofinanciar proyectos, una vez se incorpore al Presupuesto mediante decreto deberá informar a la Asamblea Departamental dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición del acto administrativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Elegir su Mesa Directiva.</li> <li>Posesionar al gobernador del departamento.</li> <li>Elegir, mediante convocatoria pública, al secretario de la asamblea para el período previsto en la presente ley.</li> <li>Elegir al contralor departamental, de acuerdo a lo previsto en la ley; aceptar la renuncia, conceder licencias y permisos, igualmente, hacer efectivos las sanciones disciplinarias y penales, decretadas por las autoridades competentes, y por ende, llenar la vacancia, según sea el caso.</li> <li>Solicitar al gobierno central departamental, Secretarías de Despacho, Gerentes de las entidades descentralizadas del orden departamental, Directores y o la Contraloría</li> </ol>	<p><del>autoridades competentes, y por ende, llenar la vacancia, según sea el caso.</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al Contralor General del Departamento, Secretarías de Despacho, Jefes de Departamentos Administrativos y Directores de Institutos Descentralizados del orden Departamental.</b></li> <li>Determinar la celebración de sesiones reservadas en los términos de la <b>Constitución y la ley</b>.</li> <li><b>Solicitar que se convoque a consulta popular para que la ciudadanía decida sobre el traslado de la cabecera municipal cuando así lo requiera, y oficializar la decisión adoptada.</b></li> <li><b>Solicitar</b> la cooperación de los organismos del <b>orden nacional</b> de la administración Pública, para el mejor <b>el</b> desempeño de sus atribuciones.</li> <li>Citar y requerir a los secretarías del despacho y demás funcionarios departamentales o del nivel descentralizado departamental, para que concurren a las sesiones, <b>de conformidad con la</b> Constitución y <b>la Ley</b>.</li> <li>Exigir, mediante comunicación escrita, informes sobre el ejercicio de sus funciones, a los secretarías de</li> </ol>	<p>General del Departamento, los informes que necesite.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Determinar la celebración de sesiones reservadas en los términos de la presente ley.</li> <li>Recabar del gobierno, la cooperación de los organismos de la administración Pública para el mejor desempeño de sus atribuciones.</li> <li>Citar y requerir a los secretarías del despacho y demás funcionarios departamentales o del nivel descentralizado departamental, para que concurren a las sesiones, bajo las condiciones constitucionales y legales.</li> <li>Exigir, mediante comunicación escrita, informes sobre el ejercicio de sus funciones, a los secretarías de despacho, jefes de departamentos administrativos, gerentes o directores de planeación y directores de institutos descentralizados del orden departamental, gerentes o directores de las empresas en las cuales el departamento forme parte y, en general, a cualquier servidor público del orden departamental y a los directores de las corporaciones autónomas regionales. <b>Sobre aspectos</b></li> </ol>	<p>despacho, jefes de departamentos administrativos, gerentes o directores de planeación y directores de institutos descentralizados del orden departamental, gerentes o directores de las empresas en las cuales el departamento forme parte y, en general, a cualquier servidor público del orden departamental y a los directores de las corporaciones autónomas regionales, <b>sobre aspectos puntuales de gestión, gestión pública del gobernador y el contralor departamental</b> <del>informes escritos</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Solicitar informes y citar a los funcionarios del orden departamental autorizados por el gobernador del departamento o el elector de hacer seguimiento a su función.</b></li> <li>Solicitar a los representantes legales, de las empresas de servicios públicos domiciliarios, informes para que abusen iniquidades sobre la prestación del servicio en el respectivo departamento.</li> <li>Dar cumplimiento a las sanciones aplicadas y comunicadas por los partidos o movimientos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, por la inobservancia de sus miembros a directrices internas, siempre y cuando ello implique limitación de los derechos como diputado, las cuales pueden ir desde la pérdida del derecho al voto hasta la expulsión, siempre observando el debido proceso.</li> </ol>	<p>despacho, jefes de departamentos administrativos, gerentes o directores de planeación y directores de institutos descentralizados del orden departamental, gerentes o directores de las empresas en las cuales el departamento forme parte y, en general, a cualquier servidor público del orden departamental y a los directores de las corporaciones autónomas regionales, <b>sobre aspectos puntuales de gestión, gestión pública del gobernador y el contralor departamental</b> <del>informes escritos</del></p>	<p>El numeral 11 se modifica de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 300 de la Constitución Política.</p> <p>-Se ajusta la redacción del numeral 13, para clarificar la competencia de la asamblea sobre el traslado de la cabecera municipal.</p> <p>- Se ajusta el parágrafo 3, de conformidad a lo establecido en el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución y se adiciona como un numeral, no como parágrafo.</p> <p>-Se elimina el parágrafo 4, por considerarse innecesario y repetitivo.</p>

<p>puntajes de gestión, podrá solicitarle al gobernador y al contador departamental informes escritos.</p> <p>17. Solicitar informes y citar a los funcionarios del orden departamental, nombrados por el gobernador del departamento o efectos de hacer seguimiento a su función.</p> <p>18. Solicitar a los representantes legales, de las empresas de servicios públicos domiciliarios, informes para que absolvan inquietudes sobre su prestación en el respectivo departamento.</p> <p>19. Dar cumplimiento a las sanciones aplicadas y comunicadas por los partidos o movimientos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, por la inobediencia de sus miembros o directrices internas, siempre y cuando ello implique limitación de los derechos como diputado, las cuales pueden ir desde la pérdida del derecho al voto hasta la expulsión, siempre observando el debido proceso.</p> <p>20. Promover la participación ciudadana mediante la realización de audiencias públicas y especiales sobre temas de interés departamental.</p>	<p>20. Promover la participación ciudadana mediante la realización de audiencias públicas y especiales sobre temas de interés departamental.</p> <p>21. Aceptar la renuncia de los diputados cuando la Corporación se encuentre sesionando. En receso, esta atribución corresponde a la Mesa Directiva de la Corporación.</p> <p>22. Aprobar la creación de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del orden departamental previstos en el artículo 300 numeral 7 de la Constitución Política, previo a la presentación y evaluación del estudio técnico que sustente la conveniencia económica y social de la iniciativa, así como la viabilidad financiera de la nueva entidad, teniendo en cuenta sus funciones, el sector donde operará y sus fuentes de financiación.</p> <p>23. Crear mediante ordenanzas las Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial, en los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 1454 de 2011.</p> <p>24. Crear y organizar provincias como entidades administrativas y de planificación en los términos de la Ley 1454 de 2011.</p> <p>25. Promover la conformación de asociaciones entre entidades territoriales.</p>		<p>21. Aceptar la renuncia de los diputados cuando la Corporación se encuentre sesionando. En receso, esta atribución corresponde a la Mesa Directiva de la Corporación.</p> <p>22. Aprobar la creación de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del orden departamental previstos en el artículo 300 numeral 7 de la Constitución Política, previo a la presentación y evaluación del estudio técnico que sustente la conveniencia económica y social de la iniciativa, así como la viabilidad financiera de la nueva entidad, teniendo en cuenta sus funciones, el sector donde operará y sus fuentes de financiación.</p> <p>23. Crear mediante ordenanzas las Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial, en los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 1454 de 2011.</p> <p>24. Crear y organizar provincias como entidades administrativas y de planificación en los términos de la Ley 1454 de 2011.</p>	<p>26. Con sujeción a los requisitos que señale la ley, crear, suprimir y fusionar municipios y modificar sus límites mediante la segregación o agregación de territorios.</p> <p>27. Imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos cuentas territoriales de seguridad para fomentar la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento.</p> <p>28. Aprobar y adoptar, mediante ordenanza, los planes de ordenamiento departamental de acuerdo a los términos del artículo 29 de la ley 1454 de 2011.</p> <p>29. Establecer la progresiva transformación de los corregimientos departamentales y/o áreas no municipalizadas, en municipios, o su incorporación a municipios existentes, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes.</p> <p>30. Reglamentar la enajenación o destino de los terrenos baldíos cedidos al departamento, de conformidad con las leyes que regulen la materia.</p> <p>31. Las Asambleas expedirán la ordenanza de reglamento para su organización y funcionamiento, la cual no requerirá de sanción ejecutiva.</p> <p>32. Las demás funciones que les señalen la Constitución y las leyes.</p>	
<p>25. Promover la conformación de asociaciones entre entidades territoriales.</p> <p>26. Con sujeción a los requisitos que señale la ley, crear, suprimir y fusionar municipios y modificar sus límites mediante la segregación o agregación de territorios.</p> <p>27. Imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos cuentas territoriales de seguridad para fomentar la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento.</p> <p>28. Aprobar y adoptar, mediante ordenanza, los planes de ordenamiento departamental de acuerdo a los términos del artículo 29 de la ley 1454 de 2011.</p> <p>29. Establecer la progresiva transformación de los corregimientos departamentales y/o áreas no municipalizadas, en municipios, o su incorporación a municipios existentes, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes.</p> <p>30. Reglamentar la enajenación o destino de los terrenos baldíos cedidos al departamento, de conformidad con las leyes que regulen la materia.</p>	<p>33. Autorizar al Gobernador del Departamento para comprometer vigencias futuras, negociar empréstitos, enajenar bienes, acciones y cuotas partes, así como ejercer, pro tempore, ciertas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales.</p> <p><b>Parágrafo 1:</b> Las ordenanzas que decreten inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales y las que creen servicios a cargo del departamento solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador.</p> <p><b>Parágrafo 2:</b> <del>Asambleas</del> Las funciones normativas del departamento para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los gobernadores <b>a a las asambleas se entendió asignada a estas coporaciones</b>, siempre y cuando no contrarie la Constitución y la ley.</p> <p><b>Parágrafo 3:</b> De conformidad con el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política, la asamblea deberá decidir sobre la autorización al gobernador, para contratar en los siguientes casos:</p> <p>1. Contratación de empréstitos. 2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 3. Enajenación y compra-venta de bienes inmuebles. 4. Enajenación de acciones, acciones y cuotas partes. 5. Concesiones. 6. Las demás que determine la ley.</p>		<p>31. Las Asambleas expedirán la ordenanza de reglamento para su organización y funcionamiento, la cual no requerirá de sanción ejecutiva.</p> <p>32. Las demás funciones que les señalen la Constitución y las leyes.</p> <p><b>Parágrafo 1:</b> Las ordenanzas que decreten inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales y las que creen servicios a cargo del departamento solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador.</p> <p><b>Parágrafo 2:</b> Aquellas funciones normativas del departamento para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los gobernadores, siempre y cuando no contrarie la Constitución y la ley.</p> <p><b>Parágrafo 3:</b> De conformidad con el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política, la asamblea deberá decidir sobre la autorización al gobernador, para contratar en los siguientes casos:</p> <p>1. Contratación de empréstitos. 2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 3. Enajenación y compra-venta de bienes inmuebles.</p>	<p><del>Parágrafo 4. De conformidad con el parágrafo anterior, no podrán enajenarse para los fines señalados en el presente artículo, los bienes, acciones y cuotas partes, así como ejercer, pro tempore, ciertas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales.</del></p>	

<p>4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 5. Concesiones. 6. Las demás que determine la ley.</p> <p><b>Parágrafo 4.</b> De conformidad con el parágrafo anterior, no puede entenderse para todos los contratos que deba suscribir el gobernador, sino únicamente y de manera excepcional a los que se señalan en el parágrafo 3, obediendo a criterios de <b>razonabilidad y proporcionalidad.</b></p> <p><b>Artículo 49. Prohibiciones de la Asamblea.</b> Es prohibido a las asambleas departamentales en el ejercicio de sus atribuciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inmiscuirse, por medio de resoluciones u ordenanzas sin asuntos de competencia privativa de otras autoridades.</li> <li>Aprobación de mociones o actos de censura o de aplauso a la gestión o conducta de las autoridades y funcionarios públicos sin perjuicio del ejercicio de sus funciones de control político de las condiciones y términos establecidos en el presente estatuto.</li> <li>Decretar a favor de personas o entidades, donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, u otras erogaciones o derechos que no estén reconocidos con arreglo a las leyes preexistentes.</li> </ol>	<p><b>Artículo 19. Prohibiciones de la Asamblea.</b> Es prohibido a las asambleas departamentales en el ejercicio de sus atribuciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inmiscuirse, por medio de resoluciones u ordenanzas en asuntos de competencia privativa de otras autoridades.</li> <li><del>Aprobación de mociones o actos de censura o de aplauso a la gestión o conducta de las autoridades y funcionarios públicos sin perjuicio del ejercicio de sus funciones de control político de las condiciones y términos establecidos en el presente estatuto.</del></li> <li>Decretar a favor de personas o entidades, donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, u otras erogaciones o derechos que no estén reconocidos con arreglo a las leyes preexistentes.</li> </ol>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se elimina el numeral 4, en el entendido que es repetitivo con el numeral 1.</p> <p>- En el numeral 2, en el entendido que resulta contradictorio con el artículo siguiente y puede vulnerar la función propia de control político que le asiste a las corporaciones públicas.</p> <p>Se elimina el numeral 6, por considerarse innecesario, pues la asamblea departamental solo tiene la potestad de elegir al contable departamental y al secretario de la corporación y</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Intervenir por medio de ordenanzas o resoluciones en asuntos que no sean de su competencia.</li> <li>Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas.</li> <li>Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas.</li> <li>Nombrar a sus miembros para empleos remunerados cuya provisión les incumba, ni incluirlos en las listas que deban elegirse para que otra autoridad haga el nombramiento respectivo.</li> <li>Adoptar <del>glosa</del> régimen prestacional distinto al que ordena la ley.</li> <li>Intervenir en beneficio propio, de terceros o de su partido o grupo político, en la asignación de cupos presupuestales o en el manejo, dirección o utilización de recursos del presupuesto, en la forma que establecen las leyes orgánicas del plan y del presupuesto.</li> <li>Los demás establecidos en la Constitución y la Ley.</li> </ol>	<p>por la naturaleza de dichos cargos, es claro que para postularse a dichos cargos no podrán ostentar la calidad de diputados.</p>	<p><b>Artículo 50. Reconocimiento a personas naturales o jurídicas.</b> A los Diputados les está prohibido, otorgar o realizar homenajes a personas naturales o jurídicas que no sean de reconocimiento general o público. La Mesa Directiva hará un estudio completo sobre las hojas de vida y logros en</p>	<p><b>Artículo 20. Reconocimiento a personas naturales o jurídicas.</b> A los Diputados les está prohibido, otorgar o realizar homenajes a personas naturales o jurídicas que no sean de reconocimiento general o público. La Mesa Directiva hará un estudio completo sobre las hojas de vida y logros en beneficio de la comunidad de cada una de las personas</p>	<p>Se ajusta la numeración y la redacción.</p>
<p>beneficio de la comunidad de cada una de las personas propuestas. Los postulados para tales homenajes estarán sometidos a los requisitos establecidos en un reglamento especial que para estos efectos dispongan la Mesa Directiva.</p> <p>En todo caso, no podrán financiarse con recursos públicos estos reconocimientos.</p> <p><b>Artículo 51. Prohibición para el manejo de cupos presupuestales.</b> Prohíbese a los diputados, intervenir en beneficio propio, de terceros o de su partido o grupo político, en la asignación de cupos presupuestales o en el manejo, dirección o utilización de recursos del presupuesto, en la forma que establecen las leyes orgánicas del plan y del presupuesto.</p> <p><b>Artículo 52. Instalación del periodo constitucional.</b> La sesión de instalación del periodo constitucional de las asambleas contará con la asistencia del gobernador, sin que su ausencia impida que esta pueda llevarse a cabo legal y formalmente.</p> <p>Una vez instalado el periodo de constitucional, las asambleas en cualquier tiempo podrán adelantar debates de control político en comisiones permanentes.</p> <p><b>Artículo 53. Período de sesiones.</b> Las asambleas departamentales sesionarán de manera ordinaria</p>	<p>propuestas. Los postulados para tales homenajes estarán sometidos a los requisitos establecidos en un reglamento especial que para estos efectos dispongan la Mesa Directiva.</p> <p>En todo caso <b>los reconocimientos</b> no podrán financiarse con recursos públicos, <b>estos reconocimientos.</b></p> <p><b>Artículo 51. Prohibición para el manejo de cupos presupuestales.</b> <del>Prohíbese a los diputados, intervenir en beneficio propio, de terceros o de su partido o grupo político, en la asignación de cupos presupuestales o en el manejo, dirección o utilización de recursos del presupuesto, en la forma que establecen las leyes orgánicas del plan y del presupuesto.</del></p> <p><b>Artículo 21. Instalación del periodo constitucional.</b> La sesión de instalación del periodo constitucional de las asambleas contará con la asistencia del gobernador, sin que su ausencia impida que esta pueda llevarse a cabo legal y formalmente.</p> <p><del>Una vez instalado el periodo de constitucional, las asambleas en cualquier tiempo podrán adelantar debates de control político en comisiones permanentes.</del></p>	<p>Se incluye dentro del artículo de prohibiciones de la asamblea.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>- Se elimina el segundo inciso por considerarse innecesario, pues el control político es una función propia de las corporaciones públicas.</p> <p>Se ajusta la numeración y la</p>	<p>durante ses (6) meses al año, así:</p> <p>El primer período será, en el primer año de sesiones, del 1 de enero posterior a su elección al último día del mes de febrero del respectivo año.</p> <p>El segundo, tercer y cuarto año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril.</p> <p>El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer período, será del 1 de octubre al 30 de noviembre.</p> <p>Podrán sesionar igualmente durante dos (2) meses al año de forma extraordinaria, previa convocatoria del gobernador, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración. No obstante, se podrán someter a consideración de la plenaria, temas administrativos propios de la corporación.</p> <p>Las sesiones extraordinarias que convoque el gobernador podrán realizarse en oportunidades diferentes siempre y cuando no se exceda el límite establecido en este artículo.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Si por cualquier causa las asambleas no pudieran reunirse ordinariamente en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible, dentro del período correspondiente.</p>	<p>ses (6) meses al año, así:</p> <p>El primer período del primer año de sesiones, <b>estará comprendido entre</b> el 1 de enero posterior a su elección al último día del mes de febrero del respectivo año.</p> <p>El segundo, tercer y cuarto año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril.</p> <p>El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer período, será del 1 de octubre al 30 de noviembre.</p> <p>Podrán sesionar <del>iguales</del> durante <b>tres</b> (3) meses al año de forma extraordinaria, previa convocatoria del gobernador. <b>En el curso de estos sólo podrá ocuparse de los asuntos que el gobernador someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le asiste, así como los temas administrativos propios de la corporación.</b></p> <p>Las sesiones extraordinarias que convoque el gobernador podrán realizarse en oportunidades diferentes siempre y cuando no se exceda el límite establecido en este artículo.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Si por cualquier causa las asambleas no pudieran reunirse ordinariamente en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible, dentro del período correspondiente.</p>	<p>redacción.</p> <p>Se ha notado la necesidad de incrementar el periodo de sesiones extra de 2 a 3 meses, esto no implica directa y necesariamente gasto alguno, pues de no necesitarse o no existir el recurso el respectivo gobernador no las convocara, pero permite al ejecutivo un mayor margen de maniobrabilidad para retrasar el avance de sus metas y programas</p>		

<p><b>Nuevo.</b></p>	<p><b>Artículo 23. Cabildo abierto.</b> En cada período de sesiones ordinarias de las asambleas departamentales, se deberá celebrar por lo menos un (1) cabildo abierto en la sede de la asamblea departamental o donde acuda la corporación mediante proposición aprobada, cuando se derive de asuntos que afecten estos territorios, y que hayan surtido su trámite de solicitud acorde con las disposiciones legales vigentes, en los que, por iniciativa de un número no inferior al cinco (5) por ciento de los ciudadanos del censo electoral del respectivo departamento, se considerarán los asuntos que los residentes soliciten sean estudiados, siempre y cuando sean de competencia de la corporación.</p> <p>El <del>obligación del gobernador o del secretario departamental que delegue, según sea el caso, asistir al cabildo abierto. El procedimiento para la realización de los cabildos abiertos será conforme a lo establecido en la Ley 1757 de 2015 o la norma que la modifique, adicione o la sustituya.</del></p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>El párrafo propuesto en el artículo siguiente, se propone como artículo independiente</p>	<p>vigentes.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En cada período de sesiones ordinarias de las asambleas departamentales, deberá celebrarse por lo menos un (1) cabildo abierto en la sede de la asamblea departamental o donde acuda la Corporación mediante proposición aprobada, cuando se derive de asuntos que afecten estos territorios, y que hayan surtido su trámite de solicitud acorde con las disposiciones legales vigentes, en los que, por iniciativa de un número no inferior al cinco (5) por ciento de los ciudadanos del censo electoral del respectivo departamento, se considerarán los asuntos que los residentes soliciten sean estudiados, siempre y cuando sean de competencia de la corporación.</p> <p>Es obligación del gobernador o del secretario departamental que delegue, según sea el caso, asistir al cabildo abierto. El procedimiento para la realización de los cabildos abiertos será conforme a lo establecido en la Ley 1757 de 2015 o la norma que la modifique, adicione o la sustituya.</p>	<p><del>asambleas departamentales, deberá celebrarse por lo menos un (1) cabildo abierto en la sede de la asamblea departamental o donde acuda la Corporación mediante proposición aprobada, cuando se derive de asuntos que afecten estos territorios, y que hayan surtido su trámite de solicitud acorde con las disposiciones legales vigentes, en los que, por iniciativa de un número no inferior al cinco (5) por ciento de los ciudadanos del censo electoral del respectivo departamento, se considerarán los asuntos que los residentes soliciten sean estudiados, siempre y cuando sean de competencia de la corporación.</del></p> <p><del>Es obligación del gobernador o del secretario departamental que delegue, según sea el caso, asistir al cabildo abierto. El procedimiento para la realización de los cabildos abiertos será conforme a lo establecido en la Ley 1757 de 2015 o la norma que la modifique, adicione o la sustituya.</del></p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>
<p><b>Artículo 54. Invalidez de las sesiones y decisiones.</b> Carecerá de validez toda reunión de miembros de las asambleas que, con el propósito de ejercer funciones propias de la corporación, se efectúe por fuera de las condiciones legales o reglamentarias vigentes. Los actos que se expidan en estas circunstancias, no producirán efectos jurídicos y quienes participen en las deliberaciones, incurrirán en causal de mala conducta y serán sancionados conforme a las leyes disciplinarias.</p>	<p><b>Artículo 24 Invalidez de las sesiones y decisiones.</b> Carecerá de validez toda <del>sesión</del> de miembros de las asambleas que, con el propósito de ejercer funciones propias de la corporación, se efectúe por fuera de las condiciones legales o reglamentarias vigentes. Los actos que se expidan en estas circunstancias, no producirán efectos jurídicos y quienes participen en las deliberaciones, incurrirán en causal de mala conducta y serán sancionados conforme a las leyes disciplinarias vigentes.</p> <p><del>Parágrafo. En cada período de sesiones ordinarias de las</del></p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se modifica la expresión "reunión" por "sesión".</p> <p>Se elimina el párrafo y por unidad de materia se incluye como artículo independiente.</p>	<p><b>Artículo 55. Reuniones no presenciales de la asamblea departamental.</b> Cuando la mesa directiva de la corporación por acto motivado declare que, por razones de orden público, emergencia sanitaria, intimidación, amenaza, fuerza mayor o calamidad pública, no es posible que miembros de la corporación concurren a su sede habitual, estos podrán participar de las sesiones de manera no</p>	<p><b>Artículo 25. Reuniones no presenciales de la asamblea departamental.</b> Cuando la mesa directiva de la corporación por acto motivado declare que, por razones de orden público, emergencia sanitaria, intimidación, amenaza, fuerza mayor o calamidad pública, no es posible que miembros de la corporación concurren a su sede habitual, estos podrán participar de las sesiones de manera no</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se eliminan apartes que se consideran innecesario y repetitivos con otros artículos se ajusta redacción.</p>
<p>sede habitual, estos podrán participar de las sesiones de manera no presencial. Para tal fin, los miembros de la corporación podrán deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, Internet, conferencia virtual y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de la corporación o que les brinde o facilite el gobierno departamental; estas sesiones deberán mantener el quórum decisorio.</p> <p>Las convocatorias deberán realizarse de conformidad con lo señalado en el reglamento y garantizar el acceso a la información y documentación requerida para la deliberación.</p> <p>Las decisiones deberán adoptarse conforme a las reglas de quórum y mayorías previstas en los respectivos reglamentos, de todo lo cual deberá quedar constancia en las actas correspondientes a dichas sesiones, cuya custodia estará a cargo del secretario.</p> <p>Estas sesiones deberán convocarse con mínimo 48 horas de antelación para que las comunidades tengan la oportunidad de acceder a las deliberaciones. Para debates de control político se deberá citar con mínimo cinco (5) días de antelación la corporación deberá publicar la agenda que</p>	<p>presencial. Para tal fin, los miembros de la corporación podrán deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, utilizando para el efecto los <del>medios</del> tecnológicos en materia de telecomunicaciones, <del>tales como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, Internet, conferencia virtual y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de la corporación o que les brinde o facilite el gobierno departamental; estas sesiones deberán mantener el quórum decisorio.</del></p> <p>Las convocatorias deberán realizarse de conformidad con lo señalado en el reglamento y garantizar el acceso a la información y documentación requerida para la deliberación.</p> <p>Las decisiones deberán adoptarse conforme a las reglas de quórum y mayorías previstas en los respectivos reglamentos, de todo lo cual deberá quedar constancia en las actas correspondientes a dichas sesiones, cuya custodia estará a cargo del secretario.</p> <p>Estas sesiones deberán convocarse con mínimo 48 horas de antelación para que las comunidades tengan la oportunidad de acceder a las deliberaciones. Para debates de control político se deberá citar con mínimo cinco (5) días de antelación la corporación deberá publicar la agenda que</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Las sesiones no presenciales deberán ser</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se elimina el párrafo y por unidad de materia se incluye como artículo independiente.</p>	<p>antelación, la corporación deberá publicar la agenda que adelantará de conformidad con la programación establecida por la Junta de Voceros.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Excepto los asuntos y deliberaciones sujetos a reserva, las sesiones no presenciales deberán ser públicas, para lo cual se deberá utilizar únicamente los medios o canales habilitados para el efecto en el reglamento, y convocadas en los términos del artículo precedente.</p> <p>En caso de existir comisiones permanentes, se podrán adelantar las sesiones en los mismos términos establecidos en el presente artículo.</p> <p>Lo anterior, deberá ser regulado por las asambleas en el respectivo reglamento, estableciendo los requisitos que se deben cumplir para el uso de estos medios.</p> <p>Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen rendir declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser debatidos, o puedan aportar información o elementos de juicio útiles para las decisiones de la asamblea departamental.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Cada asamblea deberá incluir en el reglamento interno los requisitos que debe cumplir la mesa directiva de la plenaria y de las comisiones</p>	<p>requeridos por las asambleas en el respectivo reglamento, estableciendo los requisitos que se deben cumplir para el uso de los medios tecnológicos.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Excepto los asuntos y deliberaciones sujetos a reserva, las sesiones no presenciales deberán ser públicas, para lo cual se deberá utilizar únicamente los medios o canales habilitados para el efecto en el reglamento, y convocadas en los términos del artículo precedente.</p> <p><del>En caso de existir comisiones permanentes se podrán adelantar las sesiones en los mismos términos establecidos en el presente artículo.</del></p> <p><del>Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen rendir declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser debatidos, o puedan aportar información o elementos de juicio útiles para las decisiones de la asamblea departamental.</del></p> <p><b>Parágrafo 3.</b> Cada asamblea deberá incluir en el reglamento interno los requisitos que debe cumplir la mesa directiva de la plenaria y de las comisiones permanentes para el uso de estos medios tecnológicos. El presidente regional podrá convocar y deberá asistir a la respectiva sesión y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo para el funcionamiento de la respectiva entidad del nivel directivo o asesor su sustitución.</p> <p>Los actos administrativos que autoricen la concurrencia de</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>

<p>permanentes, para el uso de estos medios tecnológicos. El procurador regional servirá como vector y deberá asistir a la respectiva sesión y verificará el uso proporcional, justificado y adecuado de los medios tecnológicos. En caso de ausencia debidamente justificada podrá delegar en un funcionario de la respectiva entidad del nivel directivo o asesor su asistencia.</p> <p>Los actos administrativos que autoricen la concurrencia de algún diputado a las sesiones de manera no presencial, deberán ser comunicados al procurador dentro de los dos (2) días siguientes a su expedición y se publicarán en el medio de divulgación oficial y en la página web de la respectiva corporación o gobernación sin en ésta no existiere.</p> <p><b>Parágrafo 3.</b> El gobernador y demás entidades del nivel central y descentralizado del orden departamental, deberán brindar y garantizar el apoyo técnico y tecnológico a la Corporación, para la realización de las sesiones de manera no presencial, cuando estas no cuenten con los medios para tal efecto.</p> <p><b>Artículo 54. Mesa Directiva.</b> La Mesa Directiva de las asambleas departamentales se compondrá de un presidente y dos vicepresidentes, elegidos separadamente para un periodo de un año.</p>	<p><del>algún diputado a las sesiones de manera no presencial, deberán ser comunicados al procurador dentro de los dos días siguientes a su expedición y se publicarán en el medio de divulgación oficial y en la página web de la respectiva corporación o gobernación sin en ésta no existiere.</del></p> <p><b>Parágrafo 3.</b> El gobernador y demás entidades del nivel central y descentralizado del orden departamental, deberán brindar y garantizar el apoyo técnico y tecnológico a la Corporación, para la realización de las sesiones de manera no presencial, cuando estas no cuenten con los medios para tal efecto.</p> <p><b>Artículo 28. Mesa Directiva.</b> La Mesa Directiva de las asambleas departamentales se compondrá de un presidente y dos vicepresidentes, elegidos separadamente para un periodo de un año.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>Ningún diputado que pertenezca a la mesa directiva podrá ser reelegido en el mismo periodo constitucional; lo anterior no obsta, para que pueda hacer parte de las mesas directivas de las comisiones permanentes.</p> <p><b>Artículo 57. Participación en mesas directivas de las asambleas departamentales.</b> Las organizaciones o partidos políticos declarados en oposición y con representación en la correspondiente asamblea, tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de las mesas directivas. Los candidatos para ocupar la plaza que le correspondiera a la oposición solo podrán ser postulados por las bancadas de los partidos o las organizaciones políticas debidamente declaradas.</p> <p>La organización o partido político que hubiese ocupado este lugar en las mesas directivas no podrá volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan. Esta representación debe alternarse, en periodos sucesivos entre hombres y mujeres de conformidad con lo dispuesto por cada una de las bancadas referidas.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La declaración en oposición realizada por parte de las organizaciones o partidos políticos deberá realizarse de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 1909 de 2018 – Estatuto de la Oposición o la norma que la modifique, adicione o sustituya.</p>	<p>Ningún diputado que pertenezca a la mesa directiva podrá ser reelegido en el mismo periodo constitucional; lo anterior no obsta, para que pueda hacer parte de las mesas directivas de las comisiones permanentes.</p> <p><b>Artículo 27. Participación en mesas directivas de las asambleas departamentales.</b> Las organizaciones o partidos políticos declarados en oposición y con representación en la correspondiente asamblea, tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de las mesas directivas. Los candidatos para ocupar la plaza que le correspondiera a la oposición solo podrán ser postulados por las bancadas de los partidos o las organizaciones políticas debidamente declaradas.</p> <p>La organización o partido político que hubiese ocupado este lugar en las mesas directivas no podrá volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan. Esta representación debe alternarse, en periodos sucesivos entre hombres y mujeres de conformidad con lo dispuesto por cada una de las bancadas referidas.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La declaración en oposición realizada por parte de las organizaciones o partidos políticos deberá realizarse de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 1909 de 2018 – Estatuto de la Oposición o la norma que la modifique, adicione o sustituya.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>
<p>modifique, adicione o sustituya.</p> <p><b>Artículo 58. Representación legal.</b> La representación legal de la asamblea departamental corresponderá al presidente de la corporación, quien comparecerá personalmente o por medio de apoderados en los procesos en que ésta sea parte. Igualmente, en ausencia temporal de este, lo asumirá el primer vicepresidente, salvo que por circunstancias excepcionales la plenaria decida designar un presidente ad hoc.</p> <p><b>Artículo 59. Comisiones.</b> Las asambleas integrarán comisiones permanentes encargadas de adelantar debates de control político y dar primer debate a los proyectos de ordenanza, según los asuntos que se le asignen acorde con su propio reglamento.</p> <p>Las asambleas deberán contar como mínimo con una comisión permanente del Plan de Desarrollo y una de Hacienda. Si dichas comisiones no se hubieren creado o integrado, dentro del periodo de sesiones ordinarias o la promulgación de la presente ley deberá adelantarse su conformación en los términos reglamentarios.</p> <p>Hasta tanto se conformen en las asambleas en donde no se hayan integrado, los informes relacionados con dichas comisiones, se rendirán por las Comisiones Accidentales que la Mesa</p>	<p><b>Artículo 28. Representación legal.</b> La representación legal de la asamblea departamental corresponderá al presidente de la corporación, quien comparecerá personalmente o por medio de apoderados en los procesos en que ésta sea parte. Igualmente, en ausencia temporal de este, lo asumirá el primer vicepresidente, <del>salvo que por circunstancias excepcionales la plenaria decida designar un presidente ad hoc.</del></p> <p><b>Artículo 29. Comisiones.</b> Las asambleas integrarán <del>en sesión plenaria</del> las comisiones permanentes encargadas de adelantar debates de control político y dar primer debate a los proyectos de ordenanza, según los asuntos que se le asignen acorde con su propio reglamento.</p> <p>Las asambleas deberán contar como mínimo con una comisión permanente del Plan de Desarrollo y una de Hacienda. Si dichas comisiones no se hubieren creado o integrado, dentro del periodo de sesiones ordinarias o la promulgación de la presente ley deberá adelantarse su conformación en los términos reglamentarios.</p> <p><b>De manera transitoria, en caso de no estar conformados las comisiones de las que trata el inciso anterior, la Mesa directiva designará comisiones accidentales a fin de que rindan informes del Plan de Desarrollo y de hacienda.</b></p> <p>Todo diputado deberá hacer parte de una comisión</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>A solicitud de la federación de diputados, se elimina la última expresión, en el entendido que se puede presentar para amplias interpretaciones y puede generar conflictos en las corporaciones.</p> <p>Se ajusta redacción, para hacer más comprensible el 3 inciso.</p> <p>- Debido a que la Asamblea Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, está conformada por 11 diputados, se considera necesario hacer precisión que se exceptúa la mención en el artículo sobre: todo diputado deberá hacer parte de una comisión permanente y en ningún caso podrán pertenecer a dos o más comisiones permanentes.</p>	<p>Directiva designará para tal efecto.</p> <p>Todo diputado deberá hacer parte de una comisión permanente y en ningún caso podrán pertenecer a dos o más comisiones permanentes.</p> <p>El reglamento establecerá la rotación anual de sus miembros durante el periodo constitucional.</p> <p>Además de las Comisiones Permanentes, con el objeto de fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor normativa y de control político, las asambleas departamentales crearán la Comisión para la Equidad de la Mujer, la cual estará integrada por las diputadas que voluntariamente manifiesten su interés de participar, sin que esto supla la obligatoriedad de hacer parte de las comisiones permanentes.</p> <p>La Comisión para la Equidad de la Mujer, además de las funciones que la plenaria de la asamblea delegue, ejercerá las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dictar su propio reglamento.</li> <li>2. Ejercer el control político en temas de género.</li> </ol>	<p>permanente y en ningún caso podrán pertenecer a dos o más comisiones permanentes, <b>exceptúese a la Asamblea Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.</b></p> <p><b>La mesa directiva podrá autorizar el cambio o traslado que de Comisiones acuerden y soliciten los respectivos integrantes. Dispuso el cambio, los nuevos miembros lo harán hasta el final del periodo constitucional.</b></p> <p>Además de las Comisiones Permanentes, con el objeto de fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor normativa y de control político, las asambleas departamentales crearán la Comisión para la Equidad de la Mujer, la cual estará integrada por las diputadas que voluntariamente manifiesten su interés de participar, sin que esto supla la obligatoriedad de hacer parte de las comisiones permanentes.</p> <p>La Comisión para la Equidad de la Mujer, además de las funciones que la plenaria de la asamblea delegue, ejercerá las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dictar su propio reglamento.</b></li> <li>2. Ejercer el control político en temas de género.</li> </ol>	<p>Se elimina la obligación de regular la rotación de los diputados que conforman las comisiones, en aras de garantizar la especialidad en los asuntos que trata la comisión.</p> <p>Se propone que sean los diputados los que acuerden los traslados y que sea la mesa directiva la encargada de autorizar o no el traslado.</p> <p>En el último inciso se elimina la expresión "voluntaria y optativa", en razón a que siempre debe existir la comisión de la mujer, así en el departamento no se hayan elegido diputadas.</p>

<p>3. Realizar el seguimiento a la implementación de los incentivos relacionados con los temas de género en el departamento.</p> <p>4. Promover la participación de las mujeres en los cargos de elección popular y de designación, de conformidad con la Ley 581 de 2000, y las normas que la adicionen o modifique.</p> <p>5. Ser interlocutoras de las organizaciones y grupos de mujeres.</p> <p>6. Fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres y las políticas públicas existentes.</p> <p>7. Hacer seguimiento a los procesos de verdad justicia y reparación en sus territorios, a los que haya lugar.</p>	<p>3. Realizar el seguimiento a la implementación de los incentivos relacionados con los temas de género, en el departamento.</p> <p>4. Promover la participación de las mujeres en los cargos de elección popular y de designación, de conformidad con la Ley 581 de 2000, y las normas que la adicionen o modifique.</p> <p>5. Ser interlocutoras de las organizaciones y grupos de mujeres.</p> <p>6. Fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres y las políticas públicas existentes.</p> <p>7. Hacer seguimiento a los procesos de verdad justicia y reparación para los delitos cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado interno en sus territorios, a los que haya lugar.</p> <p>8. Realizar seguimiento a la implementación de políticas departamentales en temas de género.</p>	<p>Se considera que debe dejarse con períodos de 1 año y no de 4, teniendo en cuenta que es un funcionario de apoyo y confianza de la respectiva mesa directiva, siguiendo la que existe hoy para los concejos.</p> <p>- La calidad que ostenta el secretario es de servidor público, en ese sentido, la asamblea no tiene competencia para reglamentar las ausencias temporales, toda vez que dichos se encuentran regulados mediante el Decreto 1083 2015.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se elimina el segundo inciso en el entendido que ya está incluido en el artículo anterior.</p> <p>La revocatoria del mandato es una decisión política que adopta el electorado, razón por la cual no debe constituir un impedimento para ejercer el cargo de secretario general.</p>
<p>obligatoriamente de una convocatoria pública, conforme a lo señalado en la Constitución y la ley. El período será de cuatro (4) años, reelegible, su elección se realizará en el primer período de sesiones ordinarias respectivo.</p> <p>En caso de falta absoluta se realizará nueva convocatoria para la elección por el resto del período. Las ausencias temporales serán reglamentadas por la asamblea departamental.</p> <p>El secretario presentará un informe anual a la asamblea el cual se someterá a la plenaria de la misma para su evaluación.</p> <p><b>Artículo 42. Calidades del secretario.</b> Para ser elegido secretario general de la asamblea se requiere tener título profesional universitario y cumplir con los demás requisitos para servidores públicos. En todo caso, no podrá ser nombrado quien haya perdido la investidura de un cargo de elección popular, se le haya revocado el mandato o haya sido sancionado disciplinariamente por falta grave o gravísima de conformidad con la ley o condenada a pena privativa de la libertad, salvo por el delito político o culposo.</p> <p>En caso de falta absoluta, habrá nuevo nombramiento para el resto del período y las</p>	<p>convocatoria pública, conforme a lo señalado en la Constitución y la ley. El período será de <del>un (1) año</del>, reelegible, su elección se realizará en el primer período de sesiones ordinarias respectivo.</p> <p>En caso de falta absoluta se realizará nueva convocatoria para la elección por el resto del período. <del>Las ausencias temporales serán reglamentadas por la asamblea departamental.</del></p> <p>El secretario presentará un informe anual a la asamblea el cual se someterá a la plenaria de la misma para su evaluación.</p> <p><del>Parágrafo. No puede ser designado secretario general un miembro de la Asamblea.</del></p> <p><b>Artículo 31. Calidades del secretario.</b> Para ser elegido secretario general de la asamblea <del>departamental</del> se requiere tener título profesional universitario y cumplir con los demás requisitos para servidores públicos. En todo caso, no podrá ser nombrado quien haya perdido la investidura de un cargo de elección popular, se le haya revocado el mandato o haya sido sancionado disciplinariamente por falta grave o gravísima de conformidad con la ley o condenada a pena privativa de la libertad, salvo por el delito político o culposo.</p> <p><del>En caso de falta absoluta, habrá nuevo nombramiento para el resto del período y las</del></p>	<p>Se considera que debe dejarse con períodos de 1 año y no de 4, teniendo en cuenta que es un funcionario de apoyo y confianza de la respectiva mesa directiva, siguiendo la que existe hoy para los concejos.</p> <p>- La calidad que ostenta el secretario es de servidor público, en ese sentido, la asamblea no tiene competencia para reglamentar las ausencias temporales, toda vez que dichos se encuentran regulados mediante el Decreto 1083 2015.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se elimina el segundo inciso en el entendido que ya está incluido en el artículo anterior.</p> <p>La revocatoria del mandato es una decisión política que adopta el electorado, razón por la cual no debe constituir un impedimento para ejercer el cargo de secretario general.</p>
<p>8. Realizar seguimiento a la implementación de políticas departamentales en temas de género.</p> <p>9. Realizar seguimiento a la implementación de políticas departamentales para incentivar el desarrollo laboral de las mujeres.</p> <p>Para la conformación se tendrá en cuenta a todas las mujeres de la corporación respectiva, de igual forma la participación voluntaria y optativa de los diputados, en los departamentos en donde no hayan sido elegidos diputados, la mesa directiva deberá garantizar su conformación y funcionamiento, con un número impar de sus miembros.</p>	<p>9. Realizar seguimiento a la implementación de políticas departamentales para incentivar el desarrollo laboral de las mujeres.</p> <p>Para la conformación se tendrá en cuenta a todas las mujeres de la corporación respectiva, de igual forma la participación voluntaria y optativa de los diputados, en los departamentos en donde no hayan sido elegidos diputados, la mesa directiva deberá garantizar su conformación y funcionamiento, con un número impar de sus miembros.</p> <p><b>Artículo 40. Otras comisiones.</b> Además de las comisiones permanentes, la comisión de la equidad de la mujer y las comisiones <del>accidentales de género de la corporación</del> podrá establecer dentro de su reglamento comisiones especializadas con el fin de garantizar el cumplimiento de las competencias <del>atribuidas</del>, <del>permitiendo siempre la participación equitativa entre la totalidad de sus miembros</del>, estas comisiones deberán ser rotativas.</p>	<p>Se propone eliminar, en el entendido que las comisiones accidentales ya pueden garantizar el cumplimiento de las competencias atribuidas y la creación de otras comisiones puede generar confusiones.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p>
<p><b>Artículo 41. Secretario General.</b> La elección del secretario general deberá estar precedida</p>	<p><b>Artículo 30. Secretario General.</b> La elección del secretario general deberá estar precedida</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>
<p>ausencias temporales las reglamentará la Asamblea Departamental.</p> <p><b>Artículo 43. Elección de funcionarios.</b> La asamblea se instalará y elegirá a los funcionarios que por disposición constitucional y legal, deben efectuarse en los primeros diez (10) días del primer período de sesiones ordinarias correspondiente a la iniciación de sus períodos constitucionales, previa convocatoria, que deberá realizarse con tres (3) días de anticipación.</p> <p>En los casos de faltas absolutas del funcionario, la elección podrá hacerse en cualquier período de sesiones ordinarias o extraordinarias que para el efecto se solicite por parte del presidente de la corporación al gobernador convocar, la cual deberá ser máxima dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud.</p> <p>Toda elección después de haberse iniciado un período, se entiende realizada para el resto del período en curso.</p> <p><b>Artículo 44. Posesión de los funcionarios elegidos por las asambleas.</b> Los funcionarios elegidos por las asambleas tendrán periodos institucionales y el plazo para posesionarse será de quince (15) días calendario, excepto en los casos de fuerza mayor debidamente certificada, en los cuales se prorrogará este término por quince (15) días más, lo</p>	<p><b>Artículo 32. Elección del contador.</b> Los Contadores departamentales serán elegidos por las Asambleas departamentales de forma conformada por <del>cuatro</del> <del>abstengan los mayores puntajes en la convocatoria pública</del>, <del>siguiendo los principios de transparencia, publicidad, pluralidad, participación ciudadana y equidad de género</del>, <del>para un período de cuatro años que no podrá coincidir con el período del correspondiente gobernador y alcalde.</del></p> <p>El contador será elegido en el último período de sesiones ordinarias que antecede al inicio del período del nuevo contador.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>En el entendido que ya hay un artículo que regula la elección del secretario, se ajusta este, para la elección del contador, pues son los dos únicos funcionarios que elige la corporación.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p>

<p>cuales serán improrrogables.</p> <p>En la eventualidad que no pueda poseionarse el funcionario elegido por persistir las circunstancias, se deberá adelantarse nuevamente la convocatoria para la elección.</p> <p>Ninguna autoridad podrá dar posesión a funcionarios elegidos por la asamblea que no acrediten las calidades exigidas para el cargo, o que estén incursos en las causales de inhabilidad que señalen la Constitución y la Ley, la cual deberá estar debidamente acreditada.</p> <p>El funcionario que contuviere dispuesto en este artículo, incurrirá en causal de mala conducta.</p>	<p>serán improrrogables.</p> <p>En la eventualidad que no pueda poseionarse el funcionario elegido por persistir las circunstancias, se deberá adelantarse nuevamente la convocatoria para la elección.</p> <p>Ninguna autoridad podrá dar posesión a funcionarios elegidos que no acrediten las calidades exigidas para el cargo, o que estén incursos en las causales de inhabilidad que señalen la Constitución y la Ley, la cual deberá estar debidamente acreditada.</p> <p>El funcionario que contuviere dispuesto en este artículo, incurrirá en causal de mala conducta.</p>	<p>En la eventualidad que no pueda poseionarse el funcionario elegido por persistir las circunstancias, se deberá adelantarse nuevamente la convocatoria para la elección.</p> <p>Ninguna autoridad podrá dar posesión a funcionarios elegidos que no acrediten las calidades exigidas para el cargo, o que estén incursos en las causales de inhabilidad que señalen la Constitución y la Ley, la cual deberá estar debidamente acreditada.</p> <p>El funcionario que contuviere dispuesto en este artículo, incurrirá en causal de mala conducta.</p>	<p>Los reglamentos se tramitarán con las formalidades de todo proyecto de ordenanza y no requerirá sanción ejecutiva.</p> <p>Los reglamentos departamentales deberán ajustarse a lo prescrito en la presente ley, dentro de seis (6) meses siguientes a su promulgación.</p> <p>Los reglamentos departamentales deberán ajustarse a lo prescrito en la presente ley, dentro de seis (6) meses siguientes a su promulgación.</p> <p><b>Artículo 64. Quórum.</b> Las asambleas departamentales y sus comisiones no podrán iniciar sesión hasta contar con quórum deliberatorio conformado con no menos de la cuarta parte de sus miembros. Las decisiones solo podrán adoptarse con la presencia en el recinto de la mayoría de los miembros, salvo que la Constitución o la Ley exijan un quórum o mayoría especial.</p> <p><b>Artículo 65. Mayorías decisoria.</b> La asamblea en sesión plenaria y comisiones permanentes, podrán decidir, por mayoría de los votos de los asistentes, entendida como la mitad más uno de dichos votos, salvo que la constitución exija expresamente una mayoría especial.</p> <p><b>Artículo 66. Control político.</b> Corresponde a la asamblea ejercer función de control y vigilancia a la administración departamental. Con tal fin, podrá</p>	<p>Los reglamentos departamentales deberán ajustarse a lo prescrito en la presente ley, dentro de seis (6) meses siguientes a su promulgación.</p> <p>Los reglamentos departamentales deberán ajustarse a lo prescrito en la presente ley, dentro de seis (6) meses siguientes a su promulgación.</p> <p><b>Artículo 65. Quórum.</b> Las asambleas departamentales y sus comisiones no podrán iniciar sesión hasta contar con quórum deliberatorio conformado con no menos de la cuarta parte de sus miembros. Las decisiones solo podrán adoptarse con el quórum decisorio que se conforme con la asistencia o remota de la mayoría de los miembros, salvo que la Constitución o la Ley exijan un quórum o mayoría especial.</p> <p><b>Artículo 66. Mayorías decisoria.</b> En sesión plenaria y comisiones permanentes, se podrá decidir por mayoría simple, la cual se constituye por los votos de los asistentes, entendida como la mitad más uno de dichos votos, salvo que la constitución exija expresamente una mayoría especial.</p> <p><b>Artículo 67. Control político.</b> Corresponde a la asamblea ejercer función de control y vigilancia a la administración departamental. Con tal fin, podrá</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se ajusta el artículo a fin de permitir su aplicabilidad, en caso de que las sesiones se adelanten de forma presencial o remota.</p> <p>Se adiciona lo referente al quórum decisorio.</p> <p>Se ajusta la numeración y la redacción del artículo.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se considera necesario que el</p>
<p>despacho, así como al contralor departamental.</p> <p>Las citaciones deberán realizarse con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y formularse en cuestionario escrito presentado por la totalidad de la bancada que proponga el debate. En los cinco (5) días siguientes al recibo de la citación, el funcionario citado deberá radicar en la secretaría general de la corporación la respuesta al cuestionario, en medio escrito y magnético, según esté definido en el reglamento interno. El debate objeto de la citación encabezará el Orden del Día de la sesión y no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario, en la eventualidad que el debate no se concluya en la sesión convocada, la corporación deberá continuar en la sesión inmediatamente siguiente, salvo que por circunstancias excepcionales se deba adelantar otros temas de urgencia. Sin embargo, todo debate de control político debe concluirse.</p> <p>En la sesión inicial del debate, se deberá garantizar la intervención del funcionario citado.</p> <p>De la misma manera podrán invitar a los gerentes o jefes seccionales de las entidades nacionales que tengan jurisdicción en el departamento. También podrá solicitarse información escrita a otras autoridades departamentales y de los municipios del departamento, especialmente.</p>	<p>despacho, así como al contralor departamental.</p> <p>Las citaciones deberán realizarse con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y formularse en cuestionario escrito, presentado por la totalidad de la bancada que proponga el debate. Dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la citación, el funcionario citado deberá radicar en la secretaría general de la corporación la respuesta al cuestionario, en medio escrito y magnético, según esté definido en el reglamento interno. El debate objeto de la citación encabezará el Orden del Día de la sesión y no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario, en la eventualidad que el debate no se concluya en la sesión convocada, la corporación deberá continuar en la sesión inmediatamente siguiente, salvo que por circunstancias excepcionales se deba adelantar otros temas de urgencia. Sin embargo, todo debate de control político debe concluirse.</p> <p>En la sesión inicial del debate, se deberá garantizar la intervención del funcionario citado.</p> <p>De la misma manera podrán invitar a los gerentes o jefes seccionales de las entidades nacionales que tengan jurisdicción en el departamento. También podrá solicitarse información escrita a otras autoridades departamentales y de los municipios del departamento, especialmente.</p> <p>En todo caso, las citaciones e informaciones deberán</p>	<p>control político no se limita a la decisión de toda la bancada y por el contrario se respeta la autonomía de cada uno de los diputados.</p>	<p>con relación a obras o actividades que se adelantan con recursos aportados por el departamento.</p> <p>En todo caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos propios del cargo del respectivo funcionario; en caso de que se interogue en el transcurso del debate sobre temas no incluidos en el cuestionario inicial, será a voluntad del citado, dar respuesta a la corporación, siempre teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que se sustenten por parte de los diputados y garantizando el derecho a la información.</p> <p><b>Parágrafo:</b> La asamblea podrá citar a los jefes de departamento administrativo, gerentes, directivos y representantes legales de entidades descentralizadas del departamento para que rindan informe sobre su gestión.</p> <p><b>Artículo 67. Moción de censura.</b> La mitad más uno de los miembros que componen la asamblea podrá proponer moción de censura respecto de los secretarios de despacho del gobernador, de los gerentes o directivos de institutos descentralizados del orden departamental, por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones de la asamblea. La votación se hará entre el décimo día siguiente a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá</p>	<p>referirse a asuntos propios del cargo del respectivo funcionario; en caso de que se interogue en el transcurso del debate sobre temas no incluidos en el cuestionario inicial, será a voluntad del citado, dar respuesta a la corporación, siempre teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que se sustenten por parte de los diputados y garantizando el derecho a la información.</p> <p><b>Parágrafo:</b> La asamblea podrá citar a los jefes de departamento administrativo, gerentes, directivos y representantes legales de entidades descentralizadas del departamento para que rindan informe sobre su gestión.</p> <p><b>Artículo 68. Moción de censura.</b> La tercera parte de los miembros que componen la asamblea, podrán proponer moción de censura respecto de los secretarios de despacho del gobernador, de los gerentes o directivos de institutos descentralizados del orden departamental, por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones de la asamblea. La votación se hará entre el décimo día siguiente a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>- Se ajusta el artículo, conforme al numeral 14 del artículo 300 de la Constitución Política.</p> <p>- Se elimina el último inciso en virtud del principio de igualdad, pues dicha disposición no opera para los otros corporaciones</p>

<p>del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran la corporación. Una vez aprobado, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos.</p> <p>La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo.</p>	<p>el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran la corporación. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos.</p> <p><b>La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo.</b></p>	<p>públicas.</p>	<p>a la Procuraduría General de la Nación, la procuraduría regional, para lo de su competencia. En el caso de las personas naturales o jurídicas, se dará aplicación a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.</p> <p>Los citados podrán abstenerse de asistir solo con excusa justificada.</p>	<p><del>de acuerdo en el Código de Procedimiento Civil.</del></p> <p>Las citadas podrán abstenerse de asistir solo con excusa justificada.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se considera necesario establecer que el acto de las sesiones, también se deberá enviar al correo electrónico de los diputados.</p>
<p><b>Artículo 70. Convocatoria a Personas Naturales o Jurídicas.</b> Con aprobación de la plenaria o de los miembros de cualquier comisión permanente de la asamblea departamental, se podrá solicitar información por escrito a las personas naturales o por intermedio de sus representantes a las personas jurídicas que consideren necesarias, dentro de los términos de la presente ley, para que en audiencia especial rindan declaraciones orales o escritas sobre asuntos de interés público o investigado por la misma.</p> <p>La asamblea departamental ante la renuncia o negativa de las autoridades de atender las citaciones o rendir los informes solicitados en las fechas previstas para ello, dará trámite del hecho.</p>	<p><b>Artículo 32. Convocatoria a Personas Naturales o Jurídicas de naturaleza privada. Dentro de los términos de la presente ley,</b> con aprobación de la plenaria o de los miembros de cualquier comisión permanente, de la asamblea departamental se podrá solicitar información por escrito a las personas <b>jurídicas que presten servicios públicos o administren recursos de la misma naturaleza</b>, para que en audiencia especial rindan declaraciones orales o escritas sobre asuntos de interés público, o <b>investigado por la misma.</b></p> <p><b>La asamblea departamental ante la renuncia o negativa de las autoridades de atender las citaciones o rendir los informes solicitados en las fechas previstas para ello, dará trámite del hecho a la Procuraduría General de la Nación, la procuraduría regional, para lo de su competencia. En el caso de las personas naturales o jurídicas, se dará aplicación a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.</b></p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se elimina la facultad de requerir o convocar a personas naturales, por considerarse inconveniente.</p> <p>Se elimina el segundo inciso en el entendido que la procuraduría no tiene competencia respecto de las personas jurídicas de naturaleza privada.</p>	<p><b>Artículo 71. Actas.</b> De las sesiones de las asambleas y de sus comisiones permanentes el secretario de la corporación levantará las correspondientes actas que contendrán, entre otras, una relación sucinta de los temas debatidos; de los nombres de los diputados asistentes, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las comisiones designadas y las decisiones adoptadas. Sin embargo, deberán garantizar por medios electrónicos idóneos la conservación del desarrollo de las sesiones de control político y control normativo.</p> <p>Abierta la sesión, el presidente someterá a discusión y aprobación, previa lectura si los miembros de la corporación lo consideran necesario, el acta de la sesión anterior. No obstante, el acta debe ser puesta previamente en conocimiento de los miembros de la corporación, bien por su publicación en la página web de <b>esta ley</b> y <b>el correo electrónico de los diputados</b>, o mediante el medio de que disponga la <b>asamblea</b> para estos efectos.</p>	<p><b>Artículo 40. Actas.</b> De las sesiones de las asambleas y de sus comisiones permanentes, el secretario de la corporación levantará las correspondientes actas que contendrán, entre otras, una relación sucinta de los temas <b>debatidos y discutidos</b>, de los nombres de los diputados asistentes, de las personas que hayan intervenido, de <b>las comunicaciones leídas</b>, las proposiciones presentadas, las comisiones designadas y las decisiones adoptadas. Sin embargo, deberán garantizar por medios electrónicos idóneos la conservación del desarrollo de las sesiones de control político y control normativo.</p> <p>Abierta la sesión, el presidente someterá a discusión y aprobación, previa lectura si los miembros de la corporación lo consideran necesario, el acta de la sesión anterior. No obstante, el acta debe ser puesta previamente en conocimiento de los miembros de la corporación, bien por su publicación en la página web de <b>esta ley</b> y <b>el correo electrónico de los diputados</b>, o mediante el medio de que disponga la <b>asamblea</b> para estos efectos.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se considera necesario establecer que el acto de las sesiones, también se deberá enviar al correo electrónico de los diputados.</p>
<p>bien por su publicación en la página web de la corporación, o mediante el medio de que disponga el departamento para estos efectos.</p> <p>Es responsabilidad de los miembros de la corporación tener conocimiento de las actas y demás información pertinente para el cumplimiento de sus funciones.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> El secretario tiene la obligación de conservar las actas en medio magnético y escrito y los demás documentos que determinen las ordenanzas, o que ordene el presidente. Asimismo, la guarda y conservación del archivo documental <del>de la documentación</del> de la corporación.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> La corporación garantizará que todos las actas de sesiones <del>en audiencia pública</del> publicadas en medios electrónicos <b>o físicos</b> <del>o accesibles a toda la población, especialmente a aquella en condición de discapacidad.</del></p>	<p>Es responsabilidad de los miembros de la corporación tener conocimiento de las actas y demás información pertinente para el cumplimiento de sus funciones.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> El secretario tiene la obligación de conservar las actas en medio magnético y escrito y los demás documentos que determinen las ordenanzas, o que ordene el presidente. Asimismo, la guarda y conservación del archivo documental <del>de la documentación</del> de la corporación.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> La corporación garantizará que todos las actas de sesiones <del>en audiencia pública</del> publicadas en medios electrónicos <b>o físicos</b> <del>o accesibles a toda la población, especialmente a aquella en condición de discapacidad.</del></p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se considera que la publicidad de las sesiones de las asambleas, debe estar en medios electrónicos necesariamente, en aras de garantizar la efectividad del principio de publicidad.</p> <p>Se elimina la última parte del inciso por considerar repetitiva.</p>	<p>los diputados a las sesiones, sin excusa justificada y válida, aceptada mediante resolución por la mesa directiva, no causará la remuneración y prestaciones correspondientes, sin perjuicio de la pérdida de la investidura cuando hubiere pérdida de la investidura cuando hubiere lugar.</p> <p><b>Artículo 74. Delegación de competencias.</b> La asamblea podrá delegar en los Concejos Distritales o municipales de su jurisdicción, parte de las competencias que le son propias, conforme a las siguientes normas generales:</p> <p>a) La delegación se hará con el fin de obtener un mayor grado de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios. En todo caso, dichas competencias están subordinadas al plan de desarrollo del departamento;</p> <p>b) No se podrán descentralizar servicios ni asignar responsabilidades, sin la previa destinación de los recursos suficientes para atenderlos.</p>	<p>diputados a las sesiones, sin excusa justificada y válida, aceptada mediante resolución por la mesa directiva, no causará la remuneración y prestaciones correspondientes, sin perjuicio de la pérdida de la investidura cuando hubiere lugar.</p> <p><b>Artículo 74. Delegación de competencias.</b> La asamblea podrá delegar en los Concejos Distritales o municipales de su jurisdicción, parte de las competencias que le son propias, conforme a las siguientes normas generales:</p> <p>a) La delegación se hará con el fin de obtener un mayor grado de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios. En todo caso, dichas competencias están subordinadas al plan de desarrollo del departamento;</p> <p>b) No se podrán descentralizar servicios ni asignar responsabilidades, sin la previa destinación de los recursos suficientes para atenderlos.</p>	<p>Se elimina por contrarior la ley 489 de 1998.</p>
<p><b>Artículo 73. Inasistencia.</b> La falta de asistencia de</p>	<p><b>Artículo 42. Inasistencia.</b> La falta de asistencia de los</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p><b>Artículo 75. Rendición de cuentas.</b> En sesión plenaria, la corporación representada políticamente en las bancadas y el secretario general, deberán rendir cuentas semestralmente a la ciudadanía de sus actuaciones, en donde indicarán de manera detallada, los debates de control político y normativo, así como las gestiones</p>	<p><b>Artículo 43. Rendición de cuentas.</b> Las Asambleas deberán elaborar anualmente un Plan de Acción de Rendición de Cuentas, cumplimiento con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas, que deberá ser publicado con observancia de la consagrada en la presente ley.</p> <p>Los presidentes de las Asambleas y de sus comisiones permanentes, elaborarán un informe de rendición de</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se considera que la rendición de cuentas semestral es un desgaste innecesario, razón por la cual se propone estabecerla de forma anual y hacer más</p>



<p>adelantados en desarrollo de sus funciones.</p>	<p>cuentas del desempeño de la respectiva cátedra, mínimo una vez al año dentro de los tres primeros meses a partir del segundo año.</p> <p>Los informes correspondientes quedarán a disposición del público de manera permanente en la página web y en las oficinas de archivo y en la correspondiente Secretaría General.</p> <p>Estos contendrán como mínimo una relación de las proyecciones presentadas, negocios aprobados y pendientes, un inventario de los debates adelantados y de los proyectos de acuerdo presentados, negocios aprobados y pendientes, y un informe tanto de los aspectos administrativos, financieros, laborales y contractuales correspondientes así como de los asuntos que estando pendientes requieren continuidad en su trámite.</p>	<p>especifica esta obligación.</p>	<p>doce (12) meses inmediatamente anterior a la fecha de la elección o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época debidamente certificado por autoridad competente.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Para ser elegido diputado en el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se requiere además de las determinadas por la Ley, ser residente del departamento conforme a las normas de control de densidad poblacional y tener residencia en la respectiva circunscripción por más de diez (10) años cumplidos con anterioridad al primer día del período de inscripción.</p>	<p>consecutivos en cualquier época, debidamente certificado por autoridad competente.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Para ser elegido diputado en el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se requiere además de las determinadas por la Ley, ser residente del departamento conforme a las normas de control de densidad poblacional y tener residencia en la respectiva circunscripción por más de diez (10) años cumplidos con anterioridad al primer día del período de inscripción.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>
<p><b>CAPÍTULO II</b> <b>De los Diputados</b></p> <p><b>Artículo 76. Calidades.</b> Los diputados serán elegidos popularmente para un período de cuatro (4) años y tendrán la calidad de servidores públicos.</p> <p>Para ser diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos y culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante los</p>	<p><b>Sin modificaciones.</b></p> <p><b>Artículo 44. Calidades.</b> Los diputados serán elegidos popularmente para un período de cuatro (4) años y tendrán la calidad de servidores públicos.</p> <p>Para ser diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos y culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la fecha de la elección o durante un período mínimo de tres (3) años</p>	<p>Se ajusta la numeración y la redacción.</p>	<p><b>Artículo 77. Posesión.</b> El presidente de la asamblea tomará posesión ante la corporación, en sesión formal que se llevará a cabo el primero (1) de enero del año siguiente al de su elección en sesión plenaria, que se convocará por el presidente de la corporación que termina el período constitucional y comunicada por el secretario general actuante. Los diputados electos se posesionarán en la misma sesión ante el presidente ad-hoc que se designe, y los miembros de ellas, secretarios y subalternos, si los hubiere, ante el presidente; para tal efecto, prestarán juramento en los siguientes términos: Juro a Dios y prometo al pueblo, cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.</p>	<p><b>Artículo 44. Posesión.</b> El presidente de la asamblea tomará posesión ante la corporación, en sesión formal que se llevará a cabo el primero (1) de enero del año siguiente al de su elección en sesión plenaria, que se convocará por el presidente y en su ausencia por alguno de los vicepresidentes de la corporación que termina el período constitucional y comunicada por el secretario general actuante. Los diputados electos se posesionarán en la misma sesión ante el presidente ad-hoc que se designe, y los miembros de ellas, secretarios y subalternos, si los hubiere, ante el presidente; para tal efecto, prestarán juramento en los siguientes términos: Juro a Dios y prometo al pueblo, cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.</p>	<p>Se considera pertinente, otorgar la facultad a los vicepresidentes.</p>
<p><b>Artículo 78. Período de los diputados.</b> El período de los diputados iniciará el primero de enero del año siguiente al de su elección, fecha en la cual se deberá celebrar la sesión de instalación y concluirá el treinta y uno de diciembre (31) del último año de dicho período.</p> <p><b>Artículo 79. De las inhabilidades de los diputados.</b> Además de las inhabilidades establecidas en la Constitución y el Código Único Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 122 inciso final de la constitución política, quien haya sido condenado, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior, excepto por delitos políticos o culposos.</li> <li>2. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o la de diputado o concejal; o excluido del</li> </ol>	<p><b>Artículo 44. Período de los diputados.</b> El período de los diputados iniciará el primero de enero del año siguiente al de su elección, fecha en la cual se deberá celebrar la sesión de instalación y concluirá el treinta y uno de diciembre (31) del último año de dicho período.</p> <p><b>Artículo 47. De las inhabilidades de los diputados.</b> Además de las inhabilidades establecidas en la Constitución y el Código Único Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 122 inciso final de la constitución política, quien haya sido condenado, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior, excepto por delitos políticos o culposos.</li> <li>2. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.</li> <li>3. Quiénes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.</li> </ol>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se propone especificar que el período es de 4 años.</p> <p>Se ajusta la numeración y la redacción.</p> <p>En el numeral 1, se elimina la expresión "excepto por delitos políticos o culposos", en el entendido que ya está incluida en el numeral 2 y resulta repetitiva.</p>	<p>ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Quiénes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.</li> <li>4. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad pública, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gastos en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.</li> <li>5. Quien dentro los doce (12) meses anteriores a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad pública, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien, como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gastos en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.</li> <li>5. Quien dentro los doce (12) meses anteriores a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos, domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.</li> <li>6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses</li> </ol>	<p>Se ajusta la numeración.</p>

<p>año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.</p> <p>4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento para elección de cargos o de corporaciones públicas que deben realizarse en el mismo departamento misma fecha.</p>	<p>anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento para elección de cargos o de corporaciones públicas que deben realizarse en el departamento en la misma fecha.</p> <p>7. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, haya pertenecido a juntas directivas de personas jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan en fondos públicos procedentes del respectivo departamento o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.</p> <p>8. Quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.</p>	<p>7. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, haya pertenecido a juntas directivas de personas jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo departamento o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.</p> <p>8. Quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Interpretétese para todos sus efectos, que las prohibiciones descritas en el artículo, se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, que funciona en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran al respectivo ente territorial.</p> <p><b>Artículo 80. De las incompatibilidades de los diputados.</b> Los diputados no podrán:</p> <p>1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 de la Constitución Política, no</p>	<p><b>Parágrafo.</b> Interpretétese para todos sus efectos, que las prohibiciones descritas en el artículo, se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, que funciona en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran a la respectiva entidad territorial.</p> <p><b>Artículo 80. De las incompatibilidades de los diputados.</b> Los diputados no podrán:</p> <p>1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 de la Constitución Política, no</p> <p>Se ajusta la numeración. Se hace un ajuste de redacción en el parágrafo.</p>
<p>podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieron perderán su investidura.</p> <p>2. Intervenir en la gestión de negocios o ser apoderado ante entidades del respectivo departamento o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones de que trata el artículo siguiente.</p> <p>3. Ser miembro de juntas o consejos directivos del sector central o descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento, o de instituciones que administren tributos, tasas o contribuciones procedentes del mismo.</p> <p>4. Celebrar contratos o realizar gestiones con quienes administren, manejen, o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo departamento, o sean contratistas del mismo, o reciban donaciones de éste.</p> <p>5. Ser representante legal, miembro de juntas o consejos directivos, auditor o revisor fiscal, empleado o contratista de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento.</p>	<p>alguno en la administración pública, y si lo hicieron perderán su investidura.</p> <p>2. Intervenir en la gestión de negocios o ser apoderado ante entidades del respectivo departamento o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones de que trata el artículo siguiente.</p> <p>3. Ser miembro de juntas o consejos directivos del sector central o descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento, o de instituciones que administren tributos, tasas o contribuciones procedentes del mismo.</p> <p>4. Celebrar contratos o realizar gestiones con quienes administren, manejen, o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo departamento, o sean contratistas del mismo, o reciban donaciones de éste.</p> <p>5. Ser representante legal, miembro de juntas o consejos directivos, auditor o revisor fiscal, empleado o contratista de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Interpretétese para todos sus efectos, que las incompatibilidades descritas en el artículo se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y</p>	<p>seguridad social en el respectivo departamento.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Interpretétese para todos sus efectos, que las prohibiciones descritas en el artículo se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, que funciona en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran al respectivo ente territorial.</p> <p><b>Artículo 81. Otras incompatibilidades.</b> Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:</p> <p>1. Los diputados en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su periodo o retiro del servicio:</p> <p>a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuaciones contractuales en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos;</p> <p>b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.</p>	<p>entidades descentralizadas, que funciona en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran a la respectiva entidad territorial.</p> <p><b>Artículo 82. Otras incompatibilidades.</b> Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:</p> <p>1. Los diputados en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su periodo o retiro del servicio:</p> <p>1.1. Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuaciones contractuales en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio de la respectiva entidad territorial o sus organismos;</p> <p>1.2. Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.</p> <p>Se ajusta la numeración y la redacción.</p>

<p>2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia.</p> <p>Esta incompatibilidad se extiende desde el momento de su vinculación y hasta doce (12) meses después del retiro del servicio.</p> <p>3. Para todo servidor público, contratar con el Estado, salvo las excepciones constitucionales o legales.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> El funcionario público departamental que nombre a un diputado para un empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta y será objeto de proceso disciplinario de conformidad con las disposiciones vigentes.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Interpretése para todos sus efectos, que la incompatibilidad descrita en este artículo, se refiere al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorial.</p> <p><b>Artículo 82. Duración de la incompatibilidad.</b> Los</p>	<p>2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia.</p> <p>Esta incompatibilidad se extiende desde el momento de su vinculación y hasta doce (12) meses después del retiro del servicio.</p> <p>3. Contratar con el Estado, salvo las excepciones constitucionales o legales.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> El funcionario público departamental que nombre a un diputado para un empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta y será objeto de proceso disciplinario de conformidad con las disposiciones vigentes.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Interpretése para todos sus efectos, que la incompatibilidad descrita en este artículo, se refiere al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorial.</p> <p><b>Artículo 80. Duración de la incompatibilidad.</b> Los</p>	<p>Incompatibilidades de los diputados tendrán vigencia durante el periodo constitucional para el cual fueron elegidos y hasta doce (12) meses después del vencimiento del periodo o retiro del servicio.</p> <p>Quien fuere llamado a ocupar el cargo de diputado, quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión.</p> <p><b>Artículo 83. Inelegibilidad Simultánea.</b> Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El diputado en ejercicio que aspire a ser congresista, debe renunciar a su investidura antes de la fecha de la inscripción de su candidatura.</p> <p><b>Artículo 84. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los diputados.</b> De conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Constitución Política, las asambleas no podrán nombrar, elegir o designar como servidores públicos a personas con los cuales los diputados tengan parentesco hasta el cuarto</p>	<p>Incompatibilidades de los diputados tendrán vigencia durante el periodo constitucional para el cual fueron elegidos <del>salvo disposición en contrario, a hasta doce (12) meses después del vencimiento del periodo o retiro del servicio.</del></p> <p><del>Quien fuere llamado a ocupar el cargo de diputado, quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión.</del></p> <p><b>Artículo 81. Inelegibilidad Simultánea.</b> Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> El diputado en ejercicio que aspire a ser congresista, debe renunciar a su investidura <del>antes o la fecha de su elección.</del> <b>al menos un año antes a la fecha de su elección.</b></p> <p><b>Parágrafo 2. El diputado que decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la cual al menos doce meses antes del día de inscripción.</b></p> <p><b>Artículo 82. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los diputados.</b> De conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Constitución Política, las asambleas no podrán nombrar, elegir o designar como servidores públicos a personas con los cuales los diputados tengan parentesco hasta el cuarto</p>	<p>modifica el artículo en el entendido que por regla general las incompatibilidades de los diputados tendrán vigencia durante el periodo constitucional para el cual fueron elegidos, salvo disposición en contrario.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se ajusta de conformidad con artículo 107 de la Constitución.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p>
<p>grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.</p> <p>Los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades de los sectores central o descentralizado del correspondiente departamento.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Es nulo todo nombramiento o designación que se haga en contravención a lo dispuesto en el presente artículo; sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias a que haya lugar.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso de carrera administrativa.</p>	<p>civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.</p> <p>Los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento.</p> <p>Los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades de los sectores central o descentralizado del correspondiente departamento.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Es nulo todo nombramiento o designación que se haga en contravención a lo dispuesto en el presente artículo; sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias a que haya lugar.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso de carrera administrativa.</p> <p><b>Parágrafo 3.</b> Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de servidores públicos y trabajadores previstos en este artículo, también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de contratos de</p>	<p><b>Parágrafo 3.</b> Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo, también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de contratos de prestación de servicios.</p> <p><b>Parágrafo 4.</b> Interpretése para todos sus efectos, que las prohibiciones descritas en el artículo se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorial.</p> <p><b>Artículo 85 Excepciones al régimen de incompatibilidades.</b> Lo dispuesto en los artículos anteriores no obsta para que los diputados puedan, directamente o por medio de apoderado, actuar en los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos tengan interés;</li> <li>2. El ejercicio de la cédula en cualquier orden;</li> </ol>	<p>prestación de servicios.</p> <p><b>Parágrafo 4.</b> Interpretése para todos sus efectos, que las prohibiciones descritas en el artículo se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorial.</p> <p>Lo dispuesto en los artículos anteriores no obsta para que los diputados puedan, directamente o por medio de apoderado, actuar en los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos tengan interés;</li> <li>2. El ejercicio de la cédula en cualquier orden;</li> <li>3. Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de multas que groven a las personas de las que trata el presente artículo.</li> </ol>	<p>Se ajusta la numeración y se ajusta la redacción.</p>

<p>3. Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de multas que gravén a las mismas personas.</p> <p>4. Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten.</p> <p>5. Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la rama jurisdiccional del poder público. Sin embargo, los diputados durante su período constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo departamento, los establecimientos públicos, las empresas comerciales e industriales del orden departamental y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.</p>	<p>4. Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten.</p> <p>5. Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la rama jurisdiccional del poder público. Sin embargo, los diputados durante su período constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo departamento, los establecimientos públicos, las empresas comerciales e industriales del orden departamental y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>- Se considera pertinente adecuar el artículo conforme a</p>	<p>compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primo civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho; para tal efecto deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas.</p> <p>El reglamento interno de la corporación deberá establecer el procedimiento para tramitar los impedimentos y recusaciones de sus miembros. Se considera el superior para estos efectos a la Sesión Plena.</p> <p>En la decisión de los impedimentos y recusaciones no podrán participar los miembros de la respectiva bancada.</p> <p>Las asambleas llevarán un registro de intereses privados de los diputados electos, el cual deberá actualizarse anualmente, en el cual consignarán la información relacionada con su actividad económica privada, especialmente aquella que pueda tener relación con el ejercicio de su cargo. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún diputado, que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella; esta información deberá publicarse en la página web de la respectiva corporación, en la eventualidad que la corporación no posea medio electrónico</p>	<p>Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ordenanza pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del diputado.</p> <p>a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del diputado de las que no gozan el resto de los ciudadanos.</p> <p>b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el diputado participa de la decisión.</p> <p>c) Beneficio directo: aquel que se produce de forma específica respecto del diputado, de su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad segundo de afinidad o primo civil.</p> <p>Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:</p> <p>a) Cuando el diputado participe, discuta, vote un proyecto de ordenanza que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del diputado coincide o se fusiona con los intereses de los electores.</p> <p>b) Cuando el beneficio podía o no configurarse para el diputado en el futuro.</p>	<p>los parámetros establecidos en la Constitución para los congresistas.</p>
<p>permanente, el departamento habilitará el link respectivo en sus canales de información.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.</p>	<p>a) Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de ordenanza de carácter particular que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual el diputado tiene un interés particular actual y directo. El voto negativo no constituye conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.</p> <p>b) Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de ordenanza de carácter particular, que resulte un sector económico en el cual el diputado tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.</p> <p>c) Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de ordenanza que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el diputado. El diputado deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.</p> <p>d) Cuando el diputado participe en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos.</p> <p><b>PARÁGRAFO 1o.</b> Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presenten los diputados cuando por causas de</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se precisa en el numeral 8 que la falta absoluta procede, siempre y cuando la condena provenga de una sentencia debidamente ejecutoriada.</p>	<p><b>Artículo 87. Falta absoluta de los diputados.</b> Son faltas absolutas de los diputados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La muerte.</li> <li>2. La renuncia aceptada.</li> <li>3. La incapacidad física permanente.</li> <li>4. La pérdida de la investidura de diputado de conformidad con lo previsto en el artículo 291 de la Constitución Política y demás disposiciones legales en la materia.</li> <li>5. La declaratoria de nulidad de la elección como diputado.</li> <li>6. Interdicción judicial.</li> <li>7. La destitución del ejercicio del cargo, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación como resultado de un proceso disciplinario.</li> </ol>	<p><b>Artículo 85. Falta absoluta de los diputados.</b> Son faltas absolutas de los diputados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La muerte.</li> <li>2. La renuncia aceptada.</li> <li>3. La incapacidad física permanente.</li> <li>4. La pérdida de la investidura de diputado de conformidad con lo previsto en el artículo 291 de la Constitución Política y demás disposiciones legales en la materia.</li> <li>5. La declaratoria de nulidad de la elección como diputado.</li> <li>6. Interdicción judicial.</li> <li>7. La destitución del ejercicio del cargo, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación como resultado de un proceso disciplinario.</li> </ol>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se precisa en el numeral 8 que la falta absoluta procede, siempre y cuando la condena provenga de una sentencia debidamente ejecutoriada.</p>

<p>8. La condena a pena privativa de la libertad.</p>	<p>8. La condena a pena privativa de la libertad, <b>en sentencia ejecutoriada</b></p>	<p>Se ajusta la numeración y la redacción.</p>
<p><b>Artículo 88. Renuncia.</b> En época de sesiones ordinarias, corresponde a la plenaria de la asamblea oír y decidir sobre la renuncia de un diputado cuando el mismo manifiesta en forma escrita e inequívoca su voluntad de hacer dejación definitiva de su investidura como tal. La renuncia deberá presentarse ante el presidente, en ausencia de este, ante el vicepresidente de la corporación; en ella se determinará la fecha a partir de la cual se quiere hacer efectiva.</p> <p>La renuncia del presidente de la corporación, se presentará ante la plenaria de la asamblea departamental.</p> <p>Si la corporación no está sesionando, la renuncia se deberá presentar ante el presidente de la corporación, quien la presentará para que decida la junta directiva.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los casos de renuncia, excusas o licencia se deberá incluir como primer punto del orden día.</p>	<p><b>Artículo 56. Renuncia.</b> En época de sesiones ordinarias, corresponde a la plenaria de la asamblea oír y decidir sobre la renuncia de un diputado cuando el mismo manifiesta de forma escrita e inequívoca su voluntad de hacer dejación definitiva de su investidura como tal. La renuncia deberá presentarse ante el presidente, en ausencia de este, ante el vicepresidente de la corporación; en ella se determinará la fecha a partir de la cual se quiere hacer efectiva.</p> <p>La renuncia del presidente de la corporación, se presentará ante la plenaria de la asamblea departamental.</p> <p>Si la corporación no está sesionando, la renuncia se deberá presentar ante el presidente y <b>en ausencia de este, ante el vicepresidente</b> de la corporación, quien la presentará para que decida la <b>mesa</b> directiva.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los casos de renuncia, excusas o licencia se deberá incluir como primer punto del orden día.</p>	<p>Se considera pertinente otorgarle al vicepresidente la facultad de recibir la renuncia, solo en caso de ausencia del presidente y que sea la plenaria si está sesionando la que decida al respecto y en caso contrario que sea la mesa directiva la que adopte la decisión.</p> <p>En virtud de lo anterior, se aclara en el inciso tercero, que le caíste la facultad al vicepresidente ante la ausencia del presidente.</p>
<p><b>Artículo 89. Incapacidad física permanente.</b> En caso de que por motivos de salud debidamente certificada por la entidad prestadora de salud a la</p>	<p><b>Artículo 57. Incapacidad física permanente.</b> En caso de <b>incapacidad permanente debidamente certificada por la entidad prestadora de salud a la que se encuentre afiliado</b></p>	<p>Se ajusta la numeración y la redacción.</p>
<p>Instalación de la corporación o a la fecha en que fueron llamados a posesionarse.</p> <p>4. Por indebida destinación de dineros públicos.</p> <p>5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.</p> <p>6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> La pérdida de investidura será decretada por el Tribunal de la Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento establecido para los congresistas, en lo que corresponda.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Mientras se adelanta el proceso de pérdida de investidura, el diputado podrá continuar en el ejercicio de su cargo, hasta tanto no quede ejecutoriada la sentencia que pone fin al mismo.</p>	<p>4. Por <b>sentencia condenatoria en firme sobre</b> indebida destinación de dineros públicos.</p> <p>5. Por <b>sentencia condenatoria en firme por la comisión del delito de</b> tráfico de influencias debidamente comprobado.</p> <p>6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> La pérdida de investidura será decretada por el Tribunal de la Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento establecido para los congresistas, en lo que corresponda.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Mientras se adelanta el proceso de pérdida de investidura, el diputado podrá continuar en el ejercicio de su cargo, hasta tanto no quede ejecutoriada la sentencia que pone fin al mismo.</p>	<p>Se ajusta la numeración y la redacción.</p>
<p><b>Artículo 91. Declaratoria de nulidad de la elección.</b> Una vez que quede en firme la declaratoria de nulidad de la elección de un diputado, por parte de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,</p>	<p><b>Artículo 53. Declaratoria de nulidad de la elección.</b> Una vez que quede en firme la declaratoria de nulidad de la elección de un diputado, por parte de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, <b>quedará sin efecto la</b></p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>
<p>que se encuentre afiliado el diputado, y que haya calificado la incapacidad permanente para continuar desempeñándose como tal, el presidente de la asamblea declarará la vacante por falta absoluta y procederá a llamar a quien tenga derecho a ocupar la curul y haya sido determinado por la autoridad respectiva, previa notificación a la bancada a la que pertenezca.</p>	<p><b>Artículo 58. Pérdida de la investidura.</b> Se declarará la pérdida de investidura en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.</li> <li>2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones ordinarias o extraordinarias a seis (6) reuniones de plenarias o de comisión permanente en las que se voten proyectos de ordenanza, según el caso, salvo cuando medie fuerza mayor debidamente certificada.</li> <li>3. Por no tomar posesión de la curul, salvo fuerza mayor debidamente certificada, dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que fueron llamados a posesionarse.</li> </ol>	<p>Se ajusta la numeración y la redacción.</p> <p>Se considera necesario, que los numerales 4 y 5, dependan de la existencia de una sentencia condenatoria, en virtud del principio de presunción de inocencia.</p>
<p><b>Artículo 90. Pérdida de la investidura.</b> Se declarará la pérdida de investidura en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.</li> <li>2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones ordinarias o extraordinarias a seis (6) reuniones de plenarias o de comisión permanente en las que se voten proyectos de ordenanza, según el caso, salvo cuando medie fuerza mayor debidamente certificada.</li> <li>3. Por no tomar posesión de la curul, salvo fuerza mayor debidamente certificada, dentro de los ocho (8) días siguientes a la</li> </ol>	<p><b>Artículo 58. Pérdida de la investidura.</b> Se declarará la pérdida de investidura en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.</li> <li>2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones ordinarias o extraordinarias a seis (6) reuniones de plenarias o de comisión permanente en las que se voten proyectos de ordenanza, según el caso, salvo cuando medie fuerza mayor debidamente certificada.</li> <li>3. Por no tomar posesión de la curul, salvo fuerza mayor debidamente certificada, dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que fueron llamados a posesionarse.</li> </ol>	<p>Se ajusta la numeración y la redacción.</p> <p>Se considera necesario, que los numerales 4 y 5, dependan de la existencia de una sentencia condenatoria, en virtud del principio de presunción de inocencia.</p>
<p>quedará sin efecto la credencial que lo acreditaba como tal y el presidente de la asamblea correspondiente dispondrá las medidas necesarias para dar cumplimiento y hacer efectiva dicha decisión.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Cuando se solicite la nulidad de la elección de un diputado y la misma causal alegada sea común a uno o varios de los integrantes de la respectiva lista de candidatos con derecho a llenar la curul vacante, se tramitará separadamente el proceso contencioso, salvo las excepciones de ley, garantizando plenamente el debido proceso.</p> <p><b>Artículo 92. Interdicción judicial.</b> Una vez quede en firme la declaratoria de interdicción judicial para un diputado, proferida por parte del juez competente, dicho diputado perderá su investidura como tal y el presidente o vicepresidente del concejo en ausencia de este, tomará las medidas conducentes a hacer efectivo el cese de funciones del mismo a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.</p> <p><b>Artículo 93. Aplicación de las sanciones de destitución y de suspensión.</b> La aplicación de las sanciones de destitución y de suspensión a un diputado serán solicitadas por la Procuraduría General de la Nación, el presidente de la asamblea departamental procederá a hacerla</p>	<p>credencial que lo acreditaba como tal y el presidente de la asamblea correspondiente dispondrá las medidas necesarias para dar cumplimiento y hacer efectiva dicha decisión.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Cuando se solicite la nulidad de la elección de un diputado y la misma causal alegada sea común a uno o varios de los integrantes de la respectiva lista de candidatos con derecho a llenar la curul vacante, se tramitará separadamente el proceso contencioso, salvo las excepciones de ley, garantizando plenamente el debido proceso.</p> <p><b>Artículo 60. Interdicción judicial.</b> Una vez quede en firme la declaratoria de interdicción judicial para un diputado, proferida por parte del juez competente, dicho diputado perderá su investidura como tal y el presidente o vicepresidente del concejo en ausencia de este, tomará las medidas conducentes a hacer efectivo el cese de funciones del mismo a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.</p> <p><b>Artículo 61. Aplicación de las sanciones de destitución y de suspensión.</b> La aplicación de las sanciones de destitución y de suspensión a un diputado serán solicitadas por la Procuraduría General de la Nación y el presidente de la asamblea departamental procederá a hacerla efectiva.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se ajusta la numeración y la redacción.</p>

<p>efectiva.</p> <p><b>Artículo 94. Causales de destitución.</b> También son causales de destitución de los diputados las siguientes:</p> <p>a) La no incorporación injustificada al ejercicio de sus funciones, después del vencimiento de una licencia o suspensión o de la cesación de las circunstancias que originaron una incapacidad legal o física transitoria;</p> <p>b) El haberse proferido en su contra sentencia condenatoria de carácter penal que se encuentre debidamente ejecutoriada, salvo en casos de delitos políticos o culpados diferentes a aquéllos contra el patrimonio público;</p> <p>c) La inasistencia, en un mismo período de sesiones a más de seis (6) sesiones plenarios en las que se voten proyectos de ordenanza, sin que medie fuerza mayor;</p> <p>d) Por destitución legal de dineros públicos.</p> <p>La aplicación de las sanciones de suspensión de un diputado, serán decretadas por la Procuraduría General de la Nación. Una vez en firme, la remitirá</p>	<p><b>Artículo 62. Causales de destitución.</b> También son causales de destitución de los diputados las siguientes:</p> <p>1. La no incorporación injustificada al ejercicio de sus funciones, después del vencimiento de una licencia o suspensión o de la cesación de las circunstancias que originaron una incapacidad legal o física transitoria;</p> <p>2. El haberse proferido en su contra sentencia condenatoria de carácter penal que se encuentre debidamente ejecutoriada, salvo en casos de delitos políticos o culpados diferentes a aquéllos contra el patrimonio público;</p> <p>3. La inasistencia, en un mismo período de sesiones a más de seis (6) sesiones plenarios en las que se voten proyectos de ordenanza, sin que medie fuerza mayor;</p> <p>4. Por <b>sentencia judicial en firme por</b> destitución legal de dineros públicos.</p> <p>La aplicación de las sanciones de <b>destitución</b> de un diputado, serán decretadas por la Procuraduría General de la Nación. Una vez en firme, la remitirá al presidente de la asamblea para lo de su competencia.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>En el numeral 4, se precisa que debe mediar sentencia judicial en firme, en virtud del principio de presunción de inocencia.</p>
<p>de los respectivos procesos.</p> <p><b>Artículo 96. Sila vacía.</b> No podrán ser reemplazados los diputados a los que se les dicte orden de captura dentro del proceso penal al que fueron vinculados. La sentencia condenatoria que se profiera en estos casos produce la pérdida definitiva de la curul para el partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos que avaló el candidato. También quedará vacía cuando este se hubiese inscrito por firmas.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Las renuncias que presenten los diputados a los que se les haya vinculado penalmente a un proceso penal por los delitos enumerados en el inciso anterior no produce el ingreso de quien corresponda a la respectiva lista en su orden descendente.</p> <p><b>Artículo 97. Reducción del quórum.</b> Cuando las faltas absolutas de los diputados no pudieren ser reemplazadas conforme a lo dispuesto en esta ley, el quórum, para todos los efectos a que hubiere lugar, se determinará teniendo como base el total de los miembros de la asamblea menos el número de curules que no pudieren ser suplidas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas.</p> <p>Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo queda reducida a la mitad o menos la</p>	<p><b>Artículo 44 Sila vacía.</b> En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática, ni por delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncian habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de los delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiere orden de captura dentro de los respectivos procesos.</p> <p><b>Artículo 65. Reducción del quórum y mayorías.</b> Cuando las faltas absolutas de los diputados no pudieren ser reemplazadas conforme a lo dispuesto en esta ley, el quórum y las mayorías se determinarán teniendo como base el total de los miembros de la asamblea, menos el número de curules que no pudieren ser suplidas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas.</p> <p>Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo queda reducida a la mitad o menos la corporación, el presidente a</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se ajusta de conformidad con la establecido en el artículo 314 de la Constitución Política.</p> <p>Se ajusta la numeración y la redacción.</p> <p>Para efectos del presente artículo, se establece que le asiste la facultad al vicepresidente solo ante la falta temporal del presidente.</p> <p>Se adiciona un parágrafo, a fin de establecer que no, en la</p>
<p>al presidente de la asamblea para lo de su competencia.</p> <p><b>Artículo 95. Formas de llenar las faltas absolutas.</b> Los diputados no tendrán suplentes. Las faltas absolutas de los diputados serán suplidas por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o de votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral, según se trate de listas cerradas o con voto preferente.</p> <p>El presidente o a falta de este el vicepresidente de la asamblea, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la declaratoria, llamará a los candidatos que se encuentren en tal situación, a tomar posesión del cargo vacante.</p> <p>En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática, ni por delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncian habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de los delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiere orden de captura dentro</p>	<p><b>Artículo 63. Formas de llenar las faltas absolutas.</b> Los diputados no tendrán suplentes. Las faltas absolutas de los diputados serán suplidas por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o de votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral, según se trate de listas cerradas o con voto preferente.</p> <p>El presidente o a falta <b>temporal</b> de este el vicepresidente de la asamblea, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la declaratoria, llamará a los candidatos que se encuentren en tal situación, a tomar posesión del cargo vacante.</p> <p><del>En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática, ni por delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncian habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de los delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiere orden de captura dentro de los respectivos procesos.</del></p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se adiciona la expresión "temporal" a fin de especificar que el vicepresidente solo podrá actuar en caso de falta temporal del presidente y así generar más organización entre la corporación.</p> <p>Se elimina el último inciso, en el entendido que se incluye en el artículo siguiente de sila vacía.</p>
<p>corporación, el Presidente o vicepresidente de la asamblea departamental solicitará al Consejo Nacional Electoral, convocar a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando fallen más de veinticuatro (24) meses para la terminación del periodo.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Para efectos del último inciso, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando fallen más de veinticuatro (24) meses para la terminación del periodo, sin que sea requisito que haya sido la solicitud del presidente o vicepresidente de la corporación.</p>	<p>departamental solicitará al Consejo Nacional Electoral, convocar a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando fallen más de veinticuatro (24) meses para la terminación del periodo.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Para efectos del último inciso, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando fallen más de veinticuatro (24) meses para la terminación del periodo, sin que sea requisito que haya sido la solicitud del presidente o vicepresidente de la corporación.</p>	<p>solicitud del presidente o vicepresidente de la corporación, para que el Consejo Nacional Electoral, convocar a elecciones para llenar las vacantes. Esto, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la C.P.</p>
<p><b>Artículo 98. Faltas temporales.</b> Son faltas temporales de los diputados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La licencia.</li> <li>2. La incapacidad física transitoria.</li> <li>3. La suspensión provisional del desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario o penal.</li> <li>4. La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.</li> </ol>	<p><b>Artículo 66. Faltas temporales.</b> Son faltas temporales de los diputados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La licencia <b>de maternidad y paternidad.</b></li> <li>2. La incapacidad física transitoria.</li> <li>3. La suspensión provisional del desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario o penal.</li> <li>4. La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.</li> <li>5. La ausencia forzada e involuntaria.</li> </ol>	<p>Se ajusta la redacción.</p> <p>Teniendo en cuenta que hay jurisprudencia que establece que para corporaciones públicas no hay licencias, se debe especificar que se trata de la licencia de maternidad.</p>

<p>5. La ausencia forzada e involuntaria.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el artículo 134 de la Constitución Política.</p> <p><b>Parágrafo 2. En caso de falta causada por secuestro, el titular conservará los derechos, remuneraciones y prestaciones previstas en la ley e igualmente los llamados a reemplazarlos temporariamente.</b></p> <p><b>Artículo 99. Licencia de maternidad.</b> Los diputados tendrán derecho a percibir sus remuneración por las sesiones que se realicen durante su licencia de maternidad, entendiéndose como justificable su inasistencia.</p> <p>Las mujeres elegidas diputados que pertenecían al Programa Familias en Acción, no estarán impedidas para continuar como beneficiarias en dicho Programa.</p> <p><b>Artículo 100. Comisiones de estudio.</b> En la relacionado a las comisiones de estudio de los diputados, la mesa directiva de la corporación,</p>	<p><b>Parágrafo 1.</b> Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el artículo 134 de la Constitución Política.</p> <p><b>Parágrafo 2. En caso de falta causada por secuestro, el titular conservará los derechos, remuneraciones y prestaciones previstas en la ley e igualmente los llamados a reemplazarlos temporariamente.</b></p> <p><b>Artículo 67. Licencia de maternidad.</b> La diputada en estado de embarazo o adscrita de un menor de edad tendrá derecho al reconocimiento de la licencia de maternidad remunerada, por el tiempo y en las condiciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, entendiéndose como justificable su inasistencia. La remuneración pagada durante la licencia corresponderá el valor del salario mensual equivalente al tiempo que dure su licencia de maternidad, los cuales serán pagados a través de la respectiva EPS o la que se encuentre afiliada.</p> <p><b>Artículo 68. Comisiones de estudio.</b> En la relacionado a las comisiones de estudio de los diputados, la mesa directiva de la corporación, aplicará lo previsto para los funcionarios</p>	<p>Se ajusta el artículo a fin de hacerlo más claro y preciso.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>
<p>el hecho por la autoridad competente.</p> <p><b>Artículo 104. Circunscripción electoral.</b> Para la elección de los diputados, cada departamento formará un círculo único.</p> <p><b>Artículo 105. Derechos de los reemplazos por vacancia.</b> En caso de faltas absolutas o temporales de los diputados, quienes sean llamados a ocupar la curul tendrán derecho a los beneficios a que se refieren los artículos anteriores desde el momento de su posesión y hasta cuando ejerzan su período.</p> <p>En caso de falta causada por secuestro, el titular conservará los derechos, remuneraciones y prestaciones previstas en la ley e igualmente los llamados a reemplazarlos temporariamente.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En lo que corresponde a faltas absolutas o temporales que posibiliten los reemplazos y hasta tanto se emitan el régimen de reemplazos, se aplicará el parágrafo transitorio del artículo 134 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo número 02 de 2015.</p> <p><b>Artículo 106. Son excusas de los diputados para no asistir a las sesiones:</b></p> <p>1. Incapacidad física o enfermedad debidamente decretada por EPS.</p>	<p>autoridad competente.</p> <p><b>Artículo 22. Circunscripción electoral.</b> Para la elección de los diputados, cada departamento formará un círculo único.</p> <p><b>Artículo 23. Derechos de los reemplazos por vacancia.</b> En caso de faltas absolutas o temporales de los diputados, quienes sean llamados a ocupar la curul tendrán derecho a los beneficios a que se refieren los artículos anteriores desde el momento de su posesión y hasta cuando ejerzan su período.</p> <p>En caso de falta causada por secuestro, el titular conservará los derechos, remuneraciones y prestaciones previstas en la ley e igualmente los llamados a reemplazarlos temporariamente.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En lo que corresponde a faltas absolutas o temporales que posibiliten los reemplazos y hasta tanto se emitan el régimen de reemplazos, se aplicará el parágrafo transitorio del artículo 134 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo número 02 de 2015.</p> <p><b>Artículo 24. Son excusas de los diputados para no asistir a las sesiones:</b></p> <p>1. Incapacidad física o enfermedad debidamente decretada por EPS.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>Se elimina el inciso segundo y el parágrafo en el entendido que se adicionan en el artículo de faltas temporales.</p>
<p>1. Incapacidad física o enfermedad debidamente decretada por EPS.</p>	<p>1. Incapacidad física o enfermedad debidamente decretada por EPS.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>- En el numeral 4, se elimina la expresión "o por el gobierno", atendiendo a la autonomía de</p>
<p>aplicará lo previsto para los funcionarios públicos.</p> <p><b>Artículo 101. Incapacidad física transitoria.</b> En caso de que por motivos de salud debidamente certificada por la entidad prestadora de salud a la que esté afiliado el diputado, se vea impedido para asistir transitoriamente a las sesiones de la corporación, el presidente o vicepresidente declarará la vacancia temporal.</p> <p><b>Artículo 102. Suspensión provisional de la elección.</b> Una vez que la Jurisdicción Contencioso Administrativa disponga la suspensión provisional de la elección de un diputado, el presidente o vicepresidente de la asamblea declarará la vacancia temporal y dispondrá las medidas conducentes para hacer efectiva la cesación de funciones del diputado, durante el mismo tiempo de suspensión.</p> <p><b>Artículo 103. Ausencia forzada e involuntaria.</b> Cuando por motivos ajenos a su voluntad, ocasionados por la retención forzada ejercida por otra persona, un diputado no pueda concurrir a las sesiones de la asamblea, el presidente o vicepresidente de esta corporación, declarará la ausencia temporal, tan pronto le sea notificado el hecho por la</p>	<p>públicas.</p> <p><b>Artículo 69. Incapacidad física transitoria.</b> En caso de que por motivos de salud debidamente certificada por la entidad prestadora de salud a la que esté afiliado el diputado, se vea impedido para asistir transitoriamente a las sesiones de la corporación, el presidente o vicepresidente declarará la vacancia temporal.</p> <p><b>Artículo 20. Suspensión provisional de la elección.</b> Una vez que la Jurisdicción Contencioso Administrativa disponga la suspensión provisional de la elección de un diputado, el presidente o vicepresidente de la asamblea declarará la vacancia temporal y dispondrá las medidas conducentes para hacer efectiva la cesación de funciones del diputado, durante el mismo tiempo de suspensión.</p> <p><b>Artículo 21. Ausencia forzada e involuntaria.</b> Cuando por motivos ajenos a su voluntad, ocasionados por la retención forzada ejercida por otra persona, un diputado no pueda concurrir a las sesiones de la asamblea, el presidente o vicepresidente de esta corporación, declarará la ausencia temporal, tan pronto le sea notificado el hecho por la</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>- El dar al vicepresidente por ley, la posibilidad de declarar la vacancia temporal, podría ser un inconveniente para el normal funcionamiento de la corporación. Es claro que cuando no se encuentra en funciones el presidente, asume uno de los vicepresidentes.</p>
<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>- En virtud del argumento anteriormente expuesto se elimina la facultad del vicepresidente.</p>
<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>- En virtud del argumento anteriormente expuesto se elimina la facultad del vicepresidente.</p>
<p>2. Grave calamidad doméstica.</p> <p>3. Tratándose de sesiones extraordinarias, la falta de citación o aviso.</p> <p>4. El cumplimiento de comisiones asignadas por la corporación o por el gobierno.</p> <p>5. El caso fortuito y la fuerza mayor.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La inasistencia o de las sesiones o de las comisiones sin causa debidamente justificada, cuando se estén discutiendo proyectos de ordenanza, serán sancionados con el descuento de la remuneración o que tiene derecho el diputado por la respectiva sesión, el presidente de la corporación o en su defecto el secretario, informará al funcionario pagador sobre los diputados ausentes, para la aplicación de lo dispuesto en este artículo.</p> <p>En los casos de falta temporal, se exigirá excusa escrita del diputado.</p> <p><b>Artículo 107. Sanciones por irrespeto.</b> El diputado que faltare al respeto debido a la corporación, o a alguno de sus miembros, le será impuesto por la mesa directiva, según la gravedad del</p>	<p>2. Grave calamidad doméstica.</p> <p>3. Tratándose de sesiones extraordinarias, la falta de citación o aviso.</p> <p>4. El cumplimiento de comisiones asignadas por la corporación o por el gobierno.</p> <p>5. El caso fortuito y la fuerza mayor.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La inasistencia o de las sesiones o de las comisiones sin causa debidamente justificada, cuando se estén discutiendo proyectos de ordenanza, serán sancionados con el descuento de la remuneración o que tiene derecho el diputado por la respectiva sesión, el presidente de la corporación o en su defecto el secretario, informará al funcionario pagador sobre los diputados ausentes, para la aplicación de lo dispuesto en este artículo.</p> <p>En los casos de falta temporal, se exigirá excusa escrita del diputado.</p> <p><b>Artículo 107. Sanciones por irrespeto.</b> El diputado que faltare al respeto debido a la corporación o a alguno de sus miembros, le será impuesto por la mesa directiva, según la</p>	<p>las corporaciones.</p>	<p>Se elimina el parágrafo por considerarse impreciso pues</p>
<p>Se elimina el artículo en el entendido que su aplicación depende de circunstancias muy subjetivas y se evidencia una</p>	<p>Se elimina el artículo en el entendido que su aplicación depende de circunstancias muy subjetivas y se evidencia una</p>	<p>Se elimina el artículo en el entendido que su aplicación depende de circunstancias muy subjetivas y se evidencia una</p>	<p>Se elimina el artículo en el entendido que su aplicación depende de circunstancias muy subjetivas y se evidencia una</p>

<p>hecho, algunas de las sanciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llamamiento al orden.</li> <li>2. Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debido.</li> <li>3. Suspensión en el ejercicio de la palabra.</li> <li>4. Suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión.</li> <li>5. Suspensión del derecho a intervenir en los debates de la corporación por más de un (1) día y por un (1) mes, previo concepto favorable de la corporación.</li> </ol> <p><b>Artículo 108. Responsabilidad y disciplina política.</b> Los diputados son responsables políticamente ante la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Los diputados elegidos con el aval de partidos o movimientos políticos tendrán las obligaciones y estarán sujetos a las responsabilidades y sanciones que prevengan los estatutos de éstos, todo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constitución y la ley.</p> <p><b>Artículo 109. Bancadas.</b> Las asambleas departamentales actuarán bajo el régimen de bancadas, previsto en la Ley 974 de 2005 o las</p>	<p><b>prevención del hecho, algunas de las sanciones siguientes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Llamamiento al orden.</b></li> <li>2. <b>Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debido.</b></li> <li>3. <b>Suspensión en el ejercicio de la palabra.</b></li> <li>4. <b>Suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión.</b></li> </ol> <p><b>Suspensión del derecho a intervenir en los debates de la corporación por más de un (1) día y por un (1) mes, previo concepto favorable de la corporación.</b></p> <p><b>Artículo 108. Responsabilidad y disciplina política.</b> Los diputados son responsables políticamente ante la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Los diputados elegidos con el aval de partidos o movimientos políticos tendrán las obligaciones y estarán sujetos a las responsabilidades y sanciones que prevengan los estatutos de éstos, todo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constitución y la ley.</p> <p><b>Artículo 109. Bancadas.</b> Las asambleas departamentales actuarán bajo el régimen de bancadas previsto en la Ley 974 de 2005 o las</p>	<p>indeterminación en las causas.</p> <p>Se elimina el artículo por considerarse innecesario.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y deberán ajustar sus reglamentos a lo establecido en tales disposiciones y demás normas pertinentes.</p> <p>Los miembros de la asamblea departamental elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos constituyen una bancada en la respectiva corporación.</p> <p>Cada miembro de una corporación pública pertenecerá exclusivamente a una sola Bancada.</p> <p><b>Parágrafo:</b> Las bancadas elegirán un vocero general, quien los representará en las diferentes actividades de la corporación y en la plenaria, los voceros de las bancadas serán elegidos de acuerdo con la ley y los estatutos de cada partido y movimiento político y la bancada notificará de manera oficial al presidente de la corporación.</p> <p><b>Artículo 110. Actuación en bancadas.</b> Los miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente, y emplearán mecanismos democráticos para tomar sus decisiones al interior de las corporaciones en todos los temas que los Estatutos del Respectivo Partido o Movimiento Político no establezcan como de conciencia.</p> <p><b>Artículo 111. Decisiones.</b> Cuando la Bancada decida frente a un tema dejar en libertad a sus</p>	<p>sustituyan y deberán ajustar sus reglamentos a lo establecido en tales disposiciones y demás normas pertinentes.</p> <p>Los miembros de la asamblea departamental elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos constituyen una bancada en la respectiva corporación.</p> <p>Cada miembro de una corporación pública pertenecerá exclusivamente a una sola Bancada.</p> <p><b>Parágrafo:</b> Las bancadas elegirán un vocero general, quien los representará en las diferentes actividades de la corporación y en la plenaria, los voceros de las bancadas serán elegidos de acuerdo con la ley y los estatutos de cada partido y movimiento político y la bancada notificará de manera oficial al presidente de la corporación.</p> <p><b>Artículo 26. Actuación en bancadas.</b> Los miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente, y emplearán mecanismos democráticos para tomar sus decisiones al interior de las corporaciones en todos los temas que los Estatutos del Respectivo Partido o Movimiento Político no establezcan como de conciencia.</p> <p><b>Artículo 77. Decisiones.</b> Cuando la Bancada decida <del>dejar</del> <del>en</del> <del>libertad</del> a sus miembros para votar de</p> <p>Se ajusta numeración.</p> <p>Se ajusta numeración y</p>																				
<p>membros para votar de acuerdo con su criterio individual, se dejará constancia de ello en el acta de la respectiva reunión.</p> <p><b>Artículo 112. Régimen de seguridad social prestacional de los diputados.</b> El régimen de seguridad social y prestacional de los diputados inherente a su naturaleza y estará a cargo del presupuesto de las asambleas departamentales.</p> <p>Los diputados estarán amparados por el régimen de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones complementarias en la materia; se les garantizará aseguramiento en salud, pensiones y riesgos laborales.</p> <p>El ingreso base de cotización obligatoria para la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, debe corresponder al resultado que se obtenga de dividir entre doce (12) el ingreso percibido durante los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias a título de remuneración.</p> <p><b>Artículo 113. Remuneración de los diputados.</b> De acuerdo con lo señalado en la ley 617 de 2000, o norma que la modifique o sustituya, la remuneración por concepto de asignación mensual de los diputados de las asambleas departamentales por mes de sesiones será la</p>	<p>acuerdo con su criterio individual, se dejará constancia de ello en el acta de la respectiva reunión.</p> <p><b>Artículo 78. Régimen de seguridad social y prestacional de los diputados.</b> El régimen de seguridad social y prestacional de los diputados inherente a su naturaleza y estará a cargo del presupuesto <del>central</del> <del>que es transferido a las asambleas</del> departamentales.</p> <p>Los diputados estarán amparados por el régimen de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones complementarias en la materia; se les garantizará aseguramiento en salud, pensiones y riesgos laborales.</p> <p>El ingreso base de cotización obligatoria para el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, debe corresponder al resultado que se obtenga de dividir entre doce (12) el ingreso percibido durante los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias a título de remuneración.</p> <p><b>Artículo 79. Remuneración de los diputados.</b> De acuerdo con lo señalado en la ley 617 de 2000, o norma que la modifique o sustituya, la remuneración por concepto de asignación mensual de los diputados de las asambleas departamentales por mes de sesiones será la siguiente:</p>	<p>redacción.</p> <p>Se ajusta numeración.</p> <p>Se debe resaltar que, si bien la seguridad social se paga con cargo al presupuesto de las asambleas, el mismo es transferido por los departamentos o gobierno central del departamento.</p> <p>Se ajusta numeración.</p> <p>Entiendo en cuenta que el objetivo de esta ley es unificar el régimen departamental, no se considera técnico hacer</p>	<p>siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría de departamento</th> <th>Remuneración de diputados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Especial</td> <td>30 smm</td> </tr> <tr> <td>Primera</td> <td>26 smm</td> </tr> <tr> <td>Segunda</td> <td>25 smm</td> </tr> <tr> <td>Tercera y cuarta</td> <td>18 smm</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Artículo 114. Régimen prestacional de los diputados.</b> El servidor público que ejerza como diputado tendrá derecho a seguro de vida con cargo a la sección presupuestal del sector central del Departamento y a percibir las siguientes prestaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auxilio de cesantía e intereses sobre las cesantías, cuya liquidación se orientará por los artículos 3o y 4o de la Ley 5 de 1969 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 o por las normas que lo adicionen o modifiquen.</li> <li>2. Prima de Navidad, se reconocerá de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4 de 1966 o por las normas que lo adicionen o modifiquen.</li> </ol> <p><b>Parágrafo 1.</b> Los gastos derivados de las prestaciones sociales de los diputados, la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y la parafiscalidad, afectarán la sección presupuestal de la asamblea, pero no computarán</p>	Categoría de departamento	Remuneración de diputados	Especial	30 smm	Primera	26 smm	Segunda	25 smm	Tercera y cuarta	18 smm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría de departamento</th> <th>Remuneración de diputados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Especial</td> <td>30 smm</td> </tr> <tr> <td>Primera</td> <td>26 smm</td> </tr> <tr> <td>Segunda</td> <td>25 smm</td> </tr> <tr> <td>Tercera y cuarta</td> <td>18 smm</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Artículo 80. Régimen prestacional de los diputados.</b> El servidor público que ejerza como diputado tendrá derecho a seguro de vida con cargo a la sección presupuestal del sector central del Departamento y a percibir las siguientes prestaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auxilio de cesantía e intereses sobre las cesantías, cuya liquidación se orientará por los artículos 3o y 4o de la Ley 5 de 1969 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 o por las normas que lo adicionen o modifiquen.</li> <li>2. Prima de Navidad, se reconocerá de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4 de 1966 o por las normas que lo adicionen o modifiquen.</li> </ol> <p><b>Parágrafo 1.</b> Los gastos derivados de las prestaciones sociales de los diputados, la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y la parafiscalidad, afectarán la sección presupuestal de la asamblea, pero no computarán dentro del límite de gasto de funcionamiento señalado en el artículo 8 de la Ley 617 de 2000.</p> <p>referencia a otra disposición normativa.</p> <p>Se ajusta numeración.</p>	Categoría de departamento	Remuneración de diputados	Especial	30 smm	Primera	26 smm	Segunda	25 smm	Tercera y cuarta	18 smm
Categoría de departamento	Remuneración de diputados																							
Especial	30 smm																							
Primera	26 smm																							
Segunda	25 smm																							
Tercera y cuarta	18 smm																							
Categoría de departamento	Remuneración de diputados																							
Especial	30 smm																							
Primera	26 smm																							
Segunda	25 smm																							
Tercera y cuarta	18 smm																							



<p>dentro del límite de gasto de funcionamiento señalado en el artículo 8 de la Ley 617 de 2000.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> La remuneración de los diputados es incompatible con cualquier otra asignación proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las excepciones establecidas en la Ley 4 de 1992.</p> <p><b>Parágrafo 3.</b> La remuneración del auxilio de cesantías de los diputados deberá liquidarse a razón de una asignación mensual por cada año calendario de sesiones. Para los cálculos anteriores, deberá entenderse, como si se hubiere sesionado los doce (12) meses del respectivo año y percibido durante ese año asignaciones mensuales idénticas a las devengadas en el tiempo de sesiones, conforme a lo estipulado en los artículos 3º y 4º de la Ley 5 de 1969 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, excepto cuando mediere renuncia o desvinculación, caso en el cual, el factor anterior, se liquidará proporcionalmente.</p> <p><b>Artículo 115. Seguro de vida.</b> Los diputados tendrán derecho durante el período para el cual han sido elegidos a un seguro de vida equivalente a veinte (20) veces del salario mensual vigente para el gobernador, con cargo a la sección presupuestal del sector central del departamento; así como a la atención médico-asistencial a que tiene derecho el gobernador.</p>	<p><b>Parágrafo 2.</b> La remuneración de los diputados es incompatible con cualquier otra asignación proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las excepciones establecidas en la Ley 4 de 1992.</p> <p><b>Parágrafo 3.</b> La remuneración del auxilio de cesantías de los diputados deberá liquidarse a razón de una asignación mensual por cada año calendario de sesiones. Para los cálculos anteriores, deberá entenderse, como si se hubiere sesionado los doce (12) meses del respectivo año y percibido durante ese año asignaciones mensuales idénticas a las devengadas en el tiempo de sesiones, conforme a lo estipulado en los artículos 3º y 4º de la Ley 5 de 1969 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, excepto cuando mediere renuncia o desvinculación, caso en el cual, el factor anterior, se liquidará proporcionalmente.</p> <p><b>Artículo 81. Seguro de vida.</b> Los diputados tendrán derecho durante el período para el cual han sido elegidos a un seguro de vida equivalente a veinte (20) veces del salario mensual vigente para el gobernador, con cargo a la sección presupuestal del sector central del departamento; así como a la atención médico-asistencial a que tiene derecho el gobernador.</p>	<p>Se ajusta numeración.</p>
<p>colectivos por cada año de servicio prestado, se reconocerá y pagará como si hubiere trabajado los 12 meses del año.</p> <p><b>Artículo 119. Período de vacaciones.</b> Las vacaciones a que tienen derecho los diputados deberán ser disfrutadas de manera colectiva, a partir del 20 de enero o el día hábil inmediatamente posterior, del año siguiente a su causación.</p> <p><b>Artículo 120. Responsable para conceder vacaciones.</b> Las vacaciones serán concedidas por resolución del presidente de la correspondiente asamblea departamental o su delegado.</p> <p><b>Artículo 121. De la compensación de vacaciones en dinero.</b> Las vacaciones podrán ser compensadas en dinero cuando el servidor se retire del servicio sin haberlas disfrutado. Los diputados que se retiren definitivamente de la asamblea departamental, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que éstas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado. Cuando por razones extraordinarias, el gobernador cite a la asamblea a sesiones extraordinarias, el gobernador cite a la asamblea a sesiones extraordinarias.</p>	<p>año de servicio prestado, se reconocerá y pagará como si hubiere <u>sesionado</u> los 12 meses del año.</p> <p><b>Artículo 85. Período de vacaciones.</b> Las vacaciones a que tienen derecho los diputados deberán ser disfrutadas de manera colectiva, a partir del 20 de enero o el día hábil inmediatamente posterior, del año siguiente a su causación.</p> <p><b>Artículo 86. Responsable para conceder vacaciones.</b> Las vacaciones serán concedidas por resolución del presidente de la correspondiente asamblea departamental o <u>esta</u> <u>temporalmente</u> <u>este</u>, al <u>primer vicepresidente</u>.</p> <p><b>Artículo 87. De la compensación de vacaciones en dinero.</b> Las vacaciones podrán ser compensadas en dinero cuando el servidor se retire del servicio sin haberlas disfrutado. Los diputados que se retiren definitivamente de la asamblea departamental, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que éstas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente <u>sesionado</u>. Cuando por razones extraordinarias, el gobernador cite a la asamblea a sesiones extraordinarias, durante el período de vacaciones, tales días serán compensados en dinero.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Las vacaciones correspondientes al último año</p>	<p>el entendido que los diputados no tienen una relación laboral.</p> <p>Se ajusta numeración.</p> <p>Se ajusta numeración y la redacción.</p> <p>Se ajusta numeración. En el entendido que la caporación no se puede quedar sin representante legal, se propone establecer que las vacaciones del presidente se compensarán en dinero en el año en que se ordene el disfrute de las vacaciones.</p>
<p>al gobernador.</p> <p>Para estos efectos, la asamblea autorizará al gobernador para que se contrate con cualquier compañía de seguros legalmente autorizada, el seguro previsto en este artículo.</p> <p><b>Artículo 116. Seguro de vida en caso de reemplazo por vacancia.</b> En caso de falta absoluta, quienes sean llamados a ocupar el cargo de diputado tendrán derecho a los beneficios a que se refiere el artículo anterior, desde el momento de su posesión y hasta que concluya el período correspondiente a la vacante, según el caso.</p> <p>En caso de falta absoluta quien sea llamado a ocupar el cargo de diputado tendrá estos mismos derechos desde el momento de su posesión.</p> <p><b>Artículo 117. Derechos de los diputados.</b> Los diputados tendrán derecho a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vacaciones y prima de vacaciones.</li> <li>2. Gasto de Viaje.</li> <li>3. Capacitación.</li> </ol> <p><b>Artículo 118. Vacaciones.</b> Los diputados tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones.</p>	<p>Para estos efectos, la asamblea autorizará al gobernador para que se contrate con cualquier compañía de seguros legalmente autorizada, el seguro previsto en este artículo.</p> <p><b>Artículo 82. Seguro de vida en caso de reemplazo por vacancia.</b> En caso de falta absoluta, quienes sean llamados a ocupar el cargo de diputado tendrán derecho a los beneficios a que se refiere el artículo anterior, desde el momento de su posesión y hasta que concluya el período correspondiente a la vacante, según el caso.</p> <p>En caso de falta absoluta quien sea llamado a ocupar el cargo de diputado tendrá estos mismos derechos desde el momento de su posesión.</p> <p><b>Artículo 83. Derechos de los diputados.</b> Los diputados tendrán derecho a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vacaciones y prima de vacaciones.</li> <li>2. Gasto de Viaje.</li> <li>3. Capacitación.</li> </ol> <p><b>Artículo 84. Vacaciones.</b> Los diputados tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones colectivas por cada</p>	<p>Se ajusta numeración.</p> <p>Se ajusta numeración.</p> <p>Se reemplaza la expresión "trabajado" por "sesionado", en</p>
<p>durante el período de vacaciones, tales días serán compensados en dinero.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Las vacaciones correspondientes al último año del período constitucional se compensarán en dinero.</p> <p><b>Artículo 122. Base para liquidar las vacaciones y la prima de vacaciones.</b> Las vacaciones y la prima de vacaciones se liquidarán tomando como base el valor mensual de la remuneración que resulte de dividir entre doce (12) el ingreso percibido durante los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias en el respectivo año objeto de liquidación.</p> <p><b>Artículo 123. Gastos de viaje.</b> Las asambleas departamentales podrán pagar del rubro de gasto de funcionamiento, los gastos de viajes de sus diputados con ocasión del cumplimiento de comisiones oficiales dentro y fuera del departamento.</p> <p>El presidente de la asamblea departamental o su delegado, autorizará las comisiones oficiales de servicios dentro y fuera del departamento, y éstas causan derecho al reconocimiento de gastos de viaje en los términos que señale anualmente el Gobierno nacional. Para su reconocimiento y legalización se deberán presentar los soportes correspondientes a su cumplimiento.</p>	<p>del período constitucional se compensarán en dinero, <u>así como al presidente de la coporación en el año en el que se ordene su disfrute</u>.</p> <p><b>Artículo 88. Base para liquidar las vacaciones y la prima de vacaciones.</b> Las vacaciones y la prima de vacaciones se liquidarán tomando como base el valor mensual de la remuneración que resulte de dividir entre doce (12) el ingreso percibido durante los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias en el respectivo año objeto de liquidación.</p> <p><b>Artículo 89. Gastos de viaje.</b> Las asambleas departamentales podrán pagar del rubro de gasto de funcionamiento, los gastos de viajes de sus diputados con ocasión del cumplimiento de comisiones oficiales <del>dentro y fuera del departamento.</del></p> <p>El presidente de la asamblea departamental <del>o su delegado,</del> autorizará las comisiones oficiales de servicios <del>dentro y fuera del departamento,</del> y éstas causan derecho al reconocimiento de gastos de viaje en los términos que señale anualmente el Gobierno nacional. Para su reconocimiento y legalización se deberán presentar los soportes correspondientes a su cumplimiento.</p>	<p>Se ajusta numeración.</p> <p>Se ajusta numeración. Se reemplaza la expresión "trabajado" por "sesionado", en el entendido que los diputados no tienen una relación laboral.</p> <p>Se considera que el ordenar debe ser el presidente y no su delegado.</p>

<p><b>Artículo 124. Capacitación y formación.</b> La Escuela Superior de Administración Pública creará programas gratuitos, presenciales y/o virtuales, y de acceso prioritario de capacitación y formación profesional destinados a los Diputados.</p> <p>La ESAP contará con 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para implementar las disposiciones del presente artículo, estableciendo programas propios en los que podrán participar diputados, concejales, alcaldes, miembros de juntas administradoras locales y pensioneros, directivos de federaciones y confederaciones de concejales y diputados.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La capacitación y formación académica a que hace referencia el presente artículo será programada en coordinación con la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia CONFADICOL.</p> <p><b>Artículo 125.</b> El Ministerio de Educación Nacional fomentará el desarrollo de programas en las distintas instituciones de educación superior, dirigidos a la capacitación y formación de los diputados, en áreas y materias acordes con las funciones que ellos ejercen, según la Constitución y la ley.</p> <p><b>Artículo 126.</b> Las instituciones de educación superior podrán crear, dentro del marco de su</p>	<p>Se ajusta numeración.</p> <p>Se hacen ajustes de redacción.</p> <p>La ESAP contará con 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para implementar las disposiciones del presente artículo, estableciendo programas propios en los que podrán participar diputados, concejales, alcaldes, miembros de juntas administradoras locales y pensioneros, directivos de federaciones y confederaciones de concejales y diputados.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La capacitación y formación académica a que hace referencia el presente artículo, será programada en coordinación con la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia CONFADICOL.</p> <p><b>Artículo 125.</b> El Ministerio de Educación Nacional fomentará el desarrollo de programas en las distintas instituciones de educación superior, dirigidos a la capacitación y formación de los diputados, en áreas y materias acordes con las funciones que ellos ejercen, según la Constitución y la ley.</p> <p><b>Artículo 126.</b> Las instituciones de educación superior podrán crear, dentro del marco de su autonomía universitaria, programas dirigidos a la capacitación y formación de los diputados de carreras afines a la administración pública en materias acordes con las funciones que ellos ejercen, según la Constitución y la ley, dando facilidades de acceso y permanencia para los mismos.</p> <p><b>CAPITULO III</b> <b>De las ordenanzas</b></p> <p><b>Artículo 127. Inicialiva.</b> Los actos de las asambleas departamentales destinados a dictar disposiciones para el arreglo de alguno de los asuntos que son de su competencia se denominarán ordenanzas; las que tengan por objeto la ejecución de un hecho especial, como un nombramiento, o la decisión de un punto determinado, que no imponen obligaciones ni crean derechos a los asociados, se denominarán en general resoluciones.</p> <p>Pueden presentar proyectos de ordenanza ante la secretaría general de la asamblea, el gobernador por conducto de sus secretarías, y los diputados. Los de estos últimos deben llevar por lo menos la firma de tres (3) diputados.</p> <p><b>Artículo 128. Avoles normales.</b> Cuando se radique un proyecto de ordenanza por los diputados individualmente o por los bancadas políticamente</p>
<p>representadas y cuya iniciativa este reservada al gobernador, antes de su aprobación en segundo debate la administración podrá presentar el aval de la iniciativa. Salvo que se refiera a la materia tributaria y que con la iniciativa no se modifique o afecte el impacto fiscal a mediano plazo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 819 de 2003 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituya.</p> <p><b>Artículo 129. Unidad temática.</b> Todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma materia. Serán inadmisibles las disposiciones que no se relacionan con la misma temática. El presidente de la asamblea rechazará las iniciativas que no se ajusten a este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la plenaria de la asamblea.</p> <p>Los proyectos de ordenanza deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se expliquen sus alcances y las razones que lo sustentan.</p> <p><b>Artículo 130. Debates.</b> Los proyectos de ordenanza serán presentados en la secretaría general de la asamblea, la cual los repartirá a las comisiones que deban ocuparse de ellos, según la materia que traten y la competencia de aquellas.</p> <p>Para que un proyecto sea ordenanza debe aprobarse en tres (3) debates celebrados en</p>	<p>distintos días. El primero lo dará la comisión respectiva y el segundo, la asamblea en sesión plenaria. Durante el primero y el segundo se le pueden introducir los cambios, reformas, supresiones o adiciones que se consideren convenientes, siempre que se refieran a la materia o asunto que trate el proyecto. Durante el tercero, se aprueba total o parcialmente, o se imprueba.</p> <p>El ponente o ponentes para el primero y segundo debates serán designados por el presidente de la comisión respectiva y para el tercero, por el presidente de la plenaria.</p> <p>Los informes de los ponentes serán rendidos dentro de los ocho, cinco y tres días calendario siguiente a su designación, según se trate del primero, segundo o tercer debates. El incumplimiento de estos términos constituye causal de mala conducta.</p> <p>El ponente o ponentes para los tres debates pueden ser los mismos o diferentes diputados.</p> <p><b>Artículo 131. Trámites del plan de desarrollo</b> El trámite y aprobación del plan de desarrollo departamental deberá sujetarse a lo que disponga la ley orgánica de planeación.</p> <p>En todo aquello que no esté previsto en la Ley</p> <p><b>Artículo 131. Trámites del plan de desarrollo.</b> El trámite y aprobación del plan de desarrollo departamental deberá sujetarse a lo que disponga la ley orgánica de planeación.</p> <p>En todo aquello que no esté previsto en la Ley</p> <p>estudio adecuado del proyecto y no reconocen el cúmulo de trabajo que puedan tener los ponentes.</p> <p>El ponente o ponentes para el primero y segundo debates serán designados por el presidente de la comisión respectiva y para el tercero, por el presidente de la plenaria.</p> <p><b>El ponente rendirá el informe dentro del plazo inicial que le hubiere señalado el presidente, o en su prorrogado, teniendo en cuenta la urgencia del proyecto y el volumen de trabajo. En caso de incumplimiento se procederá a su remplazo.</b></p> <p>El ponente o ponentes para los tres debates pueden ser los mismos o diferentes diputados.</p> <p><b>Artículo 131. Trámites del plan de desarrollo.</b> El trámite y aprobación del plan de desarrollo departamental deberá sujetarse a lo que disponga la ley orgánica de planeación.</p> <p>En todo aquello que no esté previsto en la Ley</p>

<p>Orgánica de Planeación, se sujetará a lo establecido en los respectivos reglamentos.</p>	<p><b>reglamentar.</b></p>		<p>adelantando en sesión plenaria o comisiones permanentes. La mesa directiva de la asamblea dispondrá los días, horarios y duración de las intervenciones, así como el procedimiento que asegure el debido y oportuno ejercicio de este derecho. Para su intervención el interesado deberá inscribirse previamente ya sea por los canales virtuales o directamente en la secretaría general de la corporación.</p> <p>Con excepción de las personas con limitaciones físicas o sensoriales, las observaciones u opiniones presentadas deberán formularse siempre por escrito y serán publicadas oportunamente en la Gaceta de la asamblea y en la página web de la entidad o del departamento en donde no se cuente con esta herramienta virtual.</p>	<p>La mesa directiva de la asamblea dispondrá los días, horarios y duración de las intervenciones, así como el procedimiento que asegure el debido y oportuno ejercicio de este derecho. Para su intervención el interesado deberá inscribirse previamente ya sea por los canales virtuales o directamente en la secretaría general de la corporación.</p> <p><del>Con excepción de las personas con limitaciones físicas o sensoriales,</del> las observaciones u opiniones presentadas deberán formularse siempre por escrito y serán publicadas oportunamente en la Gaceta de la asamblea y en la página web de la entidad o del departamento en donde no se cuente con esta herramienta virtual.</p>	<p>debidamente la participación ciudadana.</p> <p>Por otro lado, resulta discriminatorio que las personas con limitaciones físicas o sensoriales solo pueden radicar observaciones de forma escrita, razón por la cual se modifica el último inciso.</p>
<p><b>Artículo 132. Archivo.</b> Los proyectos que no recibieren aprobación en por lo menos en dos debates, deberán ser archivados al término de las correspondientes sesiones ordinarias o extraordinarias.</p>	<p><b>Artículo 22. Archivo.</b> Los proyectos que no recibieren aprobación en por lo menos un debate deberán ser archivados al <del>finalizar</del> el correspondiente periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias.</p> <p><b>En todo caso, no se archivarán los proyectos que hayan surtido dos debates, así haya finalizado el periodo constitucional en el que fueron radicados. El tercer debate se deberá surtir con prioridad al iniciar el siguiente periodo.</b></p>	<p>Se ajusta numeración.</p> <p>Se considera pertinente establecer que el archivo se surta de no aprobarse el debate y no 2, como estableció el texto radicado.</p> <p>Se aclara que no será archivado el proyecto que cuente con dos debates, sin perjuicio de que termine el periodo constitucional de la corporación que los aprobó. Por lo que se propone adicionar un inciso.</p>	<p>Con excepción de las personas con limitaciones físicas o sensoriales, las observaciones u opiniones presentadas deberán formularse siempre por escrito y serán publicadas oportunamente en la Gaceta de la asamblea y en la página web de la entidad o del departamento en donde no se cuente con esta herramienta virtual.</p>	<p><del>Con excepción de las personas con limitaciones físicas o sensoriales,</del> las observaciones u opiniones presentadas deberán formularse siempre por escrito y serán publicadas oportunamente en la Gaceta de la asamblea y en la página web de la entidad o del departamento en donde no se cuente con esta herramienta virtual.</p>	<p>Se ajusta la redacción.</p> <p>Es pertinente especificar que, si el gobernador no sanciona el proyecto de ordenanza, transcurridos los términos previstos en el artículo, el presidente de la corporación deberá sancionarlo y publicarlo.</p>
<p><b>Artículo 133. Sanción.</b> El gobernador deberá sancionar, sin poder presentar nuevas objeciones por inconveniencia, el proyecto que reconsiderado fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de la asamblea.</p>	<p><b>Artículo 133. Sanción.</b> El gobernador deberá sancionar sin poder presentar nuevas objeciones por inconveniencia al proyecto que reconsiderado fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de la asamblea.</p>	<p>Por unidad de materia y conectividad, se deja este artículo, como parágrafo del artículo 135.</p>	<p><b>Artículo 135. Objeciones.</b> Aprobado un proyecto de ordenanza por la asamblea pasará al gobernador para su sanción, y si este no lo objetare por motivos de inconveniencia, legalidad o inconstitucionalidad, dispondrá que se promulgue como ordenanza. Si lo objetare, lo devolverá a la asamblea.</p> <p>El gobernador dispondrá de los siguientes términos:</p> <p>1. Cinco (5) días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte (20) artículos.</p>	<p><b>Artículo 22. Objeciones.</b> Aprobado un proyecto de ordenanza por la asamblea pasará al gobernador para su sanción, y si este no lo objetare por motivos de inconveniencia, legalidad o inconstitucionalidad, dispondrá que se promulgue como ordenanza. Si lo objetare, lo devolverá a la asamblea.</p> <p>El gobernador dispondrá de los siguientes términos:</p> <p>1. Cinco (5) días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte (20) artículos.</p>	<p>Se establece que, si un proyecto de ordenanza es objetado, el gobernador debe citar a la</p>
<p><b>Artículo 134. De la participación ciudadana en el estudio de proyectos de ordenanza.</b> Para expresar sus opiniones, toda persona natural o jurídica, en sesión formal, cualquier ciudadano podrá presentar observaciones sobre los proyectos de ordenanza cuyo estudio y examen se esté adelantando en sesión plenaria o comisiones permanentes.</p>	<p><b>Artículo 28. De la participación ciudadana en el estudio de proyectos de ordenanza.</b> Para expresar sus opiniones, las personas naturales y jurídicas podrán presentar observaciones por escrito en las sesiones formales, sobre los proyectos de ordenanza cuyo estudio y examen se esté adelantando en sesión plenaria o comisiones permanentes.</p>	<p>Se ajusta numeración.</p> <p>Es necesario establecer que las observaciones también se podrán presentar por escrito, con el fin de garantizar en</p>	<p>El gobernador dispondrá de los siguientes términos:</p> <p>1. Cinco (5) días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte (20) artículos.</p>	<p>El gobernador dispondrá de los siguientes términos:</p> <p>1. Cinco (5) días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte (20) artículos.</p>	<p>Se establece que, si un proyecto de ordenanza es objetado, el gobernador debe citar a la</p>
<p>2. Diez (10) días cuando el proyecto sea de veintinueve (21) a cincuenta (50) artículos, y</p> <p>3. Hasta de veinte (20) días cuando los artículos sean más de cincuenta (50).</p> <p>Si el gobernador, una vez transcurridos los términos indicados, no hubiere devuelto el proyecto con objeciones deberá sancionarlo y promulgarlo. Si la asamblea entrare en receso dentro de estos términos, el gobernador tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado, dentro de aquellos plazos. En el nuevo periodo de sesiones la asamblea decidirá sobre las objeciones.</p>	<p>2. Diez (10) días cuando el proyecto sea de veintinueve (21) a cincuenta (50) artículos, y</p> <p>3. Hasta de veinte (20) días cuando los artículos sean más de cincuenta (50).</p> <p>Si el gobernador, una vez transcurridos los términos indicados, no hubiere devuelto el proyecto con objeciones deberá sancionarlo y promulgarlo. Si no lo sanciona, el presidente de la Corporación procederá a sancionarlo y publicarlo.</p> <p>Si la asamblea entrare en receso dentro de estos términos, el gobernador tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado, dentro de aquellos plazos. En el nuevo periodo de sesiones la asamblea decidirá sobre las objeciones.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El gobernador deberá sancionar, sin poder presentar nuevas objeciones por inconveniencia, el proyecto que reconsiderado fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de la asamblea.</p>	<p>corporación a sesiones, en caso de estar en receso. Como esta para los congres art 78 ley 136.</p> <p>Se ajusta el último inciso, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 constitucional que aplica para el congreso de la república.</p>	<p><b>Artículo 137. Publicación.</b> El proyecto y los informes de los ponentes serán publicados en la gaceta oficial del departamento o de la asamblea o en la página web respectiva. Mientras la citada publicación no se haya realizado, no se podrá dar el debate respectivo. Si la publicación tuvo lugar en la página web, el debate correspondiente sólo podrá tener lugar veinticuatro (24) horas después de la publicación.</p> <p><b>Artículo 138. Publicación y vigencia.</b> Sancionada la ordenanza, se publicará en la gaceta o boletín oficial del departamento y en la página web de la asamblea; y empezará a regir cuando la misma determine, en ningún caso antes de la promulgación aquí ordenada. La publicación deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a su sanción.</p> <p><b>Artículo 139. Normas especiales.</b> Las disposiciones que sean aplicables sobre reforma y derogatoria de las leyes, regirán para las ordenanzas.</p>	<p>en la capital del departamento para que éste decida definitivamente sobre su constitucionalidad o legalidad conforme a los regios del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA.</p> <p><b>Artículo 101. Publicación.</b> El proyecto, las ponencias y los informes de los ponentes serán publicados en la gaceta oficial del departamento o de la asamblea o en la página web respectiva. Mientras la citada publicación no se haya realizado, no se podrá dar el debate respectivo. Si la publicación tuvo lugar en la página web, el debate correspondiente sólo podrá tener lugar veinticuatro (24) horas después de la publicación.</p> <p><b>Artículo 102. Publicación y vigencia.</b> Sancionada la ordenanza, se publicará en la gaceta o boletín oficial del departamento y en la página web de la asamblea; y empezará a regir cuando la misma determine, en ningún caso antes de la promulgación aquí ordenada. La publicación deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a su sanción.</p> <p><b>Artículo 103. Normas especiales.</b> Las disposiciones que sean aplicables sobre reforma y derogatoria de las leyes, regirán para las ordenanzas.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se elimina la última expresión, en el entendido que generaría demoras para la discusión y votación de los proyectos de ordenanza.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p>
<p><b>Artículo 136. Trámite en el tribunal.</b> Si las objeciones fueren por legalidad o inconstitucionalidad y la asamblea insistiere, el proyecto pasará al tribunal</p>	<p><b>Artículo 100 Trámite en el tribunal.</b> Si las objeciones fueren por legalidad o inconstitucionalidad y la asamblea insistiere, el proyecto pasará al Tribunal Administrativo que tenga sede</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>Administrativo que tenga sede en la capital del departamento para que éste decida definitivamente sobre su constitucionalidad o legalidad conforme a los regios del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA.</p>	<p>en la capital del departamento para que éste decida definitivamente sobre su constitucionalidad o legalidad conforme a los regios del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>

<p><b>Artículo 140. Nulidad.</b> Para todo lo relativo a la nulidad de las ordenanzas se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.</p> <p>Las ordenanzas u otros actos de las asambleas departamentales anulados por los tribunales de lo contencioso administrativo por ser contrarios a la Constitución o a las leyes no podrán ser reproducidos por aquellas corporaciones si continúan la esencia de las mismas disposiciones anuladas, a menos que una disposición constitucional o legal, posterior a la sentencia, autorice expresamente a las asambleas para ocuparse de tales asuntos.</p> <p><b>TÍTULO III</b> <b>De los gobernadores</b> <b>CAPÍTULO I</b> <b>Naturaleza del Cargo. Calidades, atribuciones</b></p> <p><b>Artículo 141. Naturaleza del cargo.</b> En cada uno de los departamentos habrá un gobernador, que será el mismo tiempo agente del gobierno y jefe de la administración y representante legal del departamento. Además de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución Política, el gobernador es la primera autoridad de policía del departamento.</p> <p>El gobernador, como agente del gobierno, dirigirá y coordinará, además, en el departamento, los servicios nacionales en las condiciones de la</p>	<p><b>Artículo 104. Nulidad.</b> Para todo lo relativo a la nulidad de las ordenanzas se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, o de las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.</p> <p>Las ordenanzas u otros actos de las asambleas departamentales anulados por los tribunales de lo contencioso administrativo por ser contrarios a la Constitución o a las leyes no podrán ser reproducidos por aquellas corporaciones si conservan la esencia de las mismas disposiciones anuladas, a menos que una disposición constitucional o legal, posterior a la sentencia, autorice expresamente a las asambleas para ocuparse de tales asuntos.</p> <p><b>Sin modificaciones.</b></p> <p><b>Artículo 105. Naturaleza del cargo.</b> En cada uno de los departamentos habrá un Gobernador que será jefe de la administración, jefe de la representación legal del departamento, el gobernador será agente del Presidente de la República para el cumplimiento de las políticas y para la ejecución de la política económica general, así como para aquellos asuntos que mediante convenio la Nación acuerde con el departamento. Los gobernadores serán elegidos popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para el período siguiente.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se ajusta el artículo de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política.</p>	<p>delegación que le confiera el Presidente de la República.</p> <p><b>Artículo 142. Elección de gobernadores.</b> Los gobernadores son elegidos popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para el período siguiente.</p> <p>En la elección del gobernador de Cundinamarca no participarán los ciudadanos inscritos en el censo electoral de Bogotá, Distrito Capital.</p> <p><b>Artículo 143. Calidades.</b> Para ser elegido gobernador se requiere ser ciudadano Colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo departamento durante el año anterior a la fecha del primer día de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.</p> <p><b>Artículo 144. Calidades especiales.</b> Para ser elegido gobernador del Archipiélago de San Andrés,</p>	<p>El gobernador, como agente del gobierno, dirigirá y coordinará, además, en el departamento, los servicios nacionales en las condiciones de la delegación que le confiera el Presidente de la República.</p> <p><b>Artículo 106. Elección de gobernadores.</b> Los gobernadores son elegidos popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para el período siguiente.</p> <p>En la elección del gobernador de Cundinamarca no participarán los ciudadanos inscritos en el censo electoral de Bogotá, Distrito Capital.</p> <p><b>Artículo 107. Calidades.</b> Para ser elegido gobernador se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo departamento durante el año anterior a la fecha del primer día de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.</p> <p><b>Para ser elegido gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se requiere además de los requisitos establecidos en el inciso anterior, ser residente del departamento conforme a las normas de control de densidad poblacional y tener domicilio en la respectiva circunscripción por más de diez (10) años consecutivos con anterioridad a la fecha del primer día de la inscripción.</b></p> <p><b>Artículo 144. Calidades especiales.</b> Para ser elegido gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se requiere además de los requisitos establecidos en el inciso anterior, ser residente del departamento conforme a las normas de control de densidad poblacional y tener domicilio en la respectiva circunscripción por más de diez (10) años consecutivos con anterioridad a la fecha del primer día de la inscripción.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se considera innecesario establecer un artículo</p>
<p>Providencia y Santa Catalina se requiere además de las determinadas por la ley, ser residente del departamento conforme a las normas de control de densidad poblacional y tener domicilio en la respectiva circunscripción por más de diez (10) años cumplidos con anterioridad a la fecha del primer día de la inscripción.</p> <p><b>Artículo 145. Posesión, término y aplazamiento.</b> Los gobernadores se posesionarán ante la respectiva asamblea. Si no estuviere reunida, la harán ante el correspondiente tribunal de lo contencioso administrativo o su presidente. Si no anterior no fuere posible, ante cualquier funcionario que ejerza autoridad o jurisdicción en el departamento y si esto tampoco fuere posible, ante dos testigos. Los gobernadores presentarán juramento en los siguientes términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia".</p> <p>Los gobernadores se posesionarán el primero (1) de enero del año en que comience el período constitucional para el cual han sido elegidos.</p> <p>El Presidente de la República podrá aplazar la posesión del gobernador hasta por un (1) mes, en caso de fuerza mayor o caso fortuito. La prórroga se contará a partir de la fecha en que debe efectuarse la posesión. En este evento se</p>	<p><del>Para ser elegido gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se requiere además de los requisitos establecidos en el inciso anterior, ser residente del departamento conforme a las normas de control de densidad poblacional y tener domicilio en la respectiva circunscripción por más de diez (10) años consecutivos con anterioridad a la fecha del primer día de la inscripción.</del></p> <p><b>Artículo 108. Posesión.</b> Los gobernadores se posesionarán ante la respectiva asamblea. Si no estuviere reunida, la harán ante su mesa directiva, si no estuviere reunida, la hará ante el presidente del Tribunal Superior, residente en el lugar, si no fuere posible lo hará ante notario público de la capital del departamento. Si no estuviere reunido, lo hará ante dos testigos.</p> <p>Los gobernadores presentarán juramento en los siguientes términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia".</p> <p>Los gobernadores se posesionarán el primero (1) de enero del año en que comience el período constitucional para el cual han sido elegidos.</p> <p>El presidente de la República podrá aplazar la posesión del gobernador hasta por un (1) mes, en caso de fuerza mayor o caso fortuito. La prórroga se contará a partir de la fecha en que debe efectuarse la posesión. En este evento se</p>	<p>independiente para establecer las calidades del gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, razón por la cual se incluye como inciso en el artículo anterior.</p> <p>Respecto a la posesión del Gobernador, se propone adicionar otros mecanismos para que puedan realizar la posesión, incorporando que si la Asamblea no está sesionando la puedan hacer ante la Mesa Directiva, y si no se puede reunir, se hará ante Notario Público. Situación que se considera necesario de incorporar en el presente artículo, dadas las particularidades en las que algunos gobernadores se han visto por los vicios normativos, de igual manera se ajusta la denominación del Tribunal ante el cual podrán realizar la posesión.</p>	<p>la gobernación por encargo, en los términos de esta ley.</p> <p>La no posesión del gobernador elegido popularmente dentro del término legal, sin que medie justa causa, dará lugar a falta absoluta y el Presidente de la República proveerá el cargo en los términos de esta ley. Si la falta de posesión se predica de gobernador encargado, el Presidente de la República designará a otro ciudadano en este cargo.</p> <p>Los gobernadores deberán declarar bajo la gravedad del juramento el monto de sus bienes y renta, la de su cónyuge, así como la declaratoria de conflicto de interés. Así mismo están en la obligación de presentar su hoja de vida en los términos y condiciones que fije la Ley 190 de 1995 o disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, y el cumplimiento a la Ley 2013 de 2019. Tales documentos deberán ser conservados por la unidad de recursos humanos de la gobernación.</p> <p><b>Artículo 146. De las inhabilidades de los gobernadores.</b> No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador:</p> <p>1. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 122 inciso final de la constitución política, quien haya sido condenado, en</p>	<p>proveerá la gobernación por encargo, en los términos de esta ley.</p> <p>La no posesión del gobernador elegido popularmente dentro del término legal, sin que medie justa causa, dará lugar a falta absoluta y el presidente de la República proveerá el cargo en los términos previstos en la presente ley. Si la falta de posesión se predica de gobernador encargado, el presidente de la República designará a otro ciudadano en este cargo <b>siguiendo el mismo procedimiento.</b></p> <p>Los gobernadores deben declarar bajo la gravedad del juramento el monto de sus bienes y renta, la de su cónyuge, así como la declaratoria de conflicto de interés. Así mismo están en la obligación de presentar su hoja de vida en los términos y condiciones que fije la Ley 190 de 1995, Ley 2013 de 2019 <b>o las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, y el cumplimiento a la Ley 2013 de 2019.</b> Tales documentos deberán ser conservados por la unidad de recursos humanos de la gobernación <b>y publicarse de acuerdo con los disposiciones legales.</b></p> <p><b>Artículo 109. De las inhabilidades de los gobernadores.</b> No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador:</p> <p>1. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 122 inciso final de la constitución política, quien haya sido condenado, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado a quienes</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>En los numerales 9, 10, 11 y 12, se establece una temporalidad de no sea perpetua.</p> <p>Se eliminarán los numerales 13 y 14.</p>

<p>cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior, excepto por delitos políticos o cúspidos.</p> <p>2. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o cúspidos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.</p> <p>3. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.</p> <p>4. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad pública, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya</p>	<p>hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior, excepto por delitos políticos o cúspidos.</p> <p>2. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o cúspidos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.</p> <p>3. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.</p> <p>4. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad pública, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como</p> <p>5. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la</p>	<p>corresponder a inhabilidades propiamente dichas.</p>	<p>intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recuros de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.</p> <p>5. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.</p> <p>6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan, ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento, o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.</p> <p>7. Quien haya desempeñado el cargo de contralor departamental o procurador delegado en el respectivo departamento <b>en los doce (12) meses anteriores a la elección</b> para la elección de</p>	<p>elección, haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.</p> <p>6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan, ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento, o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.</p> <p>7. Quien haya desempeñado el cargo de contralor departamental o procurador delegado en el respectivo departamento <b>en los doce (12) meses anteriores a la elección</b> para la elección de</p>
<p>dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.</p> <p>7. Quien haya desempeñado el cargo de contralor departamental o procurador delegado en el respectivo departamento un periodo de doce (12) meses anteriores a la elección para la elección de gobernador.</p> <p>8. Quien haya desempeñado los cargos a que se refiere el artículo 197 de la Constitución Política.</p> <p>9. Quien haya celebrado en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguna con el respectivo departamento, con sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos provenientes del mismo.</p> <p>10. Quien haya intervenido en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la celebración de contratos con la administración pública.</p>	<p>8. Quien haya desempeñado los cargos a que se refiere el artículo 197 de la Constitución Política.</p> <p>9. Quien haya celebrado <b>en los 12 meses anteriores a la elección de la candidatura</b>, en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con el respectivo departamento, con sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos provenientes del mismo.</p> <p>10. Quien, <b>en los 12 meses anteriores a la elección de la candidatura</b>, haya intervenido de cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la celebración de contratos con la administración pública.</p> <p>11. Quien, <b>en los 12 meses anteriores a la elección de la candidatura</b>, haya intervenido en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el departamento o sus entidades descentralizadas.</p> <p>12. Quien, <b>en los 12 meses anteriores a la elección de la candidatura</b>, haya sido apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales del respectivo departamento, o que administren tributos, tasas o contribuciones del mismo.</p> <p>13. Quien, <b>desempeñe simultáneamente otro cargo o</b></p>	<p>empleo público o privado.</p>	<p>11. Quien haya intervenido, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el departamento o sus entidades descentralizadas.</p> <p>12. Quien haya sido apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales del respectivo departamento, o que administren tributos, tasas o contribuciones del mismo.</p> <p>13. Quien desempeñe simultáneamente otro cargo o empleo público o privado.</p> <p>14. Inscritas como candidatas a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el periodo para el cual fue elegido.</p> <p>15. A quien se le hubiere revocado el mandato como gobernador o alcalde.</p> <p>16. Quien hubiere sido elegido para cargo o corporación pública de elección popular cuyo periodo coincida en el tiempo, así sea parcialmente con el periodo del cargo al que aspira.</p>	<p><b>14. Inscritas como candidatas a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el periodo para el cual fue elegido.</b></p> <p>15. A quien se le hubiere revocado el mandato como gobernador o alcalde.</p> <p>16. Quien hubiere sido elegido para cargo o corporación pública de elección popular cuyo periodo coincida en el tiempo, así sea parcialmente con el periodo del cargo al que aspira.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Intérpretese para todos sus efectos, que los 12 meses anteriores a la elección de la candidatura se refieren al presente artículo, se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos o entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran al respectivo ente territorial.</p>



<p>sociedades mencionadas, puedan directamente o por intermedio de apoderados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés;</li> <li>2. Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y multas que gravén a las mismas personas;</li> <li>3. Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrecen al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten;</li> <li>4. Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los diputados durante su periodo Constitucional no podrán ser apoderados ni objeto gestión intereses fiscales o económicos del respectivo municipio, sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del municipio y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.</li> </ol>	<p>puedan directamente o por intermedio de apoderados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés;</li> <li>2. Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y multas que gravén a las mismas personas;</li> <li>3. Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrecen al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten;</li> <li>5. Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los diputados durante su periodo Constitucional no podrán ser apoderados ni objeto gestión intereses fiscales o económicos del respectivo municipio, sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del municipio y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.</li> </ol>	<p>el entendido que es contradictorio con la naturaleza del cargo de los gobernadores.</p>	<p>empresas industriales y comerciales del orden municipal y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.</p> <p><b>Artículo 151. Prohibiciones.</b> Es prohibido a los gobernadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inmiscuirse en asuntos de actos oficiales que no sean de su competencia;</li> <li>2. Decretar en favor de cualquier persona o entidad, gratificaciones, indemnizaciones o pensiones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley, y las decisiones jurisdiccionales;</li> <li>3. Decretar por motivos políticos, actos de proscripción o persecución contra personas o corporaciones, o decretar insubstancias masivas. Los retiros masivos de personal solamente podrán realizarse en los casos autorizados por la ley o cuando se ordene la supresión, fusión o restauración de entidades, con arreglo a los acuerdos que la regulen;</li> </ol>	<p><b>Artículo 114. Prohibiciones.</b> Es prohibido a los gobernadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inmiscuirse en asuntos de actos oficiales que no sean de su competencia;</li> <li>2. Decretar en favor de cualquier persona o entidad, gratificaciones, indemnizaciones o pensiones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley, y las decisiones jurisdiccionales;</li> <li>3. Decretar por motivos políticos, actos de proscripción o persecución contra personas o corporaciones, o decretar insubstancias masivas. Los retiros masivos de personal solamente podrán realizarse en los casos autorizados por la ley o cuando se ordene la supresión, fusión o restauración de entidades, con arreglo a los ordenamientos que lo regulen;</li> <li>4. Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en</li> </ol>	<p>Se ajusta la numeración y la redacción.</p>	<p>Se elimina el último inciso por considerarse innecesario.</p>	
<p>4. Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años después de la dejación del cargo, con respecto al departamento en el cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado.</p> <p>Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales existen sujetos claramente determinados.</p> <p><b>Artículo 152. Autorización para salir del país.</b> Cuando el gobernador requiera salir del país, en</p>	<p>asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años después de la dejación del cargo, con respecto al departamento en el cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado.</p> <p>Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales existen sujetos claramente determinados.</p> <p><b>Artículo 115. Autorizaciones para gobernadores.</b> Cuando el gobernador requiera salir del país en misión oficial, solicitará</p>	<p>Se ajusta la numeración. Se debe aprovechar para regular</p>	<p>misión oficial, lo hará informando de manera previa al Ministerio del Interior, entidad que emitirá el respectivo acto administrativo de autorización dentro de los (48) horas siguientes a su recibo formal. En la solicitud remitida por el gobernador, se deberá informar el Secretario de despacho o funcionario de alto nivel de la entidad que quedará encargado.</p> <p><b>Parágrafo:</b> Los gobernadores de los departamentos ubicados en zonas de frontera podrán hacer tránsito en misión oficial en zonas de frontera con países limítrofes cuando el término no exceda las 48 horas.</p> <p><b>Artículo 153. Salarios y prestaciones de los gobernadores.</b> Los gobernadores tendrán derecho durante el periodo para el cual han sido elegidos, a la asignación correspondiente a la categoría que para el departamento establezca el Gobierno nacional y el régimen prestacional existente para los servidores públicos en cada departamento de conformidad con la ley.</p> <p><b>Artículo 154. Atribuciones de los gobernadores.</b> Además de las funciones constitucionales y legales previstas, los gobernadores tendrán las siguientes:</p>	<p><b>permiso o licencia remunerada, o no, se hará</b> informando de <b>manera justificada</b> y, previa al Ministerio del Interior, entidad que emitirá el respectivo acto administrativo de autorización dentro de los (48) horas siguientes a su recibo formal. En la solicitud remitida por el gobernador, se deberá informar el Secretario de despacho o funcionario de alto nivel de la entidad que quedará encargado.</p> <p><b>El gobernador presentará un informe a la asamblea dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al término de la comisión al exterior, indicando el motivo, duración, costos y resultados de la gestión.</b></p> <p><b>Parágrafo:</b> Los gobernadores de los departamentos ubicados en zonas de frontera podrán hacer tránsito en misión oficial en zonas de frontera con países limítrofes cuando el término no exceda las 48 horas.</p> <p><b>Artículo 116. Salarios y prestaciones de los gobernadores.</b> Los gobernadores tendrán derecho durante el periodo para el cual han sido elegidos, a la asignación correspondiente a la categoría que para el departamento establezca el Gobierno nacional y el régimen prestacional existente para los servidores públicos en cada departamento de conformidad con la ley.</p> <p><b>Artículo 117. Atribuciones de los gobernadores.</b> Además de las funciones constitucionales y legales previstas, los gobernadores tendrán las siguientes funciones:</p>	<p>Todas las situaciones administrativas no solo la salida del país y las vacaciones sino todas como permisos/licencias, lo cual no se encuentra regulado en ninguna normativa.</p> <p>Ajuste de redacción y se adiciona un inciso, a fin de establecer la obligación del Gobernador de presentarle a la asamblea un informe sobre la comisión que se proponga cumplir en el exterior.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>Se elimina el numeral 7, en el entendido que se considera un</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, los decretos del Gobierno nacional, las ordenanzas de la respectiva asamblea y sus propias decisiones.</li> <li>Gestionar y promover la adopción y ejecución de políticas nacionales que coadyuven los intereses departamentales.</li> <li>Coordinar y articular el desarrollo de las políticas nacionales de carácter sectorial entre las diferentes entidades del nivel nacional en su territorio, haciendo uso de los instrumentos de planificación y concertación interinstitucional.</li> <li>Atender las instrucciones del presidente de la República sobre la ejecución de la política macroeconómica y las relacionadas con los convenios celebrados entre la Nación y el departamento.</li> <li>Celebrar convenios interadministrativos con la Nación para asumir por delegación diversas competencias de gestión administrativa y fiscal del nivel nacional, según las diferentes capacidades seccionales para asumir estas tareas.</li> <li>Presentar los proyectos de ordenanza que</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, los decretos del Gobierno nacional, las ordenanzas de la respectiva asamblea y sus propias decisiones.</li> <li>Gestionar y promover la adopción y ejecución de políticas nacionales que coadyuven los intereses departamentales.</li> <li>Coordinar y articular el desarrollo de las políticas nacionales de carácter sectorial entre las diferentes entidades del nivel nacional en su territorio, haciendo uso de los instrumentos de planificación y concertación interinstitucional.</li> <li>Atender las instrucciones del presidente de la República sobre la ejecución de la política macroeconómica y las relacionadas con los convenios celebrados entre la Nación y el departamento.</li> <li>Celebrar convenios interadministrativos con la Nación para asumir por delegación diversas competencias de gestión administrativa y fiscal del nivel nacional, según las diferentes capacidades seccionales para asumir estas tareas.</li> <li>Presentar los proyectos de ordenanza <del>que</del> <del>se</del> <del>presenten</del> <del>convenientes</del> para la buena marcha del departamento.</li> <li><del>Presentar a la asamblea al inicio de su sesión un informe sobre la administración a su cargo.</del></li> </ol>	<p>desgaste innecesario, porque la ley ya establece informe anual de ejecución de plan de desarrollo.</p> <p>Se elimina el numeral 15, en el entendido que la atribución de designar el alcalde ad hoc es del presidente entregado por delegación al ministerio del interior.</p> <p>Se elimina el numeral 18, ya que no se considera conveniente que el Gobernador remplace a la asamblea en lo referente a los nombramientos, pues si la asamblea está en receso, debe ser una competencia que le asiste a la mesa directiva.</p> <p>Se modifica el numeral 24, a fin de aclarar que la función que desempeña el departamento en la actualización catastral es en calidad de gestores.</p> <p>Se modifica el numeral 30, en el entendido que los</p>	<p>Juzgen convenientes para la buena marcha del departamento.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Presentar a la asamblea al inicio de sus sesiones, un informe sobre la administración a su cargo.</li> <li>Formular y presentar a la asamblea el proyecto de ordenanza que contenga el plan de ordenamiento territorial.</li> <li>Adoptar, mediante decreto el plan de ordenamiento departamental, cuando luego de ser presentado en debida forma éste no es aprobado por la Asamblea en los términos establecidos en la ley.</li> <li>Adelantar las acciones respectivas para la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, en los términos en que se establezca.</li> <li>Reglamentar las ordenanzas departamentales.</li> <li>Aceptar la renuncia o conceder licencia a los diputados, cuando la asamblea departamental esté en receso.</li> <li>Aceptar la renuncia del controlador cuando la</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Formular y presentar a la asamblea <del>departamental</del> el proyecto de ordenanza que contenga el plan de ordenamiento territorial.</li> <li>Adoptar mediante decreto el plan de ordenamiento departamental, cuando luego de ser presentado en debida forma no sea aprobado por la Asamblea en los términos establecidos en la ley.</li> <li>Adoptar mediante decreto el plan de <del>ordenamiento</del> <del>departamental</del> desarrollo departamental, cuando luego de ser presentado en debida forma éste, no es aprobado por la Asamblea en los términos establecidos en la ley.</li> <li>Presentar a la asamblea departamental <del>anualmente un informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1395 de 2018 o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.</del></li> <li>Adelantar las acciones respectivas para la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, en los términos en que se establezca.</li> <li>Reglamentar las ordenanzas departamentales.</li> <li>Aceptar la renuncia o conceder licencia a los diputados, cuando la asamblea departamental esté en</li> </ol>	<p>gobernadores no pueden destituir a los alcaldes, solo los pueden suspender.</p> <p>Se elimina el numeral 31, en el entendido que los gobernadores no tienen la facultad de nombrar los alcaldes ad hoc.</p> <p>Se elimina el numeral 51 en el entendido que no es competencia en virtud de las normas de función pública, evaluar a el comandante de policía, no es procedente.</p> <p>Se elimina el numeral 52, en el entendido que es una función que le asiste al ministerio de transporte.</p>
<p>asamblea se encuentre en receso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios departamentales de acuerdo con las facultades y autorizaciones establecidas en la Constitución, la ley y las ordenanzas departamentales.</li> <li>Designar los alcaldes ad hoc de su jurisdicción, una vez el respectivo Procurador Regional haya aceptado el impedimento, en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 numeral 15 del Decreto Ley 262 de 2000 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, salvo lo previsto en materia de policía en la Ley 1801 de 2016 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.</li> <li>Velar por el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos departamentales y nacionales que ejerzan sus funciones en el departamento y dictar los actos necesarios para su administración.</li> <li>Ejercer la potestad disciplinaria sobre los servidores bajo su dependencia.</li> <li>Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas, asambleas y demás organismos cuyos nombramientos correspondan</li> </ol>	<p>receso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aceptar la renuncia del controlador cuando la asamblea se encuentre en receso.</li> <li>Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios departamentales de acuerdo con las facultades y autorizaciones establecidas en la Constitución, la ley y las ordenanzas departamentales.</li> <li><del>Designar los alcaldes ad hoc de su jurisdicción una vez el respectivo Procurador Regional haya aceptado el impedimento, en los términos de los artículos 11 y 12 del Decreto Ley 262 de 2000 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, salvo lo previsto en materia de policía en la Ley 1801 de 2016 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.</del></li> <li>Velar por el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos departamentales y nacionales que ejerzan sus funciones en el departamento y dictar los actos necesarios para su administración.</li> <li>Ejercer la potestad disciplinaria sobre los servidores bajo su dependencia.</li> <li>Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas, asambleas y demás organismos cuyos nombramientos correspondan</li> </ol>	<p>Se modifica el numeral 17, ya que no se considera conveniente que el Gobernador remplace a la asamblea en lo referente a los nombramientos, pues si la asamblea está en receso, debe ser una competencia que le asiste a la mesa directiva.</p>	<p>asambleas y demás organismos cuyos nombramientos correspondan a la asamblea, cuando esta no se encuentra reunida y nombrar interinamente a quien debe reemplazarlo, salvo norma expresa que disponga lo contrario.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y unidades administrativas especiales del departamento.</li> <li>Conceder comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción del nivel nacional, departamental y municipal a los funcionarios inscritos en carrera administrativa del nivel central.</li> <li>Adelantar acciones encaminadas a promover el desarrollo económico y pleno empleo de los habitantes del departamento.</li> <li>Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad, la tolerancia y la convivencia pacífica entre los habitantes del departamento, diseñando mecanismos que permitan la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones departamentales en el marco de la Constitución y la ley.</li> <li>Contribuir al fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios de sus municipios y de las vías para la competitividad.</li> </ol>	<p>a la asamblea, cuando esta no se encuentra reunida y nombrar interinamente a quien debe reemplazarlo, salvo norma expresa que disponga lo contrario.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y unidades administrativas especiales del departamento.</li> <li>Conceder comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción del nivel nacional, departamental y municipal a los funcionarios inscritos en carrera administrativa del nivel central.</li> <li>Adelantar acciones encaminadas a promover el desarrollo económico y pleno empleo de los habitantes del departamento.</li> <li>Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad, la tolerancia y la convivencia pacífica entre los habitantes del departamento, diseñando mecanismos que permitan la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones departamentales en el marco de la Constitución y la ley.</li> <li>Contribuir al fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios de sus municipios y de las vías para la competitividad.</li> </ol>	<p>Se elimina el numeral 17, ya que no se considera conveniente que el Gobernador remplace a la asamblea en lo referente a los nombramientos, pues si la asamblea está en receso, debe ser una competencia que le asiste a la mesa directiva.</p>



<p>de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones departamentales en el marco de la Constitución y la ley.</p> <p>23. Contribuir al fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios de sus municipios y de las vías para la competitividad.</p> <p>24. Complementar la actuación municipal en la actualización catastral de predios rurales en municipios con gran extensión y en coordinación con las autoridades competentes en la materia, garantizando la autonomía fiscal municipal y la titularidad del impuesto de los municipios.</p> <p>25. Ejecutar acciones tendientes a la protección de la población vulnerable y a su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria.</p> <p>26. Desarrollar acciones tendientes a prestar apoyo, asesoría, capacitación y asistencia técnica a los distritos, municipios y resguardos indígenas dentro de su jurisdicción.</p> <p>27. Promover, desarrollar y aplicar estrategias de seguimiento a la gestión de los asuntos</p>	<p>26. <b>Ser gestores</b> en la actualización catastral de predios rurales en municipios con gran extensión y en coordinación con las autoridades competentes en la materia, garantizando la autonomía fiscal municipal y la titularidad del impuesto de los municipios.</p> <p>27. Ejecutar acciones tendientes a la protección de la población vulnerable y a su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria.</p> <p>28. Desarrollar acciones tendientes a prestar apoyo, asesoría, capacitación y asistencia técnica a los distritos, municipios y resguardos indígenas dentro de su jurisdicción.</p> <p>29. Promover, desarrollar y aplicar estrategias de seguimiento a la gestión de los asuntos sectoriales del nivel nacional dentro de su territorio, y proponer o hacer recomendaciones al Gobierno nacional sobre su ejecución en el ámbito de su competencia.</p> <p>30. Ejercer la <b>intermediación</b> a coordinación entre las autoridades locales y las nacionales, <b>con el apoyo del Sistema Administrativo de Intercambio</b>.</p> <p>31. <b>Presidir las juntas departamentales de coordinación municipal.</b></p> <p>32. <b>Suspender o destituir</b> y nombrar a los alcaldes de su</p>	<p>sectoriales del nivel nacional dentro de su territorio, y proponer o hacer recomendaciones al Gobierno nacional sobre su ejecución en el ámbito de su competencia.</p> <p>28. Ejercer la intermediación y coordinación entre las autoridades locales y las nacionales, con el apoyo del Sistema Administrativo de Intercambio.</p> <p>29. Presidir las juntas departamentales de coordinación municipal.</p> <p>30. Suspender o destituir y nombrar a los alcaldes de su departamento en los casos señalados por la ley.</p> <p>31. Designar alcalde ad hoc para ejercer funciones administrativas de policía en caso de litigio o duda sobre la competencia por el término que persista el diferendo.</p> <p>32. Coordinar la acción de los municipios sin perjuicio de su autonomía y servir de interlocutor de los mismos ante el Gobierno nacional.</p> <p>33. Fomentar la constitución de asociaciones de municipios y otros figuras de integración</p>	<p>departamento en los casos señalados por la ley.</p> <p>33. <b>Designar alcalde ad hoc para ejercer funciones administrativas de policía en caso de litigio o duda sobre la competencia por el término que persista el diferendo.</b></p> <p>34. Coordinar la acción de los municipios sin perjuicio de su autonomía y servir de interlocutor <b>cuando sea necesario de los mismos</b> ante el Gobierno nacional.</p> <p>35. Fomentar la constitución de asociaciones de municipios y otras figuras de integración territorial en su jurisdicción.</p> <p>36. Rendir cuentas de su gestión a la ciudadanía, para la cual deberá definir un esquema y cronograma de seguimiento y evaluación de resultados, que facilite el control social a su administración, y convocar de manera periódica a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas para escuchar sus propuestas o críticas, de acuerdo con las directrices señaladas para tal efecto en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011. <b>Ley 1787 de 2016 y sus normas reglamentarias</b> sobre la participación democrática y ciudadana vigentes.</p> <p>37. Elaborar y difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial en los municipios y distritos de su jurisdicción, del departamento a los gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general.</p>
<p>territorial en su jurisdicción.</p> <p>34. Rendir cuentas de su gestión a la ciudadanía, para lo cual deberá definir un esquema y cronograma de seguimiento y evaluación de resultados, que facilite el control social a su administración, y convocar de manera periódica a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas para escuchar sus propuestas o críticas, de acuerdo con las directrices señaladas para tal efecto en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y las normas legales sobre la participación democrática y ciudadana vigentes.</p> <p>35. Elaborar y difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial en los municipios y distritos de su jurisdicción, del departamento a los gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general.</p> <p>36. Velar por la efectividad de la participación ciudadana en relación con la asamblea departamental.</p> <p>37. Promocionar, difundir y proteger los derechos humanos en su jurisdicción, en el marco de la Constitución y de los</p>	<p>38. Velar por la efectividad de la participación ciudadana en relación con la asamblea departamental.</p> <p>39. Promocionar, difundir y proteger los derechos humanos en su jurisdicción, en el marco de la Constitución y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia; ejecutando para ello las políticas, campañas y convenios sobre derechos, deberes y mecanismos de protección de los mismos, con la participación de otras entidades estatales y de las organizaciones no gubernamentales.</p> <p>40. Velar por el mantenimiento del orden público en el departamento, de acuerdo con las normas y las instrucciones del presidente de la república, y coadyuvar a su mantenimiento en el resto del territorio nacional.</p> <p>41. Presidir el consejo de seguridad departamental. Esta función solo se podrá delegar en el secretario de gobierno o quien haga sus veces.</p> <p>42. En caso de que los alcaldes no puedan, por razones de orden público, ejercer sus funciones en el territorio de su municipio, corresponderá al gobernador del respectivo departamento determinar el lugar donde podrán ejercerlas, con las garantías de seguridad necesarias para el ejercicio del cargo, y hasta cuando se restablezca la normalidad en su municipio.</p>	<p>instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia; ejecutando para ello las políticas, campañas y convenios sobre derechos, deberes y mecanismos de protección de los mismos, con la participación de otras entidades estatales y de las organizaciones no gubernamentales.</p> <p>38. Velar por el mantenimiento del orden público en el departamento, de acuerdo con las normas y las instrucciones del Presidente de la República, y coadyuvar a su mantenimiento en el resto del territorio nacional.</p> <p>39. Presidir el consejo de seguridad departamental. Esta función solo se podrá delegar en el secretario de gobierno o quien haga sus veces.</p> <p>40. En caso de que los alcaldes no puedan, por razones de orden público, ejercer sus funciones en el territorio de su municipio, corresponderá al gobernador del respectivo departamento determinar el lugar donde podrán ejercerlas, con las garantías de seguridad necesarias para el ejercicio del cargo, y hasta cuando se restablezca la normalidad en su municipio.</p>	<p>43. <b>Como primera autoridad de policía en el departamento.</b> Impartir instrucciones a los comandantes de la fuerza pública para prevenir desórdenes y alteración del orden público. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el gobernador.</p> <p>44. Solicitar a los alcaldes y a las autoridades de las demás entidades territoriales ubicadas en el departamento, la expedición de las órdenes y medidas de orden público que se requieran para su conservación o restablecimiento en esas jurisdicciones. <b>En caso de demora injustificada, el gobernador podrá expedir órdenes necesarias para la preservación del orden público.</b></p> <p>45. Elaborar los informes generales y especiales de orden público, de conformidad con la Ley 40 de 1991 y remitirlos oportunamente al Gobierno nacional por conducto de la Subdirección de Seguridad y Convivencia o la dependencia que haga sus veces en el Ministerio del Interior.</p> <p>46. Dictar, dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, de conformidad con la ley.</p> <p>47. Requerir el apoyo de la fuerza pública en los casos permitidos por la Constitución y la ley.</p> <p>48. Diseñar programas de convivencia pacífica y de construcción de la paz en su jurisdicción.</p>

<p>41. Impartir instrucciones a los comandantes de la fuerza pública para prevenir desórdenes y alteración del orden público. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia los órdenes que le imparta el gobernador.</p> <p>42. Solicitar a los alcaldes y a las autoridades de las demás entidades territoriales ubicadas en el departamento, la expedición de los órdenes y medidas de orden público que se requieran para su conservación o el restablecimiento en esas jurisdicciones. En caso de demora injustificada, el gobernador podrá expedir el orden necesario para la preservación del orden público.</p> <p>43. Elaborar los informes generales y especiales de orden público, de conformidad con la Ley 44 de 1991 y remitirlos oportunamente al Gobierno nacional por conducto de la Subdirección de Seguridad y Convivencia o la dependencia que haga sus veces en el Ministerio del Interior.</p> <p>44. Dictar, dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, de conformidad con la ley.</p>	<p>49. Proponer la adopción de políticas específicas en materia de prevención criminal, que se adecuen a las características del departamento, en coordinación con las entidades nacionales competentes.</p> <p>50. Dentro de los precios límites de las competencias que a ellos les corresponden, convenir con las autoridades de las entidades territoriales de igual nivel del país vecino, programas de cooperación e integración fronteriza, dirigidos a fomentar el desarrollo sostenible, la prestación de servicios públicos, la preservación del medio ambiente y la ejecución de obras públicas.</p> <p>51. Apoyar a las entidades territoriales en su jurisdicción para que den cumplimiento a las normas de buen gobierno y/o disciplina fiscal; y acompañarlos, en coordinación con el Gobierno nacional en la búsqueda de salidas estructurales a situaciones de déficit o de incapacidad institucional que les permitan prestar de manera adecuada los servicios públicos de educación, salud y agua potable a su cargo.</p> <p>52. Previa a la presentación del proyecto de ordenanza por el cual se cree una entidad descentralizada, presentar a consideración de la Asamblea un estudio técnico avalado por el organismo oficial correspondiente, que sustente la conveniencia económica y social de la iniciativa, así como la viabilidad financiera de la nueva entidad, teniendo en cuenta sus funciones, el sector</p>		<p>45. Requerir el apoyo de la fuerza pública en los casos permitidos por la Constitución y la ley.</p> <p>46. Diseñar programas de convivencia pacífica y de construcción de la paz en su jurisdicción.</p> <p>47. Proponer la adopción de políticas específicas en materia de prevención criminal, que se adecuen a las características del departamento, en coordinación con las entidades nacionales competentes.</p> <p>48. Dentro de los precios límites de las competencias que a ellos les corresponden, convenir con las autoridades de las entidades territoriales de igual nivel del país vecino, programas de cooperación e integración fronteriza, dirigidos a fomentar el desarrollo sostenible, la prestación de servicios públicos, la preservación del medio ambiente y la ejecución de obras públicas.</p> <p>49. Apoyar a las entidades territoriales en su jurisdicción para que den cumplimiento a las normas de buen gobierno y/o disciplina fiscal; y acompañarlos, en coordinación con el Gobierno nacional en la búsqueda de salidas estructurales a situaciones de déficit</p>	<p>dónde operará y sus fuentes de financiación.</p> <p>53. <del>Evaluar anualmente el desempeño y gestión del comandante de Policía de su jurisdicción en cumplimiento de las metas previstas en el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana de su departamento remitido a la Dirección Nacional de la Policía, el cual deberá permanecer publicado en la página web de la institución policial para libre acceso de la comunidad.</del></p> <p>54. <del>Regular y unificar las tarifas de transporte de servicio público intermunicipal y así como el uso de las rutas en las vías intermunicipales.</del></p> <p>55. Los gobernadores administrarán los fondos cuentas de seguridad y convivencia ciudadana – FONSEI, quienes podrán delegar esta responsabilidad en el secretario de gobierno departamental, o quien haga sus veces.</p> <p>56. Incorporar al presupuesto departamental mediante decreto, los recursos provenientes del sistema general de participaciones, del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPETI, del Sistema General de Regalías – SGR – y los celebrados mediante convenio con entidades del estado y/o de cooperación internacional.</p> <p>57. En el marco de las facultades pro tempore para incorporar, adicionar, modificar, efectuar tratadas,</p>	
<p>o de incapacidad institucional que les permitan prestar de manera adecuada los servicios públicos de educación, salud y agua potable a su cargo.</p> <p>50. Previa a la presentación del proyecto de ordenanza por el cual se cree una entidad descentralizada, presentar a consideración de la Asamblea un estudio técnico avalado por el organismo oficial correspondiente, que sustente la conveniencia económica y social de la iniciativa así como la viabilidad financiera de la nueva entidad, teniendo en cuenta sus funciones, el sector donde operará y sus fuentes de financiación.</p> <p>51. Evaluar anualmente el desempeño y gestión del comandante de Policía de su jurisdicción, en cumplimiento de las metas previstas en el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana de su departamento y remitirlo a la Dirección Nacional de la Policía, el cual deberá permanecer publicado en la página web de la institución policial para libre acceso de la comunidad.</p> <p>52. Regular y unificar las tarifas de transporte de servicio público intermunicipal y así como el uso de las rutas en las vías intermunicipales.</p>	<p>presupuestales y crear rubros presupuestales en las diferentes secciones del Presupuesto General del Departamento, servicio de la deuda pública e inversión; en ejecución de sus políticas, programas subprogramas y proyectos, establecidos en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia.</p> <p>58. Incorporar los recursos provenientes del Tesoro Nacional o de Cooperación nacional o internacional que tengan por objeto cofinanciar proyectos, una vez el ejecutivo los adicione deberá informar a la Asamblea Departamental dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición del acto administrativo.</p> <p>59. Las demás que les señalen la Constitución y la ley.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> El gobernador es agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público. En consecuencia, los actos y órdenes del presidente de la República en esta materia los aplicará en el departamento de manera inmediata y prevalente. A su vez, las decisiones de los gobernadores en materia de orden público son preferentes a las de los alcaldes y de los distritos, y éstos deberán aplicarlas en sus municipios de manera preferente.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En el marco de los principios de coordinación y complementariedad que debe existir en las actuaciones administrativas de los diferentes niveles, el gobernador articulará con la Subdirección de Seguridad y Convivencia o quien haga sus veces del Ministerio del Interior, las</p>		<p>53. Los gobernadores administrarán los fondos cuentas de seguridad y convivencia ciudadana – FONSEI, quienes podrán delegar esta responsabilidad en el secretario de gobierno departamental, o quien haga sus veces.</p> <p>54. Incorporar al presupuesto departamental mediante decreto, los recursos provenientes del sistema general de participaciones, del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPETI – del Sistema General de Regalías – SGR – y los celebrados mediante convenio con entidades del estado y/o de cooperación internacional.</p> <p>55. Adoptar, mediante decreto el plan de ordenamiento departamental cuando éste no es aprobado por la Asamblea en los términos establecidos en la ley.</p> <p>56. En el marco de las facultades pro tempore para incorporar, adicionar, modificar, efectuar tratadas presupuestales y crear rubros presupuestales en las diferentes secciones del Presupuesto General del Departamento, servicio de la deuda pública e inversión; en ejecución de sus políticas,</p>	<p>acciones para el mantenimiento del orden público en el departamento.</p>	

<p>programas subprogramas y proyectos, establecidas en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia.</p> <p>57. Incorporar los recursos provenientes del Tesoro Nacional o de Cooperación Nacional o Internacional que tengan por objeto cofinanciar proyectos, una vez el ejecutivo local deba informar a la Asamblea Departamental dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición del acto administrativo.</p> <p>58. Las demás que se señalen la Constitución y la ley.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> El gobernador es agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público. En consecuencia, los actos y ordenes del presidente de la República en esta materia los aplicará en el departamento de manera inmediata y prevalente. A su vez, las decisiones de los gobernadores en materia de orden público son preferentes a las de los alcaldes y de los distritos, y éstos deberán aplicarla en sus municipios de manera preferente.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En el marco de los principios de coordinación y complementariedad que debe existir en las actuaciones administrativas de los</p>			<p>diferentes niveles, el gobernador articulará con la Subdirección de Seguridad y Convivencia o quien haga sus veces del Ministerio del Interior, las acciones para el mantenimiento del orden público en el departamento.</p> <p><b>Artículo 155. Delegación de funciones.</b> El gobernador podrá delegar en los secretarios del departamento y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.</p> <p>Los actos expedidos por las autoridades delegadas estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.</p> <p>En lo referente a la delegación para celebrar y ejecutar contratos, esta se regirá conforme a la ley 489 de 1998 y la ley 80 de 1993.</p> <p><b>Parágrafo:</b> el gobernador podrá delegar en otro servidor público del nivel directivo, su representación en comités, consejos, reuniones o eventos en general en los que por disposición legal anterior se haya establecido que su participación en dichos comités es indelegable.</p>	<p><b>Artículo 118. Delegación de funciones.</b> El gobernador podrá delegar en los secretarios del departamento y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.</p> <p>Los actos expedidos por las autoridades delegadas estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.</p> <p>En lo referente a la delegación para celebrar y ejecutar contratos, esta se regirá conforme a la ley 489 de 1998 y la ley 80 de 1993.</p> <p><b>Parágrafo:</b> el gobernador podrá delegar en otro servidor público del nivel directivo, su representación en comités, consejos, reuniones o eventos en general en los que por disposición legal anterior se haya establecido que su participación en dichos comités es indelegable.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se elimina el parágrafo por ser repetitivo.</p>
<p><b>Artículo 156. Otras prohibiciones.</b> Les está prohibido a los gobernadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decretar en favor de cualquier persona o entidad: auxilios, gratificaciones, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley, las ordenanzas y las decisiones jurisdiccionales.</li> <li>2. Decretar por motivos políticos actos de proscripción o persecución contra personas o corporaciones, o decretar inasistencias masivas. Los retiros masivos de personal solamente podrán realizarse en los casos autorizados por la ley.</li> </ol> <p><b>Artículo 157. Falta absoluta.</b> Son faltas absolutas del gobernador:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La muerte;</li> <li>2. La renuncia aceptada;</li> <li>3. La incapacidad física permanente;</li> <li>4. La declaratoria de nulidad de la elección;</li> <li>5. La interdicción judicial;</li> <li>6. La destitución;</li> </ol>	<p><b>Artículo 156.- Otras prohibiciones.</b> Les está prohibido a los gobernadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decretar en favor de cualquier persona o entidad: auxilios, gratificaciones, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley, las ordenanzas y las decisiones jurisdiccionales.</li> <li>2. Decretar por motivos políticos actos de proscripción o persecución contra personas o corporaciones, o decretar inasistencias masivas. Los retiros masivos de personal solamente podrán realizarse en los casos autorizados por la ley.</li> </ol> <p><b>Artículo 119. Falta absoluta.</b> Son faltas absolutas del gobernador:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La muerte;</li> <li>2. La renuncia aceptada;</li> <li>3. La incapacidad física permanente;</li> <li>4. La declaratoria de nulidad de la elección;</li> <li>5. La interdicción judicial;</li> <li>6. La destitución;</li> </ol>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se elimina por estar contemplado en el artículo 152.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. La revocatoria del mandato;</li> <li>8. La declaración de vacancia por abandono del cargo.</li> </ol> <p><b>Artículo 158. Renuncia.</b> La renuncia al cargo de gobernador se hará ante el Presidente de la República, de manera escrita donde se indique inequívocamente y espontáneamente la voluntad de dejar el cargo en forma definitiva. Para tal fin, el Presidente de la República tendrá un término de treinta (30) días para aceptarla, prorrogables hasta por treinta (30) días más, por razones de orden público o necesidades del servicio.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Vencidos los plazos anteriores sin que medie una decisión de fondo, el gobernador podrá retirarse del cargo, sin que constituya abandono del mismo, designando a uno de los secretarios departamentales como reemplazo temporal en tanto se proceda a suplir las faltas absolutas de conformidad con la constitución y la ley.</p> <p><b>Artículo 159. Incapacidad física permanente.</b> En caso de que por haberse declarado la incapacidad física permanente del gobernador de un departamento, debidamente certificado por la entidad prestadora de salud a la que se encuentre afiliado, éste se vea impedido definitivamente para continuar desempeñándose como tal, se</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. La revocatoria del mandato;</li> <li>8. La declaración de vacancia por abandono del cargo.</li> </ol> <p><b>Artículo 120. Renuncia.</b> La renuncia al cargo de gobernador se hará ante el presidente de la República, de manera escrita donde se indique inequívocamente y espontáneamente la voluntad de dejar el cargo en forma definitiva. Para tal fin, el presidente de la República tendrá un término de treinta (30) días para aceptarlo, prorrogables hasta por treinta (30) días más, por razones de orden público o necesidades del servicio.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Vencidos el plazos anteriores sin que medie una decisión de fondo, el gobernador podrá retirarse del cargo, sin que constituya abandono del mismo, designando a uno de los secretarios departamentales como reemplazo temporal en tanto se proceda a suplir las faltas absolutas de conformidad con la constitución y la ley.</p> <p><b>Artículo 121. Incapacidad física permanente. En caso de incapacidad permanente debidamente certificada por la entidad prestadora de salud a la que se encuentre afiliado el gobernador, éste se verá impedido definitivamente para continuar desempeñándose como tal y se declarará la vacancia por falta absoluta del mismo.</b></p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>No resulta conveniente obligar a un gobernador a permanecer en el cargo cuando no lo desea, por más de 30 días.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se ajusta redacción.</p>

<p>declarar la vacancia por falta absoluta del mismo.</p>					
<p><b>Artículo 160. Declaración de nulidad de la elección.</b> Una vez quede en firme la declaratoria de nulidad de la elección de un gobernador por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, quedará sin efecto la credencial que lo acreditaba como tal, y el Gobierno nacional dispondrá inmediatamente las medidas necesarias para hacer efectiva esta decisión, así como para su reemplazo.</p>	<p><b>Artículo 122. Declaración de nulidad de la elección.</b> Una vez quede en firme la declaratoria de nulidad de la elección de un gobernador por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, quedará sin efecto la credencial que lo acreditaba como tal, y el <b>Presidente de la República</b> dispondrá inmediatamente las medidas necesarias para hacer efectiva esta decisión, así como para su reemplazo.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>el presidente de la República procederá a ejecutar la destitución de los gobernadores. Se exceptúan los casos por delitos políticos y/o culpados que no hayan afectado el patrimonio del Estado.</p> <p>Así mismo será procedente la destitución en los eventos previstos en la Ley 418 de 1997, incluidas sus prórrogas y modificaciones y demás normas vigentes.</p>	<p>governadores. Se exceptúan los casos por delitos políticos y/o culpados que no hayan afectado el patrimonio del Estado.</p> <p>Así mismo será procedente la destitución en los eventos previstos en la Ley 418 de 1997, incluidas sus prórrogas y modificaciones y demás normas vigentes.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>
<p><b>Artículo 161. Interdicción judicial.</b> Una vez quede en firme la declaratoria de interdicción judicial para un gobernador proferida por parte del juez competente, se producirá la vacancia por falta absoluta y el presidente de la República tomará las medidas conducentes para hacer efectivo el cese de función del mismo, a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.</p>	<p><b>Artículo 123. Interdicción judicial.</b> Una vez quede en firme la declaratoria de interdicción judicial para un gobernador proferida por parte del juez competente, se producirá la vacancia por falta absoluta y el presidente de la República tomará las medidas conducentes para hacer efectivo el cese de función del mismo, a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p><b>Artículo 143. La revocatoria del mandato.</b> La revocatoria del mandato se producirá de conformidad con lo dispuesto en la constitución Política y las leyes vigentes sobre la materia.</p>	<p><b>Artículo 125. La revocatoria del mandato.</b> La revocatoria del mandato se producirá de conformidad con la disposición en la constitución Política y las leyes vigentes sobre la materia.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>
<p><b>Artículo 162. Destitución.</b> Se hará conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, en cuyo caso su ejecución corresponderá al Gobierno nacional.</p> <p>Cuando se haya dictado sentencia condenatoria de carácter penal debidamente ejecutoriada, aun cuando en su favor se decreta cualquier beneficio, aun cuando en su favor se decreta cualquier beneficio.</p>	<p><b>Artículo 124. Destitución.</b> Se hará conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, en cuyo caso su ejecución corresponderá al <b>Presidente de la República</b>.</p> <p>Cuando se haya dictado sentencia condenatoria de carácter penal debidamente ejecutoriada, aun cuando en su favor se decreta cualquier beneficio, el presidente de la República procederá a ejecutar la destitución del</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p><b>Artículo 164. La declaración de vacancia por abandono del cargo.</b> Se produce abandono del cargo cuando el gobernador, sin justa causa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No reasuma sus funciones dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de las vacaciones, permiso, licencias, comisiones oficiales o incapacidad física transitoria inferior a ciento ochenta (180) días.</li> <li>2. Abandona el territorio nacional sin autorización por cinco (5) días o más consecutivos.</li> </ol>	<p><b>Artículo 126. La declaración de vacancia por abandono del cargo.</b> Se produce abandono del cargo cuando el gobernador, sin justa causa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No reasuma sus funciones dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de las vacaciones, permiso, licencias, comisiones oficiales o incapacidad física transitoria inferior a ciento ochenta (180) días.</li> <li>2. Abandona el territorio nacional sin autorización por cinco (5) días o más consecutivos.</li> <li>3. No se reintegra a sus actividades una vez haya concluido el término de suspensión del cargo.</li> </ol>	<p>Se ajusta la numeración.</p>
<p>3. No se reintegra a sus actividades una vez haya concluido el término de suspensión del cargo.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El abandono del cargo constituye falta disciplinaria y se investigará por la Procuraduría General de la Nación de oficio o a solicitud de cualquier ciudadano.</p> <p><b>Artículo 165. Falta temporal.</b> Son faltas temporales del gobernador:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las vacaciones;</li> <li>2. Los permisos para separarse del cargo;</li> <li>3. Las licencias;</li> <li>4. La incapacidad física transitoria.</li> <li>5. La suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario, fiscal o penal;</li> <li>6. La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la jurisdicción contenciosa administrativa;</li> </ol>	<p><b>Parágrafo.</b> El abandono del cargo constituye falta disciplinaria y se investigará por la Procuraduría General de la Nación de oficio o a solicitud de cualquier ciudadano.</p> <p><b>Artículo 127. Falta temporal.</b> Son faltas temporales del gobernador:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las vacaciones;</li> <li>2. Los permisos para separarse del cargo;</li> <li>3. Las licencias;</li> <li>4. La incapacidad física transitoria.</li> <li>5. La suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario, fiscal o penal;</li> <li>6. La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la jurisdicción contenciosa administrativa;</li> </ol>	<p>Se ajusta la numeración.</p>	<p>7. La ausencia forzada e involuntaria.</p> <p><b>Artículo 164. Vacaciones.</b> La concesión de vacaciones las decreta el mismo gobernador, con indicación del período de causación, el término de sus mismas, las sumas a que tiene derecho por este concepto, su iniciación y finalización, debiendo comunicar previamente al Ministerio del Interior, por conducto de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial o la dependencia que haga sus veces. Durante el término de su disfrute el gobernador deberá encargar a un secretario de las funciones de su despacho.</p> <p>Si la asamblea no se encuentra reunida lo hará en la primera sesión ordinaria, dentro del mismo término.</p> <p><b>Artículo 167. Permisos.</b> Cuando el gobernador requiera salir del país en misión oficial, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 152 de la presente ley.</p> <p>El gobernador deberá presentarle a la asamblea un informe previo sobre la comisión que se proponga cumplir en el exterior.</p> <p><b>Artículo 168. Duración de las comisiones.</b> Las comisiones dentro del país no serán superiores a diez (10) días hábiles y al exterior a treinta (30) días.</p>	<p>La ausencia forzada e involuntaria.</p> <p><b>Artículo 128. Vacaciones.</b> La concesión de vacaciones las decreta el mismo gobernador, con indicación del período de causación, el término de las mismas y las sumas a que tiene derecho por este concepto, su iniciación y finalización, debiendo comunicar previamente al Ministerio del Interior, por conducto de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial o la dependencia que haga sus veces y a la <b>asamblea departamental</b>. Durante el término de su disfrute el gobernador deberá encargar a un secretario de las funciones de su despacho.</p> <p>Si la asamblea no se encuentra reunida lo hará en la primera sesión ordinaria, dentro del mismo término.</p> <p><b>Artículo 167. Permisos.</b> Cuando el gobernador requiera salir del país en misión oficial, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 152 de la presente ley.</p> <p>El gobernador deberá presentarle a la asamblea un informe previo sobre la comisión que se proponga cumplir en el exterior.</p> <p><b>Artículo 129. Duración de las comisiones.</b> Las comisiones dentro del país no serán superiores a diez (10) días hábiles y al exterior a treinta (30) días hábiles. Estos términos podrán</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se elimina el último inciso porque no tiene relación con el artículo.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se elimina el artículo por ser repetitivo del artículo 152.</p> <p>Ajuste de redacción.</p>



<p>se elegirá gobernador para el tiempo que reste, en caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el presidente de la República designará un gobernador para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido.</p> <p>En los dos eventos anteriores, mientras se designa y asume el gobernador encargado, actuará como tal el secretario de gobierno o quien haga sus veces en el departamento.</p> <p>Para las demás faltas temporales, no generadas por orden o decisión de autoridad competente, el gobernador delegará funciones en uno de los secretarios del despacho de la gobernación, hecho del cual informará de manera inmediata al Gobierno Nacional por conducto de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del ministro del Interior, o más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Si por cualquier circunstancia no pudieren hacer la delegación, el secretario de gobierno actuará como secretario delegatario con funciones de gobernador.</p> <p>El gobernador designado según el caso, deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del gobernador elegido por voto popular. El gobernador encargado o designado quedará sujeto a la ley estatutaria que regula el voto programático.</p>	<p>tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el presidente de la República designará un gobernador para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido. <b>Acto administrativo que será comunicado a la asamblea departamental.</b></p> <p>En los dos eventos anteriores, mientras se designa y asume el gobernador encargado, actuará como tal el secretario de gobierno o quien haga sus veces en el departamento.</p> <p>Para las demás faltas temporales, no generadas por orden o decisión de autoridad competente, el gobernador delegará funciones en uno de los secretarios del despacho de la gobernación, hecho del cual informará de manera inmediata al Gobierno Nacional por conducto de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del ministro del Interior, o más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Si por cualquier circunstancia no pudieren hacer la delegación, el secretario de gobierno actuará como secretario delegatario con funciones de gobernador.</p> <p>El gobernador designado según el caso, deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del gobernador elegido por voto popular. El gobernador encargado o designado quedará sujeto a la ley estatutaria que regula el voto programático.</p> <p>En caso de faltas absolutas de gobernadores, el presidente de la República solicitará al partido, movimiento o coalición</p>	<p>administrativo que designa un nuevo gobernador.</p>
<p>El candidato a nuevo gobernador deberá inscribir su candidatura treinta (30) días antes de la elección, y anexar en ese mismo acto el programa de gobierno que someterá a consideración de la ciudadanía.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En tal evento, el término de posesión se iniciará a contar una vez sea expedida la credencial respectiva.</p> <p><b>Artículo 177. Gobierno departamental.</b> El gobernador, con los secretarios de despacho, los jefes o directores de departamentos administrativos y los jefes o directores de las entidades descentralizadas constituyen el gobierno departamental.</p> <p>Los decretos que expida el gobernador, serán suscritos por el secretario o jefe del departamento administrativo del respectivo ramo, con excepción del decreto de nombramiento y remoción de secretarios del despacho y jefes o directores de departamentos administrativos, los cuales solamente serán suscritos por el gobernador.</p> <p>Como jefe de la administración departamental, el gobernador ejerce sus atribuciones por medio de la administración central o descentralizada.</p> <p><b>Artículo 178. Estructura administrativa departamental.</b> Los departamentos definen su estructura administrativa en forma flexible, considerando los lineamientos establecidos en la</p>	<p>El candidato a nuevo gobernador deberá inscribir su candidatura treinta (30) días antes de la elección, y anexar en ese mismo acto el programa de gobierno que someterá a consideración de la ciudadanía.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En tal evento, el término de posesión se iniciará a contar una vez sea expedida la credencial respectiva.</p> <p><b>Artículo 136. Gobierno departamental.</b> El gobernador, con los secretarios de despacho, los jefes o directores de departamentos administrativos y los jefes o directores de las entidades descentralizadas constituyen el gobierno departamental.</p> <p>Los decretos que expida el gobernador, serán suscritos por el secretario o jefe del departamento administrativo del respectivo ramo, con excepción del decreto de nombramiento y remoción de secretarios del despacho y jefes o directores de departamentos administrativos, los cuales solamente serán suscritos por el gobernador.</p> <p>Como jefe de la administración departamental, el gobernador ejerce sus atribuciones por medio de la administración central o descentralizada.</p> <p><b>Artículo 137. Estructura administrativa departamental.</b> Los departamentos definen su estructura administrativa en forma flexible, considerando los lineamientos establecidos en la Ley 489 de 1998 o las normas que la modifiquen,</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se elimina el segundo inciso, por considerarse innecesario que los decretos los deba suscribir el jefe de la cartera.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p>
<p><b>Artículo 178. Estructura administrativa departamental.</b> Los departamentos definen su estructura administrativa en forma flexible, considerando los lineamientos establecidos en la</p>	<p>En caso de faltas absolutas de gobernadores, el presidente de la República solicitará al partido, movimiento o coalición</p>	<p>administrativo que designa un nuevo gobernador.</p>
<p>En caso de faltas absolutas de gobernadores, el presidente de la República solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato una tema integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de recibido de la solicitud no presentaren la tema, el presidente designará libremente.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> No podrán ser encargados o designados como gobernadores para proveer vacantes temporales o absolutas, quienes se encuentren en cualquiera de las inhabilidades e incompatibilidades a que se refiere la Constitución Política, esta ley u otras normas vigentes.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política.</p> <p><b>Artículo 176. Convocatoria a elección por falta absoluta.</b> En caso de falta absoluta del gobernador se convocará a nuevas elecciones. La nueva elección deberá llevarse a cabo dentro de los tres (3) meses siguientes a configuración de la falta, mediante convocatoria que se hará en el mismo decreto por el cual se designe gobernador encargado.</p>	<p>que inscribió al candidato, una tema integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de recibido de la solicitud no presentaren la tema, el presidente designará libremente.</p> <p><b>Parágrafo.</b> No podrán ser encargados o designados como gobernadores para proveer vacantes temporales o absolutas, quienes se encuentren en cualquiera de las inhabilidades e incompatibilidades a que se refiere la Constitución Política, esta ley u otras normas vigentes.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política.</p> <p><b>Artículo 136. Convocatoria a elección por falta absoluta.</b> En caso de falta absoluta del gobernador se aplicará el Decreto 2241 de 1984 o las normas que lo adicionen o sustituyan, por el derecho convocará a nuevas elecciones. La nueva elección deberá llevarse a cabo dentro de los tres (3) meses siguientes a configuración de la falta, mediante convocatoria que se hará en el mismo decreto por el cual se designe gobernador encargado.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>A fin de no incurrir en imprecisiones o contradicciones con la disposición vigente, esta se hace la remisión normativa.</p>
<p><b>Artículo 179. Vinculación al desarrollo departamental.</b> Los departamentos podrán celebrar convenios con los organismos de acción comunal para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones u obras.</p> <p>Este convenio cuando el organismo de acción comunal aporte el trabajo de sus integrantes y/o afiliados, así como otros bienes o recursos para el cumplimiento de funciones o ejecución de obras en el territorio que define el artículo 12 de la Ley 743 de 2002 o las normas que la modifiquen, adiciónen o sustituyan.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Los convenios que se celebren en desarrollo de este artículo, estarán sujetos a las formalidades o requisitos previstos en la ley para las entidades públicas.</p> <p><b>Artículo 180. Catastros departamentales.</b> En desarrollo de la delegación de competencias mediante contrato plan o convenio, como parte de la visión territorial del departamento, que tengan capacidad técnica y administrativa para cumplir en todo su territorio o parte de él las funciones catastrales, podrán solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) el ejercicio de tal competencia, mediante la modalidad de contrato plan o convenio.</p>	<p>adiciónen o sustituyan.</p> <p><b>Artículo 138. Vinculación al desarrollo departamental.</b> Los departamentos podrán celebrar convenios con los organismos de acción comunal para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones u obras.</p> <p>Este convenio cuando el organismo de acción comunal aporte el trabajo de sus integrantes y/o afiliados, así como otros bienes o recursos para el cumplimiento de funciones o ejecución de obras en el territorio que define el artículo 12 de la Ley 743 de 2002 o las normas que la modifiquen, adiciónen o sustituyan.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Los convenios que se celebren en desarrollo de este artículo, estarán sujetos a las formalidades o requisitos previstos en la ley para las entidades públicas.</p> <p><b>Artículo 139. Catastros departamentales.</b> Los departamentos en su calidad de gestores catastrales podrán adelantar la formación, actualización, conservación y difusión catastral teniendo en cuenta los procedimientos del enfoque catastro multipropósito, adelantados para el efecto, de conformidad con lo establecido en la Ley y los instrumentos de política pública que lo desarrollan.</p>	<p>Se ajusta la numeración. Justificar.</p> <p>Se modifica el artículo de conformidad con lo establecido en la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1953 de 2019.</p>

<p>Si el IGAC estuviese de acuerdo, en el convenio o contrato plan que con tal fin se celebre, se determinarán las condiciones, término y tiempo de la delegación y las ciudades y municipios para los cuales se concede. Los departamentos delegatarios cumplirán sus nuevas funciones.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El Instituto Geográfico Agustín Codazzi—IGAC, supervisará y prestará asistencia técnica a los departamentos y municipios y distritos en el relacionado a las labores que desempeñen en virtud de la facultad otorgada en el presente artículo.</p> <p><b>Artículo 181. Gaceta Departamental.</b> En cada uno de los departamentos se publicará una Gaceta Departamental, como órgano oficial de publicación de los actos seccionales, en la que se incluirán los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los ordenanzas de la asamblea departamental.</li> <li>2. Los actos que expida la asamblea y su mesa directiva para la ejecución de su presupuesto y el manejo del personal a su servicio.</li> <li>3. Los decretos y resoluciones del gobernador.</li> </ol>	<p><b>Artículo 140. Gaceta Departamental.</b> En cada uno de los departamentos se publicará una Gaceta Departamental, como órgano oficial de publicación de los actos seccionales, en la que se incluirán los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las ordenanzas de la asamblea departamental.</li> <li>2. Los actos que expida la asamblea y su mesa directiva para la ejecución de su presupuesto y el manejo del personal a su servicio.</li> <li>3. Los decretos y resoluciones del gobernador.</li> <li>4. Los actos de la administración central y descentralizada del departamento que creen situaciones jurídicas impersonales u objetivas a que tengan alcance e interés general.</li> </ol>	<p>Se ajusta la numeración.</p>
<p>funciones administrativas propias, mediante convenio o contrato plan suscrito por los gobernadores respectivos, previamente autorizados por las asambleas departamentales.</p> <p>Los departamentos no pierden ni comprometen su autonomía física, política o administrativa por afiliarse o pertenecer a una asociación; sin embargo, todo departamento asociado está obligado a cumplir sus estatutos y demás reglamentos que la asociación le otorgue y a acatar las decisiones que adopten sus directivas para el cabal cumplimiento de sus fines.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, brindará acompañamiento técnico y jurídico a las entidades territoriales que voluntariamente pretenden asociarse.</p> <p><b>Artículo 185.</b> Mediante la celebración de convenios, los departamentos podrán asociarse entre sí para el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo y para la ejecución de obras o proyectos de desarrollo regional, con observancia de lo que para ello estipula la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y las Normas aplicables a la materia.</p> <p><b>Artículo 184.</b> La Nación asociará con destino a las formas asociativas de que habla el artículo anterior, partidas acorde a las competencias del nivel regional para la ejecución de proyectos</p>	<p>públicas, la ejecución de obras de ámbito regional y el cumplimiento de funciones administrativas propias, mediante convenio, contrato o plan suscrito por los gobernadores respectivos, previamente autorizados por las asambleas departamentales.</p> <p>Los departamentos no pierden ni comprometen su autonomía física, política o administrativa por afiliarse o pertenecer a una asociación; sin embargo, todo departamento asociado está obligado a cumplir sus estatutos y demás reglamentos que la asociación le otorgue y a acatar las decisiones que adopten sus directivas para el cabal cumplimiento de sus fines.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, brindará acompañamiento técnico y jurídico a las entidades territoriales que voluntariamente pretenden asociarse.</p> <p><b>Artículo 186.</b> Mediante la celebración de convenios, los departamentos podrán asociarse entre sí para el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo y para la ejecución de obras o proyectos de desarrollo regional, con observancia de lo que para ello estipula la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y las Normas aplicables a la materia.</p> <p><b>Artículo 183.</b> La Nación asociará con destino a las formas asociativas de que habla el artículo anterior, partidas acorde a las competencias del nivel regional para la ejecución de</p>	<p>entidades territoriales.</p> <p>Se elimina porque se considera que está incluido en el artículo anterior.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p>
<p>4. Los actos de la administración central y descentralizada del departamento que creen situaciones jurídicas impersonales u objetivas a que tengan alcance e interés general.</p> <p>5. Los demás que la ley o la ordenanza señalen que deben publicarse.</p> <p><b>Artículo 182. Sobre el régimen especial del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.</b> El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en lo no contemplado expresamente en su estatuto especial, se regirá por la presente ley.</p> <p><b>Artículo 183. Conformación de asociaciones de entidades territoriales.</b> Conforme a lo establecido en la Ley 1454 de 2011 y la ley 1922 de 2019, las entidades territoriales, podrán libremente asociarse para prestar conjuntamente servicios públicos, funciones administrativas propias asignadas al ente territorial por el nivel nacional, ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de planificación, así como para procurar el desarrollo integral de sus territorios.</p> <p><b>Artículo 184. Asociación de departamentos.</b> Los departamentos podrán asociarse entre sí, administrativa y políticamente con otras entidades territoriales y/o administrativas, con el fin de prestar conjuntamente servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y el cumplimiento de</p>	<p>Los demás que la ley o la ordenanza señalen que deben publicarse.</p> <p><b>Artículo 141. Sobre el régimen especial del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.</b> El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en lo no contemplado expresamente en sus <b>normas especiales</b>, se regirá por la presente ley.</p> <p><b>Artículo 183. Conformación de asociaciones de entidades territoriales.</b> Conforme a lo establecido en la Ley 1454 de 2011 y la ley 1922 de 2019, las entidades territoriales, podrán libremente asociarse para prestar conjuntamente servicios públicos, funciones administrativas propias asignadas al ente territorial por el nivel nacional, ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de planificación, así como para procurar el desarrollo integral de sus territorios.</p> <p><b>Artículo 142. Asociación de departamentos.</b> Conforme a lo establecido en la Ley 1454 de 2011 y la ley 1922 de 2019, <b>las normas que las modifican, sustituyen o adicionan</b>, los departamentos podrán asociarse entre sí, administrativa y políticamente con otras entidades territoriales y/o administrativas, con el fin de prestar conjuntamente servicios</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se elimina el artículo porque se encuentra inmerso en el artículo siguiente.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>En aras de articular el artículo anterior, con el presente, se adicionan las normas que regulan las asociaciones entre</p>
<p>determinados en los Planes Estratégicos Regionales (PER).</p> <p>En los presupuestos anuales de la Nación se incluirán el rubro y las asignaciones necesarias para la atención de los pagos aquí ordenados.</p> <p><b>Artículo 187.</b> Los convenios que, con autorización de la Asamblea, celebren los Departamentos en desarrollo del artículo 2º y con observancia de lo estipulado en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, no estarán sujetos a formalidades o requisitos distintos de los que la Ley exige ello. Sin embargo, en ellos se pactará la erogación presupuestal a la que haya lugar.</p> <p><b>Artículo 188. Entidades descentralizadas.</b> El Gobierno nacional presentará al Congreso de la República dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley que expida el régimen para las entidades descentralizadas, previa socialización con los departamentos a través de la Federación Nacional de Departamentos.</p> <p><b>Artículo 189. De los bienes, contratos y rentas departamentales.</b> El Gobierno nacional por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentará al Congreso de la República, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley que expida el</p>	<p>proyectos determinados en los Planes Estratégicos Regionales (PER).</p> <p>En los presupuestos anuales de la Nación se incluirán el rubro y las asignaciones necesarias para la atención de los pagos aquí ordenados.</p> <p><b>Artículo 146.</b> Los convenios que, con autorización de la Asamblea, celebren los Departamentos en desarrollo del artículo 2º—con observancia de lo estipulado en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, no estarán sujetos a formalidades o requisitos distintos de los que exige la Ley, <del>en</del> <b>sin embargo</b>, en ellos se pactará la erogación presupuestal a la que haya lugar.</p> <p><b>Artículo 145. Entidades descentralizadas.</b> El Gobierno nacional presentará al Congreso de la República dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley que expida el régimen para las entidades descentralizadas, previa socialización con los departamentos y a través de la <b>confederación nacional de asambleas y diputados de Colombia</b>.</p> <p><b>Artículo 146. De los bienes, contratos y rentas departamentales.</b> El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentará al Congreso de la República, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley que expida el régimen relacionado con los bienes, contratos</p>	<p>Se ajusta la redacción.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se considera pertinente incluir a la confederación nacional de asambleas y diputados de Colombia, en la socialización del proyecto de ley de régimen para las entidades descentralizadas.</p> <p>Se ajusta la numeración. — verificar con hacienda</p>

<p>régimen relacionado con los bienes, contratos y renta departamentales, previa socialización con los departamentos a través de la Federación Nacional de Departamentos.</p> <p><b>Parágrafo transitorio.</b> Las disposiciones contenidas del artículo 103 al 243 del Decreto 1222 de 1986 se mantendrán vigentes hasta tanto sea expedida la <u>reglamentación de que trata el presente artículo.</u></p> <p><b>Artículo 110. Régimen de control fiscal.</b> El régimen de control fiscal de los departamentos, se regirá por lo que disponga la Constitución Política en el artículo 272 y la Ley 42 de 1993, o norma que la modifique, adicione o sustituya.</p> <p>La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos corresponde a las contralorías departamentales, sin perjuicio de las atribuciones y funciones de la Contraloría General de la República.</p> <p><b>Artículo 191. Departamentos de fronteras.</b> De acuerdo con sus características especiales, estarán sometidos, entre otros, a las disposiciones contenidas en la presente ley y la norma que se expida como desarrollo de los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución Política.</p> <p>La ley que se expida, deberá establecer, entre otros, el procedimiento, mecanismos y alcances para la conformación de los esquemas asociativos</p>	<p>y renta departamentales, previa socialización con los departamentos a través de la Federación Nacional de Departamentos.</p> <p><b>Parágrafo transitorio.</b> Las disposiciones contenidas del artículo 103 al 243 del Decreto 1222 de 1986 se mantendrán vigentes hasta tanto sea expedida la <u>reglamentación de que trata el presente artículo.</u></p> <p><b>Artículo 147. Régimen de control fiscal.</b> El régimen de control fiscal de los departamentos, se regirá por lo que disponga la Constitución Política en el artículo 272 y la Ley 42 de 1993, o norma que la modifique, adicione o sustituya.</p> <p>La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos corresponde a las contralorías departamentales, sin perjuicio de las atribuciones y funciones de la Contraloría General de la República.</p> <p><b>Artículo 148. Departamentos de fronteras.</b> De acuerdo con sus características especiales, estarán sometidos, entre otros, a las disposiciones contenidas en la presente ley y la norma que se expida como desarrollo de los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución Política.</p> <p>La ley que se expida, deberá establecer, entre otros, el procedimiento, mecanismos y alcances para la conformación de los esquemas asociativos transfronterizos entre entidades nacionales y los de los países vecinos.</p>	<p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p>
--	---	---

**XIII. PROPOSICIÓN.**

Considerando los argumentos expuestos y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 5 de 1992, presentamos ponencia favorable y, en consecuencia, solicitamos a los miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar primer debate al Proyecto de Ley Orgánica No. 486 de 2020 Cámara "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos".

Cordialmente,



**BUENAVENTURA LEON LEON - C**  
Representante a la Cámara



**JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO - C**  
Representante a la Cámara



**JAIME RODRIGUEZ CONTRERAS - C**  
Representante a la Cámara



**HENRY CUELLA RICO**  
Representante a la Cámara



**JULIAN PEINADO RAMIREZ**  
Representante a la Cámara



**JUANITA MARIA GOEBERTIS ESTRADA**  
Representante a la Cámara



**LUIS ALBERTO ALBAN URBANO**  
Representante a la Cámara.



**CARLOS GERMAN NAVAS TALERO**  
Representante a la Cámara.

<p>transfronterizas entre entidades nacionales y las de los países vecinos.</p> <p><b>Artículo 192. Estampilla Pro-Desarrollo Departamental.</b> Autorízase a las Asambleas Departamentales para ordenar la emisión de estampillas "Pro-Desarrollo Departamental". Los ordenanzas que dispongan esta emisión determinarán su monto, que no podrá ser superior a la cuarta parte del presupuesto departamental; la tarifa, que no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del documento o instrumento gravado; las exenciones a que hubiere lugar; las características de las estampillas; y todo lo demás que se considere necesario para garantizar su recaudo, destrucción y adecuada inversión.</p> <p><b>Artículo 193. Complementación normativa.</b> El Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, cumplirá el marco normativo referente a los departamentos dentro de los ses (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.</p> <p><b>Artículo 194. Vigencia.</b> La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga parcialmente el decreto 1222 de 1986, la Ley 3 de 1986 y disposiciones contenidas en la Ley 617 de 2000 que les sean contrarias.</p>	<p><b>Artículo 182. Estampilla Pro-Desarrollo Departamental.</b> Autorízase a las Asambleas Departamentales para ordenar la emisión de estampillas "Pro-Desarrollo Departamental". Las ordenanzas que dispongan esta emisión determinarán su monto, que no podrá ser superior a la cuarta parte del presupuesto departamental; la tarifa, que no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del documento o instrumento gravado; las exenciones a que hubiere lugar; las características de las estampillas; y todo lo demás que se considere necesario para garantizar su recaudo, destrucción y adecuada inversión.</p> <p><b>Artículo 183. Complementación normativa.</b> El Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, cumplirá el marco normativo referente a los departamentos dentro de los ses (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.</p> <p><b>Artículo 149. Vigencia.</b> La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga <del>parcialmente</del> el decreto 1222 de 1986, <b>excepto del artículo 103 al 243</b>, la Ley 3 de 1986 y disposiciones contenidas en la Ley 617 de 2000 que les sean contrarias.</p>	<p>Se elimina, en el entendido que esto generará más sobre costos a los contratos estatales, igualmente la destinación no es clara.</p> <p>Se ajusta la numeración.</p> <p>Se propone eliminar este artículo, en el entendido que precisamente este proyecto de ley, está unificando las disposiciones que rigen los departamentos.</p> <p>Se ajusta la numeración. Se debe especificar que el Decreto 1222 de 1986 se deroga en su totalidad.</p>
--	---	--

**PROYECTO DE LEY NO. 486 DE 2020 Cámara**

**"POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS"**

**EL CONGRESO DE COLOMBIA**

**DECRETA**

**TÍTULO I**

Del objeto, definición, principios rectores de la administración departamental

**CAPÍTULO I**

Objeto, definición y principios

**Artículo 1. Objeto de la Ley.** La presente ley tiene por objeto establecer el régimen político y administrativo que rige a los departamentos como entidades territoriales, autónomas y descentralizadas.

**Artículo 2. Definición.** Los departamentos forman parte de la organización territorial del Estado y como entidad territorial actúan como organismos promotores y coordinadores del desarrollo económico, ambiental y social en los asuntos seccionales. Son instrumento de complementariedad de la acción municipal y enlace de las actividades y servicios que prestan los municipios y la Nación.

Los departamentos son personas jurídicas de derecho público, actúan bajo el principio de autonomía, administran recursos propios y las otras fuentes de recursos de los departamentos; se gobiernan por autoridades propias y establecen los tributos necesarios conforme a la ley, para el cumplimiento de sus funciones, y participan en las rentas nacionales.

**Artículo 3. Principios:** Los departamentos se regirán, entre otros, por los siguientes principios:

**Descentralización.** Consiste en el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a los departamentos, las cuales se ejecutan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad.

**Coordinación.** Exige a los departamentos que sus actuaciones se efectúen mediante una ordenación sistemática, coherente, eficiente, armónica, complementaria y conducente, con las competencias concurrentes de otras autoridades del nivel nacional, entidades territoriales de igual o menor nivel y los esquemas asociativos territoriales.



<p><b>Concurrencia.</b> Exige a los departamentos que, en materias determinadas por la Constitución y la ley, converjan y participen en conjunto con autoridades del nivel nacional o territorial, según corresponda.</p> <p><b>Autonomía.</b> Es la capacidad de dirección y gestión de sus propios intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. La autonomía constituye un derecho inherente al departamento, que se manifiesta a través de la independencia política para gobernarse por autoridades propias; autonomía administrativa para ejercer las competencias que le correspondan; autonomía fiscal para administrar los recursos y establecer los tributos para el cumplimiento de sus funciones y participar de las rentas nacionales; y autonomía normativa como capacidad para auto-regularse en materias de interés exclusivamente local o regional.</p> <p><b>Subsidiaridad.</b> Exige a los departamentos asumir o apoyar, según el caso, de manera idónea y eficaz, las competencias y funciones de distritos y municipios de su jurisdicción, cuando bajo criterios de indicadores objetivos carecen de capacidad administrativa, institucional o presupuestal para ejercerlas adecuadamente, respetando el principio de autonomía en materias cuya competencia sea exclusiva de dichos entes territoriales.</p> <p><b>Sostenibilidad fiscal territorial.</b> En desarrollo del artículo 334 de la Constitución Política, los departamentos, distritos y municipios que integran su jurisdicción se regirán por el marco de sostenibilidad fiscal que fije el Gobierno Nacional, teniendo como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la distribución equitativa de oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano y sostenible.</p> <p>En el marco de sostenibilidad fiscal territorial no se podrán establecer competencias o funciones a los departamentos sin que se asignen los correspondientes recursos en suficiencia para su cumplimiento.</p> <p><b>Desarrollo sostenible.</b> Exige a los departamentos formular políticas públicas sostenibles con responsabilidad intergeneracional en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de mejorar el bienestar de sus habitantes, generar oportunidades y capacidades en su población, la eficaz y eficiente prestación de servicios públicos, buscando su universalidad y la satisfacción progresiva de las necesidades básicas insatisfechas.</p> <p><b>Cohesión territorial.</b> Exige a los departamentos que sus actuaciones públicas busquen dentro de su territorio:</p> <p>(i) Articulación física y de infraestructura, a fin de que todos los entes territoriales tengan accesibilidad de manera armónica y equilibrada;</p> <p>(ii) Equidad territorial, a fin de que todos los entes territoriales y sus habitantes tengan igualdad de oportunidades para alcanzar el desarrollo, el acceso a los servicios públicos y el equipamiento de infraestructuras que permitan acceder a capacidades productivas, económicas y de garantía de los derechos;</p>	<p>(iii) La implementación de forma progresiva, de respuestas a las necesidades básicas insatisfechas de la población;</p> <p>(iv) la identidad territorial a fin de que el ejercicio de la actuación pública y la configuración de políticas públicas dentro del respeto al pluralismo y la diversidad, alcancen la identidad entre sus habitantes, con una proyección planificadora integral a mediano y largo plazo, que permita cumplir objetivos comunes en los diferentes esquemas de dignidad humana de forma incluyente y equitativa.</p> <p><b>Planeación y prospectiva territorial.</b> Exige a los departamentos que la gestión pública y la asignación de recursos de inversión respondan a un contexto planificado de resultados, que permita tener una visión de las metas a cumplir y las estrategias a realizar para su logro, una prospectiva territorial que implique la visión de sostenibilidad futura de los resultados, así como la inclusión de las generaciones futuras.</p> <p>En los enfoques de planeación debe generarse la inclusión de los esquemas o comunidades vulnerables, el enfoque de construcciones colectivas y del interés general, así como el goce efectivo del bienestar social en la satisfacción de las necesidades de la población.</p> <p><b>Reconocimiento de la diversidad:</b> Exige a los departamentos que todas las actuaciones, planes, programas y políticas públicas se definan y ejecuten considerando la diversidad de configuraciones de los sujetos en razón de su contexto, pertenencia étnica, social, cultural, sus condiciones, capacidades, particularidades, afectaciones o estados de vulnerabilidad; con el fin de avanzar hacia la garantía de los derechos, superar las desventajas, generar mecanismos de equidad, el fortalecimiento del desarrollo y sus capacidades, y el acceso a las mismas oportunidades.</p> <p><b>Enfoque diferencial.</b> Exige a los departamentos que de forma transversal a todas las actuaciones, planes, programas y políticas públicas se adopten acciones que permitan superar las inequidades respecto al género, víctimas del conflicto armado, minorías y grupos étnicos; el respeto a su identidad, su actuar colectivo, con el fin de superar las desventajas y generar mecanismos de inclusión, el fortalecimiento de sus fortalezas y la generación de capacidades y de acceso a las mismas oportunidades.</p> <p><b>Solidaridad y equidad territorial.</b> Exige a los departamentos un enfoque planificador y de establecimiento de políticas públicas de forma solidaria, con el fin de garantizar el acceso equitativo a las oportunidades. Las entidades territoriales ubicadas dentro de su jurisdicción, con mayor capacidad política, económica y fiscal, deberán apoyar a aquellas entidades de menor desarrollo, promoviendo el progreso de sus capacidades institucionales. Para lo cual podrán propiciar esquemas asociativos entre las entidades municipales y provinciales que permitan el máximo aprovechamiento de capacidades para el desarrollo.</p>
<p><b>Regionalización.</b> Permite que los departamentos, teniendo como marco la relación geográfica, económica, social, ambiental, cultural y funcional, entre otros, promuevan el desarrollo y el cumplimiento de objetivos comunes, bajo los esquemas asociativos que establecen las leyes.</p> <p><b>Participación.</b> Exige a los departamentos promover y garantizar la máxima participación de los ciudadanos como parte activa en las decisiones que los involucran y afectan, bajo el respeto de la diferencia y la equidad en condiciones de vida, desarrollos y oportunidades.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II</b> Regulación y competencias</p> <p><b>Artículo 4. Competencias.</b> Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución Política y demás disposiciones legales vigentes, corresponde a los departamentos ejercer las siguientes competencias:</p> <p><b>1. Bajo esquemas de autonomía y descentralización territorial en:</b></p> <p>1.1 En Materia de infraestructura vial les corresponde la construcción, intervención, mantenimiento y recuperación de la red vial departamental de su competencia, y propender por la generación de vías terciarias asociadas a esquemas productivos o que comporten afectación de derechos fundamentales especialmente a grupos vulnerables.</p> <p>1.2 Propender por el fortalecimiento, creación de nuevos liderazgos y empoderamiento de las organizaciones comunales y sociales; la generación de espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones, implementando sistemas articulados de participación; hacer efectivo el control social y el ejercicio de veedurías ciudadanas.</p> <p>1.3 Impulsar, estimular y promover la competitividad, desarrollos productivos y fomentar el emprendimiento y crecimiento económico, así como políticas de generación de empleo en sus territorios.</p> <p>1.4 Propender por la generación de valor agregado para apoyar el desarrollo agropecuario dentro de su territorio y el fortalecimiento de la economía sostenible en actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, así como su tecnificación con proyección exportadora.</p> <p>Propiciar espacios de participación territorial de campesinas y campesinos desde enfoques de derechos humanos, diferenciales y territoriales, rescatar y enaltecer los valores tradicionales, culturales, económicos, sociales y ambientales, mediante una producción agropecuaria sostenible, resiliente e incluyente.</p> <p>1.5 Promover, como renglón económico, el turismo ecológico y sostenible dentro de su territorio.</p>	<p>1.6 Efectuar el manejo eficiente bajo conceptos de distribución priorizada e incluyente, de los ingresos endógenos del departamento.</p> <p>1.7 Concertar esquemas de asociatividad territorial, como las regiones administrativas y de planificación – RAP-, las regiones de planeación y gestión, RAP-E, las asociaciones de departamentos o acudir a figuras como los esquemas asociativos territoriales o pactos territoriales, en los términos que determine la Constitución y la Ley.</p> <p>1.8 Liderar la formulación y ejecución de políticas en materia cultural que promuevan las identidades y valores colectivos del territorio y sus tradiciones, promoviendo la conservación y divulgación del patrimonio tangible e intangible y las expresiones culturales y artísticas de sus habitantes, bajo el respeto al pluralismo y la etno - identidad.</p> <p>1.9 Adoptar políticas que propendan por la práctica del deporte, con especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes, en sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, así como generar programas que incentiven el deporte como forma de aprovechamiento del tiempo libre, la preservación de la salud y la construcción de potencialidades en deportistas de alto rendimiento.</p> <p>1.10 Implementar y hacer seguimiento a las políticas para la promoción del desarrollo integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia con enfoque de gestión integral, promoviendo el reconocimiento, protección y la garantía de los derechos, siendo impostergable la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial.</p> <p>Realizar la Ruta Integral de Atenciones como herramienta de gestión intersectorial.</p> <p>1.11 Las demás inherentes al ejercicio de su autonomía territorial en el marco del Estado social de derecho.</p> <p>1.12 Liderar la formulación y ejecución de políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación, que promuevan la generación de capacidades y el conocimiento científico y tecnológico, para que contribuyan al desarrollo y crecimiento del Departamento.</p> <p><b>2. Bajo esquemas de concurrencia y complementariedad en:</b></p> <p>2.1. Gestionar, en coordinación con entidades del orden nacional, proyectos de cooperación o ayuda internacional.</p> <p>2.2. Promover e impulsar el desarrollo rural, con políticas incluyentes, acceso a oportunidades y garantías, al goce de derechos, con</p>

<p>perspectiva de desarrollo sostenible, equitativo e igualitario que permita la superación de esquemas de pobreza y exclusión.</p> <p>2.3. En materia de orden público, los departamentos en cabeza de sus gobernadores como agentes del presidente de la República, deben preservar la seguridad y la convivencia, en el área de su jurisdicción y responder por las relaciones y mecanismos de coordinación entre las distintas instancias encargadas del manejo del orden público, procurando una labor unificada y eficaz.</p> <p>Los Consejos de Seguridad departamentales, elaboraran las políticas y los planes específicos de seguridad, para afrontar conforme sus particularidades y especificidades, los conflictos y factores de perturbación del orden público y convivencia, adoptando las medidas pertinentes con respeto a los derechos humanos. Además, cumplirán con las instrucciones que el Gobierno nacional imparta en materia del uso de la fuerza pública, ejecución de políticas de seguridad que se adopten y de medidas para la tranquilidad pública.</p> <p>2.4. En materia de ordenamiento territorial, deben adoptar las directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad del territorio o de porciones del mismo, conforme con esquemas ambientales sostenibles y de las potencialidades y limitantes geofísicos, económicos y culturales, a fin de generar un orden adecuado.</p> <p>2.5. En concertación con los municipios, determinaran en ejercicio del derecho al desarrollo sostenible, la ubicación de infraestructuras de alto impacto, sea bajo esquemas regionales o propios de planificación.</p> <p>2.6. Promover la sostenibilidad ambiental y responsabilidad intergeneracional en el departamento, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 99 de 1993 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.</p> <p>2.7. A través de proyectos, programas y políticas públicas, garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, promoviendo la protección del patrimonio natural.</p> <p>Los departamentos garantizaran que los recursos naturales renovables y el medio ambiente, no se degraden por acciones ilegales. Se recepcionarán las alertas tempranas de los municipios de la jurisdicción y serán llevadas al consejo de seguridad para adoptar las acciones pertinentes.</p> <p>Se debe generar una política de prevención, estudio del riesgo y capacidad de respuesta ante incendios forestales.</p> <p>2.8. Concurrir con la Nación y los municipios al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario, con especial</p>	<p>énfasis en generar vivienda digna para hogares vulnerables en áreas urbanas y rurales. Generarán políticas de subsidios en dinero o en especie que podrán ser concurrentes para adquisición, mejoramiento, construcción de vivienda; procesos de formalización de la propiedad y asignación de terrenos para vivienda de interés social. Toda política de vivienda que se establezca debe ser integral, generando condiciones de acceso a los servicios públicos y calidades de hábitat adecuadas, conforme los lineamientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.</p> <p>2.9. Concurrir con la Nación y los municipios en forma coordinada para la elaboración, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Departamental para la Atención y Prevención de Desastres; generando condiciones de capacidad de respuesta inmediata ante el acaecimiento de desastres naturales o por acción humana, orientados a tratar de salvaguardar la vida y generar condiciones mínimas e integrales. Adoptaran un programa de simulacros que permita a la población tener capacidad de autorespuesta y salvaguarda ante desastres.</p> <p>2.10. Bajo la coordinación operativa de la Dirección Nacional de Bomberos, o la entidad que haga sus veces, apoyaran la creación y dotación de las instituciones o cuerpos de bomberos que funcionen dentro de su jurisdicción, para la prestación del servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendio, operativos y procesos ejecutables para operaciones de rescate, y la atención de incidentes con materiales peligrosos, mejorando la capacidad de respuesta a través de la regionalización.</p> <p>2.11. En materia de tránsito y movilidad, los departamentos, a través de su entidad responsable, hacen parte del Sistema Nacional de Transporte. Les corresponde participar en la construcción de las políticas generales en materia de tránsito y transporte y velar por su aplicación y ejecución en su jurisdicción y el cumplimiento de las regulaciones del orden nacional sobre la materia.</p> <p>Formular y gestionar la política de movilidad, regulación y control del tránsito y transporte público en el departamento; ejerciendo como autoridad de tránsito la competencia asignada, inspección, control y vigilancia, velando por la seguridad vial en las carreteras dentro de su área de influencia.</p> <p>2.12. En materia de garantía, protección y restablecimiento de derechos diseñar e implementar políticas públicas y proyectos de inversión en beneficio de la población vulnerable por situación de pobreza, exclusión y discriminación, desplazamiento forzado, población víctima en cualquiera de las modalidades de violencia, y situaciones análogas de segregación, y marginación.</p>
<p><b>3. Bajo esquemas de concurrencia y/o subsidiaridad:</b></p> <p>3.1. En materia de servicios públicos, les corresponde a los departamentos conforme al régimen jurídico que fije la ley, asegurar su cobertura y prestación eficiente en cumplimiento de los fines del Estado, garantizando su calidad y universalidad:</p> <p>3.1.1 <b>Educación.</b> Ejecutar las competencias para la prestación del servicio educativo en los municipios de su jurisdicción que no estén certificados en educación, según los criterios que establezca la ley orgánica de recursos y competencias. De igual manera, pueden concurrir con la acción y el ejercicio de las funciones propias de los distritos o municipios certificados en educación que se encuentren dentro de su territorio.</p> <p>3.1.2 <b>Servicio de salud.</b> Formular los planes, programas y proyectos tendientes a la prestación oportuna, eficiente y con calidad del servicio de salud, en consonancia con aquellos establecidos para el orden nacional. Es su deber asistir y asesorar a los municipios para que se garantice la cobertura de aquel, al tiempo que supervisar y controlar tanto el recaudo y ejecución de los recursos propios como de los entregados por concepto del sistema general de participaciones con destinación específica y el aseguramiento de la población en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los regímenes de excepción definidos en el ordenamiento jurídico.</p> <p>Ejercer el liderazgo y gobernanza del sistema de salud en la jurisdicción en procura de calidad, acceso y oportunidad de un sistema para toda la población. Articular la acción institucional; planificar el tema de salud para el territorio, desplegando las capacidades institucionales necesarias para liderar políticas, planes, programas y proyectos; articular la acción de los actores del sistema de salud territorial, entre la Nación y los municipios, crear un sistema que permita superar los problemas, fortalecer los sistemas de información que le permita a los departamentos y municipios conocer la población dentro de su jurisdicción, para generar políticas públicas de prevención, asistencia, georeferenciación, para la localización de especialistas y organización del sistema, crear plataformas que permitan recepcionar información para una mejor inspección, vigilancia y control. Desarrollar programas de salud pública; proveer tecnologías en salud; fortalecer, a través de la coordinación y articulación con los municipios con el plan de beneficios individuales en salud PBS del nivel local; el departamento vigilará la seguridad social en el territorio, régimen de aseguramiento y regímenes especiales, en coordinación con las autoridades nacionales. Impulsar, adaptar y velar por la aplicación de políticas de talento humano en la salud a partir de los profesionales del departamento; participar en la gestión de financiamiento del subsidio a la oferta de hospitales</p>	<p>públicos en el territorio y en la atención de la población no afiliada a la seguridad social; liderar el gobierno corporativo de los hospitales públicos y velar por su buen desempeño y la transparencia en la gestión.</p> <p>3.1.3. <b>Servicios públicos domiciliarios.</b> Administrar, coordinar y complementar la acción de los municipios y servir como intermediario entre éstos y la Nación, para garantizar la continua y adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que la ley y la Constitución Política establezcan.</p> <p>3.1.4. <b>Agua potable y saneamiento básico.</b> Promover, estructurar, cofinanciar e implementar esquemas regionales, para concurrir a la eficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.</p> <p>Administrar los recursos destinados para la atención de este servicio esencial y apoyar a las autoridades competentes en el ejercicio de medidas correctivas y preventivas que propendan por la continua y adecuada prestación del servicio.</p> <p>4. Cumplir las demás funciones administrativas y prestar los servicios que les señalen la Constitución y las Ley.</p> <p><b>Artículo 5. Áreas No Municipalizadas:</b> El Gobernador ejercerá la administración sobre las áreas no municipalizadas, hasta tanto se surta el proceso de municipalización de conformidad con la normatividad vigente. En los departamentos en los que haya presencia de comunidades étnicas, se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 632 de 2018 y las disposiciones complementarias.</p> <p><b>Artículo 6.</b> El departamento impulsará el desarrollo productivo y capital humano a partir de la visión a corto, mediano y largo plazo del desarrollo económico y social, a través de nuevas formas de organización territorial supradepartamental, que, como instrumentos de planeación y administración del territorio, permitan superar los desequilibrios regionales, en especial del territorio rural.</p> <p><b>Artículo 7.</b> El departamento adoptara y ejecutará las políticas, planes, programas y proyectos regionales que respondan a la capacidad de crear riqueza, con el fin de promover la prosperidad y bienestar económico y social de sus habitantes, estimulando y garantizando la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio e industria de forma legal; asimismo, velará por brindar oportunidades de superación a los sectores que sufren desigualdad desde la organización, el orden y la seguridad.</p> <p><b>Artículo 8.</b> El departamento promoverá el desarrollo empresarial de los pequeños y medianos productores organizados en comunidades campesinas y nativas.</p>

<p><b>Artículo 9.</b> El departamento promoverá la asociatividad que permita generar sinergias para cubrir mercados que de manera independiente no se puedan abastecer, conformando redes empresariales que impulsen el desarrollo de clúster que se conviertan en motores de desarrollo regional.</p> <p>Así mismo, contribuirá en la formulación, ejecución y coordinación de políticas y programas de promoción de las MIPymes.</p> <p><b>Artículo 10.</b> El departamento, a través de los principios de coordinación y coherencia, impulsará con la Nación, la inversión privada responsable y sostenible para el desarrollo territorial, que atienda el fortalecimiento de las capacidades y fortalezas reconocidas.</p> <p><b>Artículo 11.</b> Los departamentos a través de los esquemas asociativos territoriales, podrán fortalecer los sistemas administrativos, de planeación y de prestación de servicios públicos, consolidando esquemas de desarrollo económico y social que impulsen las potencialidades.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III</b></p> <p style="text-align: center;">Creación de nuevos departamentos y definición de límites dudosos.</p> <p><b>Artículo 12. Creación de nuevos departamentos y definición de límites dudosos.</b> Corresponde al Congreso de la República, fijar o modificar el límite de regiones territoriales del orden departamental y del distrito capital de Bogotá, de conformidad con la Ley 1447 de 2011 o las normas que la sustituyan, adicione o modifiquen. En armonía con los preceptos, la ley podrá decretar la formación de nuevos departamentos y el deslinde de las entidades existentes.</p> <p>El Congreso de la República definirá los límites dudosos y solucionará los conflictos limítrofes, previo estudio normativo y técnico. Estos estudios serán elaborados conjuntamente por las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes con el apoyo del Ministerio del Interior y el Instituto geográfico "Agustín Codazzi".</p> <p><b>Parágrafo.</b> El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, será la entidad del nivel Nacional encargada de promover y liderar los procesos de articulación y coordinación con las demás entidades del nivel central y territorial dentro del proceso de exámenes de límites, definición de límites dudosos y conflictos limítrofes. El Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" remitirá copia de la iniciación de los procesos al Congreso de la Republica y al Ministerio del Interior.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPITULO IV</b></p> <p style="text-align: center;">De la planeación departamental</p> <p><b>Artículo 13.</b> Los departamentos tienen autonomía en materia de planeación, en</p>	<p>el marco de las competencias, recursos y responsabilidades atribuidas en la Constitución Política y en la Ley 152 de 1994 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.</p> <p>Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin perjuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración, las políticas, planes, programas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo vigente, garantizando la coherencia.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V</b></p> <p style="text-align: center;">Plan de Ordenamiento Departamental</p> <p><b>Artículo 14.</b> Planes de Ordenamiento Departamental. En desarrollo del artículo 29 numeral 2 de la Ley 1454 de 2011 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, los departamentos expedirán planes de ordenamiento departamental a través de los cuales se definirá la visión a largo plazo del departamento, el modelo de ordenamiento territorial, las directrices, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de impacto territorial que superen la división político administrativa municipal, definiendo las herramientas que articulen y armonicen el marco del plan de ordenamiento departamental.</p> <p>Así mismo, a través de estos instrumentos se determinarán los escenarios de uso y ocupación del territorio, de acuerdo con el potencial óptimo del ambiente, en función de los objetivos de desarrollo, potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales. Dentro del modelo de ordenamiento territorial se realizará la especialización de los principales sistemas de escala supramunicipal, que coexisten y estructuran el territorio departamental, tales como el sistema de asentamientos poblacionales urbanos y rurales, la estructura ecológica, los corredores de conectividad funcional, las redes de infraestructura y equipamientos de servicios públicos y las áreas e infraestructura productiva, lo cual se realizará en coordinación con los entes territoriales, los grupos étnicos y demás actores del proceso, reconociendo las particularidades territoriales y regionales, así como la articulación con los niveles nacional y supradepartamentales.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITULO II</b></p> <p style="text-align: center;">De las asambleas departamentales</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPITULO I</b></p> <p style="text-align: center;">De su organización y funcionamiento.</p> <p><b>Artículo 15. Asambleas departamentales.</b> En cada departamento habrá una corporación política - administrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio y podrá ejercer control político sobre la administración departamental y estará integrada por no menos de once (11) miembros ni más de treinta y uno (31), que se denominarán diputados y tendrán la calidad de</p>
<p>servidores públicos, sujetos al régimen que para estos efectos, fija la Constitución y la ley.</p> <p><b>Artículo 16. Organización de las asambleas.</b> La determinación de la estructura administrativa de las asambleas departamentales, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo; corresponden a la misma corporación, consultando las metas de ingresos y gastos, de acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo, a la Ley 617 de 2000, o a las leyes que la modifiquen o sustituyan y las normas nacionales vigentes en materia salarial y prestacional.</p> <p><b>Artículo 17. Sede.</b> La asamblea departamental tendrá su sede en la capital del departamento, recinto oficial señalado para tal efecto. Sin embargo, por motivos de seguridad, grave perturbación del orden público o por decisión motivada de más de las dos terceras partes de la corporación, podrá sesionar en sitio diferente, siempre y cuando subsistan las causas que motivaron el traslado.</p> <p><b>Artículo 18. Atribuciones.</b> Son funciones de las asambleas departamentales:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollar sus funciones con una visión regional del desarrollo económico y social, procurando que el gobierno departamental fortalezca la institucionalidad, con propósitos a corto, mediano y largo plazo que permitan el progreso departamental.</li> <li>2. Expedir, interpretar, reformar y derogar las ordenanzas en los asuntos de su competencia.</li> <li>3. Determinar la estructura de la administración departamental mediante la creación de las dependencias que la conforman y la asignación de sus funciones principales, las escalas de remuneración correspondiente a sus distintas categorías de empleos.</li> <li>4. Dictar normas de Policía en aquellas materias que no hayan sido reguladas por las autoridades nacionales y desarrollar las que estos hayan expedido, en cuanto fuere necesario.</li> <li>5. Autorizar al Gobernador de manera pro tempore de precisas facultades; para incorporar, adicionar, modificar, efectuar traslados presupuestales y crear rubros presupuestales en las diferentes secciones del Presupuesto General del Departamento, servicio de la deuda pública e inversión; en ejecución de sus políticas, programas subprogramas y proyectos, establecidas en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia.</li> <li>6. Elegir su Mesa Directiva.</li> <li>7. Posesionar al gobernador del departamento.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Elegir, mediante convocatoria pública, al secretario de la asamblea para el período previsto en la presente ley.</li> <li>9. Elegir, mediante convocatoria pública al contralor departamental, de acuerdo a lo previsto en la Constitución y la ley; aceptar la renuncia, conceder licencias y permisos, hacer efectivas las sanciones disciplinarias y penales, decretadas por las autoridades competentes, y llenar la vacancia, según sea el caso.</li> <li>10. Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al Contralor General del Departamento, Secretarios de Despacho, Jefes de Departamentos Administrativos y Directores de Institutos Descentralizados del orden Departamental.</li> <li>11. Determinar la celebración de sesiones reservadas en los términos de la Constitución y la ley.</li> <li>12. Solicitar que se convoque a consulta popular, para que la ciudadanía decida sobre el traslado de la cabecera municipal cuando así lo requiera y oficializar la decisión adoptada.</li> <li>13. Solicitar la cooperación de los organismos del orden nacional de la administración Pública, para el mejor desempeño de sus atribuciones.</li> <li>14. Citar y requerir a los secretarios del despacho y demás funcionarios departamentales o del nivel descentralizado departamental, para que concurran a las sesiones, de conformidad con la Constitución y la Ley.</li> <li>15. Exigir, mediante comunicación escrita, informes sobre el ejercicio de sus funciones, a los secretarios de despacho, jefes de departamentos administrativos, gerentes o directores de planeación y directores de institutos descentralizados del orden departamental, gerentes o directores de las empresas en las cuales el departamento forme parte y, en general, a cualquier servidor público del orden departamental y a los directores de las corporaciones autónomas regionales.</li> <li>16. Solicitar a los representantes legales, de las empresas de servicios públicos domiciliarios, informes para que absuelvan inquietudes sobre la prestación del servicio en el respectivo departamento.</li> <li>17. Dar cumplimiento a las sanciones aplicadas y comunicadas por los partidos o movimientos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, por la inobservancia de sus miembros a directrices internas, siempre y cuando ello implique limitación de los derechos como diputado, las cuales pueden ir desde la pérdida del derecho al voto hasta la expulsión, siempre observando el debido proceso.</li> </ol>

<p>18. Promover la participación ciudadana mediante la realización de audiencias públicas y especiales sobre temas de interés departamental.</p> <p>19. Aceptar la renuncia de los diputados cuando la Corporación se encuentre sesionando. En receso, esta atribución corresponde a la Mesa Directiva de la Corporación.</p> <p>20. Aprobar la creación de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del orden departamental previstos en el artículo 300 numeral 7 de la Constitución Política, previo a la presentación y evaluación del estudio técnico que sustente la conveniencia económica y social de la iniciativa, así como la viabilidad financiera de la nueva entidad, teniendo en cuenta sus funciones, el sector donde operará y sus fuentes de financiación.</p> <p>21. Crear mediante ordenanzas las Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial, en los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 1454 de 2011.</p> <p>22. Crear y organizar provincias como entidades administrativas y de planificación en los términos de la Ley 1454 de 2011.</p> <p>23. Promover la conformación de asociaciones entre entidades territoriales.</p> <p>24. Con sujeción a los requisitos que señale la ley, crear, suprimir y fusionar municipios y modificar sus límites mediante la segregación o agregación de territorios.</p> <p>25. Imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos cuentas territoriales de seguridad para fomentar la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento.</p> <p>26. Aprobar y adoptar, mediante ordenanza, los planes de ordenamiento departamental de acuerdo a los términos del artículo 29 de la ley 1454 de 2011.</p> <p>27. Establecer la progresiva transformación de los corregimientos departamentales y/o áreas no municipalizadas, en municipios, o su incorporación a municipios existentes, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes.</p> <p>28. Reglamentar la enajenación o destino de los terrenos baldíos cedidos al departamento, de conformidad con las leyes que regulen la materia.</p> <p>29. Expedir la ordenanza de reglamento para su organización y funcionamiento, la cual no requerirá de sanción ejecutiva.</p> <p>30. Las demás funciones que les señalen la Constitución y las leyes.</p>	<p>31. Autorizar al Gobernador del Departamento para comprometer vigencias futuras, negociar empréstitos, enajenar bienes, activos, acciones y cuotas partes, así como ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales.</p> <p><b>Parágrafo 1:</b> Las ordenanzas que decreten inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales y las que creen servicios a cargo del departamento solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador.</p> <p><b>Parágrafo 2:</b> Las funciones normativas del departamento para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los gobernadores o a las asambleas, se entenderá asignada a estas corporaciones siempre y cuando no contraría la Constitución y la ley.</p> <p><b>Artículo 19. Prohibiciones de la Asamblea.</b> Es prohibido a las asambleas departamentales en el ejercicio de sus atribuciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inmiscuirse, por medio de resoluciones u ordenanzas en asuntos de competencia privativa de otras autoridades.</li> <li>2. Decretar a favor de personas o entidades, donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, u otras erogaciones o derechos que no estén reconocidos con arreglo a las leyes preexistentes.</li> <li>3. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas.</li> <li>4. Adoptar algún régimen prestacional distinto al que ordena la ley.</li> <li>5. Intervenir en beneficio propio, de terceros o de su partido o grupo político, en la asignación de cupos presupuestales o en el manejo, dirección o utilización de recursos del presupuesto, en la forma que establecen las leyes orgánicas del plan y del presupuesto.</li> <li>6. Las demás establecidas en la Constitución y la Ley.</li> </ol> <p><b>Artículo 20. Reconocimiento a personas naturales o jurídicas.</b> A los Diputados les está prohibido, otorgar o realizar homenajes a personas naturales o jurídicas que no sean de reconocimiento general o público. La Mesa Directiva hará un estudio completo sobre las hojas de vida y logros en beneficio de la comunidad de cada una de las personas propuestas. Los postulados para tales homenajes estarán sometidos a los requisitos establecidos en un reglamento especial que para estos efectos dispongan la Mesa Directiva.</p> <p>En todo caso los reconocimientos no podrán financiarse con recursos públicos.</p> <p><b>Artículo 21. Instalación del periodo constitucional.</b> La sesión de instalación del periodo constitucional de las asambleas contará con la asistencia del</p>
<p>gobernador, sin que su ausencia impida que esta pueda llevarse a cabo legal y formalmente.</p> <p><b>Artículo 22. Período de sesiones.</b> Las asambleas departamentales sesionarán de manera ordinaria durante seis (6) meses al año, así:</p> <p>El primer período del primer año de sesiones, estará comprendido entre el 1 de enero posterior a su elección al último día del mes de febrero del respectivo año.</p> <p>El segundo, tercer y cuarto año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril.</p> <p>El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer período, será del 1 de octubre al 30 de noviembre.</p> <p>Podrán sesionar durante tres (3) meses al año de forma extraordinaria, previa convocatoria del gobernador. En el curso de ellas sólo podrá ocuparse de los asuntos que el gobernador someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, así como los temas administrativos propios de la corporación.</p> <p>Las sesiones extraordinarias que convoque el gobernador podrán realizarse en oportunidades diferentes siempre y cuando no se exceda el límite establecido en este artículo.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Si por cualquier causa las asambleas no pudieran reunirse ordinariamente en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible, dentro del período correspondiente.</p> <p><b>Artículo 23. Cabildo abierto.</b> En cada período de sesiones ordinarias de las asambleas departamentales, se deberá celebrar por lo menos un (1) cabildo abierto en la sede de la asamblea departamental o donde acuerde la Corporación mediante proposición aprobada, cuando se derive de asuntos que afecten estos territorios, y que hayan surtido su trámite de solicitud acorde con las disposiciones legales vigentes, en los que, por iniciativa de un número no inferior al cinco (5%) por ciento de los ciudadanos del censo electoral del respectivo departamento, se considerarán los asuntos que los residentes soliciten sean estudiados, siempre y cuando sean de competencia de la corporación.</p> <p>Es obligación del gobernador o del secretario departamental que delegue, según sea el caso, asistir al cabildo abierto. El procedimiento para la realización de los cabildos abiertos será conforme a lo establecido en la Ley 1757 de 2015 o la norma que la modifique, adición o la sustituya.</p> <p><b>Artículo 24 Invalidez de las sesiones y decisiones.</b> Carecerá de validez, toda sesión de miembros de las asambleas que, con el propósito de ejercer funciones propias de la corporación, se efectúe por fuera de las condiciones legales o reglamentarias vigentes. Los actos que se expidan en estas circunstancias, no producirán efectos jurídicos y quienes participen en las deliberaciones, incurrirán en causal de mala conducta y serán sancionados conforme a las leyes</p>	<p>disciplinarias vigentes.</p> <p><b>Artículo 25. Reuniones no presenciales de la asamblea departamental.</b> Cuando la mesa directiva de la corporación por acto motivado declare que, por razones de orden público, emergencia sanitaria, intimidación, amenaza, fuerza mayor o calamidad pública, no sea posible que miembros de la corporación concurren a su sede habitual, estos podrán participar de las sesiones de manera no presencial. Para tal fin, los miembros de la corporación podrán deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, utilizando para el efecto los medios tecnológicos en materia de telecomunicaciones, que se encuentren al alcance de la corporación o que les brinde o facilite el gobierno departamental; estas sesiones deberán mantener el quórum respectivo.</p> <p>Las convocatorias deberán realizarse de conformidad con lo señalado en el reglamento y garantizar el acceso a la información y documentación requerida para la deliberación.</p> <p>Las decisiones deberán adoptarse conforme a las reglas de quórum y mayorías previstas en los respectivos reglamentos, de todo lo cual deberá quedar constancia en las actas correspondientes a dichas sesiones, cuya custodia estará a cargo del secretario.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Las sesiones no presenciales deberán ser reguladas por las asambleas en el respectivo reglamento, estableciendo los requisitos que se deben cumplir para el uso de los medios tecnológicos.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Excepto los asuntos y deliberaciones sujetas a reserva, las sesiones no presenciales deberán ser públicas, para lo cual se deberá utilizar únicamente los medios o canales habilitados para el efecto en el reglamento.</p> <p><b>Parágrafo 3.</b> El gobernador y demás entidades del nivel central y descentralizado del orden departamental, deberán brindar y garantizar el apoyo técnico y tecnológico a la Corporación, para la realización de las sesiones de manera no presencial, cuando estas no cuenten con los medios para tal efecto.</p> <p><b>Artículo 26. Mesa Directiva.</b> La Mesa Directiva de las asambleas departamentales se compondrá de un presidente y dos vicepresidentes, elegidos separadamente para un periodo de un año.</p> <p>Ningún diputado que pertenezca a la mesa directiva podrá ser reelegido en el mismo periodo constitucional; lo anterior no obsta, para que pueda hacer parte de las mesas directivas de las comisiones permanentes.</p> <p><b>Artículo 27. Participación en mesas directivas de las asambleas departamentales.</b> Las organizaciones o partidos políticos declarados en oposición y con representación en la correspondiente asamblea, tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de las mesas directivas. Los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a la oposición solo</p>

<p>podrán ser postulados por las bancadas de los partidos o las organizaciones políticas debidamente declaradas.</p> <p>La organización o partido político que hubiese ocupado este lugar en las mesas directivas no podrá volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan. Esta representación debe alternarse, en períodos sucesivos entre hombres y mujeres de conformidad con lo dispuesto por cada una de las bancadas referidas.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La declaración en oposición realizada por parte de las organizaciones o partidos políticos deberá realizarse de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 1909 de 2018 – Estatuto de la Oposición o la norma que la modifique, adicione o sustituya.</p> <p><b>Artículo 28. Representación legal.</b> La representación legal de la asamblea departamental corresponderá al presidente de la corporación, quien comparecerá personalmente o por medio de apoderados en los procesos en que ésta sea parte. Igualmente, en ausencia temporal de este, la asumirá el primer vicepresidente.</p> <p><b>Artículo 29. Comisiones.</b> Las asambleas integrarán en sesión plenaria las comisiones permanentes encargadas de adelantar debates de control político y dar debate a los proyectos de ordenanza, según los asuntos que se le asignen acorde con su propio reglamento.</p> <p>Las asambleas deberán contar como mínimo con una comisión permanente del Plan de Desarrollo y una de Hacienda. Si dichas comisiones no se hubieren creado o integrado, dentro del periodo de sesiones ordinarias a la promulgación de la presente ley deberá adelantarse su conformación en los términos reglamentarios.</p> <p>De manera transitoria, en caso de no estar conformadas las comisiones de las que trata el inciso anterior, la Mesa directiva designará comisiones accidentales a fin de que rindan informes del Plan de Desarrollo y de hacienda.</p> <p>Todo diputado deberá hacer parte de una comisión permanente y en ningún caso podrán pertenecer a dos o más comisiones permanentes, exceptúese, a la Asamblea Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.</p> <p>La mesa directiva podrá autorizar el cambio o traslado que de Comisiones acuerden y soliciten los respectivos integrantes. Dispuesto el cambio, los nuevos miembros lo serán hasta el final del periodo constitucional.</p> <p>Además de las Comisiones Permanentes, con el objeto de fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor normativa y de control político, las asambleas departamentales crearán la Comisión para la Equidad de la Mujer, la cual estará integrada por las diputadas que voluntariamente manifiesten su interés de participar, sin que esto supla la obligatoriedad de hacer parte de las comisiones permanentes.</p>	<p>La Comisión para la Equidad de la Mujer, además de las funciones que la plenaria de la asamblea delegue, ejercerá las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejercer el control político en temas de género.</li> <li>2. Realizar el seguimiento a la implementación de las iniciativas relacionadas con los temas de género.</li> <li>3. Promover la participación de las mujeres en los cargos de elección popular y de designación, de conformidad con la Ley 581 de 2000, y las normas que la adicione o modifiquen.</li> <li>4. Ser interlocutoras de las organizaciones y grupos de mujeres.</li> <li>5. Fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres y las políticas públicas existentes.</li> <li>6. Hacer seguimiento a los procesos de verdad justicia y reparación para los delitos cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado interno en sus territorios, a los que haya lugar.</li> <li>7. Realizar seguimiento a la implementación de políticas departamentales en temas de género.</li> <li>8. Realizar seguimiento a la implementación de políticas departamentales para incentivar el desarrollo laboral de las mujeres.</li> </ol> <p>Para la conformación se tendrá en cuenta a todas las mujeres de la corporación respectiva, de igual forma la participación de los diputados, en los departamentos en donde no hayan sido elegidas diputadas. La mesa directiva deberá garantizar su conformación y funcionamiento, con un número impar de sus miembros.</p> <p><b>Artículo 30. Secretario General.</b> La elección del secretario general deberá estar precedida obligatoriamente por una convocatoria pública, conforme a lo señalado en la Constitución y la ley. El periodo será de un (1) año, reelegible. Su elección se realizará en el primer periodo de sesiones ordinarias respectivo.</p> <p>En caso de falta absoluta se realizará nueva convocatoria para la elección por el resto del periodo.</p> <p>El secretario presentará un informe anual a la asamblea el cual se someterá a la</p>
<p>plenaria de la misma para su evaluación.</p> <p><b>Parágrafo.</b> No puede ser designado secretario general, un miembro de la Asamblea.</p> <p><b>Artículo 31. Calidades del secretario.</b> Para ser elegido secretario general de la asamblea departamental se requiere tener título profesional universitario y cumplir con los demás requisitos para servidores públicos. En todo caso, no podrá ser nombrado quien haya perdido la investidura de un cargo de elección popular, se le haya condenado a pena privativa de la libertad, salvo por el delito político o culposo.</p> <p><b>Artículo 32. Elección del contralor.</b> Los Contralores departamentales, serán elegidos por las Asambleas Departamentales, de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en la convocatoria pública, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde.</p> <p>El contralor será elegido en el último periodo de sesiones ordinarias que antecede el inicio del periodo del nuevo contralor.</p> <p><b>Artículo 33. Posesión de los funcionarios elegidos por las asambleas.</b> Los funcionarios elegidos por la asamblea tendrán periodos institucionales y el plazo para posesionarse será de quince (15) días calendario, excepto en los casos de fuerza mayor debidamente certificada, en los cuales se prorrogará este término por quince (15) días más, lo cuales serán improrrogables.</p> <p>En la eventualidad que no pueda posesionarse el funcionario elegido por persistir las circunstancias, se deberá adelantar nuevamente la convocatoria para la elección.</p> <p>Ninguna autoridad podrá dar posesión a funcionarios elegidos por la asamblea que no acrediten las calidades exigidas para el cargo, o que estén incurso en las causales de inhabilidad que señalen la Constitución y la Ley, la cual deberá estar debidamente acreditada.</p> <p>El funcionario que contravenga lo dispuesto en este artículo, incurrirá en causal de mala conducta.</p> <p><b>Artículo 34. Reglamento.</b> La asamblea departamental expedirá, una ordenanza de reglamento para su organización y funcionamiento, en el cual estarán incluidas, entre otras, las normas referentes a las comisiones, elección de funcionarios, funcionamiento de las bancadas, la validez de las convocatorias, las sesiones, formalidades para la presentación de los proyectos de ordenanzas, control político, trámite de impedimentos, reglamentación de facultades, recusaciones y conflicto de intereses, así como lo relativo a la actuación de los diputados.</p> <p>Los reglamentos se tramitarán con las formalidades de todo proyecto de ordenanza y no requerirá sanción ejecutiva.</p>	<p>Las asambleas departamentales deberán ajustar sus reglamentos a lo prescrito en la presente ley, dentro de seis (6) meses siguientes a su promulgación.</p> <p><b>Artículo 35. Quórum.</b> Las asambleas departamentales y sus comisiones no podrán iniciar sesión hasta contar con quórum deliberatorio conformado con no menos de la cuarta parte de sus miembros. Las decisiones solo podrán adoptarse con el quórum decisorio, que se conforma con la asistencia presencial o remota de la mayoría de los miembros, salvo que la Constitución o la Ley exijan un quórum especial.</p> <p><b>Artículo 36. Mayorías decisorias.</b> En sesión plenaria y comisiones permanentes se podrá decidir por mayoría simple, la cual se constituye por la mitad más uno de los votos de los asistentes, salvo que la constitución exija expresamente una mayoría especial.</p> <p><b>Artículo 37. Control político.</b> Corresponde a la asamblea ejercer función de control y vigilancia a la administración departamental. Para tal fin, podrá citar a los secretarios de despacho, así como al contralor departamental.</p> <p>Las citaciones deberán realizarse con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y formularse en cuestionario escrito. Dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la citación, el funcionario citado deberá radicar en la secretaría general de la corporación la respuesta al cuestionario, en medio escrito y magnético, según esté definido en el reglamento interno. El debate objeto de la citación encabezará el Orden del Día de la sesión y no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario. En la eventualidad que el debate no se concluya en la sesión convocada, la corporación deberá continuarlo en la sesión inmediatamente siguiente, salvo que por circunstancias excepcionales se deba adelantar otros temas de urgencia. Sin embargo, todo debate de control político debe concluirse.</p> <p>En la sesión inicial del debate, se deberá garantizar la intervención del funcionario citado.</p> <p>De la misma manera podrán invitar a los gerentes o jefes seccionales de las entidades nacionales que tengan jurisdicción en el departamento. También podrán solicitar informaciones escritas a otras autoridades departamentales y de los municipios del departamento, especialmente con relación a obras o actividades que se adelantan con recursos aportados por el departamento.</p> <p>En todo caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos propios del cargo del respectivo funcionario; en caso de que se interrogue en el transcurso del debate sobre temas no incluidos en el cuestionario inicial; será a voluntad del citado, dar respuesta a la corporación, siempre teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que se sustenten por parte de los diputados y garantizando el derecho a la información.</p> <p><b>Parágrafo:</b> La asamblea podrá citar a los jefes de departamento administrativo, gerentes, directivos y representantes legales de entidades descentralizadas del departamento para que rindan informe sobre su gestión.</p>

<p><b>Artículo 38. Moción de censura.</b> La <u>tercera parte</u> de los miembros que componen la asamblea, podrán proponer moción de censura respecto de los secretarios de despacho del gobernador, por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones de la asamblea. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguiente a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran la corporación. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos.</p> <p><b>Artículo 39. Convocatoria a Personas jurídicas de naturaleza privada.</b> Dentro de los términos de la presente ley, con aprobación de la plenaria o de los miembros de cualquier comisión permanente, la asamblea departamental <del>se</del> podrá solicitar información por escrito a las personas jurídicas que presten servicios públicos o administren recursos de la misma naturaleza, para que en audiencia especial rindan declaraciones orales o escritas sobre asuntos de interés público.</p> <p>Los citados podrán abstenerse de asistir solo con excusa justificada.</p> <p><b>Artículo 40.</b> Actas. De las sesiones de las asambleas y de sus comisiones permanentes, el secretario de la corporación levantará las correspondientes actas que contendrán, entre otras, una relación sucinta de los temas tratados y debatidos; de los nombres de los diputados asistentes, de las personas que hayan intervenido, de las comunicaciones leídas, las proposiciones presentadas, las comisiones designadas y las decisiones adoptadas. Sin embargo, deberán garantizar por medios electrónicos idóneos la conservación del desarrollo de las sesiones de control político y control normativo.</p> <p>Abierta la sesión, el presidente someterá a discusión y aprobación, previa lectura si los miembros de la corporación lo consideran necesario, el acta de la sesión anterior. No obstante, el acta debe ser puesta previamente en conocimiento de los miembros de la corporación, bien por su publicación en la página web de esta y el envío al correo electrónico de los diputados, o mediante el medio de que disponga la asamblea para estos efectos.</p> <p>Es responsabilidad de los miembros de la corporación tener conocimiento de las actas y demás información pertinente para el cumplimiento de sus funciones.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> El secretario tiene la obligación de conservar las actas en medio magnético y escrito y los demás documentos que determinen las ordenanzas, o que ordene el presidente. Asimismo, la guarda y conservación del archivo documental de la corporación.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> La corporación garantizará que todas las actas de sesiones estén debidamente publicadas en medios electrónicos y/o físicos, inclusivos y accesibles a toda la población, especialmente a aquella en condición de discapacidad.</p> <p><b>Artículo 41. Publicidad de las sesiones de la asamblea.</b> Las asambleas</p>	<p>departamentales deberán contar con un medio oficial escrito y electrónico para la publicidad de sus actos, bajo la dirección del secretario general.</p> <p><b>Artículo 42. Inasistencia.</b> La falta de asistencia de los diputados a las sesiones, sin excusa justificada y válida, aceptada mediante resolución por la mesa directiva, no causará la remuneración y prestaciones correspondientes; sin perjuicio de la pérdida de la investidura cuando hubiere lugar.</p> <p><b>Artículo 43. Rendición de cuentas.</b> las Asambleas deberán elaborar anualmente un Plan de Acción de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas, que deberá ser publicado con observancia de lo consagrado en la presente ley.</p> <p>Los presidentes de las Asambleas y de sus comisiones permanentes, elaborarán un informe de rendición de cuentas del desempeño de la respectiva célula, mínimo, una vez al año dentro de los tres primeros meses a partir del segundo año.</p> <p>Los informes correspondientes quedarán a disposición del público de manera permanente en la página web y en las oficinas de archivo y en la correspondiente Secretaría General.</p> <p>Estos contendrán como mínimo una relación de las proposiciones presentadas, negadas, aprobadas y pendientes; un inventario de los debates adelantados y de los proyectos de acuerdo presentados, negados, aprobados y pendientes; y un informe tanto de los aspectos administrativos, financieros, laborales y contractuales correspondientes, así como de los asuntos que estando pendientes requieren continuidad en su trámite.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II</b> De los Diputados</p> <p><b>Artículo 44. Calidades.</b> Los diputados serán elegidos popularmente para un periodo de cuatro (4) años y tendrán la calidad de servidores públicos.</p> <p>Para ser diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos y culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la fecha de la elección o durante un periodo mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época, debidamente certificado por autoridad competente.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Para ser elegido diputado en el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se requiere además de los determinados por la Ley, ser residente del departamento conforme a las normas de control de densidad poblacional y tener residencia en la respectiva circunscripción por más de diez (10) años cumplidos con anterioridad al primer día del periodo de inscripción.</p>
<p><b>Artículo 45. Posesión.</b> El presidente de la asamblea tomará posesión ante la corporación, en sesión formal que se llevará a cabo el primero (1) de enero del año siguiente al de su elección en sesión plenaria, que se convocará por el presidente y en su ausencia, por alguno de los vicepresidentes de la corporación que termina el periodo constitucional y comunicada por el secretario general actuante. Los diputados electos se posesionarán en la misma sesión ante el presidente ad-hoc que se designe, y los miembros de ellas, secretarios y subalternos, si los hubiere, ante el presidente; para tal efecto, prestarán juramento en los siguientes términos: Juro a Dios y prometo al pueblo, cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.</p> <p><b>Artículo 46. Período de los diputados.</b> El periodo de los diputados será de 4 años e iniciará el primero de enero del año siguiente al de su elección, fecha en la cual se deberá celebrar la sesión de instalación y concluirá el treinta y uno de diciembre (31) del último año de dicho periodo.</p> <p><b>Artículo 47. De las inhabilidades de los diputados.</b> Además de las inhabilidades establecidas en la Constitución y el Código Único Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 122 inciso final de la Constitución política, quien haya sido condenado, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.</li> <li>2. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.</li> <li>3. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.</li> <li>4. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien, como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.</li> <li>5. Quien dentro los doce (12) meses anteriores a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal</li> </ol>	<p>de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el departamento en la misma fecha.</li> <li>7. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, haya pertenecido a juntas directivas de personas jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan en fondos públicos procedentes del respectivo departamento o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.</li> <li>8. Quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.</li> </ol> <p><b>Parágrafo.</b> Interpretese para todos sus efectos, que las inhabilidades descritas en el artículo, se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran a la respectiva entidad territorial.</p> <p><b>Artículo 48. De las incompatibilidades de los diputados.</b> Los diputados no podrán:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 de la Constitución Política, no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura.</li> <li>2. Intervenir en la gestión de negocios o ser apoderado ante entidades del respectivo departamento o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones de que trata el artículo siguiente.</li> <li>3. Ser miembro de juntas o consejos directivos del sector central o</li> </ol>

<p>descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento, o de instituciones que administren tributos, tasas o contribuciones procedentes del mismo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Celebrar contratos o realizar gestiones con quienes administren, manejen, o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo departamento, o sean contratistas del mismo, o reciban donaciones de éste.</li> <li>Ser representante legal, miembro de juntas o consejos directivos, auditor o revisor fiscal, empleado o contratista de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento.</li> </ol> <p><b>Parágrafo.</b> Interprétese para todos sus efectos, que las incompatibilidades descritas en el artículo se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran a la respectiva entidad territorial.</p> <p><b>Artículo 49. Otras incompatibilidades.</b> Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los diputados en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuaciones contractuales en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio de la respectiva entidad territorial, o sus organismos;</li> <li>Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.</li> </ol> </li> <li>Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia.             <p>Esta incompatibilidad se extiende desde el momento de su vinculación y hasta doce (12) meses después del retiro del servicio.</p> </li> <li>Contratar con el Estado, salvo las excepciones constitucionales o legales.</li> </ol> <p><b>Parágrafo 1.</b> El funcionario público departamental que nombre a un diputado para un empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta y será</p>	<p>objeto de proceso disciplinario de conformidad con las disposiciones vigentes.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Interprétese para todos sus efectos, que la incompatibilidad descrita en este artículo, se refiere al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio.</p> <p><b>Artículo 50. Duración de la incompatibilidad.</b> Las incompatibilidades de los diputados tendrán vigencia durante el período constitucional para el cual fueron elegidos salvo disposición en contrario.</p> <p><b>Artículo 51. Inelegibilidad Simultánea.</b> Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> El diputado en ejercicio que aspire a ser congresista, debe renunciar a su investidura al menos un año antes a la fecha de su elección.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> El diputado que decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce meses antes del día de inscripciones.</p> <p><b>Artículo 52. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los diputados.</b> De conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Constitución Política, las asambleas no podrán nombrar, elegir o designar como servidores públicos a personas con las cuales los diputados tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.</p> <p>Los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento.</p> <p>Los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades de los sectores central o descentralizado del correspondiente departamento.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Es nulo todo nombramiento o designación que se haga en contravención a lo dispuesto en el presente artículo; sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias a que haya lugar.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso de carrera administrativa.</p> <p><b>Parágrafo 3.</b> Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo, también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de contratos de</p>
<p>prestación de servicios.</p> <p><b>Parágrafo 4.</b> Interprétese para todos sus efectos, que las prohibiciones descritas en el artículo se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio.</p> <p><b>Artículo 53 Excepciones al régimen de incompatibilidades.</b> Lo dispuesto en los artículos anteriores no obsta para que los diputados puedan, directamente o por medio de apoderado, actuar en los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos tengan interés;</li> <li>El ejercicio de la cátedra en cualquier orden;</li> <li>Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de multas que graven a las personas de las que trata el presente artículo.</li> <li>Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten;</li> <li>Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la rama jurisdiccional del poder público. Sin embargo, los diputados durante su período constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo departamento, los establecimientos públicos, las empresas comerciales e industriales del orden departamental y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.</li> </ol> <p><b>Artículo 54. Conflicto de intereses.</b> Todos los diputados deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ordenanza, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del diputado.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del diputado de las que no gozan el resto de los ciudadanos.</li> <li>Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el diputado participa de la decisión.</li> </ol>	<p>c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del diputado, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.</p> <p>Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cuando el diputado participe, discuta, vote un proyecto de ordenanza que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del diputado coincide o se fusiona con los intereses de los electores.</li> <li>Cuando el beneficio podría o no configurarse para el diputado en el futuro.</li> <li>Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de ordenanza de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el diputado tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.</li> <li>Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de ordenanza de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el diputado tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.</li> <li>Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de ordenanza que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el diputado. El diputado deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.</li> <li>Cuando el diputado participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos.</li> </ol> <p><b>PARÁGRAFO 10.</b> Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan los diputados cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la discusión y votación del proyecto.</p> <p><b>Artículo 55. Faltas absolutas de los diputados.</b> Son faltas absolutas de los diputados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La muerte.</li> <li>La renuncia aceptada.</li> <li>La incapacidad física permanente.</li> </ol>

<p>4. La pérdida de la investidura de diputado de conformidad con lo previsto en el artículo 291 de la Constitución Política y demás disposiciones legales en la materia.</p> <p>5. La declaratoria de nulidad de la elección como diputado.</p> <p>6. Interdicción judicial.</p> <p>7. La destitución del ejercicio del cargo, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación como resultado de un proceso disciplinario.</p> <p>8. La condena a pena privativa de la libertad, en sentencia ejecutoriada.</p> <p><b>Artículo 56. Renuncia.</b> En época de sesiones ordinarias, corresponde a la plenaria de la asamblea oír y decidir sobre la renuncia de un diputado cuando él mismo manifiesta de forma escrita e inequívoca su voluntad de hacer dejación definitiva de su investidura como tal. La renuncia deberá presentarse ante el presidente, en ausencia de este, ante el vicepresidente de la corporación; en ella se determinará la fecha a partir de la cual se quiere hacer efectiva.</p> <p>La renuncia del presidente de la corporación, se presentará ante la plenaria de la asamblea departamental.</p> <p>Si la corporación no está sesionando, la renuncia se deberá presentar ante el presidente y en ausencia de este, ante el vicepresidente de la corporación, quien la presentará para que decida la mesa directiva.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En los casos de renuncia, excusas o licencia, se deberá incluir como primer punto del orden día.</p> <p><b>Artículo 57. Incapacidad física permanente.</b> En caso de incapacidad permanente debidamente certificada por la entidad prestadora de salud a la que se encuentre afiliado el diputado, el presidente de la asamblea declarará la vacancia por falta absoluta y procederá a llamar a quien tenga derecho a ocupar la curul y haya sido determinado por la autoridad respectiva, previa notificación a la bancada a la que pertenezca.</p> <p><b>Artículo 58 Pérdida de la investidura.</b> Se decretará la pérdida de investidura en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones ordinarias o extraordinarias a seis (6) sesiones de plenarias o de comisión permanente en las que se voten proyectos de ordenanza, según el caso, salvo cuando medie fuerza mayor debidamente certificada.</li> <li>3. Por no tomar posesión de la curul, salvo fuerza mayor debidamente certificada, dentro de los ocho (8) días siguientes a la instalación de la corporación o a la fecha en que fueron llamados a posesionarse.</li> <li>4. Por sentencia condenatoria en firme sobre indebida destinación de dineros públicos.</li> <li>5. Por sentencia condenatoria en firme por la comisión del delito de tráfico de influencias debidamente comprobado.</li> <li>6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.</li> </ol> <p><b>Parágrafo 1.</b> La pérdida de investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento establecido para los congresistas, en lo que corresponda.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Mientras se adelanta el proceso de pérdida de investidura, el diputado podrá continuar en el ejercicio de su cargo, hasta tanto no quede ejecutoriada la sentencia que pone fin al mismo.</p> <p><b>Artículo 59. Declaratoria de nulidad de la elección.</b> Una vez que quede en firme la declaratoria de nulidad de la elección de un diputado, por parte de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, quedará sin efecto la credencial que lo acreditaba como tal y el presidente de la asamblea correspondiente dispondrá las medidas necesarias para dar cumplimiento y hacer efectiva dicha decisión.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Cuando se solicite la nulidad de la elección de un diputado y la misma causal alegada sea común a uno o varios de los integrantes de la respectiva lista de candidatos con derecho a llenar la curul vacante, se tramitará separadamente el proceso contencioso, salvo las excepciones de ley, garantizando plenamente el debido proceso.</p> <p><b>Artículo 60. Interdicción judicial.</b> Una vez quede en firme la declaratoria de interdicción judicial para un diputado, proferida por parte del juez competente, dicho diputado perderá su investidura como tal y el presidente o vicepresidente del concejo en ausencia de este, tomará las medidas conducentes a hacer efectivo el cese de funciones del mismo a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.</p>
<p><b>Artículo 61. Aplicación de las sanciones de destitución y de suspensión.</b> La aplicación de las sanciones de destitución y de suspensión a un diputado serán solicitadas por la Procuraduría General de la Nación y el presidente de la asamblea departamental procederá a hacerla efectiva.</p> <p><b>Artículo 62. Causales de destitución.</b> También son causales de destitución de los diputados las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La no incorporación injustificada al ejercicio de sus funciones, después del vencimiento de una licencia o suspensión o de la cesación de las circunstancias que originaron una incapacidad legal o física transitoria;</li> <li>2. El haberse proferido en su contra sentencia condenatoria de carácter penal que se encuentre debidamente ejecutoriada, salvo en casos de delitos políticos o culposos diferentes a aquéllos contra el patrimonio público;</li> <li>3. La inasistencia, en un mismo período de sesiones a más de seis (6) sesiones plenarias en las que se voten proyecto de ordenanza, sin que medie fuerza mayor;</li> <li>4. Por sentencia judicial en firme por „destinación ilegal de dineros públicos.</li> </ol> <p>La aplicación de las sanciones de destitución de un diputado, serán decretadas por la Procuraduría General de la Nación. Una vez en firme, la remitirá al presidente de la asamblea para lo de su competencia.</p> <p><b>Artículo 63. Formas de llenar las faltas absolutas.</b> Los diputados no tendrán suplentes. Las faltas absolutas de los diputados serán suplidas por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o de votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral, según se trate de listas cerradas o con voto preferente.</p> <p>El presidente o a falta temporal de este el vicepresidente de la asamblea, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la declaratoria, llamará a los candidatos que se encuentren en tal situación, a tomar posesión del cargo vacante.</p> <p><b>Artículo 64. Silla vacía.</b> En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos.</p> <p><b>Artículo 65. Reducción del quórum y mayorías.</b> Cuando las faltas absolutas de los diputados no pudieren ser reemplazadas conforme a lo dispuesto en esta ley, el quórum y las mayorías se determinarán teniendo como base el total de los</p>	<p>membros de la asamblea, menos el número de curules que no pudieron ser suplidas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas.</p> <p>Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo queda reducida a la mitad o menos la corporación, el presidente o a falta temporal de este, el vicepresidente de la asamblea departamental solicitará al Consejo Nacional Electoral, convocar a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falten más de veinticuatro (24) meses para la terminación del periodo.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Para efectos del último inciso, el Consejo Nacional Electoral, convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falten más de veinticuatro (24) meses para la terminación del periodo, sin que sea requisito sine qua non, la solicitud del presidente o vicepresidente de la corporación.</p> <p><b>Artículo 66. Faltas temporales.</b> Son faltas temporales de los diputados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La licencia de maternidad y paternidad.</li> <li>2. La incapacidad física transitoria.</li> <li>3. La suspensión provisional del desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario o penal.</li> <li>4. La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.</li> <li>5. La ausencia forzada e involuntaria.</li> </ol> <p><b>Parágrafo 1.</b> Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el artículo 134 de la Constitución Política.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En caso de falta causada por secuestro, el titular conservará los derechos, remuneraciones y prestaciones previstas en la ley e igualmente los llamados a reemplazarlos temporalmente.</p> <p><b>Artículo 67. Licencia de maternidad.</b> La diputada en estado de embarazo, o adoptante de un menor de edad, tendrá derecho al reconocimiento de la licencia de maternidad remunerada, por el tiempo y en las condiciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, entendiéndose como justificable su inasistencia. La remuneración pagada durante la licencia corresponderá al valor del salario mensual equivalente al tiempo que dure su licencia de maternidad, los cuales serán pagados, a través de la respectiva EPS a la que se encuentre afiliada.</p>



<p><b>Artículo 68. Comisiones de estudio.</b> En lo relacionado a las comisiones de estudio de los diputados, la mesa directiva de la corporación, aplicará lo previsto para los funcionarios públicos.</p> <p><b>Artículo 69. Incapacidad física transitoria.</b> En caso de que por motivos de salud debidamente certificada por la entidad prestadora de salud a la que esté afiliado el diputado, se vea impedido para asistir transitoriamente a las sesiones de la corporación, el presidente declarará la vacancia temporal.</p> <p><b>Artículo 70. Suspensión provisional de la elección.</b> Una vez que la Jurisdicción Contencioso Administrativa disponga la suspensión provisional de la elección de un diputado, el presidente de la asamblea declarará la vacancia temporal y dispondrá las medidas conducentes para hacer efectiva la cesación de funciones del diputado, durante el mismo tiempo de suspensión.</p> <p><b>Artículo 71. Ausencia forzada e involuntaria.</b> Cuando por motivos ajenos a su voluntad, ocasionados por la retención forzada ejercida por otra persona, un diputado no pueda concurrir a las sesiones de la asamblea, el presidente declarará la vacancia temporal, tan pronto le sea notificado el hecho por la autoridad competente.</p> <p><b>Artículo 72. Circunscripción electoral.</b> Para la elección de los diputados, cada departamento formará un círculo único.</p> <p><b>Artículo 73. Derechos de los reemplazos por vacancia.</b> En caso de faltas absolutas o temporales de los diputados, quienes sean llamados a ocupar la curul tendrán derecho a los beneficios a que se refieren los artículos anteriores desde el momento de su posesión y hasta cuando ejerzan su período.</p> <p><b>Artículo 74. Son excusas de los diputados para no asistir a las sesiones:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incapacidad física o enfermedad debidamente decretada por EPS.</li> <li>2. Grave calamidad doméstica.</li> <li>3. Tratándose de sesiones extraordinarias, la falta de citación o aviso.</li> <li>4. El cumplimiento de comisiones asignadas por la corporación.</li> </ol> <p>El caso fortuito y la fuerza mayor.</p> <p><b>Artículo 75. Bancadas.</b> Las asambleas departamentales actuarán bajo el régimen de bancadas previsto en la Ley 974 de 2005 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y deberán ajustar sus reglamentos a lo establecido en tales disposiciones y demás normas pertinentes.</p>	<p>Los miembros de la asamblea departamental elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos constituyen una bancada en la respectiva corporación.</p> <p>Cada miembro de una corporación pública pertenecerá exclusivamente a una sola Bancada.</p> <p><b>Parágrafo:</b> Las bancadas elegirán un vocero general, quien los representará en las diferentes actividades de la corporación y en la plenaria, los voceros de las bancadas serán elegidos de acuerdo con la ley y los estatutos de cada partido y movimiento político y la bancada notificará de manera oficial al presidente de la corporación.</p> <p><b>Artículo 76. Actuación en bancadas.</b> Los miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente, y emplearán mecanismos democráticos para tomar sus decisiones al interior de las corporaciones en todos los temas que los Estatutos del Respectivo Partido o Movimiento Político no establezcan como de conciencia.</p> <p><b>Artículo 77. Decisiones.</b> Cuando la Bancada decida dejar en libertad a sus miembros para votar de acuerdo con su criterio individual, se dejará constancia de ello en el acta de la respectiva reunión.</p> <p><b>Artículo 78. Régimen de seguridad social y prestacional de los diputados.</b> El régimen de seguridad social y prestacional de los diputados es inherente a su naturaleza y estará a cargo del presupuesto central, que es transferido a las asambleas.</p> <p>Los diputados estarán amparados por el régimen de seguridad social prevista en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones complementarias en la materia; se les garantizará aseguramiento en salud, pensiones y riesgos laborales.</p> <p>El Ingreso base de cotización obligatoria para el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, debe corresponder al resultado que se obtenga de dividir entre doce (12) el ingreso percibido durante los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias a título de remuneración.</p> <p><b>Artículo 79. Remuneración de los diputados.</b> La remuneración por concepto de asignación mensual de los diputados de las asambleas departamentales por mes de sesiones será la siguiente:</p> <table border="1" data-bbox="852 1133 1307 1236"> <thead> <tr> <th>Categoría de departamento</th> <th>Remuneración de diputados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Especial</td> <td>30 smlm</td> </tr> <tr> <td>Primera</td> <td>26 smlm</td> </tr> <tr> <td>Segunda</td> <td>25 smlm</td> </tr> <tr> <td>Tercera y cuarta</td> <td>18 smlm</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría de departamento	Remuneración de diputados	Especial	30 smlm	Primera	26 smlm	Segunda	25 smlm	Tercera y cuarta	18 smlm
Categoría de departamento	Remuneración de diputados										
Especial	30 smlm										
Primera	26 smlm										
Segunda	25 smlm										
Tercera y cuarta	18 smlm										
<p><b>Artículo 80. Régimen prestacional de los diputados.</b> El servidor público que ejerza como diputado tendrá derecho a seguro de vida con cargo a la sección presupuestal del sector central del Departamento y a percibir las siguientes prestaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auxilio de cesantía e intereses sobre las cesantías, cuya liquidación se orientará por los artículos 3o y 4o de la Ley 5 de 1969 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 o por las normas que lo adicionen o modifiquen.</li> <li>2. Prima de Navidad, se reconocerá de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4 de 1966 o por las normas que lo adicionen o modifiquen.</li> </ol> <p><b>Parágrafo 1.</b> Los gastos derivados de las prestaciones sociales de los diputados, la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y la parafiscalidad, afectarán la sección presupuestal de la asamblea, pero no computarán dentro del límite de gasto de funcionamiento señalado en el artículo 8 de la Ley 617 de 2000.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> La remuneración de los diputados es incompatible con cualquier otra asignación proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las excepciones establecidas en la Ley 4 de 1992.</p> <p><b>Parágrafo 3.</b> La remuneración del auxilio de cesantías de los diputados deberá liquidarse a razón de una asignación mensual por cada año calendario de sesiones. Para los cálculos anteriores, deberá entenderse, como si se hubiere sesionado los doce (12) meses del respectivo año y percibido durante ese año asignaciones mensuales idénticas a las devengadas en el tiempo de sesiones, conforme a lo estipulado en los artículos 3º y 4º de la Ley 5ª de 1969 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, excepto cuando mediare renuncia o desvinculación, caso en el cual, el factor anterior, se liquidará proporcionalmente.</p> <p><b>Artículo 81. Seguro de vida.</b> Los diputados tendrán derecho durante el período para el cual han sido elegidos a un seguro de vida equivalente a veinte (20) veces del salario mensual vigente para el gobernador, con cargo a la sección presupuestal del sector central del departamento; así como a la atención médico-asistencial a que tiene derecho el gobernador.</p> <p>Para estos efectos, la asamblea autorizará al gobernador para que se contrate con cualquier compañía de seguros legalmente autorizada, el seguro previsto en este artículo.</p> <p><b>Artículo 82. Seguro de vida en caso de reemplazo por vacancia.</b> En caso de faltas absolutas, quienes sean llamados a ocupar el cargo de diputado tendrán derecho a los beneficios a que se refiere el artículo anterior, desde el momento de su posesión y hasta que concluya el período correspondiente a la vacante, según el caso.</p>	<p>En caso de falta absoluta quien sea llamado a ocupar el cargo de diputado tendrá estos mismos derechos desde el momento de su posesión.</p> <p><b>Artículo 83. Derechos de los diputados.</b> Los diputados tendrán derecho a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vacaciones y prima de vacaciones.</li> <li>2. Gasto de Viaje.</li> <li>3. Capacitación.</li> </ol> <p><b>Artículo 84. Vacaciones.</b> Los diputados tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones colectivas por cada año de servicio prestado, se reconocerá y pagará como si hubiere sesionado los 12 meses del año.</p> <p><b>Artículo 85. Período de vacaciones.</b> Las vacaciones a que tienen derecho los diputados deberán ser disfrutadas de manera colectiva, a partir del 20 de enero o el día hábil inmediatamente posterior, del año siguiente a su causación.</p> <p><b>Artículo 86. Responsable para conceder vacaciones.</b> Las vacaciones serán concedidas por resolución del presidente de la correspondiente asamblea departamental o falta temporal de este, al primer vicepresidente.</p> <p><b>Artículo 87. De la compensación de vacaciones en dinero.</b> Las vacaciones podrán ser compensadas en dinero cuando el servidor se retire del servicio sin haberlas disfrutado. Los diputados que se retiren definitivamente de la asamblea departamental, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que éstas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente sesionado.</p> <p>Cuando por razones extraordinarias, el gobernador cite a la asamblea a sesiones extraordinarias, durante el período de vacaciones, tales días serán compensados en dinero.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Las vacaciones correspondientes al último año del período constitucional se compensarán en dinero, así como al presidente de la corporación en el año en el que se ordene su disfrute.</p> <p><b>Artículo 88. Base para liquidar las vacaciones y la prima de vacaciones.</b> Las vacaciones y la prima de vacaciones se liquidarán tomando como base el valor mensual de la remuneración que resulte de dividir entre doce (12), el ingreso percibido durante los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias en el respectivo año objeto de liquidación.</p> <p><b>Artículo 89. Gastos de viaje.</b> Las asambleas departamentales podrán pagar del rubro de gasto de funcionamiento, los gastos de viajes de sus diputados con ocasión del cumplimiento de comisiones oficiales fuera del departamento.</p> <p>El presidente de la asamblea departamental, autorizará las comisiones oficiales de servicios fuera del departamento, y éstas causan derecho al reconocimiento</p>										

<p>de gastos de viaje en los términos que señale anualmente el Gobierno nacional. Para su reconocimiento y legalización se deberán presentar los soportes correspondientes a su cumplimiento.</p> <p><b>Artículo 90. Capacitación y formación.</b> La Escuela Superior de Administración Pública creará programas gratuitos, presenciales y/o virtuales, de acceso prioritario de capacitación y formación profesional, destinados a los Diputados.</p> <p>La ESAP contará con 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para implementar las disposiciones del presente artículo, estableciendo programas propios en los que podrán participar diputados, concejales, alcaldes, miembros de juntas administradoras locales y personeros, directivos de federaciones y confederaciones de concejales y diputados.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La capacitación y formación académica a que hace referencia el presente artículo, será programada en coordinación con la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia CONFADICOL.</p> <p><b>Artículo 91.</b> El Ministerio de Educación Nacional fomentará el desarrollo de programas en las distintas instituciones de educación superior, dirigidos a la capacitación y formación de los diputados, en áreas y materias acordes con las funciones que ellos ejercen, según la Constitución y la ley.</p> <p><b>Artículo 92.</b> Las instituciones de educación superior podrán crear, dentro del marco de su autonomía universitaria, programas dirigidos a la capacitación y formación de los diputados de carreras afines a la administración pública en materias acordes con las funciones que ellos ejercen, según la Constitución y la ley, dando facilidades de acceso y permanencia para los mismos.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III</b> De las ordenanzas</p> <p><b>Artículo 93. Iniciativa.</b> Los actos de las asambleas departamentales destinados a dictar disposiciones para el arreglo de alguno de los asuntos que son de su competencia se denominarán ordenanzas; los que tengan por objeto la ejecución de un hecho especial, como un nombramiento, o la decisión de un punto determinado, que no imponen obligaciones ni crean derechos a los asociados, se denominarán en general resoluciones.</p> <p>Pueden presentar proyectos de ordenanza ante la secretaría general de la asamblea, el gobernador, por conducto de sus secretarios, y los diputados.</p> <p><b>Artículo 94. Avals normativos.</b> Cuando se radique un proyecto de ordenanza por los diputados o por las bancadas políticamente representadas y cuya iniciativa este reservada al gobernador, antes de su aprobación en segundo debate la administración podrá presentar el aval de la iniciativa, salvo que se refiera a la materia tributaria y que con la iniciativa no se modifique o afecte el impacto fiscal a mediano plazo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 819 de 2003 o las normas que lo modifiquen, adicione o sustituya.</p>	<p><b>Artículo 95. Unidad temática.</b> Todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma materia. Serán inadmisibles las disposiciones que no se relacionan con la misma temática. El presidente de la asamblea rechazará las iniciativas que no se ajusten a este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la plenaria de la asamblea.</p> <p>Los proyectos de ordenanza deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se expliquen sus alcances y las razones que lo sustentan.</p> <p><b>Artículo 96. Debates.</b> Los proyectos de ordenanza serán presentados en la secretaría general de la asamblea, la cual los repartirá a las comisiones que deban ocuparse de ellos, según la materia que traten y la competencia de aquellas.</p> <p>Para que un proyecto sea ordenanza debe aprobarse en tres (3) debates celebrados en distintos días. Durante el primero y el segundo se le pueden introducir los cambios, reformas, supresiones o adiciones que se consideren convenientes, siempre que se refieran a la materia o asunto que trate el proyecto. Durante el tercero, se aprueba total o parcialmente, o se imprueba.</p> <p>El ponente o ponentes para el primero y segundo debates serán designados por el presidente de la comisión respectiva y para el tercero, por el presidente de la plenaria.</p> <p>El ponente rendirá el informe dentro del plazo inicial que le hubiere señalado el presidente, o en su prorrogación, teniendo en cuenta la urgencia del proyecto y el volumen de trabajo. En caso de incumplimiento se procederá a su remplazo.</p> <p>El ponente o ponentes para los tres debates pueden ser los mismos o diferentes diputados.</p> <p><b>Artículo 97. Archivo.</b> Los proyectos que no recibieren aprobación en por lo menos un debate, deberán ser archivados al finalizar el correspondiente periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias.</p> <p>En todo caso, no se archivarán los proyectos que hayan surtido dos debates, así haya finalizado el periodo constitucional en el que fueron radicados. El tercer debate se deberá surtir con prioridad al iniciar el siguiente periodo.</p> <p><b>Artículo 98. De la participación ciudadana en el estudio de proyectos de ordenanza.</b> Para expresar sus opiniones, las personas naturales y jurídicas podrán presentar observaciones por escrito o en las sesiones formales, sobre los proyectos de ordenanza cuyo estudio y examen se esté adelantando en sesión plenaria o comisiones permanentes. La mesa directiva de la asamblea dispondrá los días, horarios y duración de las intervenciones, así como el procedimiento que asegure el debido y oportuno ejercicio de este derecho. Para su intervención el interesado deberá inscribirse previamente ya sea por los canales virtuales o directamente en la secretaría general de la corporación.</p>
<p>Las observaciones u opiniones presentadas por escrito serán publicadas oportunamente en la Gaceta de la asamblea y en la página web de la entidad o del departamento en donde no se cuente con esta herramienta virtual.</p> <p><b>Artículo 99. Objeciones.</b> Aprobado un proyecto de ordenanza por la asamblea pasará al gobernador para su sanción, y si este no lo objetare por motivos de inconveniencia, ilegalidad o inconstitucionalidad, dispondrá que se promulgue como ordenanza. Si lo objetare, lo devolverá a la asamblea.</p> <p>El gobernador dispondrá de los siguientes términos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cinco (5) días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte (20) artículos.</li> <li>2. Diez (10) días cuando el proyecto sea de veintiuno (21) a cincuenta (50) artículos, y</li> <li>3. Hasta de veinte (20) días cuando los artículos sean más de cincuenta (50).</li> </ol> <p>Si el gobernador, una vez transcurridos los términos indicados, no hubiere devuelto el proyecto con objeciones deberá sancionarlo y promulgarlo. Si no lo sanciona, el presidente de la Corporación procederá a sancionarlo y publicarlo.</p> <p>Si la asamblea entrare en receso dentro de estos términos, el gobernador tendrá el deber de publicar el proyecto objetado, dentro de aquellos plazos.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El gobernador deberá sancionar, sin poder presentar nuevas objeciones por inconveniencia, el proyecto que reconsiderado fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de la asamblea.</p> <p><b>Artículo 100 Trámite en el tribunal.</b> Si las objeciones fueren por ilegalidad o inconstitucionalidad y la asamblea insistiere, el proyecto pasará al Tribunal Administrativo que tenga sede en la capital del departamento para que éste decida definitivamente sobre su constitucionalidad o legalidad conforme a las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA.</p> <p><b>Artículo 101. Publicación.</b> El proyecto, las ponencias y los informes de los ponentes serán publicados en la gaceta oficial del departamento o de la asamblea o en la página web respectiva. Mientras la citada publicación no se haya realizado, no se podrá dar el debate respectivo.</p> <p><b>Artículo 102. Publicación y vigencia.</b> Sancionada la ordenanza, se publicará en la gaceta o boletín oficial del departamento y en la página web de la asamblea; y empezará a regir cuando la misma determine, en ningún caso</p>	<p>antes de la promulgación aquí ordenada. La publicación deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a su sanción.</p> <p><b>Artículo 103. Normas especiales.</b> Las disposiciones que sean aplicables sobre reforma y derogatoria de las leyes, regirán para las ordenanzas.</p> <p><b>Artículo 104. Nulidad.</b> Para todo lo relativo a la nulidad de las ordenanzas se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, o de las normas que la modifiquen, adicione o sustituyan.</p> <p>Las ordenanzas u otros actos de las asambleas departamentales anulados por los tribunales de lo contencioso administrativo por ser contrarios a la Constitución o a las leyes no podrán ser reproducidos por aquellas corporaciones si conservan la esencia de las mismas disposiciones anuladas, a menos que una disposición constitucional o legal, posterior a la sentencia, autorice expresamente a las asambleas para ocuparse de tales asuntos.</p> <p style="text-align: center;"><b>TÍTULO III</b> De los gobernadores</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO I</b> Naturaleza del Cargo, Calidades, atribuciones</p> <p><b>Artículo 105. Naturaleza del cargo.</b> En cada uno de los departamentos habrá un Gobernador que será jefe de la administración seccional y representante legal del departamento; el gobernador será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general, así como para aquellos asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el departamento. Los gobernadores serán elegidos popularmente para periodos institucionales de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente.</p> <p>El gobernador, como agente del gobierno, dirigirá y coordinará, además, en el departamento, los servicios nacionales en las condiciones de la delegación que le confiera el Presidente de la República.</p> <p><b>Artículo 106. Elección de gobernadores.</b> Los gobernadores son elegidos popularmente para periodos institucionales de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente.</p> <p>En la elección del gobernador de Cundinamarca no participan los ciudadanos inscritos en el censo electoral de Bogotá, Distrito Capital.</p> <p><b>Artículo 107. Calidades.</b> Para ser elegido gobernador se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo departamento durante el año anterior a la fecha del primer día de la inscripción</p>

<p>o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.</p> <p>Para ser elegido gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se requiere además de los requisitos establecidos en el inciso anterior, ser residente del departamento conforme a las normas de control de densidad poblacional y tener domicilio en la respectiva circunscripción por más de diez (10) años cumplidos con anterioridad a la fecha del primer día de la inscripción.</p> <p><b>Artículo 108. Posesión.</b> Los gobernadores se posesionarán ante la respectiva asamblea. Si no estuviere sesionando, lo harán ante su mesa directiva, si no estuviere reunida, lo hará ante el presidente del Tribunal Superior, residente en el lugar, si no fuere posible lo hará ante notario público de la capital del departamento.</p> <p>Los gobernadores presentarán juramento en los siguientes términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia".</p> <p>Los gobernadores se posesionarán el primero (1) de enero del año en que comience el período constitucional para el cual han sido elegidos.</p> <p>El presidente de la República podrá aplazar la posesión del gobernador hasta por un (1) mes, en caso de fuerza mayor o caso fortuito. La prórroga se contará a partir de la fecha en que debe efectuarse la posesión. En este evento se proveerá la gobernación por encargo, en los términos de esta ley.</p> <p>La no posesión del gobernador elegido popularmente dentro del término legal, sin que medie justa causa, dará lugar a falta absoluta y el presidente de la República proveerá el cargo en los términos previstos en la presente ley. Si la falta de posesión se predica de gobernador encargado, el presidente de la República designará a otro ciudadano en este cargo siguiendo el mismo procedimiento.</p> <p>Los gobernadores deben declarar bajo la gravedad del juramento el monto de sus bienes y renta, la de su cónyuge, así como, la declaratoria de conflicto de interés. Así mismo están en la obligación de presentar su hoja de vida en los términos y condiciones que fije la Ley 190 de 1995, Ley 2013 de 2019 o las disposiciones que la modifiquen o sustituyan. Tales documentos deberán ser conservados por la unidad de recursos humanos de la gobernación y publicarse de acuerdo con las disposiciones legales.</p> <p><b>Artículo 109. De las inhabilidades de los gobernadores.</b> No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 122 inciso final de la constitución política, quien haya sido condenado, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior, excepto por</li> </ol>	<p>delitos políticos o culposos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.</li> <li>3. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.</li> <li>4. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien, como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.</li> <li>5. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.</li> <li>6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan, ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.</li> <li>7. Quien haya desempeñado el cargo de contralor departamental o procurador delegado en el respectivo departamento en los doce (12) meses anteriores a la elección.</li> <li>8. Quien haya desempeñado los cargos a que se refiere el artículo 197 de la Constitución Política.</li> <li>9. Quien, haya celebrado en los 12 meses anteriores a la elección de la candidatura, en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en</li> </ol>
<p>representación de otro, contrato alguno con el respectivo departamento, con sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos provenientes del mismo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Quien, en los 12 meses anteriores a la elección de la candidatura, haya intervenido de cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la celebración de contratos con la administración pública.</li> <li>11. Quien, en los 12 meses anteriores a la elección de la candidatura, haya intervenido en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el departamento o sus entidades descentralizadas.</li> <li>12. Quien, en los 12 meses anteriores a la elección de la candidatura, haya sido apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales del respectivo departamento, o que administren tributos, tasas o contribuciones del mismo.</li> <li>13. A quien se le hubiere revocado el mandato como gobernador o alcalde.</li> <li>14. Quien hubiere sido elegido para cargo o corporación pública de elección popular cuyo período coincida en el tiempo, así sea parcialmente con el período del cargo al que aspira.</li> </ol> <p><b>Parágrafo.</b> Interpretése para todos sus efectos, que las inhabilidades descritas en el presente artículo, se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos o entidades descentralizadas, que funciona en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran al respectivo ente territorial.</p> <p><b>Artículo 110. De las incompatibilidades de los gobernadores.</b> Los gobernadores, así como quienes sean designados en su reemplazo no podrán:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celebrar en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con el respectivo departamento, con sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos.</li> <li>2. Tomar parte en las actividades de los partidos o movimientos políticos, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.</li> <li>3. Intervenir en la celebración de contratos con la administración pública, fuera del ejercicio de sus funciones.</li> <li>4. Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el departamento o sus entidades descentralizadas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ser apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales del respectivo departamento, o que administren tributos, tasas o contribuciones del mismo.</li> <li>6. Desempeñar simultáneamente otro cargo o empleo público o privado.</li> <li>7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el período para el cual fue elegido.</li> </ol> <p><b>Artículo 111. Otras incompatibilidades.</b> Además, constituyen incompatibilidades de los gobernadores para desempeñar cargos públicos, las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce (12) meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en las cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos;</li> <li>1.2. Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.</li> </ol> </li> <li>2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia.             <p>Esta incompatibilidad se extiende desde el momento de su vinculación y hasta doce (12) meses después del retiro del servicio.</p> </li> <li>3. Para todo servidor público, contratar con el Estado, salvo las excepciones constitucionales o legales.</li> </ol> <p><b>Artículo 112. Duración.</b> Las incompatibilidades tendrán vigencia durante el período constitucional para el cual fue elegido y hasta doce (12) meses después del vencimiento del período o retiro del servicio.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> Quien fuere llamado a ocupar el cargo de gobernador, quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> Interpretése para todos sus efectos, que las prohibiciones descritas en el presente artículo, se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, que funciona en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran al respectivo ente territorial.</p>

<p><b>Artículo 113. Excepciones.</b> No obstante, las incompatibilidades y prohibiciones de que trata la presente ley, los gobernadores, sus parientes, cónyuges o compañeros permanentes, pueden directamente o por intermedio de apoderados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés;</li> <li>2. Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y multas que graven a las mismas personas;</li> <li>3. Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten;</li> </ol> <p><b>Artículo 114. Prohibiciones.</b> Es prohibido a los gobernadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inmiscuirse en asuntos de actos oficiales que no sean de su competencia;</li> <li>2. Decretar en favor de cualquier persona o entidad, gratificaciones, indemnizaciones o pensiones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley, y las decisiones jurisdiccionales;</li> <li>3. Decretar por motivos políticos, actos de proscripción o persecución contra personas o corporaciones, o decretar insubsistencias masivas. Los retiros masivos de personal solamente podrán realizarse en los casos autorizados por la ley o cuando se ordene la supresión, fusión o restauración de entidades, con arreglo a las ordenanzas que lo regulen;</li> <li>4. Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años después de la dejación del cargo, con respecto al departamento en el cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado.</li> </ol> <p>Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones.</p>	<p><b>Artículo 115. Autorizaciones para gobernadores.</b> Cuando el gobernador requiera salir del país en misión oficial, solicitará permiso o licencia remunerada, o no, informando de manera justificada y previa al Ministerio del Interior, entidad que emitirá el respectivo acto administrativo de autorización dentro de las (48) horas siguientes a su recibo formal. En la solicitud remitida por el gobernador, se deberá informar el secretario de despacho o funcionario de alto nivel de la entidad que quedará encargado.</p> <p>El gobernador presentará un informe a la asamblea dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al término de la comisión al exterior, indicando el motivo, duración, costos y resultados de la gestión.</p> <p><b>Parágrafo:</b> Los gobernadores de los departamentos ubicados en zonas de frontera podrán hacer tránsito en misión oficial con países limítrofes cuando el término no exceda las 48 horas.</p> <p><b>Artículo 116. Salarios y prestaciones de los gobernadores.</b> Los gobernadores tendrán derecho durante el periodo para el cual han sido elegidos, a la asignación correspondiente a la categoría que para el departamento establezca el Gobierno nacional y el régimen prestacional existente para los servidores públicos en cada departamento de conformidad con la ley.</p> <p><b>Artículo 117. Atribuciones de los gobernadores.</b> Además de las funciones constitucionales y legales previstas, los gobernadores tendrán las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, los decretos del Gobierno nacional, las ordenanzas de la respectiva asamblea y sus propias decisiones.</li> <li>2. Gestionar y promover la adopción y ejecución de políticas nacionales que coadyuven los intereses departamentales.</li> <li>3. Coordinar y articular el desarrollo de las políticas nacionales de carácter sectorial entre las diferentes entidades del nivel nacional en su territorio, haciendo uso de los instrumentos de planificación y concertación interinstitucional.</li> <li>4. Atender las instrucciones del presidente de la República sobre la ejecución de la política macroeconómica y las relacionadas con los convenios celebrados entre la Nación y el departamento.</li> <li>5. Celebrar convenios interadministrativos con la Nación para asumir por delegación diversas competencias de gestión administrativa y fiscal del nivel nacional, según las diferentes capacidades seccionales para asumir estas tareas.</li> <li>6. Presentar los proyectos de ordenanza para la buena marcha del departamento.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Formular y presentar a la asamblea departamental, el proyecto de ordenanza que contenga el plan de ordenamiento territorial.</li> <li>8. Adoptar mediante decreto el plan de ordenamiento departamental, cuando luego de ser presentado en debida forma, no sea aprobado por la Asamblea en los términos establecidos en la ley.</li> <li>9. Adoptar, mediante decreto el plan de desarrollo departamental, cuando luego de ser presentado en debida forma éste, no es aprobado por la Asamblea en los términos establecidos en la ley.</li> <li>10. Presentar a la asamblea departamental anualmente, un informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1909 de 2018 o las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.</li> <li>11. Adelantar las acciones respectivas para la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, en los términos en que se establezca.</li> <li>12. Reglamentar las ordenanzas departamentales.</li> <li>13. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los diputados, cuando la asamblea departamental esté en receso.</li> <li>14. Aceptar la renuncia del contralor cuando la asamblea se encuentre en receso.</li> <li>15. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios departamentales de acuerdo con las facultades y autorizaciones establecidas en la Constitución, la ley y las ordenanzas departamentales.</li> <li>16. Velar por el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos departamentales y nacionales que ejerzan sus funciones en el departamento y dictar los actos necesarios para su administración.</li> <li>17. Ejercer la potestad disciplinaria sobre los servidores bajo su dependencia.</li> <li>18. Conceder licencias y aceptar renunciaciones a los funcionarios y miembros de las asambleas y demás organismos cuyos nombramientos correspondan a la asamblea, cuando esta no se encuentra reunida y nombrar interinamente a quien debe reemplazarlo, salvo norma expresa que disponga lo contrario.</li> <li>19. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y unidades administrativas especiales del departamento.</li> <li>20. Conceder comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción del nivel nacional, departamental y municipal a los funcionarios</li> </ol>	<p>inscritos en carrera administrativa del nivel central.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>21. Adelantar acciones encaminadas a promover el desarrollo económico y pleno empleo de los habitantes del departamento.</li> <li>22. Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad, la tolerancia y la convivencia pacífica entre los habitantes del departamento, diseñando mecanismos que permitan la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones departamentales en el marco de la Constitución y la ley.</li> <li>23. Contribuir al fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios de sus municipios y de las vías para la competitividad.</li> <li>24. Ser gestores en la actualización catastral de predios rurales en municipios con gran extensión y en coordinación con las autoridades competentes en la materia, garantizando la autonomía fiscal municipal y la titularidad del impuesto de los municipios.</li> <li>25. Ejecutar acciones tendientes a la protección de la población vulnerable y a su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria.</li> <li>26. Desarrollar acciones tendientes a prestar apoyo, asesoría, capacitación y asistencia técnica a los distritos, municipios y resguardos indígenas dentro de su jurisdicción.</li> <li>27. Promover, desarrollar y aplicar estrategias de seguimiento a la gestión de los asuntos sectoriales del nivel nacional dentro de su territorio, y proponer o hacer recomendaciones al Gobierno nacional sobre su ejecución en el ámbito de su competencia.</li> <li>28. Ejercer la coordinación entre las autoridades locales y las nacionales.</li> <li>29. Suspender y nombrar a los alcaldes de su departamento en los casos señalados por la ley.</li> <li>30. Coordinar la acción de los municipios sin perjuicio de su autonomía y servir de interlocutor cuando sea necesario ante el Gobierno nacional.</li> <li>31. Fomentar la constitución de asociaciones de municipios y otras figuras de integración territorial en su jurisdicción.</li> <li>32. Rendir cuentas de su gestión a la ciudadanía, para lo cual deberá definir un esquema y cronograma de seguimiento y evaluación de resultados, que facilite el control social a su administración, y convocar de manera periódica a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas para escuchar sus propuestas o críticas, de acuerdo con las directrices señaladas para tal efecto en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1757 de 2015 sobre la participación democrática y ciudadana vigentes.</li> </ol>

<p>33. Elaborar y difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial en los municipios y distritos de su jurisdicción, del departamento a los gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general.</p> <p>34. Velar por la efectividad de la participación ciudadana en relación con la asamblea departamental.</p> <p>35. Promocionar, difundir y proteger los derechos humanos en su jurisdicción, en el marco de la Constitución y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia; ejecutando para ello las políticas, campañas y convenios sobre derechos deberes y mecanismos de protección de los mismos, con la participación de otras entidades estatales y de las organizaciones no gubernamentales.</p> <p>36. Velar por el mantenimiento del orden público en el departamento, de acuerdo con las normas y las instrucciones del presidente de la república, y coadyuvar a su mantenimiento en el resto del territorio nacional.</p> <p>37. Presidir el consejo de seguridad departamental. Esta función solo se podrá delegar en el secretario de gobierno o quien haga sus veces.</p> <p>38. En caso de que los alcaldes no puedan, por razones de orden público, ejercer sus funciones en el territorio de su municipio, corresponderá al gobernador del respectivo departamento determinar el lugar donde podrán ejercerlas, con las garantías de seguridad necesarias para el ejercicio del cargo, y hasta cuando se restablezca la normalidad en su municipio.</p> <p>39. Como primera autoridad de policía en el departamento, impartir instrucciones a los comandantes de la fuerza pública para prevenir desórdenes y alteración del orden público. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el gobernador.</p> <p>40. Solicitar a los alcaldes y a las autoridades de las demás entidades territoriales ubicadas en el departamento, la expedición de las órdenes y medidas de orden público que se requieran para su conservación o restablecimiento en esas jurisdicciones.</p> <p>41. Elaborar los informes generales y especiales de orden público, de conformidad con la Ley 4a de 1991 y remitirlos oportunamente al Gobierno nacional por conducto de la Subdirección de Seguridad y Convivencia o la dependencia que haga sus veces en el Ministerio del Interior.</p> <p>42. Dictar, dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, de conformidad con la ley.</p>	<p>43. Requerir el apoyo de la fuerza pública en los casos permitidos por la Constitución y la ley.</p> <p>44. Diseñar programas de convivencia pacífica y de construcción de la paz en su jurisdicción.</p> <p>45. Proponer la adopción de políticas específicas en materia de prevención criminal, que se adecuen a las características del departamento, en coordinación con las entidades nacionales competentes.</p> <p>46. Dentro de los precisos límites de las competencias que a ellos les corresponden, convenir con las autoridades de las entidades territoriales de igual nivel del país vecino, programas de cooperación e integración fronteriza, dirigidos a fomentar el desarrollo sostenible, la prestación de servicios públicos, la preservación del medio ambiente y la ejecución de obras públicas.</p> <p>47. Apoyar a las entidades territoriales en su jurisdicción para que den cumplimiento a las normas de buen gobierno y/o disciplina fiscal; y acompañarlos, en coordinación con el Gobierno nacional en la búsqueda de salidas estructurales a situaciones de déficit o de incapacidad institucional que les permitan prestar de manera adecuada los servicios públicos de educación, salud y agua potable a su cargo.</p> <p>48. Previo a la presentación del proyecto de ordenanza por el cual se cree una entidad descentralizada, presentar a consideración de la asamblea un estudio técnico avalado por el organismo oficial correspondiente, que sustente la conveniencia económica y social de la iniciativa, así como la viabilidad financiera de la nueva entidad, teniendo en cuenta sus funciones, el sector donde operará y sus fuentes de financiación.</p> <p>49. Los gobernadores administrarán los fondos cuentas de seguridad y convivencia ciudadana – FONSET, quienes podrán delegar esta responsabilidad en el secretario de gobierno departamental, o quien haga sus veces.</p> <p>50. Incorporar al presupuesto departamental mediante decreto, los recursos provenientes del sistema general de participaciones, del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET –, del Sistema General de Regalías – SGR – y los celebrados mediante convenio con entidades del estado y/o de cooperación internacional.</p> <p>51. En el marco de las facultades pro tempore para incorporar, adicionar, modificar, efectuar traslados presupuestales y crear rubros presupuestales en las diferentes secciones del Presupuesto General del Departamento, servicio de la deuda pública e inversión; en ejecución de sus políticas, programas subprogramas y proyectos, establecidas en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia.</p>
<p>52. incorporar los recursos provenientes del Tesoro Nacional o de Cooperación nacional o Internacional que tengan por objeto cofinanciar proyectos, una vez el ejecutivo los adicione deberá informar a la Asamblea Departamental dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición del acto administrativo.</p> <p>53. Las demás que les señalen la Constitución y la ley.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> El gobernador es agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público. En consecuencia, los actos y órdenes del presidente de la República en esta materia los aplicará en el departamento de manera inmediata y prevalente. A su vez, las decisiones de los gobernadores en materia de orden público son preferentes a las de los alcaldes y de los distritos, y éstos deberán aplicarlas en sus municipios de manera preferente.</p> <p><b>Parágrafo 2.</b> En el marco de los principios de coordinación y complementariedad que debe existir en las actuaciones administrativas de los diferentes niveles, el gobernador articulará con el Ministerio del Interior, las acciones para el mantenimiento del orden público en el departamento.</p> <p><b>Artículo 118. Delegación de funciones.</b> El gobernador podrá delegar en los secretarios del departamento y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.</p> <p>Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.</p> <p>En lo referente a la delegación para celebrar y ejecutar contratos, esta se regirá conforme a lo reglado en la ley 489 de 1998, la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y las demás que la modifiquen, adicionen o sustituyan.</p> <p><b>Artículo 119. Faltas absolutas.</b> Son faltas absolutas del gobernador:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La muerte;</li> <li>2. La renuncia aceptada;</li> <li>3. La incapacidad física permanente;</li> <li>4. La declaratoria de nulidad de la elección;</li> <li>5. La interdicción judicial;</li> <li>6. La destitución;</li> <li>7. La revocatoria del mandato;</li> </ol>	<p>8. La declaración de vacancia por abandono del cargo.</p> <p><b>Artículo 120. Renuncia.</b> La renuncia al cargo de gobernador se hará ante el presidente de la República, de manera escrita donde se indique inequívocamente y espontáneamente la voluntad de dejar el cargo en forma definitiva. Para tal fin, el presidente de la República tendrá un término de treinta (30) días para aceptarla.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Vencidos el plazo anterior que medie una decisión de fondo, el gobernador podrá retirarse del cargo, sin que constituya abandono del mismo, designando a uno de los secretarios departamentales como reemplazo temporal en tanto se proceda a suplir las faltas absolutas de conformidad con la constitución y la ley.</p> <p><b>Artículo 121. Incapacidad física permanente.</b> En caso de incapacidad permanente debidamente certificada por la entidad prestadora de salud a la que se encuentre afiliado el gobernador, este se verá impedido definitivamente para continuar desempeñándose como tal y se declarará la vacancia por falta absoluta del mismo.</p> <p><b>Artículo 122. Declaración de nulidad de la elección.</b> Una vez quede en firme la declaratoria de nulidad de la elección de un gobernador por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, quedará sin efecto la credencial que lo acreditaba como tal, y el Presidente de la República dispondrá inmediatamente las medidas necesarias para hacer efectiva esta decisión, así como para su reemplazo.</p> <p><b>Artículo 123. Interdicción judicial.</b> Una vez quede en firme la declaratoria de interdicción judicial para un gobernador proferida por parte del juez competente, se producirá la vacancia por falta absoluta y el presidente de la República tomará las medidas conducentes para hacer efectivo el cese de función del mismo, a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.</p> <p><b>Artículo 124. Destitución.</b> Se hará conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, en cuyo caso su ejecución corresponderá al Presidente de la República.</p> <p>Cuando se haya dictado sentencia condenatoria de carácter penal debidamente ejecutoriada, aun cuando en su favor se decrete cualquier beneficio, el presidente de la República procederá a ejecutar la destitución del gobernador. Se exceptúan los casos por delitos políticos y/o culposos que no hayan afectado el patrimonio del Estado.</p> <p>Así mismo será procedente la destitución en los eventos previstos en la Ley 418 de 1997, incluidas sus prórrogas y modificaciones y demás normas vigentes.</p> <p><b>Artículo 125. La revocatoria del mandato.</b> La revocatoria del mandato se producirá de conformidad con lo dispuesto en la constitución Política y las leyes vigentes sobre la materia.</p>

<p><b>Artículo 126. La declaración de vacancia por abandono del cargo.</b> Se produce abandono del cargo cuando el gobernador, sin justa causa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No reasuma sus funciones dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de las vacaciones, permiso, licencias, comisiones oficiales o incapacidad física transitoria inferior a ciento ochenta (180) días.</li> <li>2. Abandona el territorio nacional sin autorización por cinco (5) días o más consecutivos.</li> <li>3. No se reintegra a sus actividades una vez haya concluido el término de suspensión del cargo.</li> </ol> <p><b>Parágrafo.</b> El abandono del cargo constituye falta disciplinaria y se investigará por la Procuraduría General de la Nación de oficio o a solicitud de cualquier ciudadano.</p> <p><b>Artículo 127. Faltas temporales.</b> Son faltas temporales del gobernador:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las vacaciones;</li> <li>2. Los permisos para separarse del cargo;</li> <li>3. Las licencias;</li> <li>4. La incapacidad física transitoria.</li> <li>5. La suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario, fiscal o penal;</li> <li>6. La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la jurisdicción contenciosa administrativa;</li> <li>7. La ausencia forzada e involuntaria.</li> </ol> <p><b>Artículo 128. Vacaciones.</b> La concesión de vacaciones las decreta el mismo gobernador, con indicación del período de causación, el término de las mismas y las sumas a que tiene derecho por este concepto, debiendo comunicar previamente al Ministerio del Interior, por conducto de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial o la dependencia que haga sus veces y a la asamblea departamental. Durante el término de su disfrute el gobernador deberá encargar a un secretario de las funciones de su despacho.</p>	<p><b>Artículo 129. Duración de las comisiones.</b> Las comisiones dentro del país no serán superiores a diez (10) días hábiles y en el exterior a treinta (30) días hábiles. Estos términos podrán prorrogarse por una sola vez y hasta por el mismo tiempo y de ello se presentará el informe correspondiente ante la asamblea.</p> <p><b>Artículo 130. Incapacidad física transitoria.</b> Las incapacidades médicas del gobernador serán certificadas por la entidad promotora de salud a la cual esté afiliado.</p> <p>Producida la incapacidad, el gobernador informará de ella al gobierno Nacional a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior y a la asamblea departamental indicando el nombre del secretario departamental o funcionario de alto nivel que lo reemplazará mientras dure la incapacidad.</p> <p><b>Artículo 131. Causales de suspensión.</b> El presidente de la República, previa solicitud de la autoridad competente, suspenderá a los gobernadores en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por haberse dictado en su contra resolución de acusación debidamente ejecutoriada, excepto por delitos culposos.</li> <li>2. Por haberse dictado en su contra, por autoridad judicial competente, medida de aseguramiento debidamente ejecutoriada.</li> <li>3. Igualmente procederá la suspensión en los casos previstos en la Ley 418 de 1997 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, mientras dure su vigencia.</li> <li>4. Cuando la Contraloría General de la República solicite la suspensión provisional, de conformidad con el numeral 8 del artículo 268 de la Constitución Política.</li> <li>5. Cuando la Procuraduría General de la Nación imponga, como medida preventiva o como sanción disciplinaria la suspensión en el ejercicio del cargo. La ejecución de tal sanción corresponderá al presidente de la República, de acuerdo con lo establecido en la Ley 734 de 2002 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.</li> </ol> <p><b>Parágrafo.</b> Mientras el gobernador permanezca suspendido provisionalmente, no tendrá derecho a recibir ninguna suma de dinero por concepto de remuneración del cargo de que es titular.</p> <p>Si dentro de los respectivos procesos no es encontrado responsable, tendrá derecho al reconocimiento de la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión provisional, salvo que le sea aplicada la sanción de</p>
<p>suspensión, caso en el cual tendrá derecho únicamente al reconocimiento de la diferencia que pudiere resultar a su favor, en la medida en que la sanción fuere inferior al tiempo de suspensión. En este caso, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y/o la Contraloría General de la República, iniciaran la acción de repetición a que haya lugar.</p> <p><b>Artículo 132. Suspensión provisional de la elección.</b> Una vez que la jurisdicción contenciosa administrativa disponga la suspensión provisional de la elección de un gobernador, el Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, procederá a tomar las medidas conducentes a hacer efectiva la cesación de funciones durante el tiempo de suspensión, designará su reemplazo y comunicará a la asamblea el respectivo acto administrativo.</p> <p><b>Artículo 133. Ausencia forzada e involuntaria.</b> Cuando un gobernador no pueda concurrir a desempeñar sus funciones por motivos ajenos a su voluntad, el Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior declarará la vacancia temporal tan pronto tenga conocimiento del hecho, y designará a quien deba reemplazarlo. Acto administrativo que será comunicado a la asamblea departamental.</p> <p>Durante este término, el gobernador tendrá derecho a su remuneración y a los regímenes de prestaciones sociales y seguridad social.</p> <p><b>Artículo 134. Designación de gobernador en caso de falta absoluta o suspensión.</b> Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período constitucional, se elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el presidente de la República designará un gobernador para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido. Acto administrativo que será comunicado a la asamblea departamental.</p> <p>En los dos eventos anteriores, mientras se designa y asume el gobernador encargado, actuará como tal el secretario de gobierno o quien haga sus veces en el departamento.</p> <p>Para las demás faltas temporales, no generadas por orden o decisión de autoridad competente, el gobernador delegará funciones en uno de los secretarios del despacho de la gobernación, hecho del cual informará de manera inmediata al Gobierno Nacional por conducto de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del ministerio del Interior, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Si por cualquier circunstancia no pudieren hacer la delegación, el secretario de gobierno actuará como secretario delegatario con funciones de gobernador.</p> <p>El gobernador designado según el caso, deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del gobernador elegido por voto popular. El</p>	<p>gobernador encargado o designado quedará sujeto a la ley estatutaria que regula el voto programático.</p> <p>En caso de faltas absolutas de gobernadores, el presidente de la República solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato, una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de recibido de la solicitud no presentaren la terna, el presidente designará libremente.</p> <p><b>Parágrafo.</b> No podrán ser encargados o designados como gobernadores para proveer vacantes temporales o absolutas, quienes se encuentren en cualquiera de las inhabilidades e incompatibilidades a que se refiere la Constitución Política, esta ley u otras normas vigentes.</p> <p><b>Artículo 135. Convocatoria a elección por falta absoluta.</b> En caso de falta absoluta del gobernador se aplicará el Decreto 2241 de 1986 o las normas que lo adicionen modifiquen o sustituyan.</p> <p><b>Artículo 136. Gobierno departamental.</b> El gobernador, con los secretarios de despacho, los jefes o directores de departamentos administrativos y los jefes o directores de las entidades descentralizadas constituyen el gobierno departamental.</p> <p>Como jefe de la administración departamental, el gobernador ejerce sus atribuciones por medio de la administración central o descentralizada.</p> <p><b>Artículo 137. Estructura administrativa departamental.</b> Los departamentos definirán su estructura administrativa, considerando los lineamientos establecidos en la Ley 489 de 1998 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.</p> <p><b>Artículo 138. Vinculación al desarrollo departamental.</b> Los departamentos podrán celebrar convenios con los organismos de acción comunal para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones u obras.</p> <p>Existe convenio cuando el organismo de acción comunal aporta el trabajo de sus integrantes y/o afiliados, así como otros bienes o recursos para cumplimiento de funciones o ejecución de obras en el territorio que define la Ley 743 de 2002 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Los convenios que se celebren en desarrollo de este artículo, estarán sujetos a las formalidades o requisitos previstos en la ley para las entidades públicas.</p> <p><b>Artículo 139. Catastros departamentales.</b> Los departamentos en su calidad de gestores catastrales podrán adelantar la formación, actualización, conservación y difusión catastral, teniendo en cuenta los procedimientos del enfoque catastral multipropósito adoptados para el efecto, de conformidad</p>

con lo establecido en la Ley y las herramientas de política pública que lo desarrollan.

**Artículo 140. Gaceta Departamental.** En cada uno de los departamentos se publicará una Gaceta Departamental, como órgano oficial de publicación de los actos seccionales, en la que se incluirán los siguientes documentos:

1. Las ordenanzas de la asamblea departamental.
2. Los actos que expida la asamblea y su mesa directiva para la ejecución de su presupuesto y el manejo del personal a su servicio.
3. Los decretos y resoluciones del gobernador.
4. Los actos de la administración central y descentralizada del departamento que creen situaciones jurídicas impersonales u objetivas o que tengan alcance e interés general.

Las demás que la ley o la ordenanza señalen que deben publicarse.

**Artículo 141.** Sobre el régimen especial del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en lo no contemplado expresamente en sus normas especiales, se regirá por la presente ley.

**Artículo 142. Asociación de departamentos.** Conforme a lo establecido en la Ley 1454 de 2011 y la ley 1962 de 2019, o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicione, los departamentos podrán asociarse entre sí, administrativa y políticamente con otras entidades territoriales y/o administrativas, con el fin de prestar conjuntamente servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y el cumplimiento de funciones administrativas propias, mediante convenio, contrato o plan suscrito por los gobernadores respectivos, previamente autorizados por las asambleas departamentales.

Los departamentos no pierden ni comprometen su autonomía física, política o administrativa por afiliarse o pertenecer a una asociación; sin embargo, todo departamento asociado está obligado a cumplir sus estatutos y demás reglamentos que la asociación le otorgue y a acatar las decisiones que adopten sus directivas para el cabal cumplimiento de sus fines.

**Parágrafo.** El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, brindará acompañamiento técnico y jurídico a las entidades territoriales que voluntariamente pretendan asociarse.

**Artículo 143.** La Nación apropiará con destino a las formas asociativas de que habla el artículo anterior, partidas acorde a las competencias del nivel regional para la ejecución de proyectos determinados en los Planes Estratégicos Regionales (PER).

En los presupuestos anuales de la Nación se incluirán el rubro y las asignaciones necesarias para la atención de los pagos aquí ordenados.

**Artículo 144.** Los convenios que, con autorización de la Asamblea, celebren los Departamentos con observancia de lo estipulado en la Ley Orgánica de Ordenamiento territorial, no estarán sujetos a formalidades o requisitos distintos de los que exija la Ley. En ellos se pactará la erogación presupuestal a la que haya lugar.

**Artículo 145. Entidades descentralizadas.** El Gobierno nacional presentará al Congreso de la República dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley que expida el régimen para las entidades descentralizadas, previa socialización con los departamentos a través de la Federación Nacional de Departamentos y la confederación nacional de asambleas y diputados de Colombia.

**Artículo 146. De los bienes, contratos y rentas departamentales.** El Gobierno nacional por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentará al Congreso de la República, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley que expida el régimen relacionado con los bienes, contratos y renta departamentales, previa socialización con los departamentos a través de la Federación Nacional de Departamentos.

**Artículo 147. Régimen de control fiscal.** El régimen de control fiscal de los departamentos, se regirá por lo que disponga la Constitución Política en el artículo 272 y la Ley 42 de 1993, o norma que la modifique, adicione o sustituya.

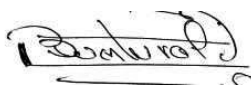
La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos corresponde a las contralorías departamentales, sin perjuicio de las atribuciones y funciones de la Contraloría General de la República.

**Artículo 148. Departamentos de fronteras.** De acuerdo con sus características especiales, estarán sometidos, entre otras, a las disposiciones contenidas en la presente ley y la norma que se expida como desarrollo de los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución Política.

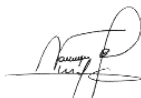
La ley que se expida, deberá establecer, entre otros, el procedimiento, mecanismos y alcances para la conformación de los esquemas asociativos transfronterizos entre entidades nacionales y las de los países vecinos.

**Artículo 149. Vigencia.** La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el decreto 1222 de 1986, excepto del artículo 103 al 243, la Ley 3 de 1986 y disposiciones contenidas en la Ley 617 de 2000 que les sean contrarias.

Cordialmente,



**BUENAVENTURA LEON LEON - C**  
Representante a la Cámara



**JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO - C**  
Representante a la Cámara



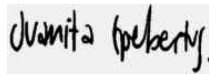
**JAIME RODRIGUEZ CONTRERAS - C**  
Representante a la Cámara



**HENRY CUELLA RICO**  
Representante a la Cámara



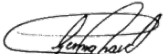
**JULIAN PEINADO RAMIREZ**  
Representante a la Cámara



**JUANITA MARIA GOEBERTIS ESTRADA**  
Representante a la Cámara



**LUIS ALBERTO ALBAN URBANO**  
Representante a la Cámara.



**CARLOS GERMAN NAVAS TALERO**  
Representante a la Cámara.

Bogotá, 10 de junio de 2020

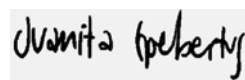
Señor  
**ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA**  
Presidente Comisión Primera- Cámara de Representante  
Ciudad

**Ref. Observación a Ponencia Proyecto de Ley 486 de 2020 Cámara**

En relación con el Proyecto de Ley 486 de 2020 Cámara de Representantes, nos permitimos comunicar que suscribimos la ponencia positiva con algunas consideraciones frente al articulado, sobre el cual nos permitimos establecer lo siguiente:

1. Se debe buscar la disminución del salario de los diputados dada la realidad fiscal del país y los periodos de sesiones ordinarias de la corporación.
2. El presente proyecto de ley de ninguna forma deberá aumentar la carga administrativa de los Departamentos, se debe buscar optimizar funciones con menos recursos.
3. Se debe considerar que, para la selección del contralor departamental, además de la convocatoria pública se realice un concurso de méritos que permita seleccionar a las personas con los puntajes más altos.

Cordialmente,



Juanita María Goebertis Estrada  
Representante a la Cámara